

Las plantaciones no son bosques

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Coordinación general: Ricardo Carrere
Edición: Hersilia Fonseca
Diseño de tapa: Flavio Pazos

© **Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales**

Secretariado Internacional

Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay
tel: +598 2 413 2989, Fax: +598 2 410 09 85
correo electrónico: wrm@wrm.org.uy
página web: <http://www.wrm.org.uy>

Oficina en Europa

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh,
GL56 9NQ, United Kingdom
tel: +44.1608.652.893, Fax: +44.1608.652.878
correo electrónico: info@fppwrm.gn.apc.org

Esta publicación está disponible también en inglés y portugués

El contenido de esta publicación puede ser reproducido total o parcialmente sin necesidad de autorización previa. No obstante, deberá reconocerse claramente la autoría del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y comunicar al mismo cualquier tipo de reproducción. Para facilitar su acceso y uso, el libro está también disponible en formato electrónico en la sección Publicaciones de la página web del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.

Publicado en agosto de 2003

ISBN: 9974-7719-5-1

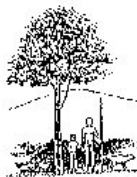
La elaboración del contenido de esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero de Novib (Países Bajos) y de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza. Las opiniones vertidas, la información presentada y los términos geográficos y geopolíticos aquí utilizados son de responsabilidad exclusiva de l@s autor@s.

n(o)vib
OXFAM NETHERLANDS

Naturskydds
föreningen



Las plantaciones no son bosques



Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

INDICE

ACERCA DE ESTA PUBLICACION	11
INTRODUCCION	12
<u>PLANTACIONES Y CAMBIO CLIMATICO</u>	13
Algo huele mal en los sumideros	15
Compensando emisiones con sumideros de carbono: una receta para el fraude	17
Cambio Climático: la lección de Lyon	18
¿Quién gana y quién pierde con los sumideros?	20
Bosques superiores a plantaciones, incluso como sumideros de carbono	21
Investigación concluye que la plantación de árboles aumentaría el calentamiento global	22
La biodiversidad también es mejor que los monocultivos desde una perspectiva climática	23
Efecto invernadero: ¿más plantaciones o más voluntad para reducir las emisiones?	24
Secuestro de carbono: un dilema para los habitantes de los bosques	27
La inclusión de los sumideros hundió el Protocolo de Kioto	28
SinksWatch: una iniciativa no gubernamental para hacer seguimiento a proyectos de plantaciones de árboles como sumideros de carbono ...	30
<u>PROCESOS Y ACTORES INTERNACIONALES</u>	32
¿Ustedes creen en bosques plantados?	33
El tema de las plantaciones en la agenda del FPIRS del Banco Mundial	35
Para el FSC las plantaciones son bosques	37
Comentarios al Principio del FSC sobre plantaciones	38
La OIMT delira acerca de las plantaciones	44
Las corporaciones se pintan de verde	47
Los «bosques» de la FAO o como hacer trampas al solitario	49
El UNFF debe reconocer que las plantaciones no son bosques	52
<u>IMPACTOS Y LUCHAS LOCALES: AFRICA</u>	54
Camerún: Las plantaciones forestales, falsa alternativa para deforestación	54
Camerún: Palma aceitera, poblaciones locales y medio ambiente	55
Congo, República del: Plantaciones de eucalipto de Shell ahora brindan muchos menos puestos de trabajo	58

Costa de Marfil: Creciente conflicto entre pequeños propietarios y plantaciones industriales de palma aceitera	59
Ghana: Los documentados impactos de los monocultivos de palma aceitera	61
Ghana: Los «promisorios» planes de reforestación terminan en desempleo	62
Kenia: Pan African Paper Mills provoca contaminación y deforestación	63
Liberia: Preocupación por la promoción de las plantaciones de caucho por el Banco Mundial	65
Nigeria: Empresa malaya invertiría en producción de aceite de palma	66
Nigeria: Déficit de aceite de palma en un país productor tradicional de aceite de palma	67
Sudáfrica: Casi un millón de hectáreas de plantaciones certificadas por el FSC	69
Sudáfrica: Plantaciones de árboles generan ganancias para la compañía, pero incendios, daños y muerte para la población	71
Sudáfrica: Detrás de la pérdida de bosques no están los recolectores de plantas medicinales sino la industria forestal	73
Tanzania: Otro caso de CO2lonialismo noruego	74
Uganda: Sumideros de carbono y CO2lonialismo noruego	73
Zambia: ¿Buenas o malas noticias en el sector forestal?	77

IMPACTOS Y LUCHAS LOCALES: AMERICA

Nace Red latinoamericana contra monocultivos de árboles	78
Argentina: Las petroleras se visten de «verde»	79
Argentina: Deforestación y plantaciones en dos provincias	81
Argentina: Un turbio proyecto de sumidero de carbono	82
Argentina: Los «bosques del silencio» o las plantaciones de pinos en las Yungas	84
Brasil: El casamiento de Stora Enso con Aracruz	86
Brasil: La escasa memoria de Veracel y el poder de Aracruz	87
Brasil: La opción entre la agricultura familiar y el gigante Aracruz Celulose	89
Brasil: Desafiando el poder de Aracruz Celulose	91
Brasil: El crecimiento tiene límites, y la escala es realmente un tema	93
Brasil: Mientras el pueblo se indigna, Aracruz festeja	95
Brasil: Investigación cuestiona certificación de dos plantaciones por el FSC	97
Brasil: Carta de la sociedad civil al Fondo Prototipo de Carbono sobre las plantaciones de eucaliptos de Plantar S.A.	100

Brasil: Stora Enso y Aracruz proyectan la mayor fábrica de celulosa del mundo	102
Brasil: ONGs solicitan debate amplio sobre la expansión de plantaciones forestales	105
Brasil: Que el eucalipto no cause en San Pablo los daños que causó en Minas Gerais	107
Chile: Bosques de verdad	109
Chile: Proyecto forestal amenaza producción de vinos	111
Chile: Monocultivos forestales amenazan bosque de características únicas	112
Chile: ¿Represión o solución al enfrentamiento Mapuches-empresas forestales?	114
Chile: Los que juegan a ser Dios con los árboles, por dinero	116
Chile: Organización ambientalista cuestiona estándares del FSC en plantaciones	117
Chile: Los Mapuche defienden sus tierras de las compañías forestales	120
Colombia: Legislación «a la medida» de Smurfit	121
Colombia: Incentivo económico perverso para la plantación de palma aceitera	124
Colombia: Política antisindical en plantaciones de palma aceitera	126
Colombia: Proyecto de plantaciones de palma aceitera pone en peligro biodiversidad del Chocó	127
Costa Rica: Los peligros de los monocultivos forestales	129
Costa Rica: Dólares japoneses para promover monocultivos forestales	130
Costa Rica: «Muerte lenta» de monocultivos de eucaliptos a gran escala	131
Ecuador: Palma africana en el devastado jardín del paraíso	132
Ecuador: Plantaciones de eucaliptos en la Provincia de Esmeraldas	134
Ecuador: La gente dijo no a las plantaciones en reunión convocada por el Ministerio de Medio Ambiente	136
EE.UU.: Monocultivos forestales en el Sur... de los EE.UU.	139
EE.UU.: Donde las plantaciones claramente no son bosques	141
EE.UU.: Kinkos dice NO a los árboles transgénicos	143
México: La palma africana y los distintos significados de Chiapas	145
México: Plan forestal elaborado por finlandeses	146
México: Oposición a plan forestal elaborado por consultora finlandesa ..	148
México: Puerta abierta a plantaciones de árboles «neoliberales»	148
Nicaragua: Se prepara ley para las plantaciones	150
Nicaragua: United Fruit, palma africana y destrucción de bosques	151
Uruguay: ¿Qué es lo que está certificando el FSC?	153

Uruguay: Condiciones de trabajo inhumanas en empresa forestal chilena	156
Venezuela: Smurfit enfrenta crecientes dificultades	158

IMPACTOS Y LUCHAS LOCALES: ASIA

Birmania: Trabajo forzado en plantaciones de palma aceitera	159
Birmania, Tailandia y Laos: El manejo forestal colonial - ayer y hoy	160
Camboya: Plantaciones de palma aceitera	163
Camboya: Selvas y ríos en peligro por plantaciones de eucalipto y producción de celulosa	164
Camboya: Plantaciones de caucho y de palma africana provocan impactos en las comunidades locales	167
China: UPM-Kymmene y APRIL, la conexión chino-indonesia	168
China: Exportando deforestación y promoviendo monocultivos forestales	169
China: Siguiendo el trillado camino de los monocultivos de árboles	171
India: Cuestionamientos a la «Estrategia Revisada sobre Bosques» del Banco Mundial	173
Indonesia: La amarga cosecha de la palma aceitera	175
Indonesia: Explorando el pasado y el futuro de la palma aceitera	176
Indonesia: Una nueva víctima en relación con Indorayon	178
Indonesia: El insustentable crecimiento del sector de la celulosa y el papel	178
Indonesia: La amenaza de la industria de celulosa y papel en Kalimantan	180
Indonesia: Programa de un millón de hectáreas de plantación de palma aceitera en Jambi	181
Indonesia: Informe del WWF vincula plantaciones de palma aceitera con deforestación a gran escala	182
Indonesia: Informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la industria papelera	184
Indonesia: Reapertura de fábrica de celulosa de Indorayon enfrenta fuerte oposición local	186
Japón: Industria papelera involucrada en ingeniería genética de eucaliptos	187
Laos: Suecia se beneficia de subsidios en el sector forestal	188
Laos: Banco Asiático de Desarrollo subsidia deforestación	189
Laos: Libertad de información, plantaciones industriales y el Banco Asiático de Desarrollo	191
Laos: Secretos, mentiras y plantaciones de árboles	193
Malasia: Resistencia contra maderero y plantaciones de palma aceitera en Sarawak	196

Malasia: Campaña contra proyecto de plantaciones y fábrica de celulosa en Sabah	197
Malasia: La difícil situación de las trabajadoras en las plantaciones de palma aceitera	199
Tailandia: Oposición a proyecto chino-tailandés de plantación de eucalipto	202
Tailandia: Se planea masiva forestación con eucalipto	204
Tailandia: El FSC debe revocar el certificado de la Organización de la Industria Forestal	206
Tailandia: Eucaliptos, usurpación, deforestación y contaminación vinculadas con compañía de celulosa y papel	209
Vietnam: ¿Los árboles de quién? Programa de «reforestación» de 5 millones de hectáreas	211
Vietnam: Plantaciones como sumideros para evitar reducción de emisiones en Australia	214
Vietnam: Un futuro de plantaciones masivas	216
Vietnam: Se suspende construcción de planta de celulosa y papel en Kontum	218

IMPACTOS Y LUCHAS LOCALES: OCEANIA

Aotearoa/Nueva Zelanda: Oposición a los árboles genéticamente manipulados	220
Aotearoa/Nueva Zelanda: Una certificación discutible	221
Aotearoa/Nueva Zelanda: Cambio en la propiedad y gestión de las plantaciones de propiedad estatal	223
Australia: Plantaciones como «sumideros de carbono» invaden Tasmania	225
Australia: Establecimientos agrícolas de Tasmania que alimentaban a la gente ahora alimentan fábricas de astillas	226
Fiji: Plantación de caoba es detonante de golpe de Estado	228
Hawaii: ¿Son los eucaliptos el único cultivo posible en Hamakua?	229
Papúa-Nueva Guinea: Incentivos para las plantaciones de palma aceitera	230
Papúa-Nueva Guinea: Impactos de monocultivos de palma aceitera promovidos desde Inglaterra	232
Papúa-Nueva Guinea: Devolución de tierras tradicionales impide destrucción de bosques por madereo y plantaciones de palma aceitera	233

ACERCA DE ESTA PUBLICACION

El presente libro recoge una selección de artículos publicados en el boletín electrónico mensual del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) acerca del tema de las plantaciones.

El nivel de detalle y de análisis de los artículos varía grandemente como consecuencia del carácter del boletín, que se plantea servir de herramienta, tanto a personas y organizaciones que actúan a nivel local, como a quienes se desenvuelven en el plano internacional. Sin embargo, hemos incluido la mayoría de ellos, dado que pensamos que de alguna manera todos pueden servir para la generación de conciencia en un tema como éste, que afecta crecientemente a pobladores locales en todo el Sur.

No hemos incluido las numerosas fuentes de información sobre las que se basaron los distintos artículos por una simple razón de espacio. Sin embargo, quienes tengan interés en acceder a las mismas lo pueden hacer a través de nuestra página web, ingresando por el área «boletín» y buscando el año y mes correspondientes al artículo en cuestión.

La responsabilidad por esta publicación es compartida por el editor del boletín, Ricardo Carrere (coordinador internacional del WRM) y por las numerosas personas e instituciones que aportaron artículos o información relevante para la elaboración de artículos. La responsabilidad por los errores que puedan haberse cometido es exclusivamente del WRM.

Más allá de la autoría de los distintos artículos –que en definitiva poco importa– el verdadero protagonista del trabajo está constituido por los miles y miles de personas que sufren los impactos de las plantaciones y la degradación de bosques, que resisten contra la apropiación de sus territorios y que generan alternativas de uso ambiental y socialmente apropiadas. Los artículos intentan de alguna manera reflejar las luchas de esos protagonistas, con el objetivo central de apoyarlos. A todos ellos y ellas nuestro más sincero homenaje.

INTRODUCCION

Las plantaciones no son bosques

Plantar árboles puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Depende de su objetivo, de su escala, del sitio donde se instalen y de los beneficios o perjuicios que generen para las poblaciones locales. Las plantaciones a gran escala (ya sea con especies de rápido crecimiento, tales como eucaliptos y pinos, o con especies como la palma aceitera), son las que generan mayores impactos negativos, tanto en lo social como en lo ambiental. Debido a dichos impactos, ese tipo de plantaciones ha dado lugar a luchas generalizadas en su contra. La respuesta de las empresas plantadoras y de los promotores que impulsan este modelo ha consistido en desmentir la ocurrencia de tales impactos y en elaborar y difundir una engañosa propaganda destinada a ganar apoyo en sectores no informados de la población. Entre las muchas falsedades publicitadas en favor de los monocultivos de árboles a gran escala se destaca la de confundirlos con bosques.

Tanto los técnicos como las empresas insisten en llamar «bosques plantados» a las plantaciones. Esta confusión entre un cultivo (de árboles) y un bosque es el punto de partida de la propaganda en favor de las plantaciones. En un mundo cada vez más consciente sobre el grave problema de la deforestación, la actividad de «plantar bosques» es generalmente percibida como algo positivo. Sin embargo, una plantación no es un bosque y lo único que tienen en común es que en ambos destacan los árboles. Allí termina su similitud. Un bosque contiene:

- numerosas especies de árboles y arbustos de todas las edades
- una cantidad aún mayor de otras especies vegetales, tanto en el suelo como sobre los propios árboles y arbustos (helechos, trepadoras, epífitas, parásitas, etc.)
- una enorme variedad de especies de fauna, que encuentran allí abrigo, alimentos y posibilidades de reproducción.

Las comunidades humanas también forman parte de los bosques, ya que muchos pueblos los habitan, interactúan con ellos y allí obtienen un conjunto de bienes y servicios que aseguran su supervivencia.

Esa diversidad de flora y fauna (incluyendo al ser humano), interactúa con otros elementos como los nutrientes del suelo, el agua, la energía solar y el clima, de tal manera que aseguran su autoregeneración y la conservación de todos los componentes del bosque.

A diferencia del bosque, una plantación comercial a gran escala se compone de:

- una o pocas especies de árboles (a menudo exóticos), plantados en bloques homogéneos de la misma edad

- muy escasas especies de flora y fauna.

Por otra parte, las comunidades humanas no sólo no habitan las plantaciones comerciales, sino que normalmente ni siquiera se les autoriza el acceso, ya que son vistas como un peligro para las mismas. En numerosas ocasiones, las plantaciones son precedidas por la expulsión (por las buenas o por las malas) de la población local y por la destrucción del bosque del que dependían. En el mejor de los casos, son percibidas como proveedoras de mano de obra barata para la plantación y para la cosecha de los árboles que se realizará años más tarde.

Las plantaciones comerciales requieren preparación del suelo, selección de plantas de rápido crecimiento y con las características tecnológicas requeridas por la industria, fertilización, eliminación de «malezas» con herbicidas, plantación a espaciamiento regular, cosecha en turnos cortos. Como además su objetivo es producir y cosechar grandes volúmenes de madera o frutos (en el caso de la palma aceitera) en el menor tiempo posible, se puede decir que tiene las mismas características que cualquier otro cultivo agrícola. Por lo tanto, no se trata de un «bosque», sino de un cultivo. Peor aún: de un monocultivo a gran escala.

En síntesis, una plantación no es un «bosque plantado», ya que además de todo lo anterior, resulta evidente que no es posible «plantar», ni la diversidad de flora y fauna que caracteriza a un bosque, ni el conjunto de interacciones entre los elementos vivos e inorgánicos que se dan en un bosque.

Sin embargo, el mantenimiento del engaño resulta de vital importancia para que los grandes intereses económicos tradicionalmente involucrados en el negocio (desde las propias empresas plantadoras hasta el complejo industrial, comercial y de servicios que de ellas depende), puedan continuar obteniendo grandes beneficios económicos. A esos sectores se ha sumado recientemente otro —el del mercado del carbono— al que también le interesa que se las siga considerando como «bosques», vistiendo así de verde sus oscuros negocios.

Precisamente por eso es que resulta imprescindible comenzar por destruir el mito de que las plantaciones son «bosques». Y por esa razón nos pareció relevante titular este libro de la manera que lo hicimos: «las plantaciones no son bosques».

PLANTACIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático amenaza el futuro de la Tierra. Sus causas son bien conocidas, como también lo son las medidas que deberían adoptarse para evitarlo. Sin embargo, como eso choca con los intereses económicos de los más poderosos, ellos y sus asesores han buscado inventar «salidas» que no afecten sus intereses. Entre ellas, una de las preferidas son precisamente las plantaciones, a las que se atribuye el rol de actuar como «sumideros de carbono».

Se dice que a medida que los árboles van creciendo, van tomando carbono en cantidades mayores a las que emiten, de modo que tienen un balance neto positivo respecto de la cantidad de dióxido de carbono (el principal gas de efecto invernadero) en la atmósfera. Este razonamiento simplista ha sido adoptado por la Convención sobre Cambio Climático, más por razones de carácter político-económico que por la evidencia científica que lo avale.

En términos generales, cualquier área cubierta de plantaciones, en ausencia de pruebas en contrario, debería ser considerada una fuente neta de carbono y no un sumidero. En primer lugar, porque en muchos casos estas plantaciones sustituyen a bosques, lo que significa que los volúmenes de carbono liberados por la deforestación sean superiores a los que la plantación en crecimiento podría capturar, incluso en el largo plazo. Aún en casos en que no impliquen deforestación, se instalan en otros ecosistemas que también almacenan grandes cantidades de carbono (tales como las praderas), que es liberado del suelo a la atmósfera a consecuencia de la plantación.

Hay además una segunda cuestión crucial: ¿estas plantaciones serán cosechadas o no? De darse la primera hipótesis serían, en el mejor de los casos, tan sólo sumideros temporarios: el carbono es almacenado hasta la cosecha para luego ser liberado en pocos años (en algunos casos incluso en meses) cuando el papel u otros productos provenientes de las plantaciones son destruidos. En el caso de que los árboles no fueran cosechados, las plantaciones estarían ocupando millones y millones de hectáreas que podrían estar dedicadas a propósitos mucho más provechosos, como la producción de alimentos. Finalmente, al cabo de un cierto período de tiempo, los árboles comenzarían a morir y a liberar nuevamente el carbono almacenado.

Un tercer tema es el carácter inestable de la capacidad de almacenamiento de carbono de las plantaciones, sujetas tanto al ataque de plagas como a los incendios. Este hecho se hace evidente al momento de publicación de este libro, cuando el mundo está siendo testigo de los gigantescos incendios forestales que afectan a Europa y de la total incapacidad de los Estados (pese a toda la tecnología y los recursos económicos de esos países) para contenerlos. Si esos bosques y plantaciones hubieran sido vendidos como «sumideros de carbono», menudo problema tendrían con los compradores.

O sea, que existen muchas incertidumbres en relación con la suposición de que las plantaciones son, en todo lugar, sumideros de carbono por un lapso mayor que el período temprano de rápido crecimiento, dado que pueden no serlo siquiera en ese período. Esta suposición de «sentido común» debe ser respaldada con investigaciones antes de que las plantaciones sean aceptadas sin más como sumideros de carbono.

Finalmente, es fundamental ver el tema en su total dimensión y analizar el conjunto de impactos que la promoción de grandes monocultivos forestales

con especies de rápido crecimiento puede generar en otras áreas ambientales y sociales. Sabiendo que estas plantaciones impactan sobre el ambiente (suelos, agua, flora y fauna) y sobre las comunidades locales, no resulta aceptable promoverlas con un propósito «ambiental» como el de contrarrestar el efecto invernadero. La solución tiene que venir por el lado de la reducción de emisiones de CO₂ (derivadas del uso de combustibles fósiles) y por la protección de los bosques y no por intentos de colonizar enormes áreas de tierra sin haber analizado cabalmente las consecuencias.

En los artículos que ofrecemos a continuación se analizan con mayor detalle los distintos aspectos a ser tomados en cuenta sobre este tema.

Algo huele mal en los sumideros

Como casi todos sabemos, la Tierra se está calentando y una de las principales causas del cambio climático es el uso de combustibles fósiles. Bajo presión, en el Protocolo de Kioto los países industrializados –que son los mayores responsables del actual estado de cosas– asumieron mínimos compromisos para reducir sus emisiones provenientes de la combustión de combustibles fósiles. Sin embargo, algunos de los países más contaminantes están tratando de encontrar la forma de eludir tales compromisos, apelando a potenciales resquicios existentes en ese Protocolo, que podrían permitirles plantar millones de hectáreas de árboles en el Sur en lugar de limitar sus emisiones en la fuente.

En parte para evaluar la validez científica de ese enfoque, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) designó un panel para elaborar un Informe Especial sobre Uso del Suelo, Cambios en el Uso del Suelo y Forestación. El mismo, publicado en mayo de 2000, ha desilusionado a muchos activistas, pues otorgó un sello «científico» a la aprobación de un mercado de carbono que generaría ganancias para un reducido número de empresas y consultoras –mayormente del Norte– permitiría a los países industrializados seguir emitiendo carbono a la atmósfera, impactaría negativamente sobre la gente y el ambiente en el Sur, a la vez que sería inútil a efectos de desacelerar el cambio climático.

¿Cómo pudo el IPCC producir un informe de estas características? ¿Por qué los científicos no hicieron bien su trabajo? Posiblemente la respuesta sea muy compleja, ya que involucra presiones provenientes de sectores de sus propios pares, la influencia política de los EE.UU., ambiciones personales y el hecho de que, de los cientos de autores y comentaristas del informe, tan sólo unos pocos eran científicos sociales o gente experimentada en la realidad política a nivel de base. Pero una de las razones que explica la falla del informe es, lamentablemente, muy simple: algunos de sus autores (y de las empresas para las que trabajan) habrán de beneficiarse económicamente de las conclusiones que extrajeron. He aquí algunos ejemplos:

- Sandra Brown, de los EE.UU. ha sido Coordinadora y Autora Principal del Capítulo 5 («Actividades en base a Proyectos») y del Resumen para Formuladores de Políticas que contiene el informe. La Sra. Brown es Oficial de Programa de Winrock International, una ONG con sede en Arlington, Virginia, que acepta contratos de fuentes «públicas y privadas». Winrock provee servicios técnicos de monitoreo del carbono en los bosques a agencias gubernamentales, tales como la Iniciativa de los EE.UU. sobre Implementación Conjunta, y a una amplia gama de organizaciones del sector privado y no gubernamentales.

- Pedro Moura Costa, otro de los importantes autores del Capítulo 5, es ejecutivo de la compañía británica Ecoscurities, firma consultora que opera en EE.UU., Brasil, Australia y los Países Bajos. La misma «se especializa en la generación de Créditos de Reducción de Emisiones» y espera obtener grandes beneficios a partir de su participación en actividades de forestación para secuestro de carbono.

- Gareth Philips, del Reino Unido, otro de los Autores Principales del Capítulo 5, trabaja para la Société Générale de Surveillance (SGS) Forestry de Ginebra, que se dedica al diseño, monitoreo y certificación de proyectos forestales para secuestro del carbono, incluyendo la cuantificación del carbono absorbido. SGS certifica las Emisiones Certificadas Comercializables ofrecidas por Costa Rica y espera expandir su actividad a otras áreas de la forestación como sumideros de carbono. El Sr. Philips y SGS tienen por lo tanto intereses creados al aducir que la cuantificación de los efectos climáticos de este tipo de forestación tiene algún sentido.

- Richard Tipper, del Reino Unido, también autor del Capítulo 5, es miembro del staff del Edinburgh Centre for Carbon Management (ECCM), con sede en Edimburgo, una consultora que gana dinero con el diseño, la evaluación y el monitoreo de este tipo de proyectos. ECCM trabaja en estrecha relación con Future Forests, la cual tiene contratos de forestación para secuestro de carbono con Mazda, Avis, BT y otras compañías. El personal de ECCM también ha estado implicado en un proyecto forestal financiado en parte por la Federation Internationale de l'Automobile en México. Ubicado sobre tierras altas ocupadas por los Maya Tojolobal y tierras bajas donde viven comunidades Maya Tzeltal, este proyecto se propone «neutralizar» 5.000 toneladas de carbono emitidas anualmente por las carreras de Fórmula Uno a un costo de 38.000 libras esterlinas al año.

- Mark Trexler, de los EE.UU., Editor Revisor del mismo capítulo, es director de Trexler & Associates, una firma que ha hecho mucho dinero –y que podría ganar muchos millones de dólares más– con la promoción y el monitoreo de proyectos de secuestro de carbono y otros de «mitigación climática».

- Peter Hill, de EE.UU., uno de los Autores Principales del Capítulo 4 («Actividades Adicionales inducidas por el Hombre» – Artículo 3.4), trabaja en Mon-

santo. Monsanto tiene una larga trayectoria en materia de organismos genéticamente modificados, lo que incluye potencialmente organismos manipulados para almacenar carbono de manera más eficiente. Esta empresa es otra de las que espera obtener pingües ganancias a partir de las conclusiones optimistas a las que llega el informe del IPCC acerca de la utilidad de proyectos relacionados al uso del suelo y a la forestación para mitigar el cambio climático.

Estos y muchos otros autores y editores del Informe Especial sobre Uso del Suelo, Cambios en el Uso del Suelo y Forestación tienen intereses creados en sacar conclusiones no realistas e injustificadamente optimistas acerca de la posibilidad de compensar las emisiones con árboles. Por lo tanto, deberían haber sido automáticamente descalificados para formar parte de un panel intergubernamental encargado de investigar de manera imparcial acerca de la factibilidad y beneficios de tales proyectos de «secuestro de carbono». Tal como están las cosas, este informe debe ser archivado debido al claro conflicto de intereses de muchos de sus autores y se debe promover la elaboración de un nuevo informe que esté libre de toda sospecha de corrupción intelectual. Ya es oficial: algo huele mal en esto de los sumideros de carbono. (Boletín del WRM N° 35, junio de 2000).

Compensando emisiones con sumideros de carbono: una receta para el fraude

Uno de los expertos que produjeron el informe especial del IPCC –Richard Tipper– responde en el último número de la revista *Multinational Monitor* que «uno podría decir que todos los científicos tienen intereses creados cuando participan en un panel de este tipo, ya que están interesados en su ascenso profesional o en obtener dinero para investigación». Y agrega: «Si no se está de acuerdo con alguien, entonces se debería ser capaz de presentar un argumento coherente y no hablar pestes de la gente». Creemos que la mayoría de los científicos no estaría de acuerdo con el punto de vista del Sr. Tipper acerca de la participación en el panel de expertos. Pensamos también que quienes tienen intereses creados no deberían aceptar formar parte de ese tipo de paneles, cuyas conclusiones pueden beneficiarles económicamente. Tampoco deberían ser invitados a participar en los mismos.

En relación con la referencia que hace el Sr. Tipper sobre «hablar pestes de la gente», es importante recordar que durante más de un año el Movimiento Mundial por los Bosques ha estado divulgando no uno sino una serie de «argumentos coherentes» contra las plantaciones como sumideros de carbono, lo que el Sr. Tipper parece desconocer. Basta ver todo el material relevante publicado por el WRM en nuestro sitio web sobre el tema. Tal vez él piense que nuestros argumentos no son lo suficientemente «científicos» como para ser tomados en cuenta. Sin embargo, le resultará difícil decir lo mismo acerca de

los científicos del International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), con sede en Laxenburg, Austria.

El IIASA realizó un detallado estudio de la biósfera en Rusia, donde se encuentra alrededor de la quinta parte de los bosques del mundo. El informe completo, anunciado el 25 de agosto ppdo. con el sugestivo título de «¿Es practicable el Protocolo de Kioto?» cuestiona la idea de utilizar sumideros de carbono como forma de «compensar» las emisiones de CO₂. Anatoly Shvidenko, uno de los científicos participantes en el estudio, señaló que según lo establecido en el Protocolo de Kioto, Rusia podría solicitar créditos por mejorar la capacidad de su biósfera de absorber carbono, pero que las incertidumbres en los cálculos de esos créditos son enormes y «exceden grandemente los probables cambios a nivel de las emisiones industriales». En lenguaje corriente, esto significa que la inclusión de los árboles en el Protocolo de Kioto es una receta para la confusión y el fraude.

Sten Nilsson, también investigador del IIASA, concluyó que «las incertidumbres científicas de medir los movimientos del carbono hacia y desde los ecosistemas son sencillamente demasiado grandes» y que «al abrir la totalidad de la biósfera a acciones amparadas por el Protocolo de Kioto, los gobiernos han hecho que esas estimaciones sean inverificables». Michel Obersteiner del IIASA resumió la cuestión diciendo que el Protocolo es «realmente una receta para el fraude».

Consultado acerca del informe del IIASA, un analista estadounidense del Protocolo de Kioto, David Victor, quien trabaja en el Consejo sobre Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations), con sede en New York, coincidió con sus conclusiones. «Su análisis es básicamente correcto. Es en esencia imposible verificar el cumplimiento de los compromisos si entre las metas se incluye a los bosques», afirmó Victor.

Tras analizar el informe del IIASA y otra información y puntos de vista relevantes, el periodista Fred Pearce de «New Scientist» llega a la conclusión de que «el mensaje del IIASA parece claro. La ciencia no está todavía en condiciones de supervisar un sistema de metas referidas a los gases de efecto invernadero incluyendo la biósfera. Hasta que ello sea posible, la única viabilidad del Protocolo de Kioto está en reducir drásticamente el consumo mundial de combustibles fósiles». Con lo que concordamos totalmente. (Boletín del WRM N° 38, setiembre de 2000).

Cambio climático: la lección de Lyon

Delegados gubernamentales de todo el mundo se reunieron en setiembre de 2000 en Lyon, Francia, en una Conferencia Preparatoria previa a la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático a realizarse en noviembre próximo en La Haya, Holanda.

Lo único bueno que puede decirse acerca del encuentro de Lyon es que los delegados trabajaron muy duro y hasta tarde en la noche, y que algunos de ellos –lamentablemente demasiado pocos– realmente trataron de hacer algo en relación con el cambio climático. Sin embargo, el encuentro estuvo caracterizado en general por el chantaje, las presiones, el mercadeo, el soborno y el comercio entre las diferentes élites allí presentes. La mayor parte del tiempo se estuvo discutiendo acerca de cuestiones de dinero para programas que en verdad poca o ninguna relevancia tienen para el clima.

Uno de los temas de los que más se habló fue sobre algo llamado «Mecanismo de Desarrollo Limpio» (MDL). A través de este esquema (entre otras cosas) los países industrializados podrían «compensar» sus emisiones utilizando «sumideros de carbono» en el Sur –tales como plantaciones forestales, bosques y cambios en el uso del suelo– permitiéndoles de esta manera mantener e incluso incrementar las emisiones de combustibles fósiles, que son la causa primera del cambio climático. Los diplomáticos y tecnócratas presentes prestaron poca atención a los comprobados impactos negativos que proyectos forestales del tipo de los contemplados en el MDL ya han tenido sobre la gente y el ambiente.

Afortunadamente, esta falsa «solución» para el clima hasta el momento no ha sido aprobada por la Conferencia de las Partes. Sin embargo, las negociaciones preliminares en Lyon dejan poco espacio para ser optimistas. Algunas de las delegaciones concurrentes se centraron en el chantaje («No firmaremos el Protocolo de Kioto al menos que se incluya un gran volumen de sumideros de carbono»), acompañado de presiones abiertas o solapadas («Pueden discrepar con nuestros planteos, pero en ese caso...»). Los EE.UU. y Japón sobresalieron en ese sentido. Otras procuraron comercializar la capacidad de sus países como «sumideros de carbono» a cambio de dinero. Algunos delegados de América Latina se destacaron en esta tarea. Un tercer grupo –que incluía muchos de los delegados europeos– intentaron mostrar su compromiso con la reducción de emisiones acordada en Kioto, pero dejaron la puerta abierta para proyectos forestales a ser aprobados en el próximo acuerdo de La Haya. Por su parte, el reducido grupo de países que se oponen frontalmente a la inclusión de los sumideros de carbono en el Protocolo de Kioto poco pudo hacer más que intentar hallar la manera de evitar lo peor de entre las propuestas sobre la mesa.

Desafortunadamente, estos fueron los puntos destacados del encuentro. Casi no hubo discusión sobre los temas reales: igualdad de derechos sobre la atmósfera, disminución del uso de combustibles fósiles, en especial en el Norte, fuentes alternativas de energía, eficiencia y conservación energéticas. Si verdaderamente los gobiernos hubieran deseado abordar el cambio climático, se habrían centrado en cómo lograr una drástica reducción de las emisiones de

combustibles fósiles mediante la activa promoción de fuentes de energía limpias, renovables y de bajo impacto. El Norte y el Sur podrían haber comenzado a compartir las investigaciones y la experiencia que ambos tienen en relación con el uso de energía de bajo impacto y habrían considerado mecanismos para asegurar el efectivo intercambio de conocimiento relevante, tecnología y experiencia política, tanto Sur-Norte como Norte-Sur. Estos deberían haber sido los temas centrales en discusión en el marco del «Mecanismo de Desarrollo Limpio». Pero los gobiernos presentes optaron por otra cosa.

Del encuentro de Lyon puede extraerse una lección: a menos que los pueblos ejerzan presión sobre sus gobiernos, los negociadores sobre el clima no harán nada para prevenir el inminente desastre climático a nivel mundial. Los movimientos populares deben tener el coraje de no creer en lo que la mayoría de los tecnócratas de los gobiernos, los institutos de investigación e incluso de las ONGs les están diciendo, vale decir, que el cambio climático es un tema reservado solamente a «expertos». Deben entender que ésta no es una cuestión técnica, sino de poder, y que el escenario en el que se juega es político, por lo que todos estamos igualmente habilitados a participar. Deben tener bien claro que el tema es básicamente muy sencillo y tiene una solución igualmente simple, que todo el mundo puede entender: reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de energía alternativas y no perjudiciales para el ambiente. No se llegará a una solución para el cambio climático plantando millones de hectáreas de pino y eucalipto, lo que sólo agregará más problemas a los ya existentes.

Si los dejamos actuar por sí solos, los delegados oficiales nos conducirán a todos al desastre. Estos deben ser presionados –tanto desde fuera como desde dentro de sus grandes salones de reunión– a actuar de manera más sobria y responsable. Esta es la lección de Lyon. (Boletín del WRM N° 38, setiembre de 2000).

¿Quién gana y quién pierde con los sumideros?

Los miembros de la Coalición Global por los Bosques y otras ONGs y Organizaciones de Pueblos Indígenas, que se reunieron en Lyon en setiembre de este año, prepararon una declaración explicando las razones para oponerse a la inclusión de los sumideros de carbono en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. He aquí algunas de esas razones:

- Los sumideros no ofrecen soluciones para la mitigación del cambio climático ni a largo ni a corto plazo. La incapacidad de estimar de forma verificable la capacidad de los bosques y otros ecosistemas de «compensar» las emisiones industriales de gases de efecto invernadero (GEI), haría que la inclusión de sumideros en el MDL lleve al fracaso al Protocolo de Kioto.
- La inclusión de sumideros en el MDL otorgará créditos a los países del Anexo 1 por la conservación, restauración y rehabilitación de bosques, y por el esta-

blecimiento de plantaciones de árboles, mientras los derechos de comunidades indígenas y otras comunidades locales, por siglos habitantes y protectoras de los bosques, son ignorados.

- La inclusión de sumideros en el MDL como forma de cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos, sólo reforzará las desigualdades internacionales existentes. La crisis climática que vive el Planeta es consecuencia del uso excesivo, por parte de las sociedades industriales, de la capacidad de los ciclos naturales del carbono, para apropiarse de más de lo que justamente les corresponde de los recursos del mundo. Este problema no se resolverá otorgándole a esas sociedades el derecho a acaparar las tierras y mares de otros pueblos para transformarlos en sumideros y depósitos de carbono.

- La inclusión de sumideros en el MDL constituiría una estrategia para la expropiación globalizada de tierras, mares y territorios pertenecientes a comunidades indígenas y locales, violando sus derechos fundamentales.

- La inclusión de sumideros en el MDL proveerá enormes incentivos, adicionales a los subsidios ya existentes, para el establecimiento de plantaciones monoespecíficas a gran escala, de gran impacto ambiental y social negativo, y que responden exclusivamente a los intereses de los países del Anexo 1 de la Convención de Cambio Climático. Estas plantaciones actualmente ya constituyen verdaderas catástrofes para las comunidades y su medio ambiente en todo el mundo. Además, las «plantaciones de carbono» no reditarán ganancias considerables para los países donde se implementen, proveerán obstáculos para sus planes futuros de desarrollo sustentable y, al mismo tiempo, premiarán a los países del Anexo 1 con ingentes recursos en forma de créditos de emisión de carbono.

- La inclusión de sumideros en el MDL no abordará las causas subyacentes de la deforestación, ni creará las condiciones macroeconómicas que permitan la conservación y la restauración de los bosques. Estas condiciones incluyen la reducción de la deuda externa, la adopción de patrones de consumo y producción sustentables, la revisión de los Programas de Ajuste Estructural, la regulación estricta de flujos de capital privado y el aseguramiento de la equidad en las relaciones entre los países del Norte y del Sur. (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Bosques superiores a plantaciones, incluso como sumideros de carbono

A lo largo de las discusiones acerca del cambio climático hay quienes han aducido que los bosques maduros son reservorios de carbono —y no sumideros— y que por lo tanto el clima a nivel global se beneficiaría de su corta, de la consiguiente conversión de su madera en productos durables y su sustitución por plantaciones. El carbono existente en el bosque sería almacenado en for-

ma segura en los productos de madera, a la vez que las plantaciones actuarían como sumideros durante muchos años, hasta llegar a la madurez. Esto aumentaría –según ellos– la capacidad de absorción de carbono de los ecosistemas forestales.

Además de las muchas fallas de tal enfoque, un reciente estudio demuestra la importancia de los bosques maduros como sumideros de carbono y advierte en contra de su sustitución por plantaciones. La investigación llega a la conclusión de que los bosques son mucho mejor que las plantaciones en la función de eliminar el dióxido de carbono del aire. El análisis, publicado en la revista «Science», fue realizado por el Dr. Ernst-Detlef Schulze, Director del Instituto Max Planck para Biogeoquímica ubicado en Jena, Alemania, junto a dos colaboradores de dicha institución.

Este estudio, al igual que investigaciones similares, presenta un panorama de los bosques que difiere profundamente de la noción que se tenía de ellos a nivel de la ciencia forestal. El Dr. Schulze considera que los bosques maduros han sido percibidos por mucho tiempo como estando en un estado de descomposición y liberando tanto dióxido de carbono como el que capturan. Pero sucede que los suelos de las selvas tropicales primarias, de los bosques siberianos y de algunos parques nacionales de Alemania contienen enormes cantidades de carbono derivado de las hojas caídas, ramas y raíces enterradas, que puede adherirse a las partículas del suelo y permanecer allí durante mil años o más. Si estos bosques son cortados, las raíces de los árboles se descomponen y el suelo se degrada, liberando de esa forma el dióxido de carbono. Deberán pasar siglos hasta que los árboles implantados en el lugar logren regenerar ese reservorio subterráneo de carbono.

Los autores del estudio subrayan la necesidad de proteger los bosques maduros. Sin esa protección, concluyen los científicos, algunos países podrán verse tentados a cortarlos y plantar luego nuevos árboles en los suelos deforestados, obteniendo créditos por la reducción del CO₂ atmosférico cuando, en realidad, sólo habrían empeorado las cosas.

Varios expertos en clima y en forestación que analizaron el trabajo consideran que el mismo ofrece un importante nuevo argumento para la protección de los bosques primarios. Agregan que el estudio también sirve para hacernos recordar que la meta principal debería ser la reducción de las emisiones de carbono en la fuente. (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Investigación concluye que la plantación de árboles aumentaría el calentamiento global

Investigadores del Laboratorio Lawrence Livermore encontraron evidencia que conecta el enfriamiento de la temperatura de la tierra entre los años 1000 y

1900 dC a un extenso proceso de deforestación. Este descubrimiento agrega nuevas complejidades a la ya difícil labor de predecir el cambio climático, y pone en duda la creencia común de que la plantación de árboles reducirá el «calentamiento global».

Aunque los científicos ya sabían que la cobertura del suelo afecta la temperatura, los nuevos hallazgos indican una relación entre las temperaturas climáticas extremas y el uso de la tierra. «La principal forma de influencia humana sobre el clima es la quema de combustibles fósiles, que produce gases de efecto invernadero» declaró Philip Duffy, investigador jefe del grupo de modelado de clima y ciclo del carbono y clima de laboratorio. «Pero también sospechábamos que los cambios en gran escala en el uso de la tierra contribuían al cambio climático».

Vistos desde el aire, los bosques son más oscuros que las tierras agrícolas, por ejemplo, los campos de maíz o trigo. Los colores oscuros tienden a absorber la luz del sol, y atrapan el calor que calienta al planeta. Por el contrario, los colores claros reflejan los rayos solares nuevamente al espacio, dando como resultado temperaturas más bajas en la medida que la luz del sol rebota alejándose de la tierra.

Utilizando los datos obtenidos de observaciones geológicas, que incluyen estudios de los anchos y densidades de los anillos de crecimiento de árboles viejos, los científicos pudieron reconocer hace ya tiempo que el clima de la tierra se enfrió tanto como dos grados Fahrenheit entre los años 1000 y 1900 DC. Los investigadores de la División de Ciencias Atmosféricas del laboratorio elaboraron la teoría de que la sustitución de bosques por agricultura y otros cambios en el uso de la tierra pueden haber contribuido a ese cambio. Para comprobar esta teoría, los científicos utilizaron supercomputadoras para simular dos escenarios posibles: un modelo de desarrollo climático que incluía la agricultura, y otro modelo con las mismas condiciones pero sin deforestación. Las pruebas demostraron diferencias significativas. Las regiones que más se enfriaron fueron las mismas en las que hubo deforestación y densa actividad humana. «Esto le complica la vida a quienes como yo, intentan predecir el cambio climático», declaró Duffy. Según la teoría de algunos científicos, la plantación de árboles evitaría el calentamiento global, dado que los árboles absorben el dióxido de carbono. Pero los nuevos hallazgos cuantifican la medida en que los árboles capturan el calor, y sugieren que plantar árboles podría no ser la forma de enfriar el planeta. (Boletín del WRM N° 46, mayo de 2001).

La biodiversidad también es mejor que los monocultivos desde una perspectiva climática

Investigaciones recientes proporcionan argumentos adicionales al movimiento de oposición contra la inclusión de plantaciones de árboles como sumideros

de carbono dentro del debate actual de la Convención sobre Cambio Climático sobre la instrumentación del Protocolo de Kioto.

Investigadores del Laboratorio Nacional Brookhaven del Ministerio de Energía de EE.UU. afirman que la biodiversidad es un factor importante que regula la forma en que los ecosistemas responderán al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. El equipo de investigadores, dirigido por Peter Reich de la Universidad de Minnesota, acaba de divulgar los resultados de un estudio de campo importante, que aparecen en la emisión del 12 de abril de 2001 de la publicación «Nature».

Todas las plantas absorben dióxido de carbono durante su crecimiento, pero las distintas especies absorben a velocidades diferentes, y las condiciones ambientales distintas también pueden afectar la capacidad de las plantas para absorber carbono. Los científicos descubrieron que los ecosistemas de plantas con mayor diversidad estaban en mejores condiciones de absorber dióxido de carbono (CO₂) y nitrógeno, dos gases que se producen cada vez más debido a las actividades humanas y los procesos industriales.

«La consecuencia clave de esta investigación es que, en respuesta a los niveles elevados de CO₂ y nitrógeno, los ecosistemas con biodiversidad alta tomarán y secuestrarán más carbono y nitrógeno que los ecosistemas con biodiversidad reducida», afirmó David Ellsworth, fisiólogo vegetal de Brookhaven y uno de los autores del estudio.

De esa forma, el estudio otorga credibilidad a las teorías que argumentan que los ecosistemas intactos son más útiles para regular los problemas ambientales que los paisajes modificados por el ser humano, como los monocultivos de árboles.

Los investigadores descubrieron que los niveles elevados de CO₂ y nitrógeno dan como resultado un aumento de biomasa cuando se la compara con parcelas expuestas a los niveles ambientales de CO₂ y nitrógeno. Pero el efecto fue mayor en las parcelas con biodiversidad alta, en comparación con las que tenían menos especies.

«Estos hallazgos sugieren que proteger la biodiversidad contribuirá a salvaguardar la capacidad de los ecosistemas de capturar una fracción mayor del carbono y nitrógeno adicionales que ingresan a nuestra atmósfera debido a los procesos industriales», afirmó el ecólogo de Brookhaven, George Hendrey. (Boletín del WRM N° 46, mayo de 2001).

Efecto invernadero: ¿más plantaciones o más voluntad para reducir las emisiones?

Durante las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, algunos gobiernos se comprometieron a reducir las emisiones de carbono de su propio

país. Esta actitud, muy alentadora desde el punto de vista del medio ambiente en cuanto a la reducción del efecto invernadero, puede llegar a ser también la peor decisión en contra del medio ambiente desde el momento que instrumentan esa reducción mediante la promoción de plantaciones de los llamados «sumideros de carbono».

En el mes de julio de 2001 se retomaron las negociaciones y el tema sigue teniendo vigencia, dado que cada vez más gobiernos y empresas, principalmente del norte, estimulan las plantaciones de monocultivos forestales ya sea de eucaliptos, pinos o palma aceitera en el sur como forma de «contrarrestar» (en realidad justificar) sus emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de controlar y reducir sus propias emisiones.

Estas decisiones se toman sin tener en cuenta los impactos que tienen los monocultivos en los países y los pueblos que habitan en las regiones en que se implantan. En el caso de las plantaciones de palma aceitera, las mismas se incentivan a través de la prensa o de estudios científicos que, a los falsos argumentos usuales (generación de empleo, contribución al desarrollo del país), ahora agregan uno igualmente falso pero más novedoso: que es una excelente «máquina» fijadora de dióxido de carbono utilizando la energía solar.

A través del boletín del WRM ya hemos detallado las razones para oponerse al mecanismo de los «sumideros de carbono». Queremos sin embargo mostrar algunas de las «perlas» del collar de falsedades con las que se está crecientemente bombardeando a un público desconocedor del tema, con el doble objetivo de imponer la plantación de palma aceitera y de imponer el «remedio» de los sumideros de carbono como solución al cambio climático global:

1.- Los bosques son un reservorio natural de carbono. Las plantaciones de palma aceitera poseen propiedades de fijación de carbono similares a la de los bosques de las tierras bajas. («More Land To Be Needed For Oil-Palm Areas» from the New Straits Times, February 13th, 2001 – Malaysia).

2.- Al igual que el caucho, la palma aceitera es beneficiosa para el medio ambiente. Toma dióxido de carbono del aire y devuelve oxígeno a la atmósfera. Al mismo tiempo las plantaciones de palma constituyen recursos renovables para la industria de la celulosa y el papel. Estos materiales estarán disponibles en los 2,8 millones de hectáreas de plantaciones de palma existentes en Malasia y por lo tanto ayudan a reducir la presión sobre algunas especies forestales. («Sustaining Agricultural Development in Malaysia: Experience in the Plantation Sector» by Dr. Abdul Aziz, Academy of Sciences Malaysia, Director-General of Malaysian Rubber Board and Dr. Yusof Basiron, Academy of Sciences Malaysia, Director-General of Palm Oil Research Institute of Malaysia).

3.- Las plantaciones bien manejadas de palma aceitera secuestran más carbono por unidad de área que los bosques tropicales y se predice que las plan-

taciones de palma se convertirán en una parte importante del manejo del secuestro de carbono en el próximo siglo. («Oil Palm – The Great Crop of South East Asia: Potential, Nutrition and Management» by Ernst W. Mutert and Thomas H. Fairhurst, Potash & Phosphate Institute, Paper presented at the IFA Regional Conference for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 14-17 November 1999).

4.- De la misma manera que en el caso de las plantaciones de caucho, el cultivo de la palma aceitera es considerado beneficioso para el medio ambiente, puesto que ayuda a fijar carbono durante la etapa de crecimiento de la planta, disminuyendo así el efecto invernadero, a la vez de proporcionar otras ventajas ambientales. La investigación muestra que el bosque, durante su período de crecimiento, absorbe más carbono del que libera a la atmósfera, funcionando así como una especie de «filtro». De acuerdo con los científicos, las plantaciones de palma y de caucho tienen ese mismo perfil. (OMB Group, Oil Palm / Dendê Plantation, Brazil).

5.- La palma aceitera es una excelente «máquina» fijadora de dióxido de carbono utilizando la energía solar. («Palm Oil Project – An International Collaboration in Gene Manipulation of Oil Palm for the New Century» by Dr. Hiroshi SANO, Chief Research Scientist, Agricultural Chemicals Laboratory Yokohama, Research Center Mitsubishi Chemical Corporation).

6.- Una plantación puede «secuestrar» hasta 15 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera por cada hectárea sembrada, contribuyendo así a disminuir el efecto invernadero... se trata de la siembra de un bosque en reemplazo de otro. (Jorge Román, gerente de proyectos de Palmeras de los Andes, Revista Gestión Economía y Sociedad, Octubre del 2000. No.76).

7.- ...en tanto que el Ministro malayo de Industrias Primarias intervino unos meses más tarde sosteniendo que las plantaciones de palma aceitera de su país eran de hecho «mejores que los pinos de las naciones desarrolladas en materia de absorción de gases de dióxido de carbono». (The Corner House Briefing #15 – «The Dyson Effect: Carbon «Offset» Forestry and the Privatisation of the Atmosphere» – 1999).

8.- Malasia emitió 144 millones de toneladas de gases de efecto invernadero... casi la mitad (68,7 millones de toneladas) de los cuales fueron absorbidas por «sumideros de carbono» constituidos por bosques plantados ... y la palma aceitera resultó ser el mayor sumidero de carbono del país, absorbiendo el 63% de los 68,7 millones de toneladas de bases de efecto invernadero debido a las extensas áreas que ocupa («Malaysia's CO2 emissions among lowest», *Malaysia Daily Express*, November 27, 2000). (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Secuestro de carbono: un dilema para los habitantes de los bosques

En los debates a nivel mundial sobre el papel de los bosques y las plantaciones en las negociaciones sobre el clima se ha prestado muy poca atención a las opiniones de los alrededor de 300 millones de personas que componen los pueblos que habitan los bosques. Estos pueblos, históricamente marginados, cuyos derechos han sido desconocidos por tanto tiempo, exigen hoy que sus opiniones sean escuchadas y que se los respete como los propietarios legítimos de los bosques que habitan. Si bien los científicos todavía no tienen la certeza de si los bosques y las plantaciones actúan o no como depósitos o sumideros de carbono a largo plazo, los políticos ya están discutiendo si los bosques deben o no ser considerados mercaderías en el comercio mundial de carbono. Algunos países como los Estados Unidos, a los que les resulta difícil reducir sus emisiones, ven con entusiasmo la idea de pagar a compañías o países en el Sur para que «creen» sumideros de carbono, de forma que las economías no sustentables del Norte puedan seguir contaminando. Y algunas personas en el Sur están deseosas de hacerse del dinero y no hacer preguntas difíciles.

Existen riesgos ciertos y también algunas posibles ventajas para los pueblos que habitan los bosques en caso de que éstos fuesen incorporados al mercado mundial del carbono. Los riesgos más obvios son que los poderosos intereses del Norte industrial y los de los sectores de la energía y forestal en el Sur obtengan la capacidad de determinar el futuro de los bosques, y una vez más impidan a los pueblos de los bosques tomar decisiones efectivas sobre su propio futuro. De la misma forma, los lucrativos negocios entre los emisores de carbono y los depositarios de carbono promoverán incentivos potentes a las grandes empresas para apropiarse de las tierras comunitarias para establecer allí plantaciones. Por otra parte, es posible darse cuenta de que el valor de los bosques en pie como depósitos de carbono podría hacer fluir fondos con los que pagar a los conservacionistas y a los pueblos de los bosques para que cuiden y protejan los bosques evitando su destrucción. Al evaluar los puntos a favor y en contra, los pueblos de los bosques han llegado a distintas conclusiones sobre lo que se debe exigir en las negociaciones a nivel mundial.

Todos están de acuerdo en que los pueblos indígenas y demás habitantes de los bosques deben ser partícipes centrales de las negociaciones sobre el clima y no quedar relegados como observadores marginales. Sin embargo, se dividen a la hora de decidir si deben aceptar o no la inclusión de los bosques en el «Mecanismo de Desarrollo Limpio» (MDL). En una fuerte declaración realizada en el sexto encuentro de las negociaciones sobre el Clima en La Haya en 2000, los voceros indígenas de 22 países diferentes en representación de 28 culturas distintas, rechazaron la inclusión de los bosques en el MDL y convocaron a crear un fondo a ser usado por los pueblos indígenas para enfrentar los impactos del cambio climático. «Nuestra relación intrínseca con la Madre

Tierra nos obliga a oponernos a la inclusión de sumideros en el MDL, porque reducen nuestras tierras sagradas y nuestros territorios a la mera captura de carbono, y eso va contra nuestra cosmovisión y nuestra filosofía de vida. Incluir los sumideros en el MDL constituiría una estrategia de expropiación de nuestras tierras y territorios a nivel mundial y violaría nuestros derechos fundamentales, culminando en una nueva forma de colonialismo. Incluir los sumideros en el MDL no ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y por el contrario significaría brindarles a los países industrializados un argumento para evitar reducir las emisiones en la fuente».

Pero otros pueblos de los bosques han expresado una opinión diferente. Tal es el caso particular de pueblos de Brasil, que han trabajado con la ONG estadounidense Environmental Defense, propulsora del comercio del carbono. «Nuestros pueblos tienen propuestas y proyectos para proteger los bosques y para las vidas de nuestra gente. Necesitamos los medios de expandirlos y multiplicarlos. El MDL no debe excluir a los bosques y no debe excluir a nuestros pueblos. Apoyamos la inclusión de la protección de los bosques, el manejo de los bosques con base en la comunidad, la producción sustentable y las alternativas económicas para los pueblos indígenas y tradicionales en el MDL». En junio de este año, representantes de las organizaciones brasileñas y de Environmental Defense recorrieron Europa para explicar su posición. Los encuentros demostraron la necesidad de profundizar la discusión sobre las consecuencias del MDL para los pueblos de los bosques. (Por: Marcus Colchester, Boletín del WRM N° 48, julio de 2001).

La inclusión de los sumideros hundió el Protocolo de Kioto

La noticia ha recorrido el mundo entero: ¡Se ha salvado el Protocolo de Kioto! A pesar de que formalmente esta información es verdad, oculta el hecho de que esto no significa que se ha salvado el clima del planeta, que es el verdadero tema en cuestión. Por el contrario, tal como están hoy las cosas, en tanto no soluciona el problema que se pretende abordar, el Protocolo de Kioto impondrá nuevos impactos a las poblaciones locales a través de la puesta en práctica de proyectos de sumideros de carbono.

Aunque resultaba previsible, es triste haber confirmado que la reunión de la Convención sobre Cambio Climático en Bonn se centró más en los «sumideros» para los gases de efecto invernadero que en las «fuentes» de los mismos. Es decir, que en vez de buscar medios para reducir el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que son los principales causantes del efecto invernadero, los negociadores del clima se concentraron en los medios para evitar compromisos sobre la reducción de las emisiones provenientes de combustibles fósiles.

Esta reunión se realizó en un contexto en el que Estados Unidos, responsable del 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, declaró públicamente su negativa a cumplir los compromisos acordados en Kioto en 1997. Este contexto facilitó la presión ejercida por Japón, uno de los países más contaminantes, cuya intervención fue determinante para lograr un acuerdo que «salvó» al protocolo. La solución para «salvarlo» consistió en incluir las plantaciones de árboles como sumideros de carbono.

Los negociadores del clima eligieron ignorar el creciente número de estudios científicos que cuestionan la capacidad de las plantaciones de árboles como solución a largo plazo para el cambio climático. Igualmente decidieron ignorar que este mecanismo de hecho producirá un aumento neto de las emisiones de combustibles fósiles en el Norte. Y también optaron por ignorar los impactos de las plantaciones de árboles a gran escala sobre los pueblos y el medio ambiente.

Como resultado, ahora los contaminadores tendrán autorización para contaminar con el argumento de estar instrumentando proyectos de plantaciones que actuarán como «sumideros» de sus emisiones. A menos que la oposición local les impida hacerlo, la mayor parte de estas plantaciones se instalarán en el Sur, donde los árboles crecen mucho más rápido, siendo entonces más «eficiente» la captura de carbono. Al mismo tiempo, las plantaciones serán mucho más baratas que si se instalaran en países industrializados, en los que el trabajo y la tierra son más caros, y recibirán todo el apoyo necesario, incluyendo la represión de la población local, de parte de gobiernos del Sur desesperados por aceptar cualquier inversión que deje algo de dinero, aunque sea muy poco, en el país.

Para comprender la amenaza que esto implica para los pueblos, los suelos, el agua y la biodiversidad, es necesario saber que esta «solución» puede causar, para tener sentido teóricamente desde el punto de vista del clima, que cientos de millones de hectáreas de tierras fértiles sean convertidas en plantaciones a gran escala de especies de árboles de crecimiento rápido como el eucalipto. En el sur, esas tierras ya están ocupadas por pueblos que dependen de ellas para su subsistencia. Las tierras de estos pueblos están por ende amenazadas por la expropiación para establecer plantaciones. Las áreas a ser ocupadas por estos basureros de carbono albergan buena parte de la biodiversidad del mundo, y gran parte de la misma podría ser eliminada por las plantaciones de monocultivos a gran escala. Al mismo tiempo, estos monocultivos agotarían los recursos de agua y determinarían cambios drásticos en los suelos sobre los que se planten.

En resumen, con la decisión adoptada de incluir las plantaciones como sumideros de carbono, no solamente no se ha resuelto el problema que se requería abordar, o sea el cambio climático, sino que se han agregado nuevos proble-

mas para millones de personas que ahora enfrentarán la expropiación de sus tierras y recursos para su conversión en basureros de carbono. El precio para «salvar» el proceso ha sido demasiado alto. Ahora le toca a las personas y organizaciones que están verdaderamente preocupadas por el futuro de la Tierra detener la instrumentación de esta falsa solución y forzar a los gobiernos a abordar con seriedad el tema del cambio climático global. (Boletín del WRM N° 48, julio de 2001).

SinksWatch: una iniciativa no gubernamental para hacer seguimiento a proyectos de plantaciones de árboles como sumideros de carbono

Al mismo tiempo que los gobiernos en la 7ª Conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático (COP7) realizada en Marrakech en 2001, daban los toques finales a la decisión que convertía los sumideros de carbono en elegibles para créditos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, un grupo de ONGs formaban SinkWatch, una iniciativa para el seguimiento y control de proyectos de sumideros de carbono relacionados con el Protocolo de Kioto.

SinksWatch es una iniciativa del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), dirigida por la Oficina de Apoyo del Norte del WRM e instrumentada por FERN. El objetivo de SinksWatch es realizar el seguimiento y control de los proyectos de secuestro de carbono relacionados con el Protocolo de Kioto y generar conciencia sobre la amenaza que los mismos representan para los bosques y otros ecosistemas, para los pueblos de los bosques y también para el clima. SinksWatch centra su acción en los proyectos de sumideros basados en plantaciones de árboles, especialmente en áreas donde el uso y la tenencia de la tierra están en disputa.

SinksWatch reconoce que hay vínculos importantes entre los bosques y el cambio climático y defiende la necesidad de abordar esos vínculos de una forma que resalte el importante papel de los bosques en su adaptación al cambio climático y en la protección contra los impactos de eventos climáticos extremos, sin justificar la liberación continua, adicional y permanente de carbono proveniente del consumo de combustibles fósiles.

¿Por qué esta iniciativa?

La inclusión de los proyectos de sumideros de carbono en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto permitirá la liberación continua y permanente de carbono de combustibles fósiles a cambio del almacenamiento temporal de carbono en árboles. Los créditos generados por los sumideros aumentan entonces la cantidad de carbono en la reserva activa de carbono y sólo transfieren la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a las próximas generaciones.

SinksWatch hará el seguimiento de los proyectos de sumideros de carbono, expondrá las desventajas de su inclusión en el esquema de cálculos del Protocolo de Kioto y generará conciencia sobre las consecuencias de ignorar las diferencias cruciales entre el carbono almacenado en los combustibles fósiles y el almacenado en los árboles:

- El carbono contenido en los combustibles fósiles casi no interactúa con el carbono de la atmósfera. Está bloqueado en forma «segura» fuera de la reserva activa de carbono y se almacena permanentemente en los combustibles fósiles. La forma principal de ingreso del carbono de combustibles fósiles a la atmósfera es cuando los seres humanos deciden extraer y quemar combustibles fósiles. No hay un flujo inverso hacia la reserva de carbono de los combustibles fósiles, al menos no en la escala temporal de las discusiones del Protocolo de Kioto.

- El carbono almacenado en los árboles, bosques y otros ecosistemas está en constante intercambio con el carbono en la atmósfera. Es parte de la reserva activa de carbono y se libera frecuentemente a la atmósfera a través de incendios, plagas de insectos, descomposición y respiración de los vegetales, y también de la tala y el desmonte para la agricultura. Por lo tanto el almacenamiento de carbono en los árboles es sólo temporal.

- Según el esquema de cálculos del Protocolo de Kioto, por cada tonelada de carbono que se almacena en un árbol, otra tonelada equivalente de carbono de combustibles fósiles se puede liberar a la atmósfera. El concepto subyacente de que «carbono es carbono» ignora las diferentes interacciones de estas reservas de carbono con la atmósfera, una diferencia esencial en relación al cambio climático. El resultado es que por cada crédito de sumideros de carbono emitido bajo el MDL hay un aumento en la reserva de carbono activo (esa misma reserva que determina el clima global), aún cuando por cierto tiempo el aumento general no sea evidente porque el carbono está temporalmente almacenado en un árbol.

¿Por qué concentrarse en las plantaciones?

Además de los problemas inherentes a los créditos por sumideros de carbono, el Protocolo de Kioto también proporciona los incentivos equivocados. Se centra la atención en el secuestro de carbono y no en los reservorios de carbono: cuanto más rápido crece un árbol, más créditos se obtienen. Esto conduce a incentivar las plantaciones a gran escala. Ya hay ejemplos evidentes de estos incentivos nocivos, siendo el más obvio el Proyecto Plantar de Brasil. Los impactos sociales y ambientales negativos de las plantaciones a gran escala de árboles están bien documentados. Dichas plantaciones suelen generar pobreza, aumentan las desigualdades, pueden afectar la seguridad alimentaria, agotan las reservas de agua y los recursos del suelo y reducen drásticamente la

diversidad biológica, por mencionar sólo los impactos más obvios. También son muy vulnerables a los incendios y a las plagas de insectos, lo que desestabiliza aún más su ya inseguro papel para almacenar carbono.

SinksWatch considera que la plantación de árboles con el propósito de obtener créditos y el sistema de cómputos de carbono del Protocolo de Kioto no atacarán las raíces profundas de la crisis global de los bosques. Por el contrario, los créditos de sumideros de carbono corren el riesgo de exacerbar tanto la crisis mundial de los bosques como el cambio climático. SinksWatch, entonces, controlará los proyectos que apunten a adquirir créditos bajo los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto, especialmente el MDL. SinksWatch se propone funcionar como centro de difusión de información sobre los proyectos de sumideros de carbono relacionados con el Protocolo de Kioto y facilitar la coordinación entre los afectados por los proyectos de sumideros del MDL. Pronto estará en línea un sitio web con información más detallada sobre proyectos actuales de sumideros y sobre los problemas inherentes a los sumideros de carbono en la dirección www.sinkswatch.org. SinksWatch trabaja en estrecha colaboración con CDM Watch, una iniciativa para el seguimiento de los proyectos del MDL no relacionados con sumideros. SinksWatch proporciona actualizaciones regulares a las ONGs que trabajan en temas relacionados con los bosques, y se propone respaldar a grupos y organizaciones afectadas por proyectos de sumideros de carbono para que puedan enfrentarse a esos proyectos en forma efectiva. (Boletín del WRM N° 67, febrero de 2003).

PROCESO Y ACTORES INTERNACIONALES

Las plantaciones no «ocurren»: son promovidas. Si bien son muchos los procesos y actores internacionales que actúan en este escenario, es importante destacar el papel fundamental que le cabe a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en la materia. Este organismo fue el que definió oficialmente a las plantaciones como bosques. Si bien su definición de bosques no admite el menor análisis crítico, la misma ha sido aceptada a nivel mundial como la verdad revelada. Las plantaciones son bosques, dice la FAO. Amén.

Pero la FAO no se limitó a ese papel. Fue también el organismo que preparó el terreno para la promoción de los monocultivos forestales a nivel mundial, como uno de los componentes de su «Revolución Verde» que, bajo la consigna de acabar con el hambre, acabó con el ambiente y los medios de sustento de los pequeños agricultores en todo el mundo. En materia forestal, la FAO promovió activamente, a través de estudios y misiones de asesoramiento, la plantación de monocultivos a gran escala de árboles, centrándose primero en el eucalipto y luego en otras especies como pinos, acacias y otras.

Pero la FAO no actúa sola. Las plantaciones han sido promovidas también por organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y los bancos regionales (Africano, Asiático e Interamericano), por procesos internacionales como el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, la Organización Internacional sobre Maderas Tropicales, la Convención sobre Cambio Climático, las agencias de promoción de las exportaciones del Norte, las empresas consultoras en temas forestales y de comercio de bonos de carbono y hasta por procesos de certificación forestal como el Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council).

Pero detrás de todos ellos están quienes realmente se benefician de las plantaciones: las grandes empresas transnacionales de la madera, celulosa y papel; las igualmente grandes empresas que industrializan el aceite de palma, transformando la materia prima en un variado conjunto de productos que van desde lo alimenticio a los cosméticos; las grandes empresas responsables de cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero (encabezadas por las petroleras), que buscan «compensar» sus emisiones con plantaciones de árboles. Y todas ellas enmarcadas en un modelo insustentable de producción orientado a satisfacer un consumo excesivo e insustentable en el Norte a expensas de la sociedad y el ambiente en el Sur.

En esta sección aportamos algunos ejemplos sobre algunos de esos actores y el papel que cumplen en la promoción de este modelo forestal.

¿Ustedes creen en bosques plantados?

¿Han visto la película «Los Cazafantasmas»? Gracias a la magia del cine, esta historia tonta, quizás hija del cerebro de un joven supersticioso, llegó a la pantalla grande. Muchos niños y algunos adultos quizás hasta creyeron por un momento que los fantasmas existen. Esto es muy parecido a lo que sucedió en Nueva Zelanda en la «Reunión de Expertos sobre Bosques Plantados».

Para muchos de nosotros, esto es simplemente absurdo: los bosques plantados no existen. Pero, ¿es esto motivo para no estar asustados?

- Bueno, no sé lo que vi, ¡pero estaba asustado!

Esa es una afirmación muy común entre los mortales cuando se enfrentan a un fantasma en medio de un lugar desolado, como un antiguo cementerio indio invadido por la «civilización», o algo por el estilo.

- «Por supuesto que estoy asustado; ¡en nuestra cultura eso no existe!» Esto es muy parecido a lo que sintió un colega aborigen al escuchar algunas de las intervenciones en la Reunión de Expertos. «No sé qué son los ‘bosques plantados’, pero ¡parecen ser algo espantoso!», añadió.

A mí también me parecieron algo espeluznante, a pesar de que mi bagaje cultural, educación y formación occidentales me debían haber preparado para

comprender el concepto. Con la mayor objetividad posible hice un esfuerzo para ubicarlos en este mundo como bosques. Pero cuanto más lo intentaba, más me parecían plantaciones, en el sentido más estricto de la palabra, comparables a las prácticas agrícolas más convencionales y con todo el potencial destructivo devengado de su naturaleza especulativa.

- «Vamos, Miguel, ¡hay que abrir la cabeza!, dijo la voz conciliatoria de un amigo que trabaja para una organización internacional; si les llamas plantaciones, sus dueños no mejorarán sus prácticas y no intentarán certificarlas!», se lamentó.

De todas formas, no tomé sus palabras demasiado en serio, ya que he escuchado a ejecutivos de empresas plantadoras decir que no han tenido que cambiar sus prácticas normales para obtener el certificado del FSC.

Pero la realidad es que los fantasmas no son tan terribles como los monocultivos de árboles en gran escala. Es posible enfrentar a los fantasmas a nivel imaginario. Pero las plantaciones son reales y se propagan como plagas, reemplazando bosques, sabanas, praderas, humedales, desiertos y muchos otros ambientes valiosos. En muchos casos también se expanden a expensas de los medios de vida de la gente. ¡Esto sí es espeluznante!

- «Entonces mi amigo –preguntó un participante de Medio Oriente– ¿tú crees que las plantaciones son tan malas como un puñado de soldados occidentales de gatillo rápido prontos para disparar alegremente contra todo aquello que se mueva?». No, por supuesto que no. Las plantaciones no nos disparan, son menos sanguinarias ¡pero ahora también las están plantando para poder seguir quemando petróleo!

Afortunadamente, la reunión al menos reconoció que las plantaciones tienen aspectos negativos. Sin embargo, insistieron en demostrar lo inverosímil: que las plantaciones, en general, son parte de una gama de tipos de bosque. ¡Pero!... ¡esto es lo que nosotros llamamos fragmentación, perturbación y cambios en el uso de la tierra!

- «Bueno, todo se reduce a una cuestión de definiciones», me dijo un experto. «Mire, si aplicamos la definición de la FAO, como debería hacerlo todo el mundo, ¡expandiríamos muchísimo la cobertura forestal!».

- «Ese es precisamente el problema; estamos hablando de cosas distintas», le contesté. «Los fantasmas que la gente ve son sólo productos de la imaginación, y en la suya una plantación es un bosque. Usted no debería permitir que su fantasía le impida ver la realidad».

A pesar de todo, algunos expertos hicieron algunas concesiones y reconocieron que los monocultivos de árboles a gran escala son bastante diferentes de las pequeñas plantaciones de especies mixtas manejadas por comunidades, e incluso aún más diferentes a los bosques. Pero la creencia absolutamente

predominante entre los expertos es que, como los árboles son los seres dominantes, tanto en los bosques como en las plantaciones, entonces ambos son bosques y la definición es apenas una cuestión semántica.

Bueno, pero cuando están en juego subsidios y financiación pública la cuestión no parece ser sólo semántica. En ese momento, las empresas evalúan las oportunidades para plantar grandes extensiones de monocultivos contra las oportunidades para establecer sistemas comparables a los tipos de bosques locales originales. Los resultados casi siempre serán favorables a los monocultivos, grandes y fáciles de plantar, ya que la única razón de ser de las empresas es el lucro.

Otro concepto fantasmagórico que surgió en algunas de las presentaciones y que se mantuvo flotando en el ambiente durante toda la reunión, fue que sustentabilidad significa consumo creciente y eterno. Verdaderamente hay que creer en fantasmas para creerse esto, en particular cuando se sabe que por lo menos la mitad del consumo de todo el papel se destina a propaganda enviada por correo y a embalaje, y que más de las tres cuartas partes de la deforestación mundial se debe a la conversión de bosques a plantaciones de todo tipo.

Y finalmente, después del último susto: ¿A quién vamos a llamar? ¿A los Cazaplantaciones, como en la película? Pero resulta que esto no es una película, es la vida real, y no es posible traer una aspiradora gigante para librarnos de las plantaciones de monocultivos en gran escala.

Nadie niega el déficit actual de árboles y el proceso de deforestación casi criminal destinado a alimentar el consumo descabellado. Pero, como lo demuestra toda la historia de la deforestación, niego que simplemente mediante la plantación de enormes y siempre crecientes áreas de monocultivos se vaya a detener la deforestación ni a hacer justicia a los pueblos de los bosques.

Las soluciones para combatir la deforestación deberían comenzar por reconocer el verdadero papel que los bosques juegan en dar vida al Planeta, y por respetar los derechos de los pueblos que habitan los bosques. Pero sé que para algunas personas esto es mucho más escalofriante que cualquier fantasma. (Por: Miguel Lovera, Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

El tema de las plantaciones en la agenda del FPIRS del Banco Mundial

El Banco Mundial no es una estructura monolítica y muchos de sus funcionarios son cada vez más concientes sobre los impactos que los monocultivos forestales a gran escala están teniendo sobre la gente y sobre el ambiente. Sin embargo, hay señales de que a nivel de las altas jerarquías del Banco hay una voluntad de promover dichas plantaciones, ya sea como sumideros de carbono o como proveedores de materia prima para las industrias del papel, de la madera y del aceite de palma.

Las consultas regionales que el Banco está organizando en el marco del proceso de Revisión de la Implementación de la Política Forestal y Desarrollo de una Estrategia (FPIRS, por su sigla en inglés) constituyen una buena oportunidad para poner este tema sobre la mesa y para proporcionar al Banco más información y análisis, lo cual podría resultar en el fortalecimiento de las posiciones de aquellos funcionarios que sí son críticos respecto a las plantaciones. Los estudios de país llevados a cabo por el Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) del propio Banco contienen información útil sobre los impactos de las plantaciones, pero debe subrayarse que dicha información –extrañamente– fue omitida en el informe principal del DEO.

Las consultas regionales también pueden proporcionar una oportunidad para destacar que la promoción de monocultivos de árboles a gran escala es contradictoria con al menos dos temas que el Banco está mandado a abordar: el alivio a la pobreza y la conservación de la biodiversidad. La sustitución de bosques por plantaciones –una práctica extendida en los trópicos– resulta en un mayor empobrecimiento de quienes habitan o dependen de los bosques y por ende el apoyo del Banco a dichos proyectos constituye una clara violación a su mandato. Por otro lado, hay abundantes pruebas de que las plantaciones forestales a gran escala generan muy pocos empleos, que además son mal pagos y estacionales, por lo que no constituyen una solución para aliviar la pobreza.

El Banco es una de las agencias implementadoras del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés), una de cuyas áreas temáticas es la conservación de la biodiversidad. La sustitución de biodiversos bosques y ecosistemas de praderas por monocultivos de árboles resulta en enormes impactos sobre la flora y la fauna y es contradictorio con la conservación de la diversidad biológica que el Banco está mandado a proteger.

Es importante resaltar que hay numerosos tipos distintos de plantaciones de árboles, muchos de los cuales pueden ser beneficiosos para la gente y el ambiente. Las consultas regionales pueden ser un punto de partida para proveer a los funcionarios del Banco con información sobre esos tipos de plantaciones y cuales deberían ser las condiciones para que las plantaciones puedan ser consideradas beneficiosas.

En resumen, el proceso FPIRS constituye una excelente oportunidad para discutir el tema de las plantaciones y para intentar que los funcionarios del Banco tomen conciencia de los impactos del modelo forestal predominante y de las numerosas luchas que el Banco será responsable de desencadenar en caso de optar por apoyar una mayor expansión de los monocultivos forestales a gran escala. (Boletín del WRM N° 32, marzo de 2000).

Para el FSC las plantaciones son bosques

Uno de los principales problemas que enfrentan quienes luchan contra las plantaciones de árboles a gran escala es la confusión existente (generada por la FAO) entre bosques y plantaciones (clasificados como bosques «naturales» y bosques «plantados»). La definición del Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) contribuye a fomentar dicha confusión, afirmando que las plantaciones son bosques: «Plantación: Areas forestales que carecen de las características principales y los elementos claves de los ecosistemas naturales, como resultado de la plantación o de los tratamientos silviculturales». Llamando a las plantaciones «áreas forestales», esta definición permite al FSC incluir a las plantaciones en su lista de «bosques certificados».

La definición del FSC podría ser de utilidad para definir a los bosques manejados del norte, donde el bosque original ha sido tan simplificado que se ha vuelto más semejante a una plantación que a un bosque. Pero no es para nada útil para la gente luchando en Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Tailandia y en muchos otros países en contra de los monocultivos a gran escala de especies exóticas tales como el pino y el eucalipto. Dichas plantaciones no son bosques: son cultivos de árboles.

A pesar de la propaganda sobre que «las plantaciones ayudan a aliviar la presión sobre los bosques», la experiencia ha demostrado que las plantaciones no sólo no alivian la presión sobre los bosques sino que, por el contrario, constituyen una importante causa directa e indirecta de deforestación. Al mismo tiempo, generan muchos otros problemas ambientales y sociales.

Lo que los forestales llaman «forestación» —la instalación de lo que denominan «bosques» donde no existían anteriormente— usualmente resulta en destrucción ambiental siempre que los ecosistemas locales son reemplazados por monocultivos uniformes de árboles. A pesar de la preocupación del FSC por la protección de los bosques, este tipo de degradación ambiental no fue tomado suficientemente en cuenta cuando la organización elaboró sus principios y criterios. Ello tal vez ayude a explicar las contradicciones de la certificación en países tales como Sudáfrica, con su predominante ecosistema de praderas (ver artículo más adelante).

El FSC fue creado para proteger a los bosques del mundo y a la gente que allí habita contra las prácticas destructivas de tala, mediante la promoción del uso sustentable de los bosques. Las plantaciones a gran escala de monocultivos de árboles poco tienen en común con los bosques y resultan en graves problemas ambientales y sociales. En consecuencia, instamos encarecidamente al FSC a excluir ese tipo de plantaciones de su mandato. (Boletín Especial del WRM sobre el FSC, febrero de 2001).

Comentarios al Principio del FSC sobre plantaciones

Es importante comenzar resaltando el hecho de que para recibir la certificación del FSC, una empresa plantadora necesita cumplir con todos los principios del FSC y no sólo con el principio 10, referido específicamente a plantaciones. Habiendo dicho eso, nos concentraremos en el principio 10 que, en su redacción actual, parece posibilitar la certificación de plantaciones industriales insustentables –particularmente en el sur– a pesar de sus impactos sociales y ambientales negativos. Lo que sigue son comentarios sobre los diferentes criterios incluidos bajo el principio 10.

«Las plantaciones deberán ser planeadas y manejadas de acuerdo con los Principios y Criterios del 1 al 9 y con los Criterios del Principio 10. Si bien las plantaciones pueden proporcionar un arreglo de beneficios sociales y económicos y pueden contribuir en la satisfacción de las necesidades de productos forestales del mundo, éstas deberán complementar el manejo de, reducir la presión sobre y promover la restauración y conservación de los bosques naturales».

En el sur ya se ha comprobado que todos esos supuestos beneficios resultan inalcanzables en la práctica:

- Los monocultivos industriales a gran escala sólo han proporcionado «un arreglo de beneficios sociales y económicos» a los ricos.

- ¿Qué quiere decir «puede contribuir en la satisfacción de productos forestales del mundo» en un contexto del sur? Las plantaciones producen sólo dos productos forestales: madera para aserrado y madera para celulosa. Estos dos productos y en particular el segundo, están destinados a abastecer al consumo desmedido de los países del norte y de las élites del sur. Por ende, el beneficiario no es «el mundo» sino el mundo rico. Todos los otros productos que son producidos por los verdaderos bosques (alimento, forraje, agua, medicinas, vivienda, leña, etc.), que satisfacen las necesidades de las comunidades locales, están casi totalmente ausentes de las plantaciones y el mundo local no se beneficia entonces de las plantaciones.

- En la mayoría de los casos, las plantaciones han resultado en la destrucción de bosques nativos o de otros ecosistemas nativos tales como las praderas y no han contribuido a «complementar el manejo de, reducir la presión sobre y promover la restauración y conservación de los bosques naturales». El hecho de que, a pesar de eso, el principio sólo establece que las plantaciones «deberían» (y no que deberán) promover la conservación, demuestra su desvinculación del mundo real.

«Principio 10.1. Los objetivos de manejo de la plantación, incluyendo los de conservación y restauración de bosques naturales deberán manifestarse ex-

plícitamente en el plan de manejo, y deberán ser claramente demostrados en la implementación del plan».

- Los objetivos de manejo de las plantaciones industriales siempre están explícitamente manifestados: la producción de grandes volúmenes de madera en el más corto plazo posible. Las grandes empresas plantadoras a menudo incluyen objetivos de restauración y conservación de bosques naturales en sus planes, pero más como un ejercicio de relaciones públicas que como un genuino objetivo de manejo.

«10.2. El diseño y planeación de las plantaciones deberán promover la protección y conservación de los bosques naturales, y no incrementar las presiones sobre los bosques naturales. Deben tomarse en cuenta para el diseño de la plantación, los corredores de la fauna silvestre, la protección de los cauces de ríos y un mosaico de rodales de diferentes edades y períodos de rotación, además de estar de acuerdo con el tamaño de la operación. La escala y la planeación de los bloques de plantación debe estar de acuerdo con los patrones de los rodales encontrados dentro de su paisaje natural».

- No hay relación positiva entre las plantaciones industriales y la conservación de bosques. La madera producida en plantaciones industriales no sustituye, por regla general, a la madera extraída de rodales naturales: la primera se orienta fundamentalmente a la producción de celulosa y papel, en tanto que la segunda apunta a la industria maderera, que requiere madera de alta calidad.

- Hay un conjunto de relaciones negativas, por las que las plantaciones a gran escala en realidad promueven la deforestación. En primer lugar, la mayoría de las plantaciones en los trópicos sustituyen a bosques primarios o secundarios, que son talados y/o incendiados previo a la plantación. En segundo lugar, las personas desplazadas de sus tierras se ven forzadas a limpiar nuevas áreas de bosque para poder sobrevivir. En tercer lugar, no es inusual que el anuncio de que se van a establecer plantaciones en determinada área resulte en deforestación por parte de especuladores locales, de manera de poder luego vender la tierra a las empresas plantadoras. Además, la apertura de caminos hacia las plantaciones posibilita el ingreso de agentes de deforestación a nuevas áreas boscosas. Los incendios que se originan en las plantaciones pueden además extenderse a bosques cercanos. En consecuencia, las plantaciones a gran escala son usualmente tanto causa directa como indirecta de deforestación.

- Bajo presión, la mayoría de las empresas plantadoras son capaces de por lo menos establecer, como gesto simbólico, «corredores de la fauna silvestre, la protección de los cauces de ríos y un mosaico de rodales de diferentes edades y períodos de rotación». Sin embargo, esto no significa que los ecosistemas locales (bosques, praderas, humedales, etc) no vayan a sufrir impactos, debido a que usualmente no habrá una sino varias empresas ocupando un área

dada. Los corredores de fauna aislados en un mar de eucaliptos y pinos no serán de mucha significación para la conservación de la fauna. Lo mismo se aplica para la preservación de los cauces de los ríos. El impacto de estas plantaciones sobre el agua debe ser encarado a nivel de cuenca y no a nivel de plantación individual. El impacto de grandes masas de árboles de rápido crecimiento en un área dada, ya ha resultado en la desaparición de cursos de agua y en cambios profundos en el ciclo del agua. Finalmente, casi todas las empresas realizan sus plantaciones de una forma que más o menos podría interpretarse como «mosaicos» de rodales de distintas edades y períodos de rotación. Por sí sólo, sin embargo, esto no tiene ningún significado en lo referente a los impactos sobre el agua, suelos, flora y fauna. El tamaño de cada «teja» en esos llamados «mosaicos» será seguramente más grande que en un bosque, ya que es determinado por la necesidad comercial de poder realizar una cosecha todos los años y no siguiendo ningún criterio ecológico.

- ¿Qué significa decir que «la escala y la planeación de los bloques de plantación debe estar de acuerdo con los patrones de los rodales encontrados dentro de su paisaje natural»? ¿Qué sucede en los casos de Uruguay, Argentina y Sudáfrica, donde las plantaciones son establecidas en las praderas? Plantaciones de ese tipo ya han sido certificadas en esos tres países. ¿Puede esto ser interpretado como que los ecosistemas de pradera son de escasa importancia para el FSC? Y en todos los casos, ¿cómo puede una plantación de eucaliptos o de pinos «estar de acuerdo con los patrones de los rodales encontrados dentro de su paisaje natural»?

«10.3. Se prefiere la diversidad en la composición de las plantaciones, para mejorar la estabilidad económica, ecológica y social. Tal diversidad puede incluir el tamaño y la distribución espacial de las unidades de manejo dentro del paisaje, número y composición genética de las especies, clases de edad y estructuras y tipos de productos».

- Este criterio es tan vago que podría ser cumplido meramente plantando dos especies de eucalipto en una enorme plantación industrial en vez de solamente una, y plantando dos diferentes áreas un par de años aparte en vez de plantar todos los árboles de una vez. En realidad, la mayoría de las plantaciones industriales ya cumplen con la letra de este principio, simplemente porque el hacerlo asegura la estabilidad económica (mayor protección contra predadores específicos). Sin embargo, medidas insuficientes como esas no son capaces de incrementar de manera apreciable ni la estabilidad ecológica ni la social (aunque la protección contra pestes proporcionada por un cierto nivel de diversidad puede proteger los empleos de los trabajadores de la plantación, quienes podrían de otra manera perder sus empleos si la plantación fuera diezmada por insectos u hongos). Pero incluso esta llamamiento a un nivel mínimo de diversidad no es obligatorio, sino que sólo se plantea en términos de «se prefiere».

«10.4. La selección de especies para plantación debe basarse en las posibilidades generales del sitio y en su conveniencia para los objetivos de manejo. A fin de favorecer la conservación de la diversidad biológica, son preferidas las especies nativas sobre las exóticas en el establecimiento de plantaciones y para la restauración de ecosistemas degradados. Las especies exóticas, las cuales deberán ser usadas sólo cuando su desempeño sea mayor que el de las especies nativas, deberán ser cuidadosamente monitoreadas para detectar la mortalidad inusual, enfermedades o daños por insectos e impactos ecológicos adversos».

- Este criterio deja la puerta abierta de par en par a las plantaciones de rápido crecimiento de árboles exóticos, al decir que «debe basarse en las posibilidades generales del sitio y en su conveniencia para los objetivos de manejo» (la producción de grandes volúmenes de materia prima homogénea para la industria). Las especies nativas son nuevamente sólo «preferidas», no «requeridas», y si el «desempeño» es medido sólo por la producción de madera industrial, entonces todas las plantaciones industriales cumplirán con este criterio automáticamente. Es entonces necesario definir claramente lo que se entiende por «desempeño», porque el desempeño de la mayoría de las especies nativas en la producción de agua, suelos, alimentos, medicinas, forraje, etc es usualmente mucho mayor que el de las especies exóticas, que producen poco o nada en materia de esa clase de productos. La última frase («las especies exóticas... deberán ser cuidadosamente monitoreadas para detectar la mortalidad inusual, enfermedades o daños por insectos e impactos ecológicos adversos») es muy confusa. ¿Los impactos ecológicos adversos a los que se refiere son impactos sobre la plantación o los de la plantación sobre los ecosistemas aledaños y la producción local?

«10.5. De acuerdo a la escala de la plantación, una proporción del área total de manejo forestal (que será determinada en los estándares regionales) deberá ser manejada de tal forma que se restaure la cubierta forestal natural del sitio».

- Aquí nuevamente aparece la confusión entre bosque y plantación (el «área total de manejo forestal» incluye plantaciones industriales, que no son bosques). Además, ¿qué «proporción» de la plantación deberá ser retornada a «cubierta forestal natural»? ¿El uno por ciento? ¿El diez por ciento? ¿El cincuenta por ciento? ¿Quien va a determinar los estándares regionales? ¿Qué si el área jamás estuvo cubierta por bosques (ej: Uruguay, Argentina, Sudáfrica)? ¿Estarían en ese caso los dueños de las plantaciones eximidos de restaurar parte de sus operaciones a vegetación no boscosa?

«10.6. Deberán tomarse medidas para mantener o mejorar la estructura del suelo, fertilidad y actividad biológica. Las técnicas y tasa de cosecha, el mantenimiento y construcción de caminos y vías, así como la selección de especies no debe traer como resultado la degradación del suelo a largo plazo o tener impactos adversos en la calidad o cantidad del agua o su distribución».

- Si este criterio fuese aplicado consistentemente, entonces ninguna plantación a gran escala de árboles exóticos de rápido crecimiento podría ser certificada. Sin embargo, si fuese aplicado a la ligera, el criterio permitiría una gran cantidad de prácticas ambientalmente perjudiciales. ¿Quién decidirá si esta cláusula es cumplida o no? La mayoría de las grandes empresas plantadoras incluyen (al menos en el papel) medidas y técnicas de conservación ambiental. Sin embargo, todas sus actividades necesariamente tendrán impactos –casi siempre perjudiciales– sobre la estructura y fertilidad del suelo, sobre las actividades biológicas y sobre el agua. Desde nuestra perspectiva, ya hay pruebas más que suficientes de que, siendo otras cosas iguales, las especies, métodos de cosecha y técnicas de mantenimiento elegidas para las plantaciones de monocultivos industriales resultarán, como regla general, «en la degradación del suelo a largo plazo o tener impactos adversos en la calidad o cantidad del agua o su distribución». Por supuesto que también se pueden encontrar estudios teóricos que afirman que ese no es necesariamente el caso, así como estudios de las empresas afirmando que la fertilidad y la hidrología no han sido afectadas. ¿Quién va a decidir cuáles experiencias o grupos de estudios deben ser tomados seriamente en cuenta? El criterio del FSC se mantiene misteriosamente silencioso con respecto a este tema fundamental.

«10.7. Deberán tomarse medidas para minimizar los daños por plagas, enfermedades, fuego y sobre la introducción de plantas invasoras. Un manejo integrado de plagas, debe formar parte esencial del plan de manejo. Siempre que sea posible, los métodos de prevención y control biológico deberán ser usados en lugar de los pesticidas y fertilizantes químicos. La planeación de la plantación deberá esforzarse para no usar pesticidas y fertilizantes químicos, incluyendo su uso en los viveros. El uso de químicos está también cubierto por los criterios 6.6 y 6.7».

- Este criterio se apoya en expresiones vagas tales como «minimizar», «siempre que sea posible», «deberá esforzarse» que en la práctica pierden todo valor.

- Las que son referidas como «plagas» y «enfermedades» son frecuentemente aquellas especies nativas capaces de encontrar alimento dentro de una plantación (que constituye un desierto alimenticio para la mayoría de la fauna nativa). Su erradicación es en realidad un golpe a la biodiversidad local. El «manejo integrado de plagas» no constituye en si mismo una ventaja si implica nada más que la protección de las especies exóticas contra sus escasos predadores locales (o exóticos). Además, las empresas pueden fácilmente afirmar que están «esforzándose» para abandonar el uso de pesticidas químicos y fertilizantes, sin realmente hacer nada para disminuir su utilización de productos químicos. En acuerdo con la cláusula 10.6 (fertilidad del suelo), argumentarán que no existen sustitutos disponibles (dada la escala de sus plan-

taciones) para los fertilizantes químicos. Dirán que por razones económicas ya están intentando reemplazar los pesticidas con métodos silviculturales (raleos, podas, espaciamentos, etc.), pero que, lamentablemente, aún se ven obligados a depender en alto grado de pesticidas químicos. Es además revelador que el criterio 10.7 nada dice sobre «no usar» herbicidas, que son también químicos dañinos.

- En muchos países, los propios árboles plantados fácilmente se convierten en una «introducción de plantas invasoras». ¿Qué «medidas serán tomadas para prevenir y minimizar» dichas introducciones en Sudáfrica, por ejemplo, cuando es el eucalipto, la acacia y el pino introducidos los que se han convertido en «plantas invasoras» en el ecosistema nativo?

«10.8. De acuerdo a la escala y diversidad de la operación, el monitoreo de plantaciones deberá incluir una evaluación regular del potencial de los impactos ecológicos y sociales en el sitio y fuera de él, (es decir, los efectos de la regeneración natural sobre los recursos hídricos y la fertilidad del suelo y los impactos sobre el bienestar social y los beneficios sociales) además de los elementos tratados en el principio 8. No deberán plantarse especies a gran escala hasta que las pruebas locales y/o la experiencia hayan mostrado que éstas están ecológicamente bien adaptadas al sitio, que no son invasoras y que no tienen impactos ecológicos negativos significantes sobre otros ecosistemas. Se dará atención especial a los asuntos sociales de la adquisición de tierras para plantaciones, especialmente a la protección de los derechos de los pobladores de la localidad en cuanto a la tenencia, uso o acceso».

- Este es probablemente el criterio mejor redactado. Sin embargo, su presunción de que las «pruebas locales» –que son siempre a pequeña escala– pueden probar la adecuación de una plantación a gran escala de una especie a un ecosistema en general, es errónea. Las pequeñas pruebas locales pueden determinar, hasta cierto punto, probables tasas de crecimiento de una especie industrial en determinado sitio. También pueden hasta cierto punto determinar la probabilidad de que la especie pueda ser invasora (aunque si de hecho es invasora, la propia prueba resultará en una invasión). Pero la única prueba real de los efectos sociales y ambientales de las plantaciones a gran escala son las propias plantaciones a gran escala. El criterio debería entonces ser revisado para especificar que ninguna plantación será certificada en áreas donde haya suficiente evidencia de impactos negativos de importancia (sociales, ambientales o ambos) causados por las plantaciones a gran escala existentes.

- La última frase («Se dará atención especial a los asuntos sociales de la adquisición de tierras para plantaciones, especialmente a la protección de los derechos de los pobladores de la localidad en cuanto a la tenencia, uso o acceso») apunta en la dirección correcta, pero ¿qué quiere realmente decir «se dará atención especial»? ¿Quiere decir que ninguna certificación se lleva-

rá a cabo si algún derecho local ha sido violado? ¿Qué si los responsables de la violación fueron especuladores o el gobierno antes de que la empresa hubiera comprado o arrendado la tierra? Y nuevamente ¿quién decide si se ha prestado suficiente «atención» a los temas de derechos sobre la tierra? El criterio se mantiene extrañamente silencioso al respecto.

«10.9. Las plantaciones establecidas en áreas convertidas de bosques naturales después de noviembre de 1994, normalmente no calificarán para la certificación. La certificación podrá permitirse en circunstancias donde se presenten a los certificadores pruebas suficientes de que los administradores/propietarios no son responsables directa o indirectamente de dicha conversión».

- Esto plantea una serie de preguntas -¿por qué noviembre de 1994? ¿Por qué «normalmente» no calificará para la certificación? ¿Quién decide lo que es «normal»? ¿Quién juzga la evidencia presentada y en base a qué criterios? ¿Alcanzará con un papel firmado diciendo: «yo no estaba ahí cuando sucedió y yo no lo hice»? ¿Si una segunda compañía compra la plantación a la empresa responsable por cortar el bosque, podrá la segunda compañía ser certificada? Presumiblemente la segunda empresa no fue directamente o indirectamente responsable por la «conversión».

En resumen, el Principio 10 no parece ofrecer suficientes garantías para los consumidores finales de que la madera de plantaciones industriales es producida en una manera socialmente justa y ambientalmente positiva. Tampoco es el principio muy útil para las personas que están luchando contra las plantaciones a nivel local o nacional. El principal tema (los monocultivos a gran escala) no es tomado en cuenta. El problema no es la especie de árbol (eucaliptos, pinos, acacias, etc.), sino el modelo global de plantaciones, al que el FSC injustificadamente acepta sin discusión. Consideramos que este principio es claramente insuficiente y que necesita ser sustancialmente modificado antes de poder ser considerado apropiado a la realidad de los monocultivos industriales de árboles a gran escala. (Boletín Especial del WRM sobre el FSC, febrero de 2001).

Nota: Las citas utilizadas en este artículo son la traducción oficial del FSC del principio 10, que en algunos casos no reflejan correctamente la versión oficial en inglés. Por ejemplo, el texto en castellano dice «Si bien las plantaciones pueden proporcionar un arreglo de beneficios sociales y económicos...», en tanto que la versión inglesa dice «provide an array of social and economic benefits», que se traduciría como «una serie (o un conjunto) de beneficios...».

La OIMT delira acerca de las plantaciones

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) ha dedicado una edición entera de su Boletín (Vol. 11 No.3, 2001) a las plantaciones de árboles. Desgraciadamente, la OIMT ha elegido publicitar los impactos supuestamente positivos, al tiempo que básicamente ignora las numerosas lu-

chas contra las plantaciones originadas por el amplio espectro de impactos negativos sociales y ambientales que generan.

El párrafo que abre el primer artículo ya presenta el escenario: «Al decir de algunos, las plantaciones de árboles son la respuesta para muchos problemas mundiales. Reducen la deforestación, restauran tierras degradadas, combaten el cambio climático, mejoran las formas de sustento locales, generan importantes ganancias, crean empleo y respaldan las economías nacionales».

Se podría asumir que el segundo párrafo añadiría algunos signos de interrogación a esas afirmaciones, o proporcionaría alguna evidencia que las apoye. Pero lamentablemente, no es el caso. Por lo tanto resulta necesario introducir algunos elementos de realidad a ese escenario.

¿Las plantaciones reducen la deforestación? La historia de las plantaciones a gran escala en el trópico demuestra lo contrario. Las plantaciones son causa directa o indirecta de deforestación, o ambas. Todos sabemos (y también la OIMT) que los famosos incendios en Indonesia fueron iniciados por compañías de plantación de árboles y que se han talado áreas forestales de muchos países para dar lugar a las plantaciones. Todos sabemos (y también la OIMT), que muchos miles de personas en todo el trópico han sido desplazadas para dar lugar a plantaciones y que, en consecuencia, esas personas debieron talar otras áreas de bosque para poder sobrevivir.

¿Las plantaciones restauran tierras degradadas? Nunca se instalan plantaciones comerciales en tierras realmente degradadas, por la simple razón de que los árboles no crecen lo suficientemente rápido en ese tipo de suelos y que son más propensos a presentar problemas sanitarios. Las plantaciones de árboles exigen suelos de buena calidad, y la mecanización creciente también implica la necesidad de tierras que permitan el uso de maquinaria, el mismo tipo de tierras que se utiliza para la agricultura. Por esta razón, las plantaciones se realizan en suelos de buena calidad o en áreas que han sido «declaradas» como degradadas (lo que a menudo significa deforestadas o con bosques secundarios), pero que no son consideradas degradadas por las comunidades locales que las utilizan.

¿Las plantaciones combaten el cambio climático? El hecho de que las plantaciones hayan sido incluidas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio no se puede considerar como evidencia científica sobre ese supuesto papel. Por el contrario, existe cada vez más evidencia científica que sugiere que las plantaciones incluso pueden convertirse en fuentes de dióxido de carbono en vez de actuar como sumideros. Además, la deforestación vinculada directa e indirectamente a las plantaciones puede llegar a generar más dióxido de carbono que la cantidad supuestamente capturada por las plantaciones.

¿Las plantaciones mejoran las formas de sustento locales? Toda la evidencia disponible demuestra exactamente lo contrario, y la OIMT debería saber que

en la situación «normal», los pueblos locales terminan viviendo mucho peor que antes del establecimiento de las plantaciones. La oposición resultante es reprimida y los pobladores son asesinados, heridos, encarcelados y finalmente desalojados de sus tierras.

¿Las plantaciones generan importantes ganancias? Esta es la única afirmación absolutamente cierta en todo el párrafo, pero falta mencionar quiénes son los que obtienen esas grandes ganancias: las compañías plantadoras de árboles, la industria de la celulosa, los consultores, los bancos, los fabricantes de maquinaria. No los pobladores locales. Tampoco se menciona que la razón por la que se producen estas grandes ganancias es que en todos los casos las plantaciones están directa o indirectamente subsidiadas. En muchos casos las compañías plantadoras reciben subsidios directos, exoneraciones fiscales o préstamos blandos. En otros casos, los subsidios toman la forma de tierra barata, investigación gratuita, construcción de carreteras, infraestructura portuaria. Y en muchos casos, estas actividades son subsidiadas a través del uso de la policía o el ejército que protege los intereses empresariales contra la resistencia de los pobladores locales.

¿Las plantaciones crean empleo y apoyan las economías nacionales? Las plantaciones de árboles a gran escala son por cierto casi la peor opción posible para generar empleo en las regiones tropicales y la situación es cada vez peor debido al uso de maquinaria moderna que desplaza a los trabajadores, especialmente en las operaciones de cosecha. Para empeorar las cosas, se ha difundido mucho la subcontratación, y los subcontratistas compiten entre ellos rebajando las condiciones laborales (salarios bajos, inexistencia de cobertura de salud y de beneficios sociales, alimentación y vivienda de baja calidad, etc.). Desde el punto de vista de las economías nacionales, las plantaciones generan algunas divisas a través de las exportaciones, pero los precios internacionales, tanto de los troncos como de la celulosa, están sujetos a caídas importantes. Cabe esperar que esta tendencia se incremente a medida que mayor cantidad de plantaciones alcancen la etapa de cosecha.

En resumen, toda la edición del boletín de la OIMT es engañosa y no incorpora los diversos puntos de vista de la gran cantidad de personas que sufren debido a las plantaciones ni tampoco los numerosos estudios que registran los impactos sociales y ambientales de este tipo de plantaciones. Y todavía más engañoso es el párrafo que afirma: «Lo que es más cierto es que si los ambientalistas logran sus objetivos, un día toda la madera del mundo provendrá de plantaciones. 'Planten los millones de hectáreas de tierras degradadas y dejen en paz a los bosques', dicen ellos». Lo que quisiéramos saber es quiénes son «ellos», porque por cierto ése no es el punto de vista de los cientos de organizaciones con las que trabaja el WRM, que se oponen activamente a ese modelo de plantación. (Boletín del WRM N° 52, noviembre de 2001).

Las corporaciones se pintan de verde

La lógica de las ganancias de las corporaciones está determinando nuestro futuro y el de las generaciones futuras, dando forma al sistema internacional emergente dominado actualmente por instituciones que favorecen los intereses de las corporaciones. El resultado más evidente del actual proceso de globalización (la privatización y desregulación) ha permitido a las corporaciones usurpar las bases naturales de las que depende la vida.

A medida que se aproxima la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (CMDS) en Johannesburgo, se intensifican los conflictos entre el norte y el sur, entre la sociedad civil y la industria.

En Johannesburgo, las conversaciones se concentran en un Plan de instrumentación y acción destinado a desarrollar políticas nacionales y mundiales, y una Declaración Política, en la que se espera que los gobiernos renueven su compromiso con el Programa 21 y la búsqueda del «desarrollo sustentable»: éstos reciben el nombre de Resultados tipo I (obligatorios). Los Resultados tipo II (voluntarios) constituyen una categoría nueva y controvertida: proyectos de «asociaciones» (en inglés: *partnerships*), que apuntan a instrumentar el «desarrollo sustentable», con un fuerte énfasis en la participación del sector privado a través de asociaciones público-privadas.

El sesgo actual del Texto del Presidente de la CMDS hacia el suministro de servicios basado en el mercado, se ajusta como un guante a las campañas de las corporaciones en la preparación de la CMDS. Lord Holm de Cheltenham de la compañía minera transnacional Rio Tinto, por ejemplo, es vicepresidente de la BASD (Business Action for Sustainable Development - Acción Empresarial para el Desarrollo Sustentable), una campaña conjunta del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, una coalición de 150 grandes corporaciones, presidida actualmente por Phil Watts de Shell, creada para dar entrada a las posiciones de las empresas en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) y que ha contribuido a bloquear los intentos de regular las actividades del sector empresarial), y la Cámara Internacional del Comercio.

El BCSD para Johannesburgo incluye la promoción de seis proyectos sectoriales a cargo de los grupos de trabajo creados por corporaciones del WBCSD. El proyecto para el sector forestal es uno de los más controvertidos.

El proyecto «Industria Forestal Sustentable» del WBCSD comenzó en 1994 cuando un grupo de empresas liderado por Aracruz Celulose de Brasil y UPM-Kymmene de Finlandia iniciaron un estudio centrado en la producción de papel. El estudio fue encomendado a una organización externa (el International Institute for Environment and Development - IEED). El informe «Towards a Sustainable Paper Cycle» (*Hacia un ciclo sustentable del papel*) se publicó en junio 1996. El siguiente paso fue la creación del «Diálogo de los Bosques», que

incluyó a los propietarios de tierras, la industria forestal, algunas ONG y el Banco Mundial. La meta del diálogo, co-presidido por el WBCSD y el World Resources Institute (WRI), era desarrollar una visión de consenso sobre los bosques del mundo y una variedad de temas concretos, como el reconocimiento mutuo de los programas de certificación para las prácticas de la industria forestal.

La credibilidad de la autoproclamada búsqueda de una industria forestal sustentable está seriamente cuestionada por los vergonzosos antecedentes de las dos corporaciones que dieron inicio al proyecto. UPM-Kymmene es una empresa muy criticada por los grupos activistas en favor de los bosques por sus actividades dañinas en Indonesia, una actitud que ha continuado después de haber lanzado el proyecto de «Industria Forestal Sustentable». En 1997, el gigante finlandés de los productos de madera adquirió una planta papelera en Changsu, China, donde se procesa celulosa proveniente de PT Riau Anadalan Pulp and Paper (RAPP), la segunda productora de celulosa de Indonesia. La planta de RAPP en Riau, Sumatra, fue ampliada gracias a un paquete de inversión de US\$ 750 millones, con el apoyo de agencias de crédito a la exportación finlandesas y suecas. Esta planta produce 750.000 toneladas de celulosa por año a partir de la tala de bosques húmedos tropicales, y ha sustituido más de 50 especies tropicales de madera dura por plantaciones de acacias. Las comunidades locales sufrieron impactos graves; el río, esencial para su sustento, fue contaminado, los pobladores fueron expulsados de sus tierras sin recibir compensación alguna y fueron sometidos a represión con violencia física cuando protestaron. UPM-Kymmene se retiró de RAPP, pero todavía utiliza la celulosa de esta empresa para su producción de papel en China.

El otro fundador del proyecto forestal del WBCSD, Aracruz Celulose, se especializa en pulpa blanqueada de eucalipto. La empresa ha causado impactos sociales y ambientales sumamente destructivos en los Estados brasileños de Espírito Santo y Bahía. Aracruz ha inundado las regiones con extensas plantaciones de monocultivos de árboles y desalojó de sus tierras a pueblos indígenas como los Tupinikim y los Guarani. Ha transformado lo que solía ser el bosque tropical de la Mata Atlántica en un desierto verde de eucaliptos. Los impactos sobre las comunidades locales y el medio ambiente han llevado a la creación de un amplio movimiento de oposición, el Movimiento de Alerta contra el Desierto Verde, que reúne a grupos de pueblos indígenas, comunidades de origen africano, pescadores artesanales, agricultores y al movimiento de los campesinos sin tierra, además de ONG ambientalistas y sociales, entre otros.

Esas son las «credenciales verdes» de las dos corporaciones que lideran la Industria Forestal Sustentable. ¿Darán la WSSD más credenciales de «desarrollo sustentable» al sector de las corporaciones, que sólo puede ser descrito como social y ambientalmente consciente mediante el mecanismo de canalizar millones de dólares a empresas de relaciones públicas ansiosas de volverlo «verde»? (Boletín del WRM N° 61, agosto de 2002).

Los «bosques» de la FAO o como hacer trampas al solitario

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) se está haciendo trampa al solitario. Y pretende que nadie se da cuenta. En todo el mundo presenciamos la destrucción y degradación alarmante de bosques, y en ese proceso se violan los derechos de los pueblos indígenas, se afectan cuencas, se alteran regiones enteras, se desestabiliza el clima, desaparecen especies vegetales y animales.

Sin embargo la FAO, considerada por muchos organismos internacionales y por la profesión forestal como la autoridad máxima en materia de bosques, se encarga de manejar los datos de la realidad como forma de esconder la gravedad del proceso de destrucción. Es así que en su informe «Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2000» (FRA2000) introduce cambios a su vieja definición de bosque, pero no para sacarla de su ya obvia obsolescencia, sino para empeorarla. Logra así llegar a la conclusión de que, en comparación con las evaluaciones anteriores, se produjo un aumento de la cubierta forestal mundial. Nadie –ni ella misma– se lo cree, pero al menos lo intenta.

A esa conclusión llega a través de la manipulación de sus definiciones, que entre otras cosas dicen que «Los bosques comprenden los bosques naturales y las plantaciones. Se refiere a la tierra con una cubierta de copa (o su grado equivalente de espesura) de más del 10 por ciento del área y una superficie superior a 0,5 hectáreas (ha)». Esto ha sido mercedamente ridiculizado a nivel internacional, cuando se ha dicho que según esa definición, gran parte de la ciudad de Asunción (capital de Paraguay) debería entonces ser considerada «bosque».

De un plumazo, pues, con la aplicación de una definición de bosque, la FAO logra bajar los guarismos de deforestación y así ahora hay 400 millones de hectáreas de bosque más que las cifras mundiales recogidas en 1995. Según palabras de la propia FAO: «A pesar del alto grado de pérdida de los bosques naturales en el ámbito mundial, se siembran nuevas plantaciones forestales a un ritmo de 4,5 millones de hectáreas anuales» y lo que hay es una tasa neta significativamente inferior a la registrada en el informe anterior de FAO, correspondiente al período 1990-1995. Si bien no lo dice con estas palabras, de ello se infiere que, en la medida en que las plantaciones compensen la pérdida de bosques no habrá de qué preocuparse, ya que se habrá mantenido la «cobertura forestal». Se sigue entonces haciendo trampas al solitario. ¿O será esa su forma de cumplir la función que le cabe en su calidad de Coordinador Sectorial del Capítulo 11 del Programa 21 (de la Cumbre de la Tierra): «Lucha contra la deforestación»?

¿Qué hay detrás de ese juego? En primer lugar hay que señalar que las plantaciones incluidas son solamente los monocultivos industriales de árboles destinadas fundamentalmente a la producción de madera. Quedan fuera de la

definición las destinadas a otros fines, como por ejemplo los árboles frutales o las plantaciones de coco o los sistemas agroforestales. Y ahí tenemos un caso interesante que aclara mucho más las cosas: ¿por qué las mismas plantaciones de caucho, que antes no eran consideradas bosques por la FAO ahora sí lo son? La razón es muy sencilla: ahora las plantaciones de caucho han empezado a ser crecientemente utilizadas como proveedoras de madera y entonces adquieren –para la FAO– visibilidad como bosques. Pero en sí, siguen siendo las mismas. ¿Por qué no pueden ser también bosques las plantaciones de otros tipos de árboles como naranjos, bananeros, o cocoteros? La respuesta es clara: porque no se destinan a la producción de madera. Y esto muestra uno de los conceptos que está en la raíz de esta definición y todo lo que de ella se deriva: que el bosque no es visto por la FAO como lo que es –un ecosistema completo que incluye a comunidades humanas que de él dependen– sino exclusivamente como productor de madera.

A 10 años de la Cumbre de la Tierra, no sólo nada ha cambiado en este sentido a nivel de este organismo «experto», sino que ha empeorado. Ya no puede aducirse ignorancia, pues mucho se ha hablado –y ampliamente documentado– acerca de este tema. Aun cuando la FAO intenta abrir el paraguas cuando afirma que no tiene «la intención de sugerir que las plantaciones equivalen a los bosques naturales» y que «se prestó especial atención en mantener estadísticas separadas para los bosques naturales, y para los bosques plantados» –aunque sólo en los países del Sur– lo cierto es que para la FAO ambas categorías siguen siendo una sola: bosques.

Resulta ilustrativo reseñar aquí una discusión epistolar ocurrida recientemente entre un integrante de la FAO y un ambientalista sudafricano en torno al tema del área ocupada por bosques en ese país según las estadísticas de la FAO. El funcionario de la FAO finalizó sus argumentos diciendo que «Las plantaciones son áreas con árboles, y por lo tanto un (tipo de) bosque». A lo cual respondió el ambientalista: «Con el mismo argumento se podría afirmar que las langostas son un ‘tipo de pájaro’ o que los campos de maíz son un ‘tipo de pradera’». Allí terminó la discusión.

Igualar las plantaciones de árboles con los bosques implica ignorar las diversas funciones que éstos cumplen: servir de hogar a millones de personas, proveerlas de alimentos, medicamentos, fibras, leña, materiales de construcción, regular el régimen hidrológico local y el clima global, por citar sólo algunas. También implica ignorar las prolongadas luchas que se dan en numerosos países, tanto del Sur como del Norte (desde Australia a Chile, desde España y Portugal a Sudáfrica y Brasil, de Tailandia a la India) contra la invasión de las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles que con harta frecuencia se hacen en detrimento de los bosques. Esas luchas no se desatan contra los bosques, sino contra las plantaciones, precisamente porque estas

últimas no tienen nada en común con los bosques e impactan gravemente sobre las comunidades locales y su ambiente.

Es importante señalar que dentro de la orientación que se imprime al enfoque de los bosques, la promoción y legitimación de las plantaciones industriales de árboles calzan como anillo al dedo en el marco de la Revolución Verde, impulsada desde hace décadas por la misma FAO. Todo está unido, y las distintas ramificaciones y conexiones vinculan el proceso de deforestación para cubrir las necesidades industriales, con la invasión de los monocultivos de árboles para alimentar a la industria del papel, que satisface una demanda creada insustentable, y con quienes promueven estos procesos –grandes empresas transnacionales– a través de un ordenamiento internacional a su disposición vehiculado por la OMC, el FMI, y los diversos instrumentos internacionales.

En este proceso, los últimos avances en biotecnología se integran al paquete tecnológico que ha acompañado y acompaña la producción agroindustrial –herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc– expresándose primero en las técnicas ya generalizadas de selección y clonación de los genotipos más adecuados para fines industriales, para querer pasar luego a la utilización de la manipulación genética. En ello están ahora las grandes empresas, inyectando dinero a los centros de investigación académica e intentando llevar a campo sus peligrosos experimentos. La FAO nada dice al respecto, pero seguramente incluirá a las plantaciones de árboles transgénicos –si permitimos que ello suceda– como «bosques plantados» que ayudarán a mantener la «cobertura boscosa» del planeta.

Todo esto es grave. Y es más grave aún que provenga de un organismo cuyo mandato es el de ocuparse de cómo utilizar los bosques y los recursos conexos para mejorar las condiciones económicas, ambientales, sociales y culturales de la población, garantizando a la vez la conservación de los recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Y además, la FAO es parte activa del proceso de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, preparando la documentación oficial, parte de la cual es la evaluación de los progresos realizados, incluidas las insuficiencias y deficiencias.

Una vez más reiteramos la imperiosa necesidad de que la noción productivista y reduccionista de uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad como lo es el bosque, sea erradicada de una vez por todas. Para poder analizar con claridad qué es lo que está pasando con los bosques es fundamental que se establezca una diferenciación clara entre plantaciones y bosques. Una plantación puede ser considerada positiva o negativa y es bueno que se discutan las condiciones necesarias para que resulte positiva para la gente y el ambiente. Pero nunca puede ser considerada bosque. Es tiempo de que las definiciones de bosques de la FAO sean definitivamente archivadas –como parte de la historia del pensamiento forestal– y que se reconozca explícitamente que un

bosque es mucho más que un conjunto de árboles destinados a producir madera y que una plantación no es un bosque. Sería un enorme aporte a la próxima cumbre de Johannesburgo. (Boletín del WRM N° 61, agosto de 2002).

El UNFF debe reconocer que las plantaciones no son bosques

El Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF por su sigla en inglés) se reunirá en Ginebra del 26 de mayo al 6 de junio de 2003. Distintas ONGs y OPIs han expresado algunas de sus preocupaciones a la Secretaría del UNFF en abril de este año, concluyendo que «si estos puntos no se tratan a la brevedad, el UNFF perderá su credibilidad ante los grupos de la sociedad civil y los pueblos indígenas, y posteriormente ante los gobiernos».

El UNFF surgió del proceso de la Cumbre de la Tierra de 1992, donde los gobiernos reconocieron la crisis de los bosques y aceptaron la necesidad de iniciar un proceso que abordara el problema. Como resultado se creó el Panel Intergubernamental sobre Bosques (IPF por su sigla en inglés), que fue sucedido por el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF por su sigla en inglés) y finalmente por el actual UNFF.

La misión de todos estos procesos ha sido básicamente la misma: «elaborar políticas coherentes que promuevan el manejo, conservación y desarrollo sustentables de todo tipo de bosques». Sin embargo, el proceso en su conjunto poco tiene para mostrar en materia de logros en la instrumentación de su mandato, y los bosques siguen desapareciendo a una velocidad alarmante. A pesar de esta realidad, algunos gobiernos insisten en que la situación ha mejorado en muchos casos y que la «cobertura forestal» de hecho ha aumentado. Incluso tienen cifras para demostrarlo. Pero no es cierto. El aumento de la llamada «cobertura forestal» se debe a que los monocultivos de especies exóticas de árboles se incluyen dentro de la categoría «bosques», ocultando así las tasas de deforestación reales.

Increíblemente, el UNFF y sus predecesores (el IPF y el IFF) todavía insisten en considerar a las plantaciones como «bosques plantados», volviendo así imposible el apoyo que podrían brindar al proceso las numerosas comunidades afectadas por las plantaciones y las ONGs y OPIs que apoyan a estas comunidades.

Varios eventos ocurridos durante los primeros meses de 2003 muestran claramente este divorcio.

La oposición de la sociedad civil a las plantaciones se expresó en varios eventos, comenzando en enero, cuando varias ONGs latinoamericanas que asistían al Foro Social Mundial en Brasil se reunieron para compartir su preocupación sobre la promoción de las plantaciones de árboles en gran escala en esa región. Como resultado se creó la Red Latinoamericana contra los monocultivos de árboles, para coordinar acciones contra las plantaciones.

En abril, un seminario-taller organizado por el gobierno de Ecuador para discutir un plan nacional de forestación y reforestación culminó con una fuerte declaración de los representantes de las comunidades indígenas y campesinas, quienes denunciaron que «las plantaciones forestales comerciales a gran escala, especialmente en monocultivos, no son una alternativa de desarrollo, que por el contrario provocan problemas»... «porque las plantaciones no son bosques» (ver artículo sobre Ecuador en este libro).

A comienzos de mayo, varias ONGs de Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam organizaron un «Taller regional sobre plantaciones comerciales de árboles en la región del Mekong», con el objetivo de organizar la oposición regional a la diseminación de este tipo de plantaciones, que ya han demostrado tener un impacto negativo sobre los pobladores y el medio ambiente, en especial en Tailandia, país que cuenta con una larga historia al respecto.

A mediados de mayo, distintas organizaciones sociales y ambientales brasileñas se reunieron en el Estado de Minas Gerais para fortalecer la Red contra el Desierto Verde (expresión con que se conoce a las plantaciones de eucalipto) incorporando organizaciones de ese Estado a la red ya organizada en los Estados vecinos de Espírito Santo, Bahía y Río de Janeiro.

Mientras los pobladores locales afectados por las plantaciones organizan formas de oposición para combatirlos –la red sudafricana Timberwatch Coalition es otro ejemplo en ese sentido–, el UNFF organiza foros para promoverlos. En marzo, varios gobiernos y organizaciones internacionales organizaron una reunión Intersesional del UNFF denominada «Reunión de expertos sobre el papel de los bosques plantados en el manejo sustentable de bosques», que tuvo lugar en Nueva Zelanda. La mayoría de los países organizadores tienen extensas plantaciones comerciales (por ejemplo Australia, Argentina, Canadá, Chile, Malasia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) y el motivo obvio de la reunión fue continuar proporcionando apoyo (por parte del UNFF) a la promoción de las plantaciones.

Resulta triste constatar la brecha cada vez mayor que existe entre el UNFF y las organizaciones locales en este tema, pero la solución es –en teoría– bastante simple. El UNFF debe centrar su actividad en la protección de los bosques, como establece su mandato, y distanciarse de las plantaciones de monocultivos de árboles, que no están dentro de su misión. En vez de consultar «expertos», los funcionarios del UNFF y los delegados gubernamentales deberían consultar a las comunidades de Chile, Brasil, Colombia, Sudáfrica, Indonesia, Malasia, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, España o Portugal, por mencionar sólo algunas, si consideran que las plantaciones son bosques. La respuesta sería muy clara: ¡Por supuesto que no!

Si el proceso del UNFF pretende tener un impacto positivo sobre la conservación de los bosques –que creemos es el objetivo de muchos de sus funcionarios

y delegados— debe reconocer que las plantaciones no son bosques. Esto permitiría al Foro centrar sus actividades en la verdadera razón de su existencia: «crear políticas coherentes que promuevan la gestión, conservación y desarrollo sustentables de todo tipo de bosques». (Boletín del WRM N° 70, mayo de 2003).

IMPACTOS Y LUCHAS LOCALES

No es casual que la mayor parte de este libro esté dedicada a resaltar las luchas locales contra las plantaciones. En primer lugar, porque gran parte del conocimiento sobre los impactos de las plantaciones se origina precisamente en las poblaciones afectadas por las mismas. Son ellas las que son desplazadas por las plantaciones, las que sufren violaciones a sus derechos humanos, las que se ven privadas de sus medios de sustento, las que experimentan la falta de agua, la desaparición de la fauna y flora locales.

En segundo lugar, porque es importante destacar que los monocultivos de árboles a gran escala generan impactos similares en ambientes socioeconómicos y ecológicos totalmente distintos, desde ecosistemas de pradera escasamente poblados (como Uruguay), hasta ambientes de bosques más densamente poblados como Tailandia.

Finalmente, porque destacar las luchas locales implica de alguna manera apoyarlas en sus luchas contra un modelo forestal que ya ha demostrado ser insustentable y por ende colaborar a su sustitución por modelos de uso de la naturaleza humanamente más justos y ambientalmente más sustentables.

AFRICA

Camerún: Las plantaciones forestales, falsa alternativa para deforestación

Durante la década de 1950, cuando el país se encontraba todavía bajo el dominio francés, en Camerún se llevaron a cabo una serie de programas de plantaciones forestales, aduciendo la finalidad de contrarrestar el proceso de destrucción que afectaba a sus ricas selvas. Como consecuencia se instalaron unas 40.000 hectáreas de plantaciones en un lapso de 50 años, 25.000 de las cuales en zonas que habían estado ocupadas por una densa selva y las restantes 15.000 hectáreas en zona de sabana. Para la reforestación de las zonas selváticas se utilizaron especies indígenas, como dibetou, okumé, ilomba e iroko, mientras que en la sabana se usaron nativas y exóticas, entre las cuales eucalipto y acacia. Si bien la intención de las autoridades era restaurar «el bosque natural» de hecho tales plantaciones no constituyeron una solución, sino que provocaron impactos negativos.

La principal razón de este fracaso es que una plantación de una o dos especies —aunque sean nativas— no es un bosque, ya que carece de la biodiversi-

dad y complejidad que éste tiene. El bosque es producto de un largo proceso de coevolución entre sus distintos componentes –incluidos los seres humanos– y de las condiciones ecológicas del sitio. La recuperación de la selva húmeda en la zona tropical resulta ser una tarea muy difícil y con resultados inciertos, dado que las condiciones originales no pueden ser recreadas artificialmente en forma súbita.

La forestación con eucalipto no ha hecho sino empeorar las cosas. Los eucaliptos plantados por la Oficina Nacional para la Regeneración Forestal –¡cómo si se pudiera «regenerar» los bosques plantando eucalipto!– en los últimos dos años, provocaron acidificación del suelo junto a una drástica caída de la población de peces en los ríos próximos a las plantaciones. Asimismo ha aumentado el riesgo de incendios en la sabana, que son considerados responsables de la creciente ocurrencia de graves inundaciones.

Dado que en Camerún el Estado se declara propietario de todos los árboles, las plantaciones han generado conflictos por la tenencia de la tierra entre el gobierno y las comunidades locales. Además han causado otros problemas, como en el caso de la región norteña del Sahel, donde los campesinos se quejan de que los pájaros y otros animales que se refugian en las plantaciones han devastado sus cosechas, provocándoles hambre y miseria. Se teme que si la Convención sobre Cambio Climático acepta a las plantaciones como sumideros de carbono estos proyectos se verán estimulados y se implementarán otros por el estilo, aumentando de esta manera el nivel de impactos negativos sobre la gente y el ambiente.

Para frenar el proceso de deforestación y degradación de los bosques en Camerún deberían abordarse y superarse las verdaderas causas del problema, entre las cuales las actividades depredatorias de las empresas madereras y las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que promueven la explotación de la madera para aumentar los ingresos del país por concepto de exportaciones. Las plantaciones no son la solución –ya que no son bosques– y no harán sino agravar el problema. (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Camerún: Palma aceitera, poblaciones locales y medio ambiente

Las plantaciones de palma aceitera en Camerún cubren más de 80.000 hectáreas, que se dividen en tres sectores diferentes: 1) Plantaciones a gran escala, con aproximadamente 58.000 hectáreas; 2) Plantaciones de aldeas, que abarcan 12.000 hectáreas y 3) Plantaciones «informales», con cerca de 10.000 hectáreas.

Las plantaciones de aldeas fueron promovidas por el propio Estado para abastecer a las grandes compañías plantadoras y procesadoras de propiedad estatal. Se trata de plantaciones que están obligadas por contrato a entregar, a precios de mercado, la totalidad de su producción a las plantas procesadoras

de las agroindustrias, actualmente en manos privadas: SOCAPALM, CAMDEV o PAMOL. El «precio de mercado» es obviamente fijado por estas empresas, que a nivel local constituyen monopolios absolutos. Esta situación ha llevado recientemente a una creciente brecha entre los pequeños productores y las grandes plantaciones. Han aumentado las plantaciones «informales» y la entrega de frutos de palma a las grandes plantas procesadoras ha disminuido progresivamente. Los pobladores locales prefieren procesar ellos mismos sus cosechas o venderlas a pequeñas unidades de procesamiento, de las que habitualmente obtienen un precio mayor y pagos en efectivo. Hasta principios de los noventa, el precio establecido por las compañías se consideraba demasiado bajo, lo que llevó a desviar la producción en pequeña escala hacia otros compradores. Cuando resultó evidente que la producción propia de las agroindustrias era insuficiente para cubrir sus necesidades de procesamiento, éstas se vieron forzadas a aumentar el precio ofrecido a los plantadores externos (de 26-31 francos CFA a 40-50 francos CFA), para asegurar el suministro de materia prima de las plantas procesadoras.

Resulta obvio que la relación entre las plantaciones de las aldeas y las agroindustrias no ha tenido éxito y que se basa más en la competencia que en la complementariedad. El simple hecho de que los plantadores locales se rehúsen incluso a comunicar la superficie exacta de sus plantaciones a las compañías, explica por sí mismo el tipo de relación que mantienen.

Además es importante destacar que el establecimiento de plantaciones a gran escala a menudo ha estado precedido de la expropiación de tierras de los poblados vecinos, sin compensación adecuada. Según las leyes de Camerún, los campesinos no poseen la tierra por derecho tradicional, y de esa manera la expropiación no exige compensación por parte del Estado. Esta fórmula de propiedad de la tierra ya fue utilizada en tiempos de la colonización para expropiar la tierra de los campesinos y después transferirla, sin costo, a los nuevos colonos, que de esa forma podían plantar sus cultivos. Después de la independencia nacional, esa práctica se mantuvo vigente, pero ahora en beneficio de las elites locales.

El establecimiento de grandes plantaciones privadas de palma (generalmente ubicadas en las cercanías de los poblados) exige grandes extensiones de tierras, y se han informado varios casos de conflictos con comunidades locales habitantes del área debido a las modalidades y condiciones de adquisición de tierras por parte de forasteros, quienes, con el apoyo del gobierno, obtienen tierras sobre las cuales no tenían ningún derecho tradicional previo. Sin embargo, el simple hecho de cultivar una planta perenne, como la palma aceitera, les otorga derechos tradicionales permanentes, garantizando sus derechos en perjuicio de la población local.

Por otra parte, las plantaciones de palma aceitera han producido importantes impactos ambientales, entre los que se destacan la deforestación, la pérdida de

biodiversidad y la contaminación por el uso de productos agroquímicos. Todos estos impactos tienen como consecuencia la pérdida de las formas de sustento de las poblaciones locales y el deterioro del medio ambiente en que viven. Es importante destacar que no está permitido cultivar alimentos dentro de las plantaciones, incluso durante el período inicial de las mismas, cuando la población local podría hacer cultivos intercalados entre las filas de palmas. Es necesario investigar los impactos socioeconómicos y ambientales de estas plantaciones sobre los pueblos y aldeas circundantes en torno a los siguientes temas:

- Disponibilidad de alimentos básicos (la comida es más cara en Limbe); alimentos disponibles en el bosque (los productos no madereros del bosque son caros y deben ser importados de otras partes del país); disponibilidad de materiales para artesanías y oportunidades de ingreso alternativas (los ingresos de los trabajadores de las plantaciones son muy bajos).
- Impactos asociados a la deforestación, tales como las inundaciones que ahora son comunes en la zona (los casos de Limbe y Ekondo-Titi, ocurridos respectivamente en 2001 y 1998).
- Impactos de la contaminación con agroquímicos, dado que existen denuncias de que las empresas están empleando productos químicos prohibidos en los países industrializados en aras de bajar los costos y como resultado de la falta de control por parte del Estado.
- Impactos sobre la salud humana, dado que las plantaciones están localizadas cerca de áreas pobladas y las aspersiones aéreas que se realizan en plantaciones asociadas de banana caen sobre los poblados.
- Impactos asociados al ataque de plagas y a enfermedades infecciosas vinculadas a las plantaciones.
- El encerramiento de los poblados y la inexistencia de oportunidades para su expansión, lo que da lugar al fenómeno del poblamiento de las áreas montañosas, con los consiguientes conflictos en la cuenca.
- Impactos sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo como consecuencia de la descarga de efluentes de la producción de aceite de palma, lo que inutiliza la tierra para toda actividad agrícola. Pese a la existencia de posibilidades para convertir los efluentes en productos útiles, los mismos continúan siendo vertidos al ambiente sin tratamiento previo.

Una vez que se haya llevado a cabo una evaluación de impacto de todo lo anterior será posible proponer alternativas a estos monocultivos de palma bajo un enfoque ambientalmente benigno en torno al uso del suelo en la subregión. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Congo, República del: Plantaciones de eucalipto de Shell ahora brindan muchos menos puestos de trabajo

La compañía Shell –además de sus conocidas operaciones petroleras– también está involucrada en una actividad menos difundida: la plantación de árboles. La compañía ha plantado, por si sola o en asociación con empresas o Estados, casi 150.000 hectáreas principalmente de árboles de eucalipto y pino en Argentina (10.000), Chile (36.000), República del Congo (42.000), Nueva Zelanda (23.000), Paraguay (8.000) y Uruguay (28.000).

En la República del Congo, la compañía Shell posee el 90% de las acciones de la compañía *Eucalyptus du Congo* (ECO-SA), mientras que el gobierno posee el 10% restante. Sus plantaciones están establecidas en tierras de propiedad del Estado cerca de la ciudad costera y puerto de Pointe Noire. Las plantaciones se componen de clones de híbridos de eucalipto (*Eucalyptus alba* x *Eucalyptus urophylla* y *Eucalyptus tereticornis* x *Eucalyptus grandis*). El mercado principal para estas plantaciones clonales es la industria de la celulosa, y cada año se exportan casi medio millón de metros cúbicos de troncos sin procesar a Noruega, Francia, Italia, España, Portugal y Marruecos para la producción de celulosa y papel.

Como es habitual en este tipo de plantaciones, la creación de empleos por la compañía es escasa: apenas 400 puestos de trabajo. Eso significa que, contando sólo el área plantada y no la totalidad del área cubierta por la plantación, se requieren 105 hectáreas para crear un sólo puesto de trabajo. Pero actualmente las cosas han empeorado todavía más. El mes pasado, la administración de la compañía decidió detener el corte y venta de madera de eucalipto debido a una baja del precio internacional, que se debe, según se alega, a la superproducción de este tipo de madera. Como también es habitual, el costo será pagado por los trabajadores. Según el gerente de la compañía, el Sr. Perrin, la cantidad de trabajadores se reducirá «hasta que el precio de la madera vuelva a alcanzar un nivel correcto». En otras palabras, «el mercado» decidirá la suerte de los trabajadores.

Este es uno de los numerosos ejemplos de lo inadecuado del modelo de plantación de monocultivos a gran escala como medio para la mejora de las formas de subsistencia de las comunidades locales. En este caso, la compañía, con el apoyo y la participación del gobierno, se apropió de más de 50.000 hectáreas de tierra para una actividad que produce muy pocos puestos de trabajo y que genera ingresos de exportación muy bajos porque exporta troncos sin procesar. Cuando el precio internacional es alto, la compañía genera ganancias que nunca llegan hasta los trabajadores y las comunidades locales. Cuando el precio es bajo, los trabajadores son despedidos.

Esta situación muestra otro ejemplo más de la estrategia de la industria de la celulosa y el papel para asegurar el suministro barato y constante de materia

prima: promover la plantación de eucalipto a gran escala en países que pueden producir grandes cantidades de madera barata. Esto implica que los árboles deben crecer rápido, que la mano de obra y la tierra deben ser baratas y que los controles ambientales deben ser poco exigentes. Indudablemente, estos requisitos de la industria de la pulpa y el papel se cumplen en la República de Congo. Pero también se cumplen en muchos otros países, a los que se alienta a través de distintos mecanismos a dedicar grandes zonas de su territorio a la plantación de árboles. El resultado es una competencia mundial por vender el mismo producto, lo que hace que el precio baje, para beneficio de los actores principales de la industria y el comercio mundiales. (Boletín del WRM N° 46, mayo de 2001).

Costa de Marfil: Creciente conflicto entre pequeños propietarios y plantaciones industriales de palma aceitera

En marzo de 2001, los plantadores de la unidad de plantación de palma aceitera agroindustrial de Ehanía, en Costa de Marfil comenzaron una «acción de huelga por tiempo indeterminado» como presión para obtener un aumento en el precio del aceite de palma. La huelga paralizó las actividades de tres fábricas dedicadas a la recolección y procesamiento del aceite de palma. Los plantadores de Ehanía, agrupados en una cooperativa agrícola llamada Palm-Ehanía, se manifestaban contra la caída del precio de compra de su producción, que desde enero de 2001 cayó de 23 a 19,07 francos CFA (1 dólar equivale a 700 francos CFA). El vicepresidente de la cooperativa, Ahissi Brou, dijo que «la caída del precio puede forzar a los productores a abandonar las plantaciones». Afirmó que estaban determinados a proseguir su huelga hasta que se cumplieran sus demandas, argumentando que resulta «inconcebible» que el precio de la producción de palma baje mientras el precio de los productos terminados como jabón o aceite de mesa aumenta constantemente.

Esta no es la primera huelga de este tipo y ha habido acciones similares realizadas por cultivadores externos desde la privatización de 1997 de la compañía Palmindustrie, antiguamente de propiedad del estado. Los activos de esa compañía fueron adquiridos por tres grandes compañías privadas: 1) PALMCI (Blohorn-Unilever y SIFCA-Cosmivoire), que adquirió dos tercios de la capacidad de producción de Palmindustrie, incluyendo 9 plantas procesadoras y 35.000 hectáreas de plantaciones industriales; 2) SIPEF-CI, que compró dos plantas procesadoras y 12.700 hectáreas de plantaciones industriales y 3) PALMAFRIQUE, con tres plantas procesadoras y 7.500 hectáreas de plantaciones.

Las plantaciones de esas tres compañías constituyen sin embargo sólo un tercio del área de plantación de Costa de Marfil, donde los pequeños propietarios tienen un total de 135.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera. Esta situación es el resultado del Plan Palmier lanzado en 1963, que trazó un

programa para el establecimiento de plantaciones núcleo propiedad del Estado (*plantations agroindustrielles*) y plantaciones en tierras pertenecientes a pequeños propietarios (*plantations villageoises*). Los fondos proporcionados por el Banco Mundial y el Fondo de Desarrollo Europeo jugaron un papel importante para permitir la instrumentación de este plan. El Estado liberó reservas forestales para las nuevas plantaciones y creó un sistema de tenencia de la tierra según el cual cualquier persona que trabajara la tierra podría tener derecho a la propiedad de la misma. Antes de 1984 las plantaciones operadas por la compañía paraestatal Palmindustrie, constituían el 60,3% del área dedicada a la producción de palma aceitera y 39,7% estaba integrado por pequeños propietarios contratados. La situación actual ha cambiado drásticamente, teniendo las compañías el 30% y los pequeños propietarios el 70% del área de plantaciones.

Aunque ya existen algunos ejemplos de pequeñas fábricas de procesamiento que son operadas por cooperativas, las grandes compañías son los principales compradores de la producción de los cultivadores externos, lo cual, unido a la caída internacional de los precios del aceite de palma, está dando lugar a conflictos como el de la huelga en Ehania. En este caso, la compañía involucrada es PALMCI, cuyos activos en la zona incluyen 11.600 hectáreas de plantaciones y tres plantas procesadoras de aceite, que también procesan la cosecha de alrededor de 22.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios. Esta cuenta con otros activos en el país, entre los que se incluyen:

- en Toumanguié: una plantación de 2.900 hectáreas y una planta procesadora, con un total de plantaciones de pequeños propietarios de 15.000 hectáreas;
- en Irobo: una plantación de 5.300 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 12.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios;
- en Boubo: una plantación de 4.400 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 10.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios;
- en Blidouba: una plantación de 3.000 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 10.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios;
- en Iboke: una plantación de 5.700 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 10.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios;
- en Néka: una plantación de 2.700 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 12.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios.

En este contexto, la huelga de Ehania se puede considerar un síntoma de las aspiraciones de aquellos que ahora constituyen la parte mayoritaria de las plantaciones con relación a las tres compañías que poseen la infraestructura de procesamiento y que establecen el precio para la materia prima. La privatización

generó las condiciones para esta confrontación y el gobierno no es siquiera un observador neutral, ya que en este caso es accionista de PALMCI. Es difícil predecir el futuro, pero la hipótesis más plausible parece ser que, a menos que los precios del aceite de palma aumenten en el mercado internacional, la conflictividad seguirá aumentando. Y dada la difundida promoción de las plantaciones de palma aceitera en las regiones tropicales, es poco probable que los precios del aceite de palma aumenten. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Ghana: Los documentados impactos de los monocultivos de palma aceitera

En más de 125.000 hectáreas de tierra de Ghana se cultiva palma aceitera, principalmente bajo el modelo de plantación núcleo, que consiste en una gran plantación rodeada por plantaciones de menor tamaño establecidas en tierras de campesinos locales.

Las plantaciones a gran escala fueron instrumentadas por el Estado a expensas de las tierras de las poblaciones locales, a los que se pagó poca o ninguna compensación por los viviendas, campos y fincas que perdieron, junto con distintos derechos de uso o propiedad de la tierra. Como era de esperarse, esto produjo resistencia social, como en el caso de la dramática negativa de los emigrantes campesinos Ningo de Atobriso y Okaikrom a permitir la entrada a los funcionarios del gobierno y de la Ghana Oil Palm Development Company a las tierras que habían adquirido. La resistencia de los campesinos también incluyó el robo de frutos de palma de las plantaciones y actos de sabotaje, lo que determinó el reforzamiento de la seguridad a un costo elevado para las empresas plantadoras.

Pero según el investigador ghanés Edwin A. Gyasi, «quizás el efecto negativo más grave ha sido la rápida transformación del ecosistema boscoso y su economía tradicional basada en la ecología, diversificada y resistente, en un sistema de monocultivo artificial vulnerable. La inestabilidad, los riesgos y las incertidumbres son rasgos inherentes del medio ambiente natural, que los campesinos reconocen. Tradicionalmente los campesinos intentan reducir a niveles mínimos estos riesgos ambientales, combatir la erosión del suelo, optimizar la utilización de los distintos nutrientes del suelo y mejorar la seguridad alimentaria combinando cultivos de variable grado de sensibilidad ambiental y valores nutritivos diferentes, y mediante otras formas de diversificación agrícola y minimización del riesgo. La agricultura indígena diversificada, resistente, modelada en el ecosistema forestal y basada en principios de agricultura ecológica, nacida del conocimiento íntimo de los campesinos del medio ambiente natural, está siendo reemplazada por el riesgoso sistema de monocultivo, con consecuencias devastadoras para el ecosistema boscoso». Entre los impactos principales, se registraron los siguientes:

- escasez de alimentos básicos locales.
- la vulnerabilidad de los monocultivos de palma a plagas de insectos y enfermedades, que han experimentado invasiones de insectos inusualmente masivas y destructivas.
- la dificultad para comercializar el fruto y el aceite de la palma, asociada a carencias para la comercialización de una producción incrementada.
- la deforestación y posterior aumento de costos y escasez de productos forestales como carne de animales nativos, plantas medicinales y madera, un importante material de construcción y fuente básica de combustible.
- el costo alto, el suministro errático y el efecto contaminante de las sustancias agroquímicas utilizadas para aumentar el rendimiento de la palma y para controlar plagas y malezas, especialmente en las plantaciones grandes.
- la contaminación ambiental producida por los desechos del fruto de la palma y los efluentes del proceso de industrialización.

En suma, aunque las plantaciones de palma aceitera a gran escala puedan parecer una opción atractiva debido a su capacidad de acelerar la producción agrícola y el crecimiento agroindustrial, son básicamente vulnerables y tienen efectos adversos sobre los derechos tradicionales de uso y propiedad de la tierra, sobre la seguridad alimentaria y del combustible y sobre el medio ambiente natural. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Ghana: Los «promisorios» planes de reforestación terminan en desempleo

Agobiado por una deuda externa en ascenso y presionado por la globalización y la liberalización del comercio, Ghana, como muchos países del occidente de África, ha visto seriamente limitada su capacidad de financiar el gasto público nacional. Además, la mayoría de las exportaciones de los países africanos sufre la baja de precios que determina escasos ingresos por exportaciones y que contribuyen a la generación de grandes déficits presupuestales. En un intento desesperado por cumplir con el pago de la deuda externa y enfrentar su déficit, muchos países de África, incluido Ghana, han apostado a la extracción agresiva de recursos primarios, y no sólo saquean los recursos del bosque sino que también omiten destinar recursos presupuestales para prácticas de manejo forestal sustentable.

La madera ha sido uno de los principales productos de exportación, con la consiguiente degradación de los bosques del país. Casi la mitad de Ghana estaba cubierta de bosques, que albergaban 680 especies de árboles y varias especies de caoba. La mayoría de esos árboles fueron talados. A principios de la década de los 90 quedaba apenas un tercio de los bosques del país en pie.

También los territorios indígenas fueron convertidos masivamente en áreas de maderero y minería, así como en campos de cultivos agrícolas destinados a

satisfacer necesidades externas, principalmente a través de plantaciones de monocultivo extensivas. En el afán de captar la inversión extranjera, se ha negado a los pobladores locales su derecho a la tierra.

Después de que el país perdiera cerca del 70% de los bosques, se impusieron severas restricciones al maderero y se comenzó a aplicar un programa de forestación (más precisamente reforestación). Pero estos esfuerzos se desarrollaron siguiendo el mismo modelo de oferta de productos primarios para sostener formas de vida no sustentables en otros lugares, y como monocultivos extensivos. En este caso, árboles con valor comercial destinados generalmente a alimentar plantas de celulosa. Sorprendentemente, esas plantaciones son consideradas bosques en ciertos círculos.

Las plantaciones de árboles se caracterizan por la provisión de incentivos perversos por parte de los gobiernos. Ghana, por ejemplo, ha promovido la creación de un fondo para el establecimiento de plantaciones de árboles por parte de individuos y empresas, haciendo llamamientos a los pequeños propietarios de tierras para que las mismas sean destinadas a ese objetivo. La FAO ha apoyado estos incentivos a las plantaciones. El programa de forestación y reforestación –que abarca una variedad reducida de especies y que está siendo llevado a cabo por el Departamento de Manejo de Bosques de Ghana y algunos aserraderos– ha sido promovido como un importante «proyecto de desarrollo» que proporcionará empleo a una población empobrecida.

Sin embargo, la publicación ghanesa *Chronicle* reveló recientemente que la mayoría de las 150 personas contratadas por Asuowam Complex (AC) Ltd, una compañía maderera de Wamfie en la región de Brong Ahafo, para un proyecto de reforestación en la reserva de bosques degradados de Pamu-Brekum han sido despedidas. Desde el inicio del proyecto en 1998, AC Ltd ha podido plantar árboles en una superficie de 400 hectáreas. Del total de 150 personas contratadas por AC Ltd como fuerza de trabajo para el proyecto, sólo una estructura básica de 15 empleados quedó vigilando el lugar. La decisión de la gerencia de AC Ltd de despedir a 135 personas se basó en que la compañía se quedó sin fondos como resultado de la falta de madera rolliza para sus operaciones. La compañía primero despidió a los empleados del sector maderero y más tarde lo hizo con quienes trabajaban en el proyecto de reforestación.

Lo que queda es finalmente un desierto de árboles y ninguna fuente de trabajo para la gente. Un saldo desfavorable, por cierto, sobre el cual hay mucho para meditar. (Boletín del WRM N° 65, diciembre de 2002).

Kenia: Pan African Paper Mills provoca contaminación y deforestación

El modelo de plantaciones a gran escala para celulosa que viene siendo implementado en el Sur no sólo provoca impactos sociales y ambientales negativos sobre los bosques, sino que genera efectos adicionales derivados de la conta-

minación por el proceso industrial de producción de celulosa, así como deforestación para proveer de materia prima a las fábricas.

Tal es también el caso de Pan African Paper Mills (Panpaper), cuya planta está localizada en el poblado de Webuye, en Western Province, con una población de 60.000 habitantes. La fábrica se encuentra en un área ambientalmente sensible sobre la costa del río Nzoia, que desemboca en el Lago Victoria. Hay denuncias de que la fábrica emite humo y efluentes líquidos, contaminando de ese modo el aire, el agua y los ríos cercanos. El impacto ambiental provocado por la planta es tan fuerte, que las estructuras de hierro en Webuye han quedado oxidadas, y la gente que pasa por allí, usando la ruta Nairobi-Kampala, tiene que cerrar la ventanilla de sus vehículos y contener la respiración hasta una distancia prudencial del poblado.

Los problemas provocados por Panpaper no son nuevos. Según un informe publicado en 1994 la contaminación generada por esta fábrica es considerada responsable de una serie de problemas sanitarios: más del 60% de los niños nacidos después de 1974 —cuando la planta comenzó a operar— han tenido problemas respiratorios en las edades de entre uno a cinco años. Asimismo se ha verificado la existencia de otros problemas de salud, tales como tos crónica, gripe, alteraciones nerviosas, diarrea, tifus y migraña, que el personal de salud ha atribuido mayormente a la contaminación del aire y del agua producida por dicha planta industrial.

Por otra parte, la necesidad de materia prima que tiene la fábrica se ha convertido en un incentivo para la destrucción de los bosques remanentes en la región —en especial los de Kakamega y Mt. Kenia— que vienen siendo devastados rápidamente. Pan African Paper Mills es uno de los principales compradores de la madera que se extrae de allí. Asimismo, la empresa es una de las tres empresas exentas de la moratoria parcial de corta vigente en el país. Según círculos oficiales, tal medida fue tomada ya que «el gobierno posee acciones de la empresa y ésta es importante para la economía». El historial de Panpaper en relación con la conservación de los bosques es terrible. Desde 1972 —año en que la planta fue construida— hasta hoy, la cobertura boscosa de la zona, así como la de Turbo y Mosorit —ubicados a 200 kilómetros de distancia— ha desaparecido.

El argumento de que éste es el precio a pagar para alcanzar el «desarrollo» ya no es más aceptable ni aceptado. Como consecuencia, los pobladores de Webuye y un grupo de activistas se han organizado en el denominado Grupo de Lobby contra la Contaminación de Panpaper (Panpaper Anti-Pollution Lobby Group) y organizado una protesta para terminar con los abusos que se vienen cometiendo y expresar su preocupación por la actual situación y su apoyo a la defensa de los derechos ambientales de la población local. (Boletín del WRM N° 45, abril de 2001).

Liberia: Preocupación por la promoción de las plantaciones de caucho por el Banco Mundial

El préstamo de US\$3,5 millones que la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo Banco Mundial está por conceder a la Compañía de Agricultura de Liberia (CAL) para el desarrollo de una plantación de 120.000 hectáreas de caucho en el condado de Grand Bassa está provocando una creciente preocupación en Liberia. El proyecto apunta a reiniciar operaciones y a comenzar un programa de rehabilitación de la plantación, la cual fue abandonada a raíz de la guerra civil que asoló al país entre 1989 y 1997.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que será llevada a cabo por un equipo de la CFI, llegado recientemente al país, no es una garantía de que las consecuencias sociales y ambientales del proyecto —así como los antecedentes negativos de la CAL en el área— serán tomadas en consideración. Por el contrario, los ambientalistas liberianos consideran que la decisión ya ha sido tomada y que la EIA será sólo una formalidad para apaciguar sus reclamos.

Las preocupaciones no sólo están basadas en las falsas promesas que la CAL ha formulado en relación al desarrollo del área, sino también en el propio proyecto. En realidad la CAL ha fracasado en el pasado en satisfacer las expectativas en lo referente a salarios adecuados para sus trabajadores, educación para sus hijos y salud y alojamiento decentes. Luego de tres décadas de presencia de la CAL en el área, las escuelas ubicadas dentro de la propiedad de la compañía podían funcionar sólo gracias a la ayuda brindada por miembros de la Iglesia Católica, mientras que los trabajadores aún viven en unidades habitacionales parecidas a campos de concentración, que en el momento actual se encuentran en estado casi ruinoso. En el interín, los negocios de la compañía han prosperado.

Varios puntos oscuros del proyecto son también preocupantes. Por ejemplo, no se menciona que parte del área a ser plantada está ocupada por bosque, del que la compañía extraerá madera. La sustitución de los bosques por monocultivos de caucho en un área tan grande seguramente generará impactos ambientales negativos. Sin embargo, el proyecto ignora que la tala será un importante componente de la iniciativa y esto es considerado una maniobra de la CAL para así evitar una EIA en profundidad.

Adicionalmente, el destino de las comunidades tradicionales ubicadas en el área de la concesión jamás ha sido tomada adecuadamente en cuenta. La CAL ha dicho que «no hay ningún asentamiento dentro de las áreas de las nuevas plantaciones de caucho... pero que hay un pequeño número de agricultores migrantes». Esto parece implicar que al ser pocos y «migrantes», ellos no constituyen asentamientos y por ende pueden ser ignorados. La promesa de la CAL de que no se producirán reasentamientos o desplazamientos de las comunidades locales por razones económicas no resulta creíble. Como dijo

recientemente un ambientalista local: «el rodear a las comunidades con árboles de caucho de manera de dejarlos sin tierra para agricultura y sin los medios para satisfacer sus restantes necesidades, para nosotros equivale a una orden: ¡váyanse o mueran!».

El Banco Mundial está actualmente llevando a cabo una revisión de la implementación de su política forestal del año 1991. Esta es una buena oportunidad para hacer una revisión de este tipo de proyectos –que el Banco sigue apoyando– y ver si realmente están acordes con el mandato del Banco de alivio a la pobreza y de desarrollo sustentable, o si están reñidos con la justicia social y la sustentabilidad ambiental. (Boletín del WRM N° 32, marzo de 2000).

Nigeria: Empresa malaya invertirá en producción de aceite de palma

Malasia es el principal productor y exportador de aceite de palma a nivel mundial, generando el 50% de la producción del globo, el 85% de la cual se destina a la exportación. En el continente africano Nigeria es el país con mayor superficie de plantaciones de palma, con por lo menos 350.000 hectáreas de cultivo. De acuerdo con noticias recientes, una empresa malaya habrá de invertir en el sector productor de aceite de palma en Nigeria, con el apoyo de los gobiernos de ambos países.

Sime Darby Plantations –la mayor empresa productora de palma aceitera de Malasia– establecerá próximamente una refinería procesadora en el Estado nigeriano de Cross River. La decisión fue tomada como resultado de una visita de cinco días a ese estado por parte de una delegación malaya. La visita siguió a la que realizó el gobernador de ese Estado a Malasia hace algunos meses y se efectuó a instancias del Primer Ministro de Malasia.

El jefe de la delegación malaya anunció la intención de establecer la refinería poco después de haber inspeccionado las plantaciones de palma existentes en varios puntos de Cross River. El mismo reveló la intención de Sime Darby Plantations de aportar parte del nuevo *know-how* tecnológico para el procesamiento de palma aceitera y se lamentó del estado obsoleto en que se encuentra el equipamiento en algunos de los establecimientos que visitó.

Asimismo elogió al gobierno del Estado de Cross River por promover y generar el ambiente necesario para este tipo de negocios. La delegación visitó la Zona de Procesamiento para la Exportación, donde el gerente general les aseguró la existencia de importaciones y exportaciones exentas de impuestos. También visitaron el puerto marítimo de Calabar.

De manera que todo parece estar pronto para esta inversión. Hay sin embargo dos preguntas que deben formularse. La primera está relacionada con la propia empresa malaya. ¿Cuál es el negocio de Sime Darby? De acuerdo con la página web de la compañía, se trata de «el mayor y más antiguo conglomerado empre-

sarial de Malasia» y «es propietaria o tiene intereses en más de 270 empresas, especialmente en Asia. El núcleo de sus actividades es la distribución de automóviles (BMW, Ford, Land Rover) y equipo pesado (Caterpillar), la producción de artículos terminados de caucho (principalmente neumáticos), plantaciones (palma, caucho, cocoa y frutales), el desarrollo inmobiliario y el comercio. Sime Darby está también adquiriendo plantas de generación de energía.

En relación con la palma aceitera, lo que se expresa a continuación resulta revelador: «La compañía confía en que la diversificación de sus propiedades le asegurará un crecimiento seguro. En tanto los precios del aceite de palma siguen bajando, lo que afecta al negocio de las plantaciones, hay una demanda creciente de los automóviles y el equipo pesado distribuido por Sime Darby». El gobierno nigeriano debería tener en cuenta lo anterior antes de subsidiar a dicha empresa con «importaciones y exportaciones exentas de impuestos». Si los precios del aceite de palma caen, Sime Darby habrá de ganar dinero con sus otras actividades, pero ¿qué habrá de suceder con Nigeria?

La otra pregunta está vinculada a la palma aceitera en si misma. Las plantaciones de palma se están expandiendo en la zona tropical y en todos los casos en que se establecen plantaciones en gran escala de este cultivo se generan importantes impactos sociales y ambientales. Los puestos de trabajo que genera son pocos, zafrales, mal pagos y con malas condiciones laborales. A las poblaciones locales se las priva de sus medios de vida y a nivel local la tasa de empleo tiende a decaer. Los impactos sobre el agua, el suelo y la biodiversidad son generalizados y en algunos casos van de la mano con altas tasas de deforestación. ¿Puede llamarse desarrollo a esto? (Boletín del WRM N° 41, diciembre de 2000).

Nigeria: Déficit de aceite de palma en un país productor tradicional de aceite de palma

La palma aceitera es nativa de la planicie costera de Nigeria, habiendo migrando después hacia el interior como cultivo básico. En el caso de Nigeria, este cultivo es parte de la forma de vida (y por cierto de la cultura) de millones de personas. Pero durante las últimas décadas el país se ha convertido en un importador neto de aceite de palma. Mientras que a principios de los años sesenta la producción de aceite de palma de Nigeria constituía el 43% de la producción mundial, actualmente sólo es el 7% de la producción total global.

Al contrario de la situación de los «pesos pesados» de la palma aceitera –Malasia e Indonesia (cuya producción se basa en monocultivos a gran escala)– en Nigeria el 80% de la producción proviene de pequeños propietarios dispersos que cosechan plantas semi-silvestres y utilizan técnicas de procesamiento manuales. Varios millones de pequeños propietarios están diseminados en una superficie estimada de 1,65 millones de hectáreas en la región sur

de Nigeria. La palma aceitera se cultiva en forma mixta con cultivos alimentarios como mandioca, boniato (camote, ñame) y maíz.

En un intento de emular las «historias de éxito» de los dos países mencionados, Nigeria trató de instrumentar plantaciones a gran escala, que fallaron completamente. Fue el caso del proyecto Cross River State en los años sesenta, y el del «programa de desarrollo rural del cinturón de palma aceitera» financiado por la Unión Europea en los años noventa. Este proyecto incluía la plantación de 6.750 hectáreas de palma aceitera dentro de un área considerada como uno de los bosques tropicales más grandes que quedan en Nigeria. A pesar de la oposición local, el proyecto avanzó y la financiación de la UE se suspendió recién en 1995, siete años después de su aprobación.

El proyecto fue instrumentado por una compañía llamada Risonplan Ltd., en parte propiedad del gobierno. La compañía se adueñó de tierras propiedad de las comunidades locales sin su consentimiento y con una compensación mínima. Una vez asegurada la tierra, Risonpalm construyó un dique enorme y arrasó con excavadoras muchos miles de hectáreas del área del proyecto para el cultivo. Los bosques, fincas y lugares de sepultura de las poblaciones locales fueron destruidos, se envenenaron los estanques de peces, se aplicaron plaguicidas prohibidos en Europa y surgió el problema de la tenencia de la tierra. El dique y los canales de drenaje alteraron considerablemente la hidrología de la zona, lo que ya ha producido la muerte de árboles. La proliferación de carreteras llevó a un aumento del maderero y la caza, y probablemente todos los árboles maderables maduros serán cortados en un futuro cercano. Como reveló la propia revisión a mediano plazo de la Comisión, el uso de maquinaria pesada causó la compactación del suelo. Las poblaciones locales efectuaron huelgas e intentaron obstruir el proyecto, lo que según concedieron los asesores de la Comisión era «el único medio efectivo de expresar su descontento».

Otros proyectos a gran escala tuvieron como resultado impactos similares y también sufrieron fracasos similares. Es así que la situación parece estar en un punto muerto, en que ni los monocultivos ni las pequeñas fincas parecen dar solución al problema de la escasez de aceite de palma en uno de los países de donde proviene la palma aceitera. Pero según pobladores locales experimentados, sería posible encontrar una solución al problema si se aplicaran e instrumentaran políticas adecuadas, según ciertas pautas, como por ejemplo:

- No se deben instrumentar monocultivos a gran escala porque deterioran el suelo (y en muchos lugares también el agua), destruyen los ecosistemas, socavan la sociedad humana y son una forma ineficaz de producir recursos.
- Se deben efectuar inversiones en términos de tecnología y capacidad de procesamiento. La capacidad de las prensas tradicionales es muy baja. La

eficiencia de esos métodos es menor que la de los molinos modernos y las tasas de extracción de aceite varían de 20% a 50%, en comparación con el 90% en Malasia.

- Se deben orientar las inversiones hacia cooperativas de productores y pequeños productores, donde el cultivo de palma aceitera se sigue efectuando mediante la manipulación de pequeños bosques «silvestres», como parte de una agricultura mixta y como plantaciones pequeñas de una o dos hectáreas.
- Se debe maximizar la producción de las plantaciones existentes, para que no se requieran plantaciones nuevas, y devolverlas a los propietarios originales de las tierras bajo la forma de bloques para pequeños propietarios, lo que inevitablemente las convertirá en ecosistemas agrícolas más mixtos y viables.

El enfoque descrito es esencial para la eliminación de la pobreza y para proporcionar poder económico a las poblaciones locales, sirviendo al mismo tiempo a los intereses del país en su conjunto. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Sudáfrica: Casi un millón de hectáreas de plantaciones certificadas por el FSC

Los militantes sudafricanos llevan años haciendo campañas contra la expansión de las plantaciones de árboles exóticos. Wally Menne de Timberwatch Coalition dijo que «la certificación de las plantaciones de monocultivos de madera como 'bosques de manejo sustentable' por parte del Consejo de Manejo Forestal (FSC) representa una verdadera burla al concepto de medio ambiente sustentable y de manejo de ecosistemas».

Esta declaración se convierte en un dramático llamado a tomar medidas si tenemos en cuenta que 900.000 hectáreas de plantaciones de monocultivos de árboles (mayoritariamente de especies exóticas de eucaliptos y pinos) ya han recibido el sello de aprobación del FSC y muchas más serán certificadas a menos que se haga algo para impedirlo. ¿Cómo es posible que suceda esto?

En primer lugar, es necesario destacar que la vegetación natural en las zonas donde se establecieron estas plantaciones era bosque o pradera con alto grado de biodiversidad. Después de su conversión a plantaciones, estas áreas tienen muy pocas posibilidades, si es que tienen alguna, de volver a recomponer el tipo de vegetación clímax original.

Pero ése es apenas el punto de partida. A consecuencia de esta actividad, tanto la población como el medio ambiente se ven sometidos a una terrible variedad de impactos negativos, entre los que se encuentran:

* En una primera etapa, la vegetación natural es arrasada con maquinaria o eliminada con herbicidas para impedir que compita con los árboles plantados en las necesidades de agua, luz y nutrientes.

* Los árboles jóvenes son fertilizados en forma artificial para aumentar su ritmo de crecimiento y se agregan al suelo otros productos químicos que absorben la humedad para impedir que las plantas jóvenes se sequen.

* En los ecosistemas vecinos se establecen plantas invasivas exóticas, incluso especies de las plantaciones como eucalipto, pinos y acacias.

* Las aves y animales cuya vida es alterada por las actividades de establecimiento de las plantaciones, abandonan el área o son cazados y atrapados como alimento para los trabajadores contratados en las plantaciones.

* Las aguas superficiales en los alrededores de las nuevas plantaciones se agotan rápidamente y los pobladores se ven forzados a recurrir a pozos y excavaciones que a menudo proporcionan aguas salinas o contaminadas.

* El establecimiento de plantaciones de monocultivos de árboles destinados a la producción de madera distorsiona el equilibrio natural de las especies. Estas plantaciones crean barreras que obstaculizan la migración y los patrones de crecimiento normales de aves, animales e insectos.

* La población local que hubiera tenido acceso a la zona si no se hubieran establecido plantaciones, podría haber utilizado el área para pastorear su ganado ovino y vacuno, cosechar juncos para techar sus hogares, o recolectar alimentos y plantas medicinales para su propio uso limitado. Ahora carecen de esos recursos y se ven forzados a mudarse a zonas previamente intocadas en busca de lo que les falta. Esto a menudo provoca conflictos con el manejo de áreas naturales protegidas.

* Los trabajadores contratados están mal pagados y no tienen muchas opciones aparte de construir sus hogares provisorios en zonas de bosque natural cerca de las plantaciones donde trabajan, ocasionando de esta forma daños ecológicos importantes durante el proceso.

* La seguridad alimentaria de la comunidad es uno de los primeros elementos que se resiente. Las áreas que tradicionalmente se dedicaban al cultivo de árboles frutales y vegetales, se secan en el proceso o se ven privadas de luz al establecerse las plantaciones demasiado cerca de las zonas fértiles a las orillas de ríos y arroyos. Los residentes que no emigran quedan en una situación en la que se ven forzados a utilizar sus limitados recursos económicos para comprar comida procesada en los comercios.

* Los sistemas de transporte, en particular los caminos, son sometidos a altos niveles de uso que no corresponden a aquellos para los que fueron diseñados. El costo de mejorar o mantener la caminería rural a menudo es asumido por el Estado, lo que significa que la industria maderera se beneficia de esta forma de un subsidio indirecto.

Las plantaciones madereras a gran escala destruyen economías rurales y ecosistemas enteros. Por alguna extraña razón, esta calamidad es prácticamente ignorada por los gobiernos y los institutos de investigación. Una organización como el FSC debe preocuparse de insistir en que se lleve adelante una investigación exhaustiva e imparcial antes de considerar la certificación.

No hay duda de que un artículo básico de consumo como el papel o el cartón, es de gran valor en la sociedad moderna. Lo que no es aceptable es que el ritmo de consumo de productos de papel aumente, y que al mismo tiempo el nivel de vida de las comunidades pobres donde se produce la madera no mejore. El crecimiento de la cultura de lo descartable de los denominados países desarrollados está directamente relacionado con la erosión del medio ambiente natural y del nivel de vida de los países colonizados por las plantaciones de monocultivos de árboles de las empresas multinacionales involucradas. En el caso de Sudáfrica, el FSC debe asumir una gran cuota de responsabilidad por esta injusticia ambiental y social. (Boletín del WRM N° 64, noviembre de 2002).

Sudáfrica: Plantaciones de árboles generan ganancias para la compañía, pero incendios, daños y muerte para la población

Para el grupo mundial de celulosa y papel Sappi, el dinero sí crece en los árboles. De hecho, el último informe anual de la compañía sugiere que crece más eficientemente en Sudáfrica. El informe señala que la sección sudafricana de Sappi (Sappi Forest Products) representa un 15 por ciento de las ventas del grupo, pero contribuye con el 36 por ciento de los beneficios de explotación anuales del grupo a setiembre de 2002. «Tenemos una base de costos extraordinariamente baja en Sudáfrica, que posee ventajas competitivas únicas para la producción de fibra por la velocidad a la que crecen los árboles y los bajos costos de energía inherentes», se afirma en el informe.

Sappi es una compañía internacional de productos forestales con sede en Sudáfrica, y figura entre los primeros veinte fabricantes de celulosa y papel del mundo. De ser una compañía totalmente sudafricana en 1989, ha pasado a ser una organización internacional con instalaciones de fabricación en tres continentes, siendo el mayor productor en sus rubros centrales: papel estucado de celulosa sin lignina y celulosa disolvente. Sappi Saicor, en Sudáfrica, es la mayor productora mundial al menor costo de celulosa disolvente, que se utiliza para la fabricación de la fibra de viscosa, con una participación en el mercado mundial de 15%.

Durante 1998 el grupo Sappi fue reestructurado y se dividió en una compañía de papel fino y otra de productos forestales, con oficinas centrales en Londres y Johannesburgo respectivamente. La segunda posee y maneja casi 540.000 hectáreas de plantaciones de monocultivo de árboles en Sudáfrica y produce celulosa para papel blanqueada y sin blanquear para su propio consumo y para el mercado de la celulosa.

El director ejecutivo de Sappi, Eugene van As, señaló que después de los ataques del 11 de setiembre de 2001, el consumo de papel estucado (gran parte del cual se utiliza para la producción de revistas satinadas) cayó un 12%, «la caída más abrupta que la mayoría de los participantes recuerda». Sin embargo, a pesar de perder dinero en EE.UU., Sappi cerró el año con ganancias razonables. El director subrayó los beneficios de la diversidad geográfica de la compañía, que posee plantas en América del Norte, Europa y Sudáfrica.

Son buenas noticias para la empresa, pero ¿qué pasa con Sudáfrica y su población? La compañía se enorgullece por su «excelente eficiencia operativa» en la región, pero eso tal vez sea tan solo una forma de calcular las ganancias y los costos. No es la compañía quien paga los costos humanos y ambientales de sus actividades – lo que se suele llamar «externalidades». La compañía no pagará por la disminución o contaminación del agua, ni por la reducción de los bosques, ni por los ecosistemas perdidos. No pagará por la pobreza de la población, privada de su forma de sustento y ahora dependiente de magros salarios que hacen posible esa «excelente eficiencia operativa».

Según un informe de la organización ambiental sudafricana Timber Watch, los bosques típicos del país se restringen a las zonas sin heladas con precipitaciones anuales promedio de más de 525 mm en la región de lluvias de invierno, y más de 725 mm en la región de lluvias de verano. Estos bosques están a altitudes entre 0 y 2.100 m sobre del nivel del mar. Raramente se incendian, principalmente gracias a la «burbuja» de humedad que queda atrapada en las copas de los árboles y el denso conjunto de arbustos y árboles pequeños que forman el ecotono o margen. En condiciones de calor y sequedad extremos (viento zonda) pueden ocurrir incendios que destruyan la estructura del bosque, pero eso usualmente sucede cuando el ecotono ha sido dañado, a menudo debido a que las plantaciones de árboles están muy cerca del margen del bosque, plantaciones que junto con cultivos comerciales como la caña de azúcar se han extendido sobre las áreas naturales incrementando la presión.

Los impactos más perjudiciales de las plantaciones para los bosques son el agotamiento de la humedad del suelo (la organización SAWAC –Crisis Sudafricana del Agua– puede dar testimonio de ello) y el desplazamiento de las comunidades humanas de sus tierras de cultivo. Estos impactos producen un amplio espectro de impactos secundarios como la sobreexplotación de los productos del bosque, incluidos mamíferos y aves, la tala y quema para la agricultura de subsistencia y una mayor exposición a invasiones de plantas exóticas y a los incendios.

Precisamente en julio de 2002 varios incendios graves azotaron la provincia de Mpumalanga, causando muchos daños, incluso víctimas mortales y heridos. Aunque están permitidas, las quemadas se salen de control. Las explicaciones apuntaban a condiciones de sequedad y mucho viento, el fenómeno de El Niño

y cambios climáticos repentinos. Sin embargo, cabe señalar que Sappi estableció en Mpumalanga 245.000 hectáreas de plantaciones de árboles para celulosa y para aserrado y también una fábrica de celulosa y papel que alentó la explotación forestal. ¿Será una coincidencia? (Boletín del WRM N° 67, febrero de 2003).

Sudáfrica: Detrás de la pérdida de bosques no están los recolectores de plantas medicinales sino la industria forestal

Recientemente se ha dado importante difusión a un artículo que analiza la «amenaza» que suponen las actividades de los recolectores ilegales de plantas medicinales para los bosques nativos sudafricanos. Michael Peter, Director de Manejo de Bosques Nativos del Departamento de Aguas y Manejo Forestal de Sudáfrica, afirmó que «el comercio de plantas medicinales es la causa principal de la degradación de los bosques en Sudáfrica».

Wally Menne, miembro de la ONG sudafricana Timberwatch Coalition, tiene sin embargo una opinión muy diferente sobre este tema. Para él «es tiempo de abrir los ojos y enfrentar la realidad: si hablamos del daño que sufren los bosques, la principal culpable es la industria forestal».

Según los datos recopilados por Timberwatch, se estima que los bosques nativos cubren menos del 0,25% de la superficie de Sudáfrica, lo que los hace el bioma de menor tamaño del subcontinente. Estos bosques, que tienden a agruparse en cinturones formados por manchones, como en el Drakensberg, o en franjas contiguas como a lo largo de la costa sur de la región del Cabo y las dunas costeras de Kwa Zulu/ Natal, se han reducido en forma importante como resultado de actividades humanas entre las que se incluyen la agricultura y el pastoreo. La presión ha aumentado como resultado de la expansión de las plantaciones de árboles y los cultivos industriales —como la caña de azúcar— en áreas naturales, lo que a su vez ha desplazado a los pobladores locales. De esta forma el proceso produce impactos indirectos sobre los bosques más allá del lugar, dado que los pobladores desplazados tienden a adentrarse en el bosque para buscar su sustento.

De acuerdo con Wally Menne: «Echarle la culpa a ‘recolectores comerciales’ anónimos parece una respuesta bastante pobre, si se tiene en cuenta que la caminería de las plantaciones ha permitido el acceso a los bosques a trabajadores temporarios y mal pagos, que difícilmente dejen pasar la oportunidad de hacer algo de dinero recolectando plantas medicinales. En general no pertenecen a la zona (con frecuencia ni siquiera al país) y son demasiado pobres para preocuparse por las consecuencias de sus acciones. Los ‘recolectores comerciales’ de tiempo completo, que en general sólo transportan el material vegetal, a menudo emplean este tipo de trabajadores para hacer el trabajo sucio. Es necesario cuestionar el sistema de mano de obra subcontratada que usan

compañías como Mondi y SAPPI (las dos empresas de plantaciones de árboles más grandes del país), para determinar dónde reside la causa real del problema». (Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

Tanzania: Otro caso de CO2lonialismo noruego

Un proyecto implementado en Uganda por la compañía noruega Tree Farms para el establecimiento de entre 80.000 y 100.000 hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto como sumideros de carbono ha sido severamente cuestionado por sus negativas consecuencias desde el punto de vista social y ambiental. El proyecto fue definido como negativo en todos los órdenes, dado que es dudoso que la compañía obtenga ganancias, las comunidades locales pierden sus tierras y los trabajadores ganan salarios miserables, al tiempo que Uganda pierde su soberanía en relación con el manejo de su territorio y de los recursos naturales del mismo.

Un informe publicado en julio de 2000 («Carbon Upset. Norwegian 'Carbon Plantations' in Tanzania» por Jorn Stave, NorWatch) analiza otro proyecto administrado por Tree Farms. Hasta ahora Escarpment Forestry company Ltd., subsidiaria de Tree Farms, ha plantado 1.900 hectáreas de *Pinus patula* y *Eucalyptus saligna* en los distritos de Sao Hill, Mufindi y Kilombero en las tierras altas de Tanzania. La empresa se encuentra en un proceso de adquisición de más tierras. Además está financiando las actividades de TAGGAT (Tanzania Greenhouse Gas Action Trust), una fundación que trabaja con ella en el desarrollo de modelos de simulación para la fijación de carbono en la biomasa de los árboles.

Si bien este proyecto difiere en varios aspectos del implementado por la misma compañía en Uganda, la investigación concluye que se trata de un nuevo caso de «CO2lonialismo» que está provocando impactos negativos sobre el ambiente, las comunidades locales y Tanzania como país. La biodiversidad a nivel local –que incluye dos especies de orquídeas y una de aloe en peligro de extinción– será afectada por los monocultivos forestales. Asimismo, no se sabe a ciencia cierta qué ha de suceder con el carbono contenido en los suelos y en las raíces de la vegetación natural una vez que se hayan instalado las plantaciones. Si bien Tree Farms realizó consultas con los pobladores locales antes del comienzo de los trabajos, viene utilizando la fuerza de trabajo que ellos proveen pagándoles salarios bien inferiores al salario mínimo recomendado oficialmente. Lo que es más, hay todavía más de cien trabajadores con varios meses de sueldos atrasados. La suma que la empresa está pagando al gobierno de Tanzania por concepto de arrendamiento de la tierra (US\$ 1,9/ha/año) es menor que lo que paga el proyecto de Tree Farms en Uganda. No obstante los noruegos están presionando a las autoridades para reducir este precio en un 50%. Al mismo tiempo Tanzania perderá el control de las tierras arrendadas por un período de 99 años.

Las actividades de Tree Farms en Tanzania pueden ser consideradas como aún peores que las desarrolladas en Uganda, ya que en este caso la compañía espera amasar enormes ganancias aprovechándose del muy bajo poder de negociación de las comunidades locales y del escaso desarrollo institucional del estado de Tanzania. En tanto el «mercado del carbono» implica un absurdo comercio entre agentes con muy diferente cuota de poder, no es sorprendente que el más fuerte y rico gane, mientras que el más débil y pobre pierda. Definitivamente los sumideros de carbono no constituyen una solución para el cambio climático, sino un problema adicional, tanto a nivel global como local. (Boletín del WRM N° 38, setiembre de 2000).

Uganda: Sumideros de carbono y CO2lonialismo noruego

Las compañías forestales en todo el mundo están procurando con entusiasmo implementar la idea de establecer plantaciones de árboles en países del Sur bajo los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, firmado en 1997, para supuestamente secuestrar CO₂ de la atmósfera y mitigar así los efectos del calentamiento global... a la vez que obtener pingües ganancias. Si bien se la presenta como «amistosa para el ambiente» la idea de las plantaciones como sumideros de carbono se fundamenta en débiles argumentos científicos y no constituye una manera efectiva de reducir las concentraciones de CO₂ en el aire. Además, la misma potencializa los efectos negativos del modelo hegemónico de monocultivos forestales a nivel local y regional.

Noruega también se subió al carro y ha puesto su mira en Uganda. La compañía noruega Tree Farms se estableció en ese país en 1996, donde está desarrollando un proyecto forestal. Por otro lado, el Norwegian Afforestation Group obtuvo en noviembre de 1999 el consentimiento de las autoridades para un proyecto del mismo tipo. La primera de las nombradas, que opera en la Reserva Bukaleba bajo el nombre de su subsidiaria Busoga Forestry Company Ltd., ya ha iniciado un proyecto de instalación de entre 80.000 y 100.000 hectáreas de plantaciones de pino (*P. caribaea*, *P. oocarpa* y *P. tecunumani*) y eucalipto (*E. grandis*). El esquema es muy similar al adoptado por la fundación holandesa FACE en los Páramos del Ecuador y también lo son sus consecuencias.

Una reciente investigación de campo llevada a cabo por la ONG noruega NorWatch demuestra que los dos proyectos y en particular el de Tree Farms presentan aspectos sumamente cuestionables: ambas empresas noruegas han obtenido las tierras de parte de las autoridades por un precio irrisorio, dado que por un lado las autoridades ugandesas no tienen prácticamente capacidad de evaluar de qué magnitud es el valor que las compañías están pensando generar –en especial mediante el mercadeo del carbono– y, por otro, la corrupción está presente en los niveles de toma de decisiones.

El proyecto de Tree Farms ha provocado la expulsión de sus tierras de aproximadamente 8.000 personas –principalmente agricultores y pescadores– per-

tenecientes a 13 poblados, dado que la compañía las ha ocupado, condenándolos a la pobreza debido a la pérdida de sus medios de vida y generando un foco de conflictos sociales y ambientales. Lo que es más, bajo el régimen de «taungya» los pobladores locales pueden cultivar maíz, porotos y otras verduras entre las filas de árboles durante los primeros años de crecimiento de los mismos pero, por sorprendente que parezca, tienen que pagar por este uso de la tierra y, además, están siendo explotados por la empresa, ya que no se les paga por la tarea de desmalezado y cuidado de los árboles que realizan en los primeros años de la plantación.

Al otorgar en concesión áreas para «plantaciones de carbono» por un lapso de 50 años, el país está hipotecando las opciones de cambio en el uso del suelo en el futuro. Las denominadas plantaciones para almacenamiento de carbono deben permanecer como tales en un futuro inmediato, privando así a las autoridades locales de la opción de utilizar esas áreas para otros fines, según sean las necesidades de la población. Por otra parte, Uganda no podrá utilizar estos sumideros para su propia contabilidad del carbono cuando el país se vea enfrentado a cumplir con ese tipo de compromisos, dado que los créditos ya habrán sido vendidos a países y empresas del Norte.

Como viene sucediendo habitualmente, la contabilidad del carbono en el Proyecto Tree Farms es incierta, dado que no hay forma de establecer la cantidad neta de CO₂ que puede ser removida y almacenada por una plantación forestal durante un tiempo prolongado. Incluso es posible que las plantaciones se conviertan en realidad en fuentes de emisión de carbono, en lugar de sumideros. Además, éstas enfrentan riesgos de incendios, disturbios a nivel político, agitación social, todos factores que hacen difícil garantizar que este tipo de actividades puedan continuar sin inconvenientes. Eso sin mencionar los impactos de los monocultivos forestales sobre suelos, agua y biodiversidad, incluyendo también la capacidad del sotobosque y la vegetación circundante para absorber y almacenar carbono.

No está claro si el Proyecto Tree Farms habrá de sobrevivir, debido a la existencia de conflictos a nivel social y de problemas vinculados a su rentabilidad. Un reciente estudio financiado por la Unión Europea, referido entre otros a este proyecto, llegó a la conclusión de que se estaría en presencia de una situación «pérdida-pérdida» («loss-loss»), vale decir de efectos negativos tanto para la forestación como para la población local.

NorWatch considera que el proyecto Tree Farms implica en realidad una situación «loss-loss-loss», ya que la forestación está llena de problemas, la población local está sufriendo y Uganda está siendo «CO₂lonizada».

En relación con el Convenio Marco sobre Cambio Climático, la Conferencia de las Partes habrá de discutir durante su próxima reunión de noviembre en La Haya, si el mercado del carbono basado en las plantaciones forestales en los

países del Sur debe ser aprobado como una opción para la reducción de emisiones. Mientras tanto Noruega, que en 1997 se comprometió a reducir la liberación de gases de efecto invernadero para el período 2008-2012, en realidad las ha aumentado. Las autoridades de ese país prevén que dicho crecimiento continuará hasta el año 2010. Para Noruega plantar árboles en países del Sur, como Uganda, es más barato que implementar tecnologías tendientes a la disminución de sus propias emisiones. Total... los pobres de Uganda y el ambiente a nivel global son quienes pagan los costos. (Boletín del WRM N° 35, junio de 2000).

Zambia: ¿Buenas o malas noticias en el sector forestal?

Zambia posee casi 46 millones de hectáreas de bosque, de las cuales 7,4 millones son reservas, 6,3 millones son parques nacionales y 32 millones son tierras boscosas. Tiene una superficie estimada de plantaciones de árboles de unas 63.000 hectáreas. Es en este contexto que hay que analizar las siguientes novedades.

La noticia es que el gobierno de Zambia está explorando la posibilidad de conseguir 30 millones de dólares para reactivar la industria maderera, la cual –según Conran Simuchile, funcionario de Relaciones Públicas del Ministerio de Comercio, Negocios e Industria– ha estado abandonada durante mucho tiempo.

El dinero sería entregado en forma de préstamos al sector empresarial involucrado en la industria maderera con el objetivo de apoyar la introducción y el establecimiento de plantaciones y plantas procesadoras. Se alega que el objetivo es involucrar a los empresarios en el negocio del procesamiento de productos terminados en lugar de exportar la madera en bruto –que luego vuelve a Zambia en forma de productos terminados– creando desempleo en el sector industrial del país.

Dejar de exportar rolos sin procesar y agregar valor a la madera a través de la manufactura de productos terminados suena muy razonable, particularmente en un país en el cual la población rural ha sufrido los efectos de la supresión de los subsidios agrícolas en la década del 90 y se ha visto empujada a realizar otras actividades para sobrevivir, como la tala de bosques para obtener carbón vegetal y venderlo en los mercados urbanos.

Sin embargo, surgen muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo es que la industria maderera ha decaído aun cuando es un negocio rentable en un país de abundantes recursos forestales? El Ministro de Turismo y Recursos Naturales Levison Mumba ha reconocido que la industria no contribuyó al producto bruto interno del país por la falta de transparencia de las partes involucradas. Así que ¿quién va a decidir quien va a recibir el dinero y qué controles se implementarán para asegurarse de que haya generación de empleo y un manejo sustentable de los bosques?

En cuanto a la promoción de las plantaciones forestales, también hay planteadas varias preguntas. Las plantaciones no son malas en sí mismas: todo depende de qué especies se plantan, dónde, en qué escala, cómo (incluido el consentimiento previo e informado de la población local) y quién se beneficiará de esta actividad y de las actividades industriales secundarias.

Parecería, no obstante, que no tiene mucho sentido que un país dotado de abundantes recursos forestales tenga que promocionar las plantaciones forestales en vez de concentrarse en el uso inteligente de los bosques. La información disponible no explicita lo que el gobierno entiende por «plantaciones». Lo que está relativamente claro, sin embargo, es que el gobierno apunta a proveer a la industria maderera de materia prima («para ayudar a los empresarios a introducir y establecer plantaciones y plantas de procesamiento en una apuesta a la reactivación de la industria maderera»). Si éste es el caso, es muy posible que las plantaciones se compongan mayormente de especies exóticas de crecimiento rápido similares a aquellas cuyo cultivo se ha fomentado en los trópicos y subtropicos: eucalipto, pino, acacia, melina. Siendo así, toda la experiencia indica que sería un gran error.

Por supuesto que sería mucho más coherente plantar especies autóctonas en zonas boscosas degradadas, siempre y cuando las comunidades locales apoyen la idea y se vean beneficiadas por la restauración del bosque. El apoyo y el financiamiento para esta tarea serían muy bienvenidos. Sin embargo, el dinero que el gobierno está buscando sería entregado a través de préstamos al sector empresarial vinculado a la industria maderera, el mismo sector acusado de «falta de transparencia» por el Ministro.

En resumen, todavía es muy pronto para decir si esas noticias son buenas o malas, aunque todo apunta a la segunda opción. Esperamos estar equivocados. (Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

AMERICA

Nace Red latinoamericana contra monocultivos de árboles

En el marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2003, un conjunto de representantes de ONGs latinoamericanas se reunieron para discutir la posibilidad de coordinar esfuerzos en torno al creciente problema de los monocultivos de árboles. En la reunión se analizaron tanto los factores que impulsan la ocupación del territorio por parte de monocultivos destinados a la producción de madera, de fibra para celulosa y de aceite de palma, como aquellos que la limitan.

Se enfatizó el creciente apoyo que estos monocultivos reciben de parte de los gobiernos de la región, la mayor parte de los cuales han aprobado legisla-

nes destinadas explícitamente a su promoción mediante el otorgamiento de todo tipo de subsidios a esta actividad. Dicho apoyo es a su vez el resultado de iniciativas surgidas a partir de agencias bilaterales y multilaterales que preparan el camino para la inversión de empresas transnacionales interesadas en el negocio.

A su vez, el área destinada a monocultivos de árboles a gran escala podría verse grandemente incrementada como resultado de la puesta en marcha del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio incluido en el Protocolo de Kioto de la Convención sobre Cambio Climático, que posibilita que los países industrializados contaminantes puedan «compensar» sus emisiones a través de la plantación de grandes áreas de árboles como «sumideros de carbono». América Latina sería uno de los destinos preferidos para tales proyectos.

En resumen, el escenario latinoamericano está listo para recibir, con el beneplácito de los gobiernos, inversiones destinadas a aumentar la superficie cubierta por monocultivos de árboles, tanto para la producción (de madera, celulosa y aceite de palma), como para servir como sumideros (basureros) de carbono.

Sin embargo, los asistentes a la reunión también analizaron la creciente oposición popular a ese modelo forestal y el nivel de conocimiento y experiencia acumulados sobre el tema, que hacen que cada vez sea más difícil convencer a los pobladores de la región de que estas plantaciones vayan a redundar en su beneficio. Por el contrario, las experiencias en regiones donde ese modelo se ha logrado implementar han probado tener consecuencias desastrosas, tanto para la gente (pérdida de territorios, de recursos y de empleos) como para el ambiente (impactos sobre el agua, los suelos, la biodiversidad, el paisaje).

Se entendió por tanto que resultaba imprescindible organizarse para coordinar acciones contra los monocultivos de árboles a nivel continental, a fin de impedir su mayor expansión. En ese sentido, los representantes de ONGs de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay (y posteriormente de El Salvador), acordaron la creación de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles, delegando la función de secretaría en el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. (Boletín del WRM N° 67, febrero de 2003).

Argentina: Las petroleras se visten de «verde»

Siguiendo una tendencia a nivel mundial, las empresas petroleras en Argentina se han sumado con entusiasmo a la idea de entrar en el mercado de los permisos de carbono como una forma efectiva de aumentar su ingresos y de cambiar radicalmente su imagen frente a la opinión pública: ¡de los chicos malos responsables del calentamiento global a campeones de la conservación de los bosques! A partir de 1998 el gobierno les ha venido facilitando las cosas

favoreciendo inversiones en proyectos forestales, sin atender sus efectos sobre los valiosos ecosistemas de pradera, que han constituido la base natural y física de la economía del país.

Según Patricio Montecino, gerente general de Pecom Forestal (una subsidiaria de la compañía petrolera Pérez Companc) «hoy en día es difícil concebir una empresa petrolera sin un componente forestal adicional», tanto porque, según su visión, la forestación es un buen negocio, como porque dichas empresas hoy en día son conscientes de la necesidad de trabajar en soluciones basadas en el secuestro del carbono. Pecom se encuentra negociando permisos de emisión de carbono con empresas alemanas que participan del polémico acuerdo Chubut-Prima Klima para secuestrar carbono en la sureña provincia de Chubut.

Para Pérez Companc los sumideros de carbono son un negocio central. La compañía comenzó su actividad en el sector forestal en la década de 1950 y actualmente es dueña de 163.000 hectáreas de tierras en las Provincias de Misiones y Corrientes, y en la región del Delta del río Paraná, en su mayoría plantadas con árboles. Otras 15.000 hectáreas de plantaciones de pinos serán instaladas en los próximos quince años en Misiones. En los predios de Corrientes se viene plantando *Pinus taeda* y *Pinus elliotti* a un ritmo de 6.000 hectáreas anuales, con el propósito de obtener materia prima para una industria a ser instalada próximamente en la zona.

El gigante petrolero YPF (antes propiedad del Estado y hoy en día privatizado y asociado con Repsol, de España) está supervisando la plantación de 2.000 hectáreas de *Pinus ponderosa* en la sureña provincia de Neuquén a cargo de la Corporación Forestal Neuquina (CORFONE) y planea llegar a las 5.000 hectáreas dentro de dos años. Por supuesto que Shell no podía faltar en este tipo de iniciativas. Esta multinacional es dueña de 200.000 hectáreas en varios países del mundo (Congo, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay), 120.000 de las cuales están ocupadas con plantaciones de especies forestales de rápido crecimiento. Shell empezó a operar en Argentina en 1998 y sus plantaciones están en la Provincia de Buenos Aires—donde posee 24.200 hectáreas—y en la de Corrientes, donde es dueña de 8.000 hectáreas de eucaliptos y pinos, cuya superficie aumentará a 18.000 hectáreas.

Generar una «imagen verde» para sí mismas es una meta muy importante en la política de estas empresas. Repsol-YPF subraya que su proyecto se está llevando adelante en áreas afectadas por erosión provocada por el sobrepastoreo y donde no existe monte nativo, pretendiendo de ese modo mostrar preocupación por la protección ambiental en general y por la restauración de los suelos degradados en particular. Shell enfatiza que 2.000 hectáreas de bosque ubicadas en su zona de plantaciones habrán de permanecer intactas, y que la empresa aspira a obtener la certificación de acuerdo con la norma ISO

14001, de manera que el producto pueda alcanzar los mercados del Norte. Sin embargo, esos argumentos resultan débiles en relación con una verdadera política conservacionista dado que, por un lado, la efectividad para conservar la biodiversidad de pequeños parches de monte nativo en medio de vastos cultivos forestales es sumamente dudosa. Ni que hablar de la pobre actuación de estas empresas en lo que respecta a la protección del ambiente. Ni tampoco de que su verdadero negocio –la extracción de petróleo– está devastando el ambiente, tanto a nivel local como global. Ni, finalmente, de que en el proceso de teñir de «verde» su imagen, se están apropiando de más y más tierras en todo el mundo. (Boletín del WRM N° 35, junio de 2000).

Argentina: Deforestación y plantaciones en dos provincias

Coincidiendo con la conquista del vasto territorio argentino por parte del gobierno centralista de Buenos Aires, iniciada en la segunda mitad del siglo XIX en nombre de la modernización, los bosques de las distintas regiones del país entraron en una etapa de decadencia que ha continuado hasta el presente. Los dos casos mencionados a continuación constituyen sólo dos ejemplos de un proceso que está afectando a todo el país.

En la provincia de Santa Fé la cobertura boscosa disminuyó en unos 4,6 millones de hectáreas durante los últimos 80 años. Según un informe publicado recientemente por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, la superficie total de bosques en la provincia es hoy en día de tan sólo 1.300.000 hectáreas. En 1915 el Censo Forestal de Santa Fé revelaba la existencia de 5,9 millones de hectáreas de bosques. Entre 1915 y 1970 la tasa de deforestación era de 52.700 hectáreas al año, pero en el período 1970-1984 saltó a 121.500 hectáreas anuales. Directamente responsables del actual estado de cosas son dos empresas forestales. Una de ellas es la británica «La Forestal», que comenzó a operar en la región en 1880 explotando los montes de quebracho (*Schinopsis balansae*) y siendo dueña de la tercera parte del territorio de la provincia. Para ello empleaba a la población local, que se vio forzada a trabajar en condiciones de semi-esclavitud. En la década de 1960, cuando la explotación de quebracho ya estaba declinando, la empresa cerró sus puertas y dejó tras de sí un desierto, tanto del punto de vista ambiental como social. En la década de 1930 llegó a la región «Celulosa Argentina». Para alimentar sus plantas de celulosa y papel la compañía también explotó los bosques nativos y, además, estableció plantaciones de eucalipto.

La Provincia de Misiones también está sufriendo un severo proceso de pérdida de sus bosques y sustitución de los mismos por plantaciones. A principios de siglo el 90% de su superficie estaba cubierta de selva subtropical. Hoy en día quedan en pie solamente 1.500.000 hectáreas, de las cuales sólo la tercera parte están incluidas en áreas protegidas. La deforestación sigue sin dismi-

nuir. Sólo tomando el caso de una empresa extranjera de pulpa y papel, se espera que la misma ha de deforestar 7.000 hectáreas al año, a la vez que no hay ninguna medida programada para frenar este proceso de deterioro. Al mismo tiempo Misiones está siendo cubierta por extensas plantaciones de pinos de rápido crecimiento y los pinos ya están invadiendo las pocas áreas boscosas protegidas que quedan en la provincia.

Como siempre, la pérdida de bosques en ambas provincias se ha dado en forma paralela al incremento del área de plantaciones. Sin embargo, muchos forestales —apoyados en la definición de «bosque» que hace la FAO— dirán que en Santa Fé y Misiones la «cobertura boscosa» ha aumentado, por el sólo hecho de haberse agregado la superficie ocupada por plantaciones como parte de esa «cobertura boscosa». Afortunadamente la opinión pública se está dando cuenta de que los monocultivos de eucalipto y pino no son «bosques» y de que, en realidad, las plantaciones constituyen una causa fundamental de deforestación. (Boletín del WRM N° 38, setiembre de 2000).

Argentina: Un turbio proyecto de sumidero de carbono con final feliz

Mientras los gobiernos discutían en La Haya los supuestos beneficios de la inclusión de bosques y plantaciones en el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto de la Convención sobre Cambio Climático, un insólito proyecto en Argentina daba la razón a quienes se oponían a su inclusión.

En efecto, en febrero de 2000 la empresa «El Foyel S.A.», nueva propietaria de un predio de 7.800 hectáreas ubicado en la zona de El Foyel, en la sureña Provincia de Río Negro, solicitó la autorización del Servicio Forestal Andino para abrir y rehabilitar varios kilómetros de caminos dentro del bosque del lugar y para talar unas 300 hectáreas de ese valioso monte para reemplazarlo por una plantación de pinos oregón y radiata. El predio es lindero al Parque Nacional Nahuel Huapí, en las cercanías de la turística ciudad de Bariloche.

Tres meses más tarde, sin contar con autorización alguna, la empresa comenzó con las operaciones de corta, lo que motivó la intervención del Servicio Forestal Andino por «flagrante infracción al código forestal», que causó la destrucción de un centenar de cipreses y otro tanto de ñires, maitenes y otros árboles nativos. Sin embargo, ese episodio fue tan sólo la punta del iceberg de una situación mucho más turbia. El proyecto implica de hecho la destrucción no de 300 sino de 4.500 hectáreas de bosque y su reemplazo por plantaciones de pinos.

Para cubrir el emprendimiento con una máscara «verde», el proyecto —cuyos objetivos esenciales son la producción de madera y el cobro por servicios de captura de carbono— propone realizar un manejo «sustentable» de un área de más de 1.800 hectáreas de especies nativas incluyendo lenga y ciprés.

Las fuertes conexiones de los empresarios implicados con autoridades locales han permitido que, pese a sus características, el proyecto ya haya obtenido la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de CODEMA, el organismo provincial de medio ambiente. Ahora se espera la aprobación final por parte del Departamento Forestal, aunque el proyecto está paralizado por haber recibido sanciones por iniciar trabajos de apertura de caminos antes de tener las aprobaciones definitivas.

Pobladores, académicos y técnicos han expresado su oposición al proyecto. La ONG «Comunidad de Limay» ha iniciado una campaña para detenerlo, presentando a su vez un recurso legal sobre la base de que no ha existido un proceso de consultas públicas y que el proyecto es contradictorio con la legislación vigente que protege los bosques nativos. Asimismo los doctores Thomas Kitzberger y Estela Raffaele, de la Universidad Nacional del Comahue, advierten que el establecimiento se encuentra lindero a un parque nacional y en un área donde se proyecta diseñar el Corredor Norpatagónico, para favorecer la movilidad de las especies y proteger así la biodiversidad. En su informe cuestionan también las técnicas de «manejo sustentable» propuestas para las 1.800 hectáreas de bosque que no serán cortadas. Por su parte, el Servicio Forestal Andino ha señalado que la tala en gran escala del ñire puede afectar negativamente a otras especies nativas, como el ciprés, que crecen asociadas a él. Existe también preocupación de que la agresiva capacidad de regeneración del pino oregón, resulte en la sustitución de las especies nativas. Asimismo se ha cuestionado la supuesta función de sumidero de carbono de la plantación proyectada. Otros científicos de la Universidad Nacional del Comahue señalan que no existe evidencia alguna por la cual la plantación de pinos sea más eficiente que el bosque para absorber anhídrido carbónico.

El domingo 5 de noviembre de 2000 este cuestionamiento ganó la calle, cuando ONGs ambientalistas de Chubut y Río Negro organizaron una marcha «a favor de la biodiversidad que puebla los bosques más australes del planeta», en la que participaron el Proyecto Lemu, el Movimiento Antinuclear Chubutense, grupos indigenistas Mapuche y Tehuelche, Greenpeace-Argentina y la Sociedad Ornitológica de Puelo, Atech y Cetera.

Si bien la imagen de la Argentina se asocia a extensas praderas, no menos cierto es que a fines del siglo pasado, la Argentina contaba con más de 100 millones de hectáreas entre selvas y bosques. Actualmente quedan en pie menos de 20 millones, de las cuales la mitad está sufriendo un acelerado proceso de degradación. La expansión de los monocultivos forestales de pino y eucalipto constituye una amenaza directa para estos ecosistemas sobrevivientes y el caso de El Foyel es uno más en una larga lista de destrucción de los bosques.

Como otros implementados en otros países, este proyecto de «absorción de carbono», muestra claramente que este enfoque no constituye una solución

para el clima global –ya que libera más carbono por deforestación del que absorbe por la plantación de árboles– y que además causa graves perjuicios sociales y ambientales a nivel local. Sin embargo, constituyen un excelente negocio para un puñado de empresarios, para los cuales el drama del cambio climático no es sino una nueva y buena oportunidad de hacer dinero.

Felizmente, la lucha contra este proyecto fue todo un éxito. La justicia penal argentina prohibió «realizar cualquiera de las obras inherentes al proyecto forestal». Numerosas personas y organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, colaboraron en el logro de este triunfo, entre las que se cuentan las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapí, la Universidad Nacional del Comahue y funcionarios del Servicio Forestal Andino. Pero quienes estuvieron a la cabeza del movimiento fueron las organizaciones de la sociedad civil, y la ONG «Comunidad del Limay» tuvo la responsabilidad de presentar la demanda judicial que dio como resultado el veredicto del tribunal. Una participación igualmente importante tuvieron las organizaciones que promovieron la protesta del 5 de noviembre, como las organizaciones indígenas Mapuche y Tehuelche, Greenpeace Argentina, la Sociedad Ornitológica de Puelo, Atech y Cetera. (Boletín del WRM N° 40, Noviembre de 2000 y Boletín del WRM N° 41, diciembre de 2000).

Argentina: Los «bosques del silencio» o las plantaciones de pinos en las Yungas

La región fitogeográfica de las Yungas, o selva nublada, consiste en un bosque húmedo que se presenta en sectores montañosos vinculados a la cordillera de los Andes. Desde Venezuela se extiende en forma discontinua por Ecuador y pasa a través de Perú y Bolivia hasta el noroeste de Argentina, donde sus extremos relictuales se manifiestan en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. En general, la conservación de esta zona está concebida en régimen de Parques Nacionales: Baritú y el Rey en la provincia de Salta, Calilegua en la provincia de Jujuy y Campo Los Alisos en la provincia de Tucumán. Las Yungas es uno de los ambientes con más alta biodiversidad de Argentina, y también está entre los ecosistemas más amenazados del mundo, principalmente por su rápida fragmentación y destrucción.

Con una altitud que va de 300 metros a más de 4000 metros, las Yungas pueden dividirse en cuatro zonas de pisos altitudinales: Selva Pedemontana (selva al pie de la montaña), de transición y de tipo subtropical, que alberga el 30 % de toda la biodiversidad de este valioso ecosistema; Selva Montana, Bosque Montano o Bosque de Aliso (estas dos zonas han sido bastante devastadas por la tala selectiva de sus especies maderables autóctonas) y Pastizales de Altura o Pradera Montana, relativamente conservada por su difícil acceso.

Se estima que un 67% de la superficie original de la selva pedemontana argentina ha desaparecido y el resto ha sido modificado. La actividad agrícola que acompañaba las concentraciones urbanas en esta zona hasta principios del siglo XX, y que comenzó a reemplazar la selva, se caracterizaba por la diversidad de la producción –cultivos de yerba, té, chirimoyas, mangos, café– para el abastecimiento de las necesidades locales. Pero a partir de la primera década del siglo XX, con la inauguración del tendido del ferrocarril y el establecimiento de ingenios tabacaleros y azucareros –como el Ingenio Ledesma, en Jujuy–, hay un cambio de modelo y el país ingresa a una economía de escala con características comerciales e industriales. Vastos sectores de la selva pedemontana son reemplazados por extensas plantaciones de monocultivos intensivos (caña de azúcar, banana, citrus) destinados a la exportación. Este proceso implicó la concentración de la propiedad de la tierra en manos de poderosos grupos económicos, en algunos casos multinacionales y en otros capitales nacionales y provinciales en forma de sociedades anónimas o bajo el dominio de familias representantes del capital agroindustrial del noroeste argentino (ingenios, aserraderos, productores de fruta y hortalizas). Esa apropiación se realizó en desmedro de la población local, provocando marginación, emigración rural y desempleo y desconociendo los derechos de las comunidades nativas, como los Kollas, quienes han habitado esas tierras desde hace siglos y desempeñan un papel protagónico en la defensa de las Yungas.

En los últimos años, la alteración de las Yungas se ha agravado por un nuevo factor de destrucción: las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles, centradas en especies exóticas de rápido crecimiento (pino, eucalipto, grevillea, paraíso gigante). Este tipo de plantaciones han sido promovidas y financiadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial, para abastecer primordialmente a la poderosa industria de celulosa y papel y satisfacer el consumo desmedido que exige el empaquetado de mercancías dentro del modelo actual de globalización de los mercados. Últimamente los monocultivos de árboles también se presentan como «la solución» al cambio climático en tanto actuarían como sumideros de carbono. ¡Y para eso se talan bosques autóctonos!

Jorge Baldo, Biólogo Maestro en Vertebrados, Francisco Cornell, Técnico en Turismo, y Freddy Burgos, Guardaparque, están unidos por su pasión por las aves y el convencimiento de que si no hacen algo al respecto para protegerlas, dentro de poco no va a quedar nada. Los tres viven en el barrio Los Perales de la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy, enclavada en el paisaje bellísimo de la selva Montana, entre los 1200 y 1500 metros. Hasta la fecha han identificado 240 especies de aves, algunas endémicas de la región de las Yungas –como *Grallaria albigula*–, otras visitantes del hemisferio norte –como *Hirundo rustica*, *Riparia riparia*, *Elanoides forficatus*, *Ictinia mississippiensis*, *Vireo olivaceus*–. Son también testigos del peligro y denuncian los resultados de un

censo que dio 189 especies de aves en un bosque contra 23 en una plantación de pinos de igual superficie.

En esas plantaciones no hay lugar para la biodiversidad. Son «desiertos verdes» que han perdido la multifuncionalidad de un ecosistema, y los lugareños han percibido bien esa realidad cuando los han bautizado como los «bosques del silencio». ¿Hasta dónde se impondrá el silencio sobre los pueblos y los bosques? (Boletín del WRM No.66, enero de 2003).

Brasil: El casamiento de Stora Enso con Aracruz

La noticia de la asociación de Stora Enso con Aracruz Celulose es por cierto una mala noticia para la población local en los Estados brasileños de Bahía y Espírito Santo, dominados por tres grandes empresas de fabricación de celulosa, como son Veracel, Aracruz y Bahía Sul. Ahora la propiedad de Veracel pasará a ser compartida por Stora Enso y Aracruz, permaneciendo el 10% de las acciones restantes en manos del grupo brasileño Odebrecht. Estas tres empresas son dueñas de más de 300.000 hectáreas de monocultivos de eucalipto, que están teniendo un fuerte impacto negativo sobre el agua, los suelos y la biodiversidad, lo que también afecta negativamente los medios de vida de las poblaciones locales. Asimismo, el desarrollo de las plantaciones no sólo no ha generado los muy necesarios puestos de trabajo prometidos, sino que, por el contrario, ha ocasionado una pérdida neta de empleos en la región.

El creciente impacto de las plantaciones ha llevado a la creación de una amplia coalición de ONGs, pueblos indígenas, campesinos, pescadores, académicos y muchos otros, y el nombre que eligieron para dicha coalición es por demás significativo en relación con el problema que están enfrentando: «Movimiento contra el Desierto Verde en Espírito Santo y Bahía».

En 1999 la coalición logró frenar una movida de Aracruz en procura de la certificación de sus plantaciones en el Estado de Bahía por parte del Consejo de Manejo Forestal (FSC). Sin embargo, la empresa es tan poderosa en el Estado de Espírito Santo, que aparentemente estaría logrando la aprobación para una nueva expansión (de 700.000 toneladas) a su ya de por sí enorme capacidad de producción de celulosa, lo que equivale a decir también a los impactos ambientales que provocará.

No obstante, tanto Aracruz como Veracel estaban enfrentando problemas. A fin de contar con materia prima para su nueva fábrica de celulosa, Aracruz necesita unas 70.000 hectáreas más de plantaciones. Actualmente la empresa está haciendo un enorme esfuerzo de cabildeo para comprar esa superficie en el extremo sur de Bahía. Sin embargo, la Agencia Estatal Ambiental de Bahía decidió que se requiere un Informe de Impacto Ambiental previo a la aprobación de nuevas plantaciones de eucalipto. Este estudio puede llevar mucho tiempo y generar dificultades para la operativa de Aracruz.

El problema de Veracel es otro: qué hacer con sus plantaciones de eucalipto. La empresa ha estado enfrentando dificultades para instalar su propia fábrica de celulosa y aún no ha conseguido inversores interesados en destinar US\$ 1.600 millones a esa iniciativa. Según Stora Enso, «la implementación de la fábrica de celulosa de Veracel será pospuesta... y la decisión en torno a su construcción se tomará a fines del 2002, sujeta a las condiciones del mercado internacional de la celulosa». Esa demora en su construcción ha hecho que el apoyo a la empresa a nivel local haya disminuido, dado que el usual argumento de la «generación de puestos de trabajo» no se ha materializado.

De modo que el casamiento de ambas compañías parece que logrará resolver sus problemas más acuciantes: Aracruz no tendrá que preocuparse por el suministro de materia prima para su nueva fábrica de celulosa –la que saldrá de las plantaciones de Veracel– al tiempo que Stora Enso podrá vender su madera a Aracruz sin tener que preocuparse acerca de si y cuándo será construida su propia fábrica de celulosa en Bahía.

Para la gente y el ambiente este matrimonio es una muy mala noticia, ya que significa que la influencia política tanto de Aracruz como de Veracel irá en aumento, lo que hará que la oposición a las plantaciones forestales a gran escala y a la fabricación de celulosa se haga aún más difícil. A menos que se ponga un freno a este «desarrollo», el mismo habrá de incrementar los ya serios impactos sociales y ambientales vinculados con los grandes monocultivos forestales de especies de rápido crecimiento y los problemas de contaminación resultantes de una mayor producción de celulosa blanqueada. (Boletín del WRM N° 36, julio de 2000).

Brasil: La escasa memoria de Veracel y el poder de Aracruz

En respuesta a la información publicada por Taiga Rescue Network en su boletín Taiga News No. 32, en relación con los impactos sociales y ambientales provocados por las plantaciones de eucalipto de Veracel en el Estado de Bahía, Antonio Alberto Prado –Gerente de Relaciones Públicas de la compañía– se dirigió a dicha publicación a efectos de explicar que «... desde sus inicios, en 1991, el manejo del suelo y el desarrollo de las plantaciones por parte de Veracel se ha basado en principios sustentables y ecológicamente sanos». Según él, cuando Veracel llegó a la región el bosque atlántico («mata atlántica») nativo había prácticamente desaparecido. «Las áreas utilizadas para la plantación», afirma, «son las que ya habían sufrido una intervención humana irreversible, tratándose más que nada de pastizales y tierras degradadas». Agrega que Veracel está llevando a cabo un programa de conservación del bosque nativo remanente y que «el paisaje resultante está caracterizado por un mosaico forestal conformado por eucaliptos en las zonas llanas y bosque nativo en los valles». Manifiesta también que la presencia de Veracel fue «bien-

venida por la población local, como una oportunidad única de preservar y restaurar el bosque nativo, a la vez que por la oferta de trabajo para una población ya conocedora de las operaciones forestales».

Podemos decir, como mínimo, que el Sr. Prado parece tener una muy mala memoria. Afortunadamente la «bienvenida» que se dio a la compañía está bien documentada por las ONGs brasileñas FASE, IBASE y CDDH-Teixeira de Freitas, que realizaron una exhaustiva investigación entre 1992 y 1996 sobre los impactos de la expansión de los monocultivos de eucalipto en el norte de Espírito Santo y el extremo sur de Bahía.

En 1992 la empresa llegó al extremo sur de Bahía con el nombre de VeraCruz Florestal con el objetivo de establecer plantaciones de eucalipto y una fábrica de pulpa. Un año después, un grupo de ONGs ambientalistas y sociales del Brasil, junto a SINTREXBEM —el sindicato de trabajadores forestales— denunciaron que la compañía estaba devastando la mata atlántica, uno de los ecosistemas más biodiversos del Planeta. Acto seguido le iniciaron una demanda judicial. En febrero de 1993, por decisión judicial y del Ministerio de Medio Ambiente, se suspendieron temporalmente las operaciones de VeraCruz Florestal, debido a que ésta había infringido la ley ambiental para la protección de la mata atlántica. Todo esto se encuentra muy bien documentado en una serie de publicaciones que el Sr. Prado debería haber leído antes de responder a Taiga News, y entre las cuales le recomendamos el «Dossier VeraCruz» publicado en 1993.

No obstante, parece que el Sr. Prado no sabe nada de todo esto y, en cambio, prefiere subrayar el hecho que «Veracel también posee y protege una reserva de más de 6.000 hectáreas de bosque primario». Pero esta área simplemente estaba allí cuando la empresa llegó, de modo que por lo único de que la compañía puede sentirse «orgullosa y honrada» —como dice su carta— es que en este caso concreto ¡no violó la ley! A su vez, el Sr. Prado parece olvidarse que simultáneamente y a unos pocos kilómetros de distancia, la empresa estaba destruyendo vastas superficies de mata atlántica para sustituirla por plantaciones. Por último, la presencia de remanentes de bosque en los valles se explica mucho más por las dificultades técnicas resultantes de entrar con maquinaria a plantar en estos lugares que por consideraciones ambientales.

Los impactos sociales de Veracel en la región también han sido negativos. Al igual que otras grandes empresas forestales que allí operan —Aracruz Celulose y Bahía Sul Celulose— Veracel ocupó enormes superficies con sus plantaciones. De ese modo, más y más pequeños y medianos propietarios se vieron privados de sus tierras, que iban siendo progresivamente invadidas por las plantaciones, a la vez que otras alternativas económicas desaparecían. La empresa recibió el apoyo de la población local tan sólo al inicio de sus operaciones, cuando se la percibía como posible generadora de empleo. Pero este

apoyo desapareció rápidamente, puesto que el número de puestos de trabajo generados fue menor al prometido, a la vez que el número global de oportunidades de empleo en la región en realidad disminuyó.

La carta del Sr. Prado revela que Veracel –cuyos principales accionistas son actualmente Stora Enso y Aracruz Celulose– aprende rápido de su nuevo socio Aracruz sobre cómo disfrazar sus impactos con un discurso «verde». Pero las palabras no pueden ocultar los hechos por mucho tiempo.

Sin embargo, estas empresas no utilizan sólo palabras, sino también su poder. Aracruz Celulose –que es dueña de extensas plantaciones de eucalipto en el vecino Estado de Espírito Santo– tiene ahora el propósito de obtener la aprobación para expandir sus plantaciones en el extremo sur de Bahía. Aracruz es famosa por el largo conflicto que mantiene con los indígenas Tupiniquim y Guaraní en Espírito Santo, legítimos dueños de la tierra que la compañía está ocupando con vastas plantaciones para alimentar su fábrica de celulosa. La empresa ha solicitado la rápida aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto para instalar 45.000 hectáreas de eucalipto en el sur de Bahía. ONGs ambientalistas han denunciado que el proceso está completamente parcializado en favor de Aracruz, la cual está utilizando su influencia para obtener la aprobación de la EIA. Aracruz tiene también fuertes vínculos con el Gobernador de Bahía, quien vé con buenos ojos las plantaciones. A menos que las organizaciones locales logren influir en el proceso, la EIA se transformará en una mera formalidad y los Estados de Bahía y Espírito Santo se transformarán –en palabras de un líder indígena Tupiniquim– en un mar de «bosques muertos que matan todo». (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Brasil: La opción entre la agricultura familiar y el gigante Aracruz Celulose

En el Estado brasileño de Espírito Santo actualmente existen dos sectores de producción distintos enfrentados a situaciones totalmente diferentes.

El primero, que incluye la plantación de eucalipto y la producción de celulosa, está controlado por la compañía multinacional Aracruz Celulose. Este sector, con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico, está en posición de invertir más de mil millones de dólares hasta el año 2002 para la construcción de su tercera fábrica de celulosa y para la ampliación de las plantaciones de eucalipto para garantizar el suministro de materia prima a sus fábricas. Actualmente la compañía posee 138.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto en los Estados de Espírito Santo y Bahía y necesita agregar aproximadamente 72.000 hectáreas más para poder aumentar su producción anual de celulosa a dos millones de toneladas.

El segundo sector productivo es la agricultura familiar, que produce principalmente café. Este sector, integrado por familias nativas del Estado de Espírito

Santo, está viviendo una situación de crisis y no está recibiendo apoyo financiero del gobierno para invertir en actividades agrícolas. El bajo precio del café ha llevado a la desesperación a muchos campesinos. Aquellos que en el pasado lograron obtener préstamos, ahora se enfrentan a serios problemas para pagarlos. Vale la pena destacar que sólo una minoría de esas familias ha tenido acceso a créditos.

Actualmente es posible percibir un contraste claro y escandaloso entre dos sectores en situaciones totalmente diferentes. Mientras que Aracruz emplea directamente sólo 1.689 trabajadores y es propietaria de las fincas más grandes del Estado, el sector de agricultura familiar se compone de 70.000 familias, la mayoría de las cuales posee como mucho diez hectáreas de tierra.

Ante esta situación, las organizaciones nucleadas en el Foro Alerta contra el Desierto Verde, en primer lugar deseamos expresar por este medio nuestro apoyo al sector de agricultura familiar, porque puede ofrecer oportunidades de empleo y sustento a la población del Estado de Espírito Santo y también puede evitar la concentración de tierras. Vemos con extrema preocupación la lucha actual entre los dos sectores. En otras palabras, queremos expresar nuestra preocupación por el proceso casi «silencioso» mediante el cual Aracruz Celulose está comprando tierras en el Estado de Espírito Santo, aprovechando la crisis actual existente en el área rural y contribuyendo al desempleo y al éxodo rural. La situación se complica todavía más al constatar que las autoridades estatales, en vez de defender los intereses de una parte importante de la población, prefieren defender los intereses de una multinacional y participar de la «euforia» que la rodea.

El Organismo Ambiental Estatal ha tomado claramente ese tipo de actitud, restringiendo y controlando el debate sobre la autorización de la tercera fábrica de celulosa de Aracruz, neutralizando las voces críticas y al final facilitando una aprobación rápida de la nueva planta. Y como si esto no fuera suficiente, todavía insistió en incluir una condición por la cual en el futuro no habrá restricciones respecto a la extensión de plantaciones de eucalipto en nuestro Estado, eliminando de esa manera una restricción anterior relativa a la ampliación de los territorios de Aracruz Celulose.

Al mismo tiempo, el INCAPER (Instituto Estatal de Investigación y Extensión Agrícola) y el IDAF (Instituto Estatal de Agricultura y Bosques) han participado activamente en intentar involucrar a los campesinos locales en el programa «Fomento Florestal» (donde los eucaliptos son plantados en tierras de terceros), otra estrategia utilizada por Aracruz para aumentar el área de plantaciones de eucalipto. Según los incontables testimonios de campesinos en las áreas rurales de Espírito Santo, estas instituciones estatales han estado promoviendo el proyecto «Fomento Florestal» como alternativa a la crisis actual, ignorando sus impactos sociales y ambientales. En dicho contexto es impor-

tante resaltar que recientemente las autoridades municipales de Sooretama tuvieron la valentía de denunciar la compra de tierras efectuada por Aracruz dentro de dicho municipio.

Tomando en cuenta la posición adoptada por los organismos del Estado, fue extremadamente pertinente que se estableciera una Comisión Especial en el Parlamento estatal para investigar la expansión de la plantación de eucalipto en nuestro Estado. Se realizaron varias audiencias públicas, incluso una en el poblado indígena de Caieiras Velhas el año pasado, donde varios sectores sociales expresaron su opinión sobre el problema y presentaron acusaciones graves contra Aracruz Celulose. Sin embargo, desde el proceso eleccionario del año 2000, esa comisión no se volvió a reunir y se nos informó recientemente que cesó en sus funciones sin siquiera haber presentado un informe sobre sus actividades y conclusiones.

Deseamos llamar la atención sobre la necesidad de instrumentar con urgencia un debate amplio y público, que reciba la atención adecuada de los medios de comunicación, sobre el proceso de compra de tierras por parte de Aracruz y la ampliación de las plantaciones de eucaliptos en Espírito Santo, y que este proceso sea investigado y seguido por el Ministerio Público. Resulta totalmente inaceptable que el Gobierno estatal, al tiempo que no brinda respuestas coherentes a la grave situación que atraviesa la agricultura familiar, proporcione apoyo amplio a la expansión de decenas de miles de hectáreas de un monocultivo, sin ni siquiera evaluar y controlar sus impactos negativos. Las acciones del gobierno están de acuerdo con la propaganda de la compañía, que intenta claramente confundir a la opinión pública.

Apelamos a la defensa de la agricultura familiar, por políticas y financiación que garanticen la generación de ingresos en las áreas rurales, la diversificación de la producción, la agricultura orgánica, la rehabilitación ambiental y la comercialización de productos. En otras palabras, hacemos un llamamiento a luchar por una agricultura sustentable. Este enfoque asegurará sin duda alguna un futuro para los pobladores de Espírito Santo, tanto para los campesinos como para el resto de la población, que podrá beneficiarse de esa producción. Esto es totalmente distinto a lo que sucede con Aracruz Celulose en nuestro Estado, donde sus operaciones y acciones han favorecido la concentración de tierras, la concentración de riqueza, el aumento del valor del mercado externo en detrimento de las necesidades locales, la falta de respeto a nuestros valores culturales, el aumento del desempleo y el aumento de los problemas urbanos y ambientales. (Boletín del WRM N° 46, mayo de 2001).

Brasil: Desafiando el poder de Aracruz Celulose

Lo que está sucediendo en Espírito Santo, uno de los Estados más pequeños de Brasil, es histórico. La poderosa compañía de plantación de árboles y pro-

ducción de celulosa Aracruz Celulose ha generado tanta oposición a sus actividades, que la Asamblea Legislativa del Estado aprobó recientemente, casi por unanimidad, una ley que prohíbe continuar con las plantaciones de eucalipto hasta que se haga un mapeo agro ecológico del Estado, que determinará dónde se puede plantar eucalipto y dónde no. La ley fue vetada inmediatamente, durante una «sesión solemne», por el Gobernador del Estado José Ignacio Ferreira y ahora la Asamblea Legislativa debe decidir si mantiene o levanta el veto.

Pero la batalla no se libra solamente entre la Asamblea Legislativa y el Gobernador, sino entre la oposición organizada y la propia Aracruz. La oposición ha aumentado mucho en los últimos años a consecuencia de la amplia gama de impactos sociales y ambientales resultantes de las actividades de la compañía, agregados al hecho de que los puestos de trabajo que ofrece Aracruz se han reducido drásticamente. Además, de acuerdo al diputado Robson Neves, la compañía «no paga ningún impuesto, ni al Estado de Espirito Santo ni a las municipalidades locales» donde se localizan sus plantaciones.

El frente de oposición, integrado originalmente por algunas pocas ONG y organizaciones de pueblos indígenas ahora ha crecido y abarca muchos otros sectores de la sociedad organizada que se han visto afectados, como las comunidades afrobrasileñas, productores de carbón vegetal, pescadores, campesinos sin tierra, sindicatos, pequeños productores rurales, así como el sector académico, las ONGs sociales y ambientalistas, políticos y otros ciudadanos preocupados por el problema.

En ese contexto, el autor de la ley, el diputado Nasser Youssef, lanzó la idea de organizar un seminario internacional sobre el eucalipto, abierto tanto a quienes apoyan como a quienes se oponen a la plantación de esa especie. Aracruz y sus expertos estarían en el panel, junto con otros panelistas que aportarían experiencias de Brasil y de otros países como Chile, Sudáfrica, Tailandia y otros. La idea fue fuertemente respaldada por las organizaciones locales que creen en la democracia, el pluralismo y el debate. Sin embargo, Aracruz «declinó» la invitación y convenció a sus expertos para que también «declinaran». La compañía envió una carta a Nasser Youssef, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa (texto en portugués disponible en <http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/carta.html>), que amerita algunos comentarios.

Por un lado, la compañía le dice a Youssef (y por su intermedio a la Asamblea) qué es lo que se debería discutir en el seminario. Según Aracruz, 28 de los 30 parlamentarios que votaron la ley no se dieron cuenta de que la misma es «inconstitucional» y que por ende el seminario debería centrarse fundamentalmente en este tema. En segundo lugar, el seminario debería abordar, no los impactos producidos por el eucalipto, sino el establecimiento de reglas claras y estables para las inversiones de capital de compañías como Aracruz, que «dig-

nifican el Estado y el país» a través de su producción y sus inversiones. En tercer lugar, el seminario debería discutir «la vocación forestal» del Estado de Espirito Santo; pero por el contrario, sostiene Aracruz, «los organizadores del seminario han optado por un enfoque claramente ideológico y tendencioso».

A pesar de la negativa casi insultante de Aracruz de participar, el seminario fue un éxito mayúsculo y cumplió con todos los «criterios» establecidos por la compañía: fue democrático, abierto, libre, con un programa coherente, una amplísima participación (sólo faltaron, Aracruz, sus expertos y el Ministerio Federal de Medio Ambiente), y no fue manipulado de ninguna manera. Cabe puntualizar que la compañía no cumplió con sus propios criterios cuando, inmediatamente después de culminado el seminario internacional, organizó «su» propio seminario, cuya inauguración estuvo a cargo del mismo Ministerio Federal de Medio Ambiente que había rechazado la invitación de participar en el seminario internacional, y donde sólo se invitó a personas con ideas preconcebidas a favor de Aracruz, mientras que los afectados por los impactos de las plantaciones fueron excluidos. Al parecer el discurso de la compañía y la realidad se mueven por carriles paralelos que nunca se encuentran.

En resumen, el rechazo de Aracruz a participar es un ejemplo de la arrogancia de las empresas transnacionales que creen que tienen el derecho a decidir sobre todo y el poder para hacerlo. Al mismo tiempo, es una manera de reconocer que la oposición organizada en Espirito Santo está en realidad desafiando ese poder y que la compañía se siente crecientemente aislada. ¡Todas buenas noticias! (Por: Ricardo Carrere, Boletín del WRM N° 49, agosto de 2001).

Brasil: El crecimiento tiene límites, y la escala es realmente un tema

Las empresas transnacionales dominan cada vez más todos los sectores económicos en los que es posible obtener ganancias. La mayoría de ellas han incorporado consideraciones sociales y ambientales a su discurso, si bien son pocas las que realmente ponen en práctica sus propias declaraciones al respecto. Más allá de sus buenas intenciones, la escala misma de sus actividades hace que la sustentabilidad ambiental sea prácticamente imposible de lograr, mientras que la competencia por dominar los mercados mundiales ha convertido a las consideraciones sociales en algo casi antagónico con la rentabilidad.

Al respecto abundan los ejemplos en todos los sectores económicos, pero el caso de la empresa Aracruz Celulose, con sede en Brasil, es paradigmático porque fue una de las primeras empresas transnacionales en adherir a la temática ambiental con anterioridad a la Cumbre de la Tierra de 1992. Esta compañía es la mayor productora del mundo de celulosa blanqueada de eucalipto, con una producción anual de 1.300.000 toneladas. Aracruz ha venido expandiendo sus plantaciones de eucalipto y su planta industrial desde el inicio de sus operaciones y aparentemente no hay límites para sus planes de expan-

sión. Ahora apunta a aumentar la capacidad de producción de celulosa a 2 millones de toneladas y eso implica la ocupación de miles de hectáreas más de tierras fértiles con plantaciones de monocultivos de eucalipto.

Si bien las comunidades locales que viven en la zona ocupada por Aracruz –principalmente comunidades indígenas y afrobrasileñas tradicionales– fueron despojadas de sus tierras, en un principio la compañía recibió cierto apoyo de otros sectores de la sociedad, a quienes les prometió desarrollo y empleo. Pero el desarrollo prometido nunca llegó mientras que el empleo ha caído sostenidamente como resultado de la mecanización y la tercerización. Según la propia Aracruz, la compañía tiene en su plantilla a «1.689 empleados, incluidas nuestras filiales internacionales, Aracruz Produtos de Madeira y Portocel. Además de la mano de obra propia, hay 2.954 trabajadores permanentes contratados por terceros, lo que da un total de 4.643 puestos de trabajo directos en las regiones en que operamos». ¡Y ese es todo el empleo generado por una compañía enorme, con una fábrica de celulosa enorme y una cantidad igualmente enorme de tierras que llegan a unas 220.000 hectáreas!

Al mismo tiempo, el empleo rural existente ha disminuido como resultado de la compra de tierras por Aracruz y su plantación con eucaliptos. Dado que la cantidad de puestos de trabajo por hectárea en las plantaciones de árboles es mucho menor que en la agricultura, el empleo en las zonas rurales da un saldo negativo. Además, los impactos ambientales, tanto de las plantaciones como de la producción de celulosa, han agravado los impactos en las poblaciones locales, como es el caso de las comunidades de pescadores enfrentadas a la casi desaparición de los peces como resultado de las actividades de Aracruz.

Los impactos referidos, y otros muchos más, han determinado el crecimiento de la oposición organizada, que incluso desembocó en la aprobación reciente de una ley por parte de la Asamblea Legislativa del Estado de Espírito Santo –inmediatamente vetada por el Gobernador– que prohíbe nuevas plantaciones de árboles para la producción de pulpa de papel en tanto no se lleve a cabo el mapeo agroecológico del Estado, a partir del cual se establezcan normas claras sobre dónde pueden y donde no pueden plantarse esos árboles. En el artículo sobre Brasil en este mismo boletín se analiza el tema más en detalle.

Como ya se dijo, el caso de Aracruz es tan solo un ejemplo de lo que ocurre actualmente en muchas partes del mundo, tanto en el Norte como en el Sur. No importa cuán afanosamente las transnacionales intenten –cuando lo hacen– tener en cuenta los aspectos ambientales y sociales, el resultado final es degradación ambiental y creciente marginación social. Y de hecho, el tema es en realidad bien simple: cuanto mayor es la escala, mayores son los impactos. ¿No es hora de volver a discutir los conceptos de «lo pequeño es hermoso» y de los «límites al crecimiento»? (Boletín del WRM N° 49, agosto de 2001).

Brasil: Mientras el pueblo se indigna, Aracruz festeja

Es impresionante la manera como Aracruz Celulosa S.A. encara la realidad en la que está inserta, afectada por los innumerables impactos negativos resultantes de sus actividades en Espírito Santo y Bahía. En este momento la empresa está terminando un aeropuerto particular, suficientemente grande como para que el avión presidencial de Fernando Henrique Cardoso pueda aterrizar el próximo 2 de agosto, cuando se inaugurará oficialmente su tercera fábrica, que aumentará la producción anual de celulosa de eucalipto de 1,3 a 2 millones de toneladas.

El día de la inauguración deben reunirse alrededor del Presidente brasileño los más altos representantes de los gobiernos municipal, del Estado y nacional, fieles aliados de la empresa durante toda su existencia en Brasil. También hará acto de presencia la prensa de dicho Estado, que ya empezó a difundir el gran evento enalteciendo, como siempre, el aporte de la empresa al desarrollo económico del Estado. También concurrirán al acto solemne ONGs como el «Instituto Terra da Gente», financiado por la misma Aracruz y que le dio el trofeo «Mata Atlântica» (bosque atlántico), una broma de mal gusto, principalmente por tratarse de una empresa que derribó miles de hectáreas de esa misma mata atlántica. Sin duda, estarán allí las asociaciones y sociedades de ingenieros forestales, que se entusiasman más con los millones de eucaliptos idénticos, clonados y de alta productividad que con la labor de comprender la fascinante complejidad de un bosque natural. Seguramente, tampoco el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social se perderá la fiesta, ya que invirtió mil millones de reales brasileños en el proyecto de la tercera fábrica, en vez de invertir sumas equivalentes en el fortalecimiento de la afectada agricultura familiar del Estado.

Vale la pena recordar que los US\$ 630 millones invertidos en la nueva planta se destinaron casi en su totalidad a máquinas fabricadas en Europa y se aseguraron con créditos de garantía para su exportación. Lo que le queda a Brasil son solamente los 172 puestos de trabajo permanente en la nueva unidad industrial. Aun así, a costa de una deuda del Estado de Espírito Santo con Aracruz de cerca de 100 millones de reales, referente a créditos acumulados por la empresa por no gravarse con impuestos la cadena productiva de fabricación de celulosa para la exportación.

El ambiente reinante entre los gerentes y directores de la empresa se ha vuelto incluso más festivo con la noticia del Supremo Tribunal Federal a principios de junio, cuando dicho Tribunal decidió considerar inconstitucional la ley del Estado que prohíbe plantar eucaliptos para celulosa hasta que se realice un mapeo agroecológico del Estado que definirá dónde debe plantarse el eucalipto. Con seguridad, los ministros del Tribunal, al tomar la decisión, no pensaron en la situación de desesperación de las más de 100 familias del municipio de Vila

Valério que fueron expulsadas de sus tierras compradas por Aracruz Celulosa. Tampoco consideraron los US\$ 230 millones con los que cuenta la empresa para adquirir nuevas tierras, 200 veces más dinero que la suma estimada anualmente en el Estado para la reforma agraria, una necesidad insatisfecha que 50 mil familias de ese Estado están esperando hasta ahora. Y el Tribunal tampoco tomó en cuenta los resultados positivos de las audiencias públicas regionales del mapeo agroecológico, que lograron restituirle al pueblo un poco de conciencia, un poco del derecho a opinar sobre el futuro de sus hijos y de su región.

Asimismo, vale la pena recordar que Aracruz incluso tuvo el tupé de afirmar que evaluará si va a enjuiciar o no al Estado por los daños que la ley de mapeo de dicho Estado le causó. Y el diario *A Gazeta* hizo lo que un periódico decente jamás haría: publicó en primera página que la autorización para plantar eucaliptos generará 25 mil puestos de trabajo, una cifra sin fundamento, sin argumento, sin el mínimo de veracidad.

Luego, cuando el diputado Nasser, autor de la ley de mapeo agroecológico, elaboró una ley parecida, aprobada en la Asamblea Legislativa el 26 de junio, su partido, el mismo del Presidente Fernando Henrique, decidió no darle más cabida en sus filas para las próximas elecciones. Una vez más, es evidente que cualquier acción en contra de Aracruz Celulosa cuesta caro.

Es en este ambiente que se avecina el día de la inauguración de la nueva fábrica. Por un lado, una megaempresa que quiere festejar, que niega cualquier impacto y no admite crítica o cualquier clase de control de sus acciones por parte de la sociedad civil que integra. Por otro lado, la inmensa mayoría del pueblo de Espírito Santo, principalmente la población rural, está cada vez más indignada por el modo de obrar de Aracruz, consciente asimismo de que necesita resistir si quiere tener un futuro mínimamente digno.

Este es el mensaje que el Movimiento Alerta contra el Desierto Verde, que congrega a sectores representativos de la población rural y urbana, tratará de transmitirle a toda la sociedad durante la 1ª Quincena de Resistencia al Desierto Verde. Serán 15 días de actividades simultáneas a la inauguración de la nueva fábrica de Aracruz Celulosa y a la declaración de Erling Lorentzen, el presidente noruego de la empresa, ante la Comisión Parlamentaria que investiga la larga lista de irregularidades practicadas por la compañía. Vale la pena recordar que, como era de suponerse, la prensa local está boicoteando completamente esta importante e inédita investigación.

Durante esos 15 días, la Quincena de Resistencia le mostrará a la opinión pública que la sociedad seguirá oponiendo resistencia a un modelo que excluye a la mayoría de la población, aunque dicho modelo se imponga y domine esferas públicas y no públicas que en primer lugar deberían defender los intereses del pueblo. (Por: Movimiento Alerta contra el Desierto Verde en Espírito Santo, Boletín del WRM N° 60, julio de 2002).

Brasil: Investigación cuestiona certificación de dos plantaciones por el FSC

Un grupo de siete investigadores evaluó las certificaciones de la empresa V&M Florestal Ltda. (Vallourec & Mannesman), que en 1999 obtuvo la certificación del FSC para toda su área de 235.886 hectáreas, a través de la certificadora SGS, como asimismo las de Plantar Reflorestamentos S.A., que recibió la certificación de SCS por un área de 13.287 hectáreas. Con dicha certificación, V&M Florestal se convirtió en la empresa con más área certificada en el Brasil. Del total del área, 128.326 hectáreas están plantadas con eucaliptos, mientras que el resto, 107.560 hectáreas, son áreas de cultivos abandonados y áreas de «cerrado», la vegetación boscosa típica de la región (el cerrado es una sabana tropical en la cual la vegetación herbácea coexiste con más de 420 especies de árboles y arbustos dispersos). Plantar tiene cerca de 280.000 hectáreas, lo que significa que sólo certificó el 4.8% de sus tierras. Se trata entonces de dos megaempresas del sector de plantación de eucaliptos en Brasil, cuya producción se destina a la fabricación de carbón vegetal.

Casi todo el eucalipto que planta V&M Florestal se utiliza para fabricar tubos de acero en la fábrica V&M de Brasil. Ambas empresas tienen un solo propietario y casi todo el capital es francoalemán. A su vez, Plantar S.A., una empresa de capital brasileño, utiliza su eucalipto para la fundición de hierro, salvo el área certificada por el FSC, cuya madera se utiliza para producir carbón para asado. Plantar también pretende participar en el «mercado del carbono» vendiendo bonos de las plantaciones. En resumen, las actividades principales de las empresas evaluadas son el plantío y extracción de eucalipto para la producción de carbón.

Comprobamos que las empresas certificadoras SGS y SCS cometieron una serie de irregularidades durante el proceso de certificación:

- No realizaron un estudio profundo del contexto que rodea a las empresas que plantan eucalipto y menospreciaron una serie de aspectos sociales, económicos y ambientales importantes;
- Escucharon a pocos «actores involucrados» y sólo a los menos críticos. Y, es más, no escucharon a los «actores involucrados» más importantes y, por consiguiente, no obtuvieron informaciones fundamentales sobre una serie de problemas serios que involucran a las empresas;
- No quedó claro si las condiciones y recomendaciones de hecho revirtieron el evidente incumplimiento de determinados principios y/o criterios del FSC y si se está haciendo el seguimiento adecuado al cumplimiento de esas condiciones y recomendaciones;
- No difundieron el resumen público de la certificación para que lo conociera la sociedad civil local y regional, incluso los organismos públicos; SGS ni siquiera

puso a disposición en la internet una versión del resumen público en portugués, el idioma oficial de Brasil.

Los siguientes son algunos de los principales incumplimientos por parte de las empresas de los Principios y Criterios del FSC que se comprobaron durante la investigación:

- Tanto en la empresa V&M Florestal como en Plantar, se comprobó que no se realizó el Estudio e Informe de Impactos Ambientales (EIA/RIMA), una exigencia legal para llevar adelante cualquier emprendimiento que cause potenciales impactos ambientales en Brasil. Como se comprobó, se está en un punto muerto entre, por una parte, los técnicos del organismo estatal responsable, el Instituto Estatal de Bosques, que exigen el estudio y, por otra parte, V&M Florestal, que no quiere que se realice dicho estudio.

- Hay fuertes indicios de que gran parte de las tierras de las empresas eran lo que en Brasil se denominan tierras «devolutas», o sea, tierras de uso comunal y, por consiguiente, pertenecientes al Estado. Por lo tanto, las empresas no podrían haberlas comprado. Aun así, en busca de tierras, las empresas consiguieron arrendar dichos terrenos al gobierno dictatorial de los años 1970, mediante contratos con la agencia estatal Ruralminas por un plazo de 20 años. En estos últimos años, dichos contratos empezaron a expirar, lo que amenaza la continuidad de la tenencia.

- Hay conflictos por la tierra con propietarios locales que tienen plantaciones de eucalipto de la empresa en sus fincas.

- Desde setiembre de 2002, una Comisión Investigadora Parlamentaria, instalada en el Parlamento del Estado de Minas Gerais, está con la mira puesta en las empresas V&M Florestal y Plantar S.A., para investigar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la industria extractiva de Minas Gerais. En marzo de 2002, la Comisaría Regional de Trabajo sometió a proceso a ambas compañías por no respetar las leyes laborales brasileñas. Actualmente, el Ministerio Público de Trabajo las está enjuiciando mediante una Acción Civil Pública por los cargos de prácticas ilegales de tercerización, de trabajo degradante y precario.

- La mayoría de los trabajadores que trabajan en las áreas certificadas son tercerizados, con muchos menos derechos y beneficios que los empleados fijos de las empresas; destacamos que las tareas que ellos realizan son extremadamente pesadas y peligrosas. De acuerdo con el Ministerio Público de Trabajo, hay una «lista negra» en las dos empresas evaluadas, lo que indica que las empresas persiguen a los trabajadores y a sus dirigentes, por lo que violan los acuerdos 87 y 98 de la OIT.

- Las plantaciones de eucaliptos no generan beneficios sociales, ambientales ni económicos para las comunidades vecinas. Las zonas de «cerrado», que

siempre han sido utilizadas por las comunidades debido a su extraordinaria biodiversidad, fueron cercadas por la empresa, lo que impide que dichas tierras sean usadas colectivamente por las comunidades locales. El «cerrado» siempre ha tenido todas las condiciones para un uso y manejo sustentables, generando trabajo e ingresos.

- La deforestación del «cerrado» y la plantación de eucaliptos por parte de las empresas provocó la desecación de ríos y nacientes de agua, la disminución de la flora y la fauna de la región, estimuló la erosión y envenenó a trabajadores, a la fauna y a los recursos hídricos existentes con agrotóxicos. La empresa V&M Florestal continúa utilizando el herbicida oxyfluorofen, definido como tóxico y persistente por el propio FSC en el año 2000, de acuerdo con el informe de seguimiento de SGS de 2001.

- Cerca del 25% de las plantaciones de eucalipto de V&M Florestal están instaladas en una región con precipitaciones anuales de unos 1000 mm, cantidad desaconsejable para este tipo de plantío a gran escala, tal como lo testifican los ríos, cañadas y humedales secos en la región.

- Las empresas tienen un plan de manejo sólo instrumentado para las áreas de eucalipto y no para las demás áreas. En el caso de V&M Florestal, el 46% del área certificada no tiene un plan de manejo implementado. Luego de haber recibido la certificación, esta empresa comenzó a presentar relevamientos de flora y fauna y planes de seguimiento para esas áreas, objetivando un plan de manejo, que hasta el día de hoy no está implementando.

- La empresa V&M de Brasil, que compra todo su carbón a V&M Florestal, continúa comprando carbón de madera de «cerrado» para abastecer a sus altos hornos y sin tener información sobre la cadena de custodia, es decir, que no hay garantías de que el carbón certificado provenga realmente de las Unidades de Manejo Forestal certificadas.

El informe concluye que es necesario que el FSC divida su sello en dos nuevos: uno para el manejo de bosques nativos y otro para el manejo de plantaciones. De estos estudios de caso queda claro que los Principios 1 a 9 fueron elaborados para el manejo de bosques nativos y que en su gran mayoría son absolutamente inadecuados para plantaciones de monocultivos de árboles, cuyas características específicas son totalmente diferentes a las de un bosque nativo, diversificado y heterogéneo. Además de eso, se acrecentaría mucho la transparencia y la credibilidad del FSC frente a los consumidores, si éstos pudieran diferenciar de donde proviene el producto que compran: de una plantación «industrial» realizada por una megaempresa con árboles exóticos, instalados en medio del «cerrado»; o de una cooperativa de comunidades locales que maneja de manera sustentable el «cerrado» y sus especies nativas y propias.

Para «construir» un nuevo sello para la certificación de plantaciones, que sea creíble, es necesario que se discutan principios y criterios específicos, a partir de un debate profundo, que involucre necesariamente a las comunidades locales, para garantizar que las futuras plantaciones certificadas ofrezcan beneficios sociales, culturales, ambientales y económicos. Ello implicará introducir un mínimo de biodiversidad de especies en cada plantío, garantizando el uso múltiple y el aprovechamiento de los productos forestales por las comunidades locales, la estabilidad ecológica en el sitio y una mejor adaptación de la plantación a su ambiente.

Por consiguiente, el FSC tiene dos caminos: continuar certificando millones de hectáreas de plantaciones, perdiendo cada vez más su credibilidad y perjudicando a las comunidades locales, o rever la certificación de grandes plantaciones, entrando en un nuevo rumbo, respetando y queriendo beneficiar a las comunidades locales y su ambiente, además de aumentar su credibilidad y, por lo tanto, su confianza ante el consumidor.

(Por: Marco Antônio Soares dos Santos André, Rosa Roldan, Fábio Martins Villas, Maria Diana de Oliveira, José Augusto de Castro Tosato, Winfried Overbeek, Marcelo Calazans, Boletín del WRM N° 64, noviembre de 2002).

Brasil: Carta de la sociedad civil al Fondo Prototipo de Carbono sobre las plantaciones de eucaliptos de Plantar S.A.

El PCF (Prototype Carbon Fund - Fondo Prototipo de Carbono) es el fondo del Banco Mundial que moviliza recursos para promover el mercado de dióxido de carbono, donde las empresas que contaminan –mayoritariamente situadas en los países del Norte– pueden «negociar» con los productores forestales que supuestamente secuestran carbono, mayoritariamente situados en los países del Sur. Y es ante el PCF que, representantes de decenas de entidades, movimientos cívicos, iglesias así como diputados, ediles y ciudadanos de los Estados brasileños de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahía y Rio de Janeiro, elevarán una carta. En ella expresan su preocupación por la expansión de los monocultivos en gran escala de eucaliptos, que han provocado una serie de impactos sociales, económicos, ambientales y culturales negativos. También manifiestan su perplejidad y sorpresa de que la empresa forestal Plantar S.A. haya presentado un proyecto en el PCF.

Las empresas del sector forestal, como es el caso de Plantar S.A., se instalaron en los años 60 y 70, en plena dictadura militar, y aprovecharon atractivos incentivos fiscales. El resultado fue la expulsión de sus tierras de los indios Tupinikim y Guaraní, las comunidades negras tradicionales y miles de agricultores, aumentando el desempleo y la desesperación de esas poblaciones locales que quedaron sin la tierra, la biodiversidad y el agua que permitían su subsistencia.

Las empresas que plantan eucaliptos en Minas Gerais afirman que sus plantaciones de árboles disminuyen la «presión» sobre la vegetación nativa, en este caso la «mata atlántica» y el «cerrado». Pero olvidan mencionar que los casi dos millones de hectáreas de plantaciones en el Estado se hicieron a costa de quemar gran parte de la mata atlántica y el cerrado. Por otro lado, en la medida que por ley las empresas no pueden ser propietarias de gran parte de esas tierras que pertenecían al Estado, recurrieron a métodos fraudulentos y contratos de arrendamiento para ocupar miles de hectáreas de cerrado, expulsando a las poblaciones locales de sus tierras, impidiendo el uso colectivo tradicional de este tipo de vegetación por las comunidades locales y atentando contra su forma de vida y sustento.

La empresa Plantar S.A Reflorestamentos fue fundada en 1967 y se dedica a tres actividades:

- prestación de servicios forestales a grandes empresas, principalmente del sector de la celulosa;
- siderurgia del hierro colado (producción de hierro en lingotes);
- plantación de eucaliptos en tierras propias (cuenta con 280.000 hectáreas de plantaciones de monocultivos de eucaliptos –cerca de 10 millones de plantas cada vez más clonadas– para extracción de madera y producción de carbón, con el que abastece a su siderurgia, cerrando así el negocio).

La empresa cuenta con una certificación del FSC, concedida en 1998 por la certificadora Scientific Certification Systems (SCS) y referida a tan sólo el 4,8% de sus tierras, donde tiene plantaciones de eucaliptos. La certificación le sirve a Plantar para vender los llamados «créditos de carbono» y ha sido cuestionada por una serie de omisiones graves, una de las principales es que las comunidades locales no fueron consultadas, por lo cual ese sello no garantiza un «buen manejo forestal».

La región de Curvelo, donde la empresa Plantar pretende instalar su proyecto de «secuestro» de carbono, es una región de «cerrado» que ya ha sido afectada por plantaciones de eucaliptos que secaron los ríos en cuyas nacientes fueron plantados y contaminaron la fauna local con los agrotóxicos aplicados para su manejo. Otro conflicto importante con esta empresa se refiere a la construcción en el año 2000 de un nuevo vivero que implicó desviar casi 5 km un camino tradicionalmente utilizado por numerosos pobladores de la zona para evitar que el «polvo» del camino afectara las plantas de eucalipto del vivero, perjudicando a estudiantes, profesores y la comunidad en general que todavía hacen el trayecto a pie. Además, para abastecer a su vivero construyó tres represas en el riachuelo Boa Morte, desviando el agua que consume la población de los alrededores y afectando su calidad. Los vecinos se han movido para exigirle a la empresa por lo menos la instalación de un sistema de decantación del agua que sale del vivero.

Las denuncias apuntan al trato «especial» que recibe la empresa de parte de las autoridades, en la medida que no dispone de un Estudio e Informe de Impacto Ambiental de sus actividades, un requisito legal para cualquier emprendimiento que tenga el potencial de causar impactos ambientales.

Por otro lado, se han denunciado las pésimas condiciones de trabajo de la empresa en la producción de carbón vegetal y corte de eucalipto – tercerización ilegal y trabajo esclavo e infantil– que han dejado un trágico saldo de trabajadores accidentados y con problemas de salud o incluso casos fatales. La empresa ha sido auditada por la Repartición Regional de Trabajo y citada ante una comisión parlamentaria. A su vez, la ocupación de las zonas de cerrado ha contribuido a una crisis de la economía local basada en los productos de esa vegetación nativa. Varias fábricas de productos alimenticios de Curvelo cerraron por falta de materia prima, aumentando el desempleo ya de por sí generalizado a medida que Plantar fue adoptando estrategias para bajar los costos y asegurar la rentabilidad del negocio.

Las denuncias son el resultado de los testimonios aportados por las comunidades aledañas a las plantaciones de la empresa forestal Plantar S.A., y de conversaciones con el Ministerio Público Federal del Trabajo, trabajadores y ex trabajadores de la empresa, diputados y sindicalistas de la región.

Los firmantes de la carta manifiestan su interés en la promoción de actividades económicas que respeten los intereses de las comunidades y de la naturaleza, se oponen a los proyectos que representan lo contrario –como es el caso del proyecto de Plantar S.A.– y exhortan a buscar otras tecnologías no contaminantes, que generen empleos dignos y preserven y recuperen el ambiente, un requisito esencial para la supervivencia y por consiguiente el futuro de las comunidades locales.

Por último, afirman que el proyecto de Plantar no puede ser considerado como un «mecanismo de desarrollo limpio» y exhortan a los inversionistas a no invertir en el proyecto. (Boletín del WRM N° 65, diciembre de 2002).

Brasil: Stora Enso y Aracruz proyectan la mayor fábrica de celulosa del mundo

En algunas semanas los accionistas de Veracel decidirán sobre la construcción de una enorme fábrica de celulosa en el Estado brasileño de Bahía. El principal director ejecutivo de Veracel, Erton Sánchez, describió al proyecto diciendo que: «Ésta será la planta de celulosa más grande del mundo, con capacidad para producir 900.000 toneladas al año. Se producirá celulosa blanqueada libre de cloro elemental, teniendo como objetivo el segmento más alto del mercado de la celulosa. La inversión total rondará los 930 millones de dólares».

Veracel es un emprendimiento conjunto del gigante sueco-finlandés Stora Enso y la compañía brasileño-noruega Aracruz. Jukka Harmala, principal director ejecutivo de Stora Enso, dice que su visión de la compañía es que llegue a «ser la compañía de productos forestales líder en el mundo». En junio de 2001, Harmala declaró a la revista *Pulp and Paper International*: «Nuestra prioridad en Latinoamérica es encontrar buenas fuentes de fibra». En 1999 Bjorn Haggglund, subdirector ejecutivo de Stora Enso, explicó al *Financial Times* que la estrategia de la compañía consistía en incrementar sus operaciones de celulosa en Brasil a fin de asegurar la provisión de materia prima para sus fábricas de papel en China y Tailandia.

La decisión de proceder o no con la fábrica de celulosa debió haberse tomado a fines de 2002. «Este proyecto ha sido muy complicado, y es un proyecto grande. Ha sido pospuesto hasta marzo o abril, principalmente por razones económicas y similares» explicó Timo Heikka de la división Estrategia e Inversiones de Stora Enso.

Veracel lleva plantadas 63.000 hectáreas de eucalipto en las 147.000 hectáreas que la compañía posee en Bahía. Está previsto plantar otras 6.000 hectáreas. Independientemente de si la fábrica de celulosa propuesta se concreta o no, Aracruz comprará 3,5 millones de metros cúbicos de madera de las plantaciones de Veracel entre 2002 y 2004.

Timo Heikka, de Stora Enso, visitó el área del proyecto en setiembre del año pasado. Declaró que «en lo referente a biodiversidad y temas sociales, parece ser una de las mejores opciones en todo el hemisferio sur». Sánchez, representante de Veracel, asegura que se reservarán 76.000 hectáreas para «preservación y recuperación» del bosque de mata atlántica. También mencionó que Veracel es propietaria de la Estación Veracruz, una reserva de bosques de 6.000 hectáreas, reconocida por UNESCO como patrimonio de la humanidad.

Sánchez no mencionó que cuando Veracel llegó a Bahía en 1991, la compañía planeaba convertir el 80 por ciento de su tierra en plantaciones de eucalipto. Fue sólo por la intervención de las ONGs brasileñas y el sindicato de trabajadores forestales que la agencia del medio ambiente brasileña insistió en que se reservaran 6.000 hectáreas para un área protegida. Sánchez tampoco mencionó que Veracel ha talado bosque para instalar sus plantaciones a sólo unos pocos kilómetros de la Estación Veracruz.

En octubre de 2001, el Banco Europeo de Inversiones (BEN) –la institución financiera de la Unión Europea– anunció la aprobación de un préstamo por 30 millones de dólares a Veracel para sus plantaciones en Bahía. La Directora Jefe del Departamento de Información del BEN, Yvonne Berghorst, declaró que «la reforestación con eucalipto ejerce una influencia beneficiosa a largo plazo en el suelo, al reducir la erosión, aumentar la infiltración y la retención del agua y mejorar las propiedades químicas y físicas y la fertilidad del suelo».

El optimismo de Berghorst contrasta duramente con la realidad que enfrentan las comunidades de Espirito Santo que se ven forzadas a convivir con las plantaciones de Aracruz. En mayo de 2002, en una carta a los altos funcionarios del Estado de Espirito Santo, las comunidades locales, los sindicatos y las ONGs describen cómo se secaron los cursos de agua desde que Aracruz comenzó con las plantaciones. La carta dice: «Para las comunidades locales y el medio ambiente en general, la sustentabilidad de las plantaciones de eucalipto está muy cuestionada, ya que es un monocultivo de árboles con un ciclo vital extremadamente corto, que demanda grandes cantidades de fertilizantes químicos y agrotóxicos».

Los representantes de Stora Enso, el BEN, Aracruz y Veracel no contestaron preguntas sobre cuántas personas han sido desplazadas de su tierra para hacer lugar a las plantaciones de Veracel. Erton Sánchez, director ejecutivo de Veracel, comentó que «el índice de ocupación es extremadamente bajo debido a que la población vive en tierras que no pertenecen a la compañía». Agregó que la tierra que será plantada ha sido «degradada previamente por los anteriores propietarios».

José Augusto Tosato miembro de la ONG local CEPEDS cuestiona el argumento de la compañía de que la tierra ya estaba degradada. Sostiene que Veracel estableció sus plantaciones en praderas y pequeñas propiedades anteriormente productivas.

La Política de Responsabilidad Social de Stora Enso establece que «Stora Enso considera fundamental la discusión abierta y la interacción con todos los actores involucrados, tanto gubernamentales como no gubernamentales». En el caso de Veracel, una discusión abierta es imposible porque los estudios de impacto ambiental de las plantaciones no están disponibles para la consideración del público en general.

En respuesta al pedido del Estudio de Impacto Ambiental, Yvonne Berghorst declaró: «El EIA es un documento público que se puede obtener recurriendo a las autoridades competentes del Estado de Bahía o de Veracel Celulose S.A.».

Al preguntársele por el EIA, Erton Sánchez replicó que «la documentación se compone de 14 volúmenes con alrededor de 2.800 páginas. Sólo existe en versión impresa, por lo que no es posible enviar una copia electrónica. Sin embargo, los documentos están disponibles para su consulta en el CRA (Centro de Recursos Ambientales), una agencia gubernamental del Estado de Bahía con sede en Salvador».

Si los documentos del proyecto de Veracel no están libremente disponibles, no es posible realizar una discusión abierta. Se debe posponer cualquier decisión de los accionistas para permitir que la sociedad civil en Brasil, Noruega, Suecia y Finlandia tenga la oportunidad de contribuir a una discusión

abierta sobre Veracel. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 67, febrero de 2003).

Brasil: ONGs solicitan debate amplio sobre la expansión de plantaciones forestales

En una carta enviada al presidente Lula el 20 de marzo de 2003, numerosas instituciones alertan sobre los posibles riesgos socioambientales que acarrearía la ampliación de la superficie de plantaciones forestales recientemente reclamada por el sector, en el caso de que no se estableciera un planeamiento adecuado.

El Grupo de Trabajo sobre Bosques del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo dirigió el jueves 20 de marzo una carta al presidente Lula, manifestando preocupación por una propuesta de expansión de la superficie de plantaciones forestales en el país, presentada recientemente al gobierno por empresas de ese sector. El documento fue enviado con copia a la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y al Ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues.

Formadas en su mayoría por especies exóticas como el pino y el eucalipto, las plantaciones forestales abastecen, entre otros, al mercado de papel y celulosa y al de la construcción, cuyas empresas proponen una ampliación de la superficie ocupada por plantaciones forestales de los 5 millones actuales a 11 millones de hectáreas. Además de eso, el sector, hoy bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente, reivindica su vinculación con el Ministerio de Agricultura, por medio de la creación de la Secretaría de Bosques Plantados.

En la carta enviada a Lula (que se reproduce íntegramente a continuación), las ONGs solicitan que la propuesta de ampliación del sector sea analizada y planeada con extrema cautela y que la elaboración de una política para el sector considere los preceptos de desarrollo efectivamente sustentable, citando posteriormente las consecuencias socioambientales y económicas de la actividad, especialmente para la mata atlántica y para el cerrado.

Para la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Bosques, Adriana Ramos, del Instituto Socioambiental (ISA), es necesario discutir las bases de la expansión del sector de forma criteriosa para no permitir que ocurran impactos indeseables, como lo es la concentración de tierras y las alteraciones hidrológicas. El Grupo espera que el gobierno establezca una agenda de discusiones sobre el tema con amplia participación de la sociedad civil.

En un reportaje publicado el 25 de febrero en el periódico «Valor Econômico» y reproducido en el sitio de la Asociación Brasileña de Bosques Renovables (Abracave), se hace referencia a que las empresas saben que aún cuando las propuestas del sector cuentan con el apoyo del vicepresidente José de Alen-

car y del Ministro de Agricultura, deberán derribar la resistencia del Ministerio de Medio Ambiente, que a principios del mes ya había defendido la propuesta de que sectores como el del papel y celulosa, y de la siderurgia, deben modificar la forma de producción de madera procedente de plantaciones, cambiando de la plantación en grandes superficies a la dispersión, con características de agricultura familiar, lo que garantizaría fuentes de trabajo para el pequeño productor rural.

El 19 de marzo fue aprobado el pedido del diputado Luis Carlos Heinze (PPB/RS) de que el tema sea discutido en una audiencia pública conjunta de las Comisiones de Agricultura y Política Rural y de Defensa del Consumidor, Medio Ambiente y Minorías de la Cámara de Diputados, en fecha a ser definida.

A continuación transcribimos la carta del Grupo de Trabajo sobre Bosques del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, dirigida al presidente Lula:

«Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa de Brasil Brasilia,

20 de marzo de 2003.

Excelentísimo Señor Presidente:

El Grupo de Trabajo sobre Bosques del Foro Brasileño de ONGs y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que congrega a las principales instituciones no gubernamentales del país interesadas en el tema, se reunió en Brasilia los días 12 y 13 de marzo. En esa oportunidad convino en manifestar a Su Excelencia, su desacuerdo con la «Propuesta de Agenda para el Sector Brasileño de Bosques Plantados», presentada por las empresas de dicho sector a Su Excelencia.

La agenda presenta demandas que no tienen en cuenta la necesidad de elaborar una política específica para el sector que esté vinculada con las políticas ambientales, agrarias, crediticias, de generación de empleo e ingresos y de combate al hambre.

Las actividades del sector de «bosques plantados», basadas fundamentalmente en la plantación de especies exóticas como pinos y eucaliptos, tienen consecuencias graves para las dinámicas sociales, económicas y ambientales, especialmente en la región de la Mata Atlántica y del Cerrado, que concentran la mayor parte de esos monocultivos en Brasil. Considerando que estos biomas conservan apenas el 7,6% y el 30% de su cubierta original, respectivamente, la expansión masiva de esos plantíos, de cinco a once millones de hectáreas, debe ser analizada y planeada con extrema cautela, en el ámbito de una política de gobierno que esté en consonancia con los preceptos de un desarrollo efectivamente sustentable. Es mucho lo que debe ser incluido en la

ecuación de los beneficios económicos y el pasivo socioambiental de la actividad, como lo atestiguan, por ejemplo, los numerosos procesos laborales que involucran a empresas de ese sector.

En momentos en que el gobierno brasileño, a través del Programa Nacional de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente, está en negociaciones con el Banco Mundial en procura de un préstamo para el sector forestal, resulta crucial establecer ahora un proceso de discusión sobre una política para las plantaciones forestales.

Sería un gran riesgo para el país dar cauce a las demandas sobre «bosques plantados», sin definir previamente una política de gobierno para el sector, que asegure que la actividad se realizará de una forma ambientalmente sustentable y socialmente justa, que beneficie en los hechos a la población local y garantice el principio de precaución. Ponemos énfasis en que toda política de expansión del sector de «bosques plantados» debe evitar el aumento de la concentración de tierras, la eliminación de la vegetación nativa, las alteraciones hidrológicas y la ocupación de tierras productoras de alimentos. Además de todo eso, el planeamiento de la actividad debe basarse en informaciones técnicas y científicas, comprobadas y ampliamente discutidas con la sociedad.

Con la certeza de que el gobierno de Su Excelencia está afín a promover el debate necesario para encaminar de la mejor manera este tema, quedamos a su disposición para participar en el proceso de discusión en torno al mismo.

Atentamente,

(siguen firmas).

C/c: Ministra de Medio Ambiente Marina Silva, Ministro de Agricultura Roberto Rodrigues». (Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

Brasil: Que el eucalipto no cause en San Pablo los daños que causó en Minas Gerais

Pese a que por ser una de las zonas más miserables del país, el Valle del Jequitinhonha, en Minas Gerais, ha sido la principal y paradigmática meta de las «caravanas de la ciudadanía» del candidato Lula —en más de una campaña presidencial— y una de las elegidas para servir el plato fuerte del nuevo gobierno —el plan Hambre Cero— es raro que nada se haya dicho sobre la razón concreta (aparte de las razones genéricas del subdesarrollo socioeconómico y quizás político) que llevó a esta parte del territorio de Minas Gerais a una situación tan degradada y económicamente insustentable. Sin embargo, algunos testimonios de figuras representativas de la zona, en entrevistas de radio con ocasión de la visita de la comitiva presidencial, nos informan que hace cerca de 26 años el Jequitinhonha era un valle fértil, con múltiples cultivos y cría de ganado, y que empezó a «secarse» debido a la sustitución de los bosques nativos por la plantación indiscriminada de eucaliptos.

Ante las dramáticas previsiones del informe de la UNESCO sobre la disminución de los manantiales en los próximos 20 años —presentado en el 3er Foro Mundial del Agua, realizado en Kioto— y ante la posibilidad de que se dañe lo que queda de biodiversidad, como asimismo los recursos hídricos disponibles para abastecer la ciudad brasileña más grande (y más importante), sería importante discutir los riesgos de la rápida sustitución en curso de bosques nativos ribereños por plantaciones de eucaliptos en municipios cercanos a esta capital, como Nazaré Paulista —donde está la represa de Atibainha, el principal manantial del Sistema Cantareira—, Piracaia, Joanópolis y otros. Porque en esta zona, principalmente en los últimos cinco años, una bella y variada vegetación nativa que alberga fuentes naturales, arroyos, riachuelos —y es el hábitat de una rica fauna— ha dado lugar a la monotonía de hileras de árboles iguales que nada tienen para atraer a los pájaros —o a cualquier otra especie animal— y que son talados rápidamente para convertirlos en leña. Son contadas las áreas que aún resisten al maderero ilegal o a la estéril «reforestación» de los «cultivos» de eucalipto. No se trata de aprovechamiento para la industria de celulosa —ya que la zona no la tiene y por sus características tampoco la admite—, mucho menos responden dichas plantaciones a criterios técnicos de redistribución y/o preservación de un porcentaje de los bosques nativos. Tan sólo se trata de madera que sorbió mucha agua, pero que sólo sirve para el fuego...

En la vieja controversia acerca de los efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos, a pesar de los argumentos —por lo general basados en trabajos científicos patrocinados por grandes empresas que explotan industrialmente dicho árbol— que tratan de presentar como simples «mitos» los daños que causa el eucalipto a la fertilidad del suelo y los manantiales, hay una amplia literatura que comprueba al menos tres aspectos fundamentales: la altísima demanda de agua de dicho árbol puede agotar la humedad del suelo y perjudicar la recarga de agua subterránea, desestabilizando el ciclo hidrológico; la gran absorción de nutrientes por las raíces puede generar en el suelo un gran déficit y desestabilizar el ciclo de nutrientes; la liberación de sustancias químicas —o los efectos alelopáticos sobre la microflora— puede alterar el crecimiento de plantas y microorganismos y reducir aún más la fertilidad del suelo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y muchos otros organismos internacionales, como asimismo universidades e institutos científicos europeos, de la India, australianos y sudafricanos, han discutido con detenimiento el tema, pero a menudo las preocupaciones ambientalistas chocan con los intereses de grupos industriales que se benefician de este árbol oriundo de Australia, que empezó a cultivarse en Europa a mediados del siglo XIX (y en Brasil a principios del siglo XX). Hay relatos de 1887 de Sudáfrica —uno de los primeros países en establecer plantaciones de eucaliptos en gran escala— que atestiguan que el clima de dicho país se estaba volviendo más seco, las fuentes de agua, antes abundantes, estaban menguando y los cursos de agua se volvían intermitentes.

Cien años después, en 1987, el portugués Antero Gonçalves escribió un libro titulado «El eucalipto y el hombre», en el que a cierta altura afirmaba: «No vale la pena seguir repitiendo que el eucalipto está en contra de los seres vivos, está en contra de la tierra, está en contra del agua, está en contra de todos. Es difícil comprender cómo es que la gente del campo acepta sosegada y tranquila que le corrompan las mejores tierras de labranza con el infernal glóbulo (*Eucalyptus globulus*) que amenaza volvernos un desierto». En España hay un movimiento que promueve la plantación de especies nativas llamado Club Phoracantha, en homenaje al escarabajo (taladro) que destruye los eucaliptos.

No es sin razón alguna, entonces, que las leyes de muchos países restringen ese tipo de plantación. En Brasil hay una ley aprobada en Espírito Santo que prohíbe nuevas plantaciones de eucalipto en dicho Estado. ¿No sería el caso, entonces, de que en San Pablo también se fijaran restricciones parecidas, al menos en zonas con manantiales importantes, como la citada, para no ver en pocos años las aún diversificadas (y no desertificadas) partes de vegetación de Nazaré Paulista —con sus bosques nativos, sus fuentes naturales, sus pájaros, sus monos e incluso gatos monteses, tan sólo a una hora de la capital— convertidas en un desolador Jequitinhonha que sólo se presta para recibir a lacrimosas caravanas de futuras campañas presidenciales, mientras que en San Pablo tendremos que comprar agua potable a precio de oro (o de aire puro)? (Por: Mauro Chaves, Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

Chile: Bosques de verdad

Desde fines de agosto los empresarios forestales chilenos llevan a cabo una agresiva campaña publicitaria llamada «Bosques para Chile». Muchos chilenos nos hemos sentido agredidos por la puesta en escena de los empresarios forestales, que en su primera etapa ha salido con mucha fuerza a través de los medios de comunicación.

Según la Corporación de la Madera (Corma), entidad que agrupa a los grandes empresarios madereros y de la industria de la celulosa, esta campaña durará cinco años y su primera fase tendrá un costo de 1 millón de dólares. El costo total de la campaña se estima en unos 6 millones de dólares. La campaña en cuestión es transmitida por todos los medios de comunicación (televisión, radios y prensa escrita), acompañada de diversos artículos de opinión firmados por destacados ejecutivos de las empresas forestales más importantes.

Los mensajes transmitidos apuntan a generar confusión. Por ejemplo, en los spots televisivos se muestran plantaciones forestales de pino y se dice que son Bosques para Chile. También en la misma publicidad se muestra una casa, muebles y otros objetos de madera elaborada, diciendo: «madera, un recurso renovable» y repitiendo: Bosques para Chile. En radio la publicidad no es muy distinta. Se escuchan golpes de puño sobre madera y el locutor va diciendo

nombres de distintos instrumentos musicales (piano, guitarra, violín, etc.) y se repite: Bosques para Chile. La campaña obviamente pretende mejorar la imagen que tienen los chilenos del sector forestal, ya que según una encuesta realizada por la propia Corporación de la Madera dio por resultado que el 97% de los chilenos piensa que los bosques están en peligro.

A través de esta estrategia el empresariado forestal chileno pretende ocultar los daños que han causado con el establecimiento de grandes plantaciones forestales: la erosión de los suelos por prácticas de tala rasa, la aplicación de agroquímicos que son arrastrados hacia los cursos de agua, las precarias condiciones en que viven y los miserables sueldos que reciben los trabajadores forestales. También pretende ocultar el gran daño a la biodiversidad que estas plantaciones forestales han generado al ocupar grandes extensiones de tierras, fragmentando los hábitats de las especies nativas, como tampoco da cuenta de las al menos 200.000 hectáreas de bosques que han sido sustituidas por plantaciones en los últimos 25 años. Nada dice de cómo se han adquirido los terrenos que ocupan las plantaciones, ni de cómo el Estado ha subsidiado durante todos estos años el establecimiento de plantaciones con especies exóticas y el enriquecimiento de los propietarios de las grandes masas forestales. Tampoco la citada campaña explica que las plantaciones forestales de nuestro país no están hechas para producir objetos elaborados con alto valor agregado sino que están orientadas a producir madera en bruto y celulosa para exportación.

Las organizaciones ambientales, ecologistas y de consumidores estamos muy preocupadas y hemos iniciado acciones en respuesta a esta campaña. La primera de ellas fue solicitar la adhesión de organizaciones y personas a una «aclaración pública» que llamamos BOSQUES DE VERDAD PARA CHILE. Cada una de las organizaciones firmantes se compromete además dentro de sus posibilidades a generar acciones que desenmascaren la campaña de los empresarios.

Sin embargo, y pese a lo difícil que pueda resultar contrarrestar los efectos de una campaña tan bien financiada como la desatada por los empresarios forestales, las organizaciones no gubernamentales chilenas pueden sentirse muy orgullosas de su éxito. A través del lanzamiento de esta campaña, el sector forestal reconoce su creciente desprestigio social, motivado por sus propios actos y por la constante denuncia fundamentada de las organizaciones de la sociedad civil acerca de los graves impactos que los monocultivos forestales han causado al bosque chileno, a otros ecosistemas, a la biodiversidad, al agua, a los suelos y a los habitantes de las regiones invadidas por las plantaciones. Se han visto obligados a sacar 6 millones de dólares de sus bolsillos para maquillar su imagen. Y aunque los dólares les sobren, eso siempre les duele. (Por: Flavia Liberona, Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Chile: Proyecto forestal amenaza producción de vinos

Durante décadas en el valle del Itata pequeños y medianos propietarios han desarrollado actividades económicas basadas en la producción de vinos y hace poco tiempo han logrado obtener «denominación de origen» para la producción de vinos finos de exportación. Con el trabajo de muchos años han logrado desarrollar una actividad que tiene un enorme potencial económico y social.

En enero del año 2000 la COREMA (Comisión Regional del Medio Ambiente) de la VIII región, decidió rechazar la instalación del proyecto «Complejo Forestal Industrial Itata» que se ubicaría en este mismo valle y el que comprende actividades ligadas al rubro forestal entre las que se encuentra la instalación de una planta de celulosa en el Valle del Itata. La razón dada para el rechazo fue que este proyecto generaría impactos ambientales negativos. La empresa proponente del proyecto –Celulosa Arauco y Constitución S.A.– pertenece al grupo Angelini, uno de los más poderosos del país.

Usando los mecanismos que le otorga la ley, Celulosa Arauco apeló la decisión a la instancia superior, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente). De acuerdo a la Ley de Bases del Medio Ambiente cuando se presenta una situación de este tipo, el organismo encargado en definitiva de resolver la viabilidad ambiental del proyecto es el Consejo de Ministros, instancia superior de la CONAMA. Para decidir en forma adecuada el Consejo de Ministros cuenta con el apoyo del Consejo Consultivo, organismo de consulta, que en teoría cuenta con representantes de distintos sectores –organizaciones no gubernamentales, científicos, centros académicos independientes, trabajadores, empresarios y gobierno. En realidad sus representantes no son elegidos democráticamente por las propias organizaciones, sino que son nombrados por el Presidente de la República.

Sorpresivamente, hace pocos días el Consejo Consultivo decidió recomendar al Consejo de Ministros la aprobación ambiental de este proyecto. ¿Cómo se explica esto? Varios servicios públicos, además de un Panel de Expertos de la Universidad Católica contratado especialmente para analizar el proyecto, han opinado que la instalación de la planta de celulosa en el valle del Itata es incompatible con la actividad económica que se desarrolla actualmente en la zona: la vitivinicultura. La instalación del proyecto produciría un conflicto entre dos actividades económicas incompatibles: la existente vitivinícola– turística versus la forestal-industrial.

Por otra parte, desde sus inicios este proyecto ha tenido un fuerte rechazo en las cinco comunas aledañas al lugar de instalación del Complejo Itata (Ranquil, Coelemu, Trehuaco, Quillón y Portezuelo). Esta oposición no es antojadiza y se fundamenta en que la instalación de una planta de celulosa es altamente contaminante, pues en el proceso industrial de producción de celulosa se

usan compuestos químicos clorados que son considerados compuestos tóxicos peligrosos y además se generan «dioxinas», que son sustancias mutagénicas, las cuales aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. O sea, se generarían graves impactos ambientales además de daños en la salud y calidad de vida de las personas que habitan en este valle.

Un argumento normalmente esgrimido por este tipo de emprendimientos es la generación de empleo, hoy en día tan escaso en nuestro país. No obstante, también en este sentido la recomendación del Consejo Consultivo no resulta comprensible, pues hoy en día existen 3.000 empleos fijos en la zona –producto de la actividad vitivinícola– contra 1.200 empleos que podría llegar a generar la instalación del Complejo Forestal Itata en todas sus actividades.

Esta situación plantea muchas interrogantes. ¿Qué se está evaluando realmente? ¿La capacidad de ejercer presión e influencia de uno de los grupos económicos más importantes del país, o el impacto ambiental del proyecto? ¿Son consideradas realmente las comunidades y las economías locales a la hora de decidir que es mejor para ellas?

Ahora toda la responsabilidad está en manos del Consejo de Ministros. Su decisión señalará en los hechos cuál es, efectivamente, la política ambiental y económica del actual gobierno. (Por: Flavia Liberona, Boletín del WRM N° 40, noviembre de 2000).

Chile: Monocultivos forestales amenazan bosque de características únicas

La fragmentación de hábitats resultante de actividades humanas, como por ejemplo las plantaciones forestales a escala industrial, generan restricciones en el suministro de recursos y necesidades de espacio por parte de especies animales y vegetales, que pueden incluso conducir a la desaparición de ecosistemas enteros. Una vez que la estructura del paisaje ha sido alterada se pone en peligro la persistencia tanto de poblaciones vegetales como animales.

En las regiones central y sur de Chile se han establecido y siguen instalándose extensos monocultivos de árboles de rápido crecimiento. Los bosques templados que allí se encuentran contienen los más altos índices de biodiversidad y endemismo del país. La actual superficie plantada en Chile se estima en alrededor de 2.500.000 hectáreas, de las cuales 80% corresponden al pino Monterrey (*Pinus radiata*). Un estudio realizado por la agencia estatal CONAF en 1997 ya había demostrado que la tasa anual de deforestación en el período 1985-1994 había sido de 36.700 hectáreas y que casi un 40% de esa superficie había sido destruida para ocupar su lugar con plantaciones.

Además de los conflictos sociales generados por esas plantaciones, varios estudios señalan, desde la década de 1980, que los cambios en el paisaje

causados por las plantaciones han provocado efectos negativos desde el punto de vista ambiental, entre los cuales está la afectación de hábitats de especies nativas. Investigaciones de carácter independiente coinciden en afirmar que el grado de perturbación provocado por las plantaciones de pino *radiata* es alto. Las alteraciones ecológicas a veces han afectado a las propias plantaciones, como ha sucedido con la explosión de la población de insectos defoliantes y roedores registrada en plantaciones en Chile.

En un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Chile y la Universidad de Carleton, Canadá, se analiza la deforestación y fragmentación del bosque de ruil (*Nothofagus alessandri*), una formación endémica de clima templado, limitada a una extensión de 100 kilómetros en la faja costera central de Chile, en asociación con *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua* y otras especies. Se estima que en 1981 el bosque de ruil ocupaba 825 hectáreas, área que en 1991 había caído a 352 hectáreas, debido especialmente a la expansión de las plantaciones de pino radiata. Los remanentes de bosque de ruil presentan ahora la configuración de un archipiélago—compuesto por varios segmentos pequeños, de forma regular, y algunos más grandes, irregulares, relativamente aislados—rodeados de una matriz formada por plantaciones de pinos. A pesar de tratarse de un ecosistema de características únicas y de encontrarse severamente amenazado, tan sólo 45 hectáreas del bosque de ruil están incluidas en el Sistema Chileno de Areas Protegidas, y tal protección—incluso teniendo en cuenta que esa área resulta insuficiente dado el actual estado del bosque—no existe en la práctica.

La investigación mencionada considera que la actual situación es crítica, dado que los efectos de la deforestación y la fragmentación implican, en el corto plazo, la pérdida de especies y que este ecosistema es único: «El bosque de ruil es un ecosistema que se dirige a la extinción. Si la actual tasa de deforestación no disminuye, aún no considerando los otros efectos nocivos más allá de la reducción en su superficie, el bosque de ruil como bioma reconocible habrá de desaparecer en el correr de la próxima década debido a la extinción de muchas de las especies asociadas con esta formación», expresa el documento.

Por otra parte, el pino radiata representa una amenaza aún mayor para el bosque de ruil: se trata de una especie invasora que es capaz de ingresar en los fragmentos remanentes de esta formación vegetal; debido a su habilidad mayor para obtener agua, podría resultar vencedor en la competencia con los árboles nativos por ese elemento; es una especie susceptible a incendios y, dado que el bosque de ruil está inserto en una matriz de pinos, cualquier incendio en las plantaciones podría destruir totalmente los remanentes de bosque de ruil.

La conclusión de los autores es que—desde el punto de vista ecológico—el manejo de la tierra es definitivamente insustentable en la región central de

Chile. «La sustentabilidad implica consideraciones económicas, ecológicas y socioculturales. Si bien las plantaciones de pino pueden representar un ingreso considerable (en el actual esquema de mercado), tales beneficios se logran a expensas de aspectos socioculturales y ecológicos. Desde el punto de vista sociocultural las extensas plantaciones de pino aumentan los niveles de pobreza y desempleo, dado que las mismas requieren poca fuerza de trabajo. El aumento del desempleo a nivel local ha promovido la emigración campesina (Lara & Veblen, 1993; Unda et al., 1997). Más aún, la pérdida del bosque debido al manejo inadecuado es considerada por la población local como uno de los principales problemas de la región (Hajek et al., 1990). No tenemos evidencias de que el pino Monterrey degrade la tierra donde es plantado, pero, como se señala más arriba, esta especie exótica es la principal causa de pérdida y fragmentación del bosque de rui y, en definitiva, de su actual situación de riesgo». (Boletín del WRM N° 45, abril de 2001).

Chile: ¿Represión o solución al enfrentamiento Mapuches-empresas forestales?

Recientemente han ocurrido graves incidentes en la ciudad de Temuco, que finalizaron con más de 125 comuneros presos, muchos lesionados y graves destrozos. Estos incidentes son producto de una larga cadena de usurpaciones que ha sufrido el pueblo Mapuche durante todo el siglo XX y que permanecen sin tener el reconocimiento público y fundamentalmente del Estado, que sigue actuando a favor de las empresas forestales y brindándoles su apoyo de muchas formas, entre otras poniendo la fuerza policial al servicio de las empresas.

Días antes de los incidentes mencionados, la sede de la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras fue destrozada por un contingente policial que lanzó gases lacrimógenos, rompió vidrios e intentó desalojar por la fuerza a una veintena de Mapuches que estaban dentro del local. Este operativo policial represivo se realizó en cumplimiento de una «orden» de los fiscales Alberto Chifelle —señalado por las organizaciones Mapuches de estar involucrado en usurpaciones de tierras— y Francisco Rojas, para «incautar antecedentes informativos».

En repudio a este acto vandálico sin sentido —que el comandante de Carabineros dijo desconocer— se realizó una marcha pacífica en el centro de la ciudad de Temuco. En la marcha, la más importante realizada en los últimos años, participaron nueve organizaciones Mapuche de la región. El clima pacífico de la marcha se vio alterado con la llegada de un fuerte contingente de carabineros que, apoyado por carros lanza agua, carros blindados y efectivos a caballo llegaron a dispersar a los manifestantes.

Según el diario La Tercera, Carabineros confirmó que se causaron daños calificados a la propiedad pública y que «se actuó con una violencia nunca vista en

esta región». Agregó que los detenidos pasarán a disposición de la Fiscalía Militar, algunos de ellos por maltrato de obra a carabineros en servicio, otros por daños calificados y el resto por desórdenes.

Sin embargo, quienes tienen más derecho para hablar de daños y violencia son los Mapuche, que en estos últimos años han denunciado insistentemente el ahogamiento y acorralamiento que sufren las comunidades que colindan con empresas forestales, la pérdida de sus tierras, la improductividad y la escasez de agua causadas por las plantaciones exóticas, las emigraciones forzadas, la presencia de grupos paramilitares de seguridad forestal; el complot, el sabotaje y las actitudes represivas de empresas en contra de Mapuches, las detenciones y procesamientos judiciales arbitrarios e incluso asesinatos.

Según una carta del abogado indigenista José Aylwin, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, hace mucho tiempo que los Mapuche vienen manifestando de diversas formas su disconformidad frente a los procesos que hoy se verifican en sus territorios ancestrales afectando sus derechos. Destaca fundamentalmente la expansión de la actividad forestal sobre tierras que históricamente les pertenecen y que son reconocidas y protegidas por la legislación por su carácter indígena. La plantación de árboles exóticos literalmente ha encerrado a las comunidades dentro de su propio espacio ancestral (las empresas forestales poseen 1,5 millones de hectáreas al sur del Bío Bío), afectando seriamente las tierras y las aguas de los Mapuche.

A pesar de que los forestales aducen tener derechos constitucionales sobre las tierras que poseen, los Mapuche «han visto sus tierras disminuir gradualmente desde mediados del siglo XIX, primero mediante la radicación en reducciones, luego a través de la división y enajenación de sus tierras comunales promovida por el Estado, y más tarde, a través de la pérdida de las tierras que les fueran entregadas a través de la reforma agraria. Se trata de un proceso que los Mapuche conocen con un nombre: usurpación».

Todo esto ha conducido a un creciente distanciamiento entre el mundo Mapuche y el Estado y las empresas privadas presentes en su territorio. Los Mapuche reclaman lo que de acuerdo a su historia, concepción del mundo, a su sistema de normas y valores consideran que les pertenece y les ha sido arrebatado. El Estado, por su parte, impone su ley, su estado de derecho. La consecuencia de dicha incomunicación es la situación de violencia que hoy se vive en las comunidades Mapuche y que se agrava progresivamente.

En cuanto a los hechos de violencia, José Aylwin señala «que existe una enorme desproporción entre las acciones de los Mapuche y la fuerza empleada por los agentes del Estado, o incluso agentes de seguridad privados, para reprimir a los indígenas». Se señala como hecho «preocupante que el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado (Carabineros, Policía de Investigacio-

nes) en contra de personas Mapuche involucradas en acciones en defensa de sus derechos se haya transformado en una rutina» como así también «que las fuerzas policiales actúen en forma conjunta con las empresas que hoy se hacen presente en el espacio territorial Mapuche. Tal es el caso de la actuación conjunta de Carabineros e Investigaciones y guardias de empresas forestales en el área de Malleco. Se trata de un hecho abiertamente ilegal, que no puede seguir siendo amparado por las autoridades».

El gobierno tiene dos caminos: o la búsqueda honesta de soluciones o el incremento de la represión. Por el momento, parece haber optado por el segundo, que claramente constituye un callejón sin salida, como lo prueba la escalada de violencia en el Sur. Es hora de que el Estado chileno asuma su responsabilidad histórica en el drama del pueblo Mapuche y que empiece a buscar soluciones reales, que necesariamente pasan por la devolución de tierras usurpadas por las empresas forestales durante la dictadura pinochetista. (Boletín del WRM N° 48, julio de 2001).

Chile: Los que juegan a ser Dios con los árboles, por dinero

El 20 de julio de 1999, Biogenetic S.A., una *joint-venture* entre Fundación Chile (Santiago, Chile) e InterLink Biotechnologies (Princeton, NJ), anunció la creación de una nueva empresa para el desarrollo de especies «mejoradas» de árboles: GenFor S.A.

La idea concuerda con lo que las empresas de biotecnología ya están haciendo con el maíz, la papa y los porotos de soja. Los investigadores de Genfor en Chile afirman que, mediante el uso del *Bacillus thuringiensis* o Bt —una bacteria que existe naturalmente en el suelo y mata plagas si se la introduce en las plantas en crecimiento— están en camino de producir un árbol manipulado genéticamente que tendrá viabilidad comercial.

Las razones que llevan a esto son varias, pero todas están vinculadas con un modelo forestal insustentable tanto desde el punto de vista social como ambiental, basado en monocultivos a gran escala de árboles de crecimiento rápido. El ochenta por ciento de las plantaciones de árboles de Chile se compone de una única especie de pino —y además exótico—: el pino radiata. Estas plantaciones fueron infectadas por la polilla del brote europea (*Rhyacionia buoliana*), y por ser monocultivos se han convertido en una gran fuente de suministro de alimento para este pequeño insecto. Las larvas de la polilla horadan el tallo principal y las ramas secundarias del pino radiata y secan los brotes y las hojas, con lo cual el árbol se va deformando hasta convertirse en un arbusto atrofiado. Según la National Forestry Corp. de Chile, la polilla del brote arruina cerca del 30% de las cosechas cuando no se las trata, y 10% incluso con tratamiento. Las compañías forestales de Chile gastan actualmente US\$ 3 millones por año en el control de las polillas soltando avispa que se alimentan de sus larvas.

Genfor afirma que ha implantado con éxito plántulas con proteína Bt, que mata a las larvas de la polilla antes de que lleguen a provocar daños. La compañía prevé que esos tipos de pinos resistentes a insectos estarán listos para ser comercializados en 2008.

Pero la resistencia a los insectos no es el único objetivo de Genfor. Más importantes aún son los esfuerzos conjuntos de Genfor y la compañía de biotecnología canadiense Cellfor para elevar el componente de celulosa y modificar la lignina en el pino radiata y el pino de incienso (*Pinus taeda*), características claves de la gran producción de celulosa de Chile. Para conseguir la celulosa como materia prima es necesario separarla de la lignina, y esa es la parte más cara del proceso de producción de celulosa. Por esa razón la industria recibirá de buen grado un tipo de materia prima con mayor contenido de celulosa.

La investigación conjunta en el laboratorio canadiense de Cellfor logró un aumento del 20% de celulosa en álamos y ahora procura transferir esa experiencia a las especies de pinos. Se esperan resultados concretos para fines de 2003. Dado que el pino de incienso se planta en forma extensiva en Argentina y Brasil (y también en el sur de EE.UU.), el proyecto será la entrada de Genfor en el mayor mercado identificado como una de sus metas en América del Sur.

En resumen, todo se trata de dinero y poder para los que ya son ricos y poderosos. Si se permite el uso de estos árboles modificados genéticamente, sólo se logrará exacerbar los impactos sociales y ambientales actuales que causan los monocultivos de árboles en Chile y otros lugares. A menos que se haga algo para evitar su liberación en el medio ambiente, las futuras generaciones de pueblos, animales y vegetales serán quienes sufran sus impactos todavía desconocidos. Si se permite que las empresas jueguen a ser Dios, entonces ¡Dios salve a la humanidad! (Boletín del WRM N° 58, mayo de 2002).

Chile: Organización ambientalista cuestiona estándares del FSC en plantaciones

De acuerdo con la información disponible en la página web del FSC, siete empresas tienen sus «bosques» certificados en Chile, abarcando una superficie total de 262.168 hectáreas. Sin embargo, sólo una de esas empresas (Las Cruces S.A.) está realmente manejando un bosque, de una extensión de tan sólo 3.588 hectáreas. Todas las demás (258.580 hectáreas) son monocultivos de árboles, que lamentablemente siguen siendo considerados como «bosques» por el FSC.

En su propia página web (en la sección «Why do we do it» - «Por qué lo hacemos») el FSC establece su objetivo de «proporcionar un esquema de etiquetado realmente independiente, internacional y creíble en materia de madera y productos madereros. Esto proporcionará al consumidor una garantía de que

el producto proviene de un bosque, que ha sido evaluado y certificado como siendo manejado de acuerdo con estándares sociales, económicos y ambientales previamente acordados». Esta aseveración es claramente falsa en el caso de Chile, por la sencilla razón de que el FSC no puede dar ninguna garantía al consumidor de que el producto que adquiere proviene de un «bosque» bien manejado, dado que el propio bosque no existe; a menos que los monocultivos de árboles exóticos sean considerados como bosques.

Es importante resaltar que el FSC promueve el establecimiento de estándares nacionales para la certificación, acordes con sus principios y criterios generales. Chile es uno de los países donde existe una «iniciativa nacional» (que incluye a empresarios forestales y ONGs) que apunta a ese objetivo. Sin embargo, la adopción de estándares nacionales no es una tarea sencilla, tal como se desprende de los párrafos siguientes, escritos por una activista chilena defensora de los bosques Malú Sierra, quien ha estado profundamente involucrada en ese proceso. Malú hace la descripción de una visita realizada a una de las plantaciones certificadas (Predio «El Guanaco»: 4,138 hectáreas), perteneciente a la empresa Forestal Millalemu (del Grupo Terranova), en la Comuna de Quirihue en el sur de Chile, vinculando sus percepciones a los problemas de la certificación de plantaciones:

«Después de muchos meses –en verdad han sido años– de discusiones en la mesa de trabajo, con papeles y transparencias proyectadas, siempre en las ciudades del sur o en Santiago, Forestal Millalemu (con más de 120.000 hectáreas de plantaciones certificadas en Chile) nos invitó a conocer una de sus plantaciones, certificada por el FSC. El caballeroso gerente en Chile, Jorge López, sacrificó sus hermosos mapas para que el grupo del Comité de Plantaciones supiera donde estábamos, exactamente. La lluvia no nos dio tregua; cada vez que bajábamos de los vehículos todoterreno, en pleno noviembre, exactamente el día 7, el fenómeno de El Niño regalaba con lluvia a esa zona de secano interior. Y nos empapaba a nosotros, no del todo preparados. Tampoco estábamos preparados para ver la imagen de los cerros afeitados de árboles en la Cordillera de Quirihue.

Forestal Millalemu tiene como su principal propietario al empresario suizo Stephan Schmidheiny –uno de los primeros en adherirse al concepto de desarrollo sustentable– y sus plantaciones en Chile se supone que son la máxima expresión del concepto de sustentabilidad, tanto económica como social y ambiental. Se supone...

El sello verde FSC asegura que Millalemu no sustituye bosque nativo por plantaciones, pero no le exige que, allí donde retoñe el bosque, lo deje crecer, haciendo un trabajo de cosecha más cuidadoso de sus plantaciones. Vimos el renoval de roble bajo los pinos plantados hace 20 años, listos para la cosecha. Con ella se irán los robles que atestiguan que allí, mucho antes de 1994, hubo

sustitución de bosques por plantaciones. El sello del FSC les exige también realizar medidas de mitigación en el suelo: ya no queman los desechos después de la cosecha –lo que es un avance– sino que los muelen y los dejan en el suelo para que, al cabo de ocho a diez años, se vuelvan a convertir en tierra.

El FSC pone también condiciones sociales, y vemos pasar viejas micros (*buses*), que transportan a los obreros de regreso de las faenas. Antes se hacía en camiones descubiertos. En esta zona no hay comunidades indígenas, por lo que la empresa no tiene problemas en materia de reivindicación de tierras por parte de sus propietarios originales. Pero sí los tienen con los Mapuche en otros de sus predios, por lo que esas plantaciones no han podido ser certificadas.

Lo que el FSC no recomienda, hasta el momento, es el método de cosecha. Y el método usado en las plantaciones en Chile es el de la tala rasa, lo mismo que en Estados Unidos, de donde viene además, el árbol exótico más usado hasta ahora en las plantaciones chilenas: el pino insigne o pino de Monterrey (*Pinus radiata*). Entre sus principios, el FSC fija criterios generales que deben ser desarrollados en cada país para adaptarlos a cada realidad. Y en Chile aún no se han definido, debido justamente a la posición de los empresarios forestales ya certificados, algunos de los cuales postulan que no debe haber límites ni siquiera a las dimensiones de las talas rasas. Una de las justificaciones es que las grandes empresas, como Mininco (que no está certificada), cosechan hasta 2.000 hectáreas continuas.

Es importante señalar que Chile es un país montañoso y que por lo tanto las cosechas a tala rasa, que siempre impactan negativamente los suelos, aquí son doblemente graves, porque la inmensa mayoría de las plantaciones están instaladas sobre pendientes superiores a los 35 grados. De hecho, es precisamente por ello que está prohibida por ley la tala rasa de bosque nativo. En consecuencia, es claro que desde el punto de vista ambiental, el método de cosecha a tala rasa no puede ser aceptable en ninguna plantación y menos aún en una certificada.

En Chile las discusiones pueden durar todavía un buen tiempo, pero Defensores del Bosque Chileno renunció en el Comité Técnico de Plantaciones a su participación en el proceso, aunque no al directorio de ICEFI (Iniciativa Chilena de Certificación Forestal Independiente), ni tampoco al FSC. Si van a ser cincuenta hectáreas o quinientas, cosechadas a tala rasa, ya es irrelevante. No estamos de acuerdo en lo absoluto con la tala rasa, y no vemos avances significativos en las reuniones. Y lo más grave es que se pasa por alto –se deja para futuras precisiones– el cómo deben instalarse las nuevas plantaciones forestales que deseen certificarse ambientalmente, de manera de no dejar nunca los suelos descubiertos, especialmente en zonas de pendiente donde, pese a todas las mitigaciones, se sigue produciendo erosión.

El consumidor que pone su confianza en el sello FSC no querría ver estas imágenes. Lamentablemente, yo las vi y todavía las retengo en mis pupilas». (Boletín del WRM N° 66, marzo de 2003).

Chile: Los Mapuche defienden sus tierras de las compañías forestales

El pueblo Mapuche ha contenido las incursiones europeas a su territorio durante siglos. En la actualidad, relegados a reservas llamadas «reducciones», la mayoría de los mapuches son agricultores empobrecidos o mano de obra campesina, o viven como una minoría marginada en las ciudades chilenas. No obstante, están resistiendo. «Nuestro objetivo es recuperar el territorio del pueblo mapuche», declara Ancalaf, de 40 años, en una entrevista en la cárcel con el periodista Héctor Tobar del periódico *Los Angeles Times*. «Queremos controlar nuestro destino y forjar nuestro futuro según la cosmovisión de nuestro pueblo».

Detenidos sin juicio desde noviembre de 2002, al amparo de las leyes antiterroristas aprobadas durante la dictadura del Gral. Augusto Pinochet, que privan a los detenidos de un juicio rápido y permiten a los fiscales retener pruebas y no entregarlas a los abogados defensores, Ancalaf y una docena de líderes activistas se han convertido en héroes para muchos mapuches, incluso para los que no están de acuerdo con su táctica.

En los medios chilenos, el «conflicto mapuche» moderno, con frecuencia se describe como la lucha entre el orden y la razón de la herencia europea del país, y por otro lado una cultura indígena dominada por la «superstición» y la violencia. Latente durante décadas, el conflicto por la tierra se encendió nuevamente hacia fines de la década de los noventa. Muchos consideran que la causa es la globalización de la economía chilena y las políticas de libre comercio del gobierno. Los establecimientos productores de lácteos y granos que antiguamente eran la base de la economía regional fueron afectados duramente por las exportaciones estadounidenses de menor precio, y muchos productores se ven forzados a dejar sus tierras en barbecho o a venderlas a las compañías forestales.

Los territorios mapuches están cada vez más cubiertos o rodeados de eucaliptos y pinos plantados en antiguos campos de trigo o bosques nativos. La mayor parte de los árboles plantados en la región son el pino de Monterrey (especie nativa de California) y el eucalipto australiano, y son cosechados con máquinas, procesados para obtener madera y celulosa para papel y enviados a mercados norteamericanos y asiáticos. La concentración de plantaciones de crecimiento rápido en gran escala agota el agua subterránea y la fauna se ve afectada por la falta de sotobosque, crucial para su supervivencia. Varias especies arbóreas nativas, medulares para las actividades productivas y culturales de los mapuches, van rumbo a la extinción. Según un estudio del gobierno

chileno, todos los árboles nativos fuera de los parques nacionales podrían desaparecer hacia el 2015.

El 12 de noviembre pasado, el activista mapuche Edmundo Alex Lemún de 17 años, murió tras agonizar 5 días. recibir una bala en la cabeza. El 7 de noviembre recibió un balazo en la cabeza por disparos efectuados por la policía durante una protesta el establecimiento forestal Fundo Santa Elisa, en Ercilla. El 20 de enero, más de una docena de mapuches encapuchados y con armas de fuego caseras y cócteles Molotov invadieron el campamento de trabajadores de la compañía forestal Mininco e incendiaron las barracas.

Como en cualquier otra parte, la escasez del agua agrava el conflicto. «Hace veinte años, no creo que nadie en nuestra comunidad hubiera imaginado que algún día íbamos a tener que traer el agua en camiones para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias», declaró Alfonso Rayman, líder de los mapuches Nagche, un subgrupo que incluye a muchas comunidades alrededor de Lumaco. Unos días antes, en un pequeño acto de desafío, un grupo de muchachos había iniciado un incendio en la pradera de una ladera cerca del pueblo, contó Rayman con una leve sonrisa. El fuego subió por la ladera destruyendo miles de árboles jóvenes. En este momento, varios líderes de la zona de Lumaco están tras las rejas, acusados de destrucción de propiedad de la compañía forestal.

Pero ninguna autoridad institucional condena la tala rasa de la propiedad mapuche (sus tierras, sus bosques) realizada por las compañías forestales para ceder lugar a sus plantaciones de monocultivo en gran escala, como denuncia la activista chilena defensora de los bosques Malú Sierra. Contrariamente a esto, muchas compañías son autorizadas a continuar con su lucrativo negocio bajo la etiqueta de plantaciones «certificadas» por las normas del FSC. Y aún peor es el caso de la compañía Millalemu, que ha sido ¡nominada para el Premio Nacional de Medio Ambiente que otorga anualmente la Comisión Nacional Chilena de Medio Ambiente!

Las cosas están totalmente al revés. Los dueños tradicionales de las tierras son expulsados y encarcelados cuando adoptan medidas para recuperarlas. Las compañías responsables por la destrucción social y ambiental de la región son certificadas y nominadas para premios ambientales. Una farsa completa. No obstante, a pesar de todo su poder, las compañías forestales están cada vez más aisladas en un mar creciente de protesta Mapuche, que ciertamente continuará creciendo. (Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

Colombia: Legislación «a la medida» de Smurfit

Las plantaciones forestales con fines comerciales a cargo de empresas privadas comenzaron en Colombia en la década de 1960. Las plantaciones co-

merciales de madera de fibra larga –pinos y cipreses– se hallan ubicadas principalmente en el oeste del país, en los departamentos de Antioquía, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle y Cauca; en tanto en las zona central –en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá– predomina el *Eucalyptus globulus*.

Ya desde la década de 1970 se vienen denunciando los impactos provocados por los monocultivos forestales en gran escala en dicho país. Un estudio de ese entonces, contratado por el propio Estado colombiano para evaluar los efectos de las plantaciones de coníferas en el Departamento del Cauca, concluyó que las mismas destruían los ecosistemas naturales. A su vez, en la década de 1990 varios municipios prohibieron las plantaciones forestales en cuencas abastecedoras de agua y sancionaron a compañías forestadores por practicar la quema del bosque para dar lugar a plantaciones. Sin embargo, bajo la influencia del modelo globalizador y a instancias de las autoridades nacionales y de organismos internacionales de crédito, la forestación en gran escala continúa.

Uno de sus actores más relevantes es Smurfit Cartón de Colombia, responsable de daños ambientales como la tala de selva en el Chocó Biogeográfico, la contaminación hídrica en el río Cauca y la contaminación atmosférica en la ciudad de Yumbo. La actividad de la empresa en el país comenzó en 1957 cuando se creó Celulosa y Papel de Colombia S.A. (Pulpapel) –conformada por el Instituto de Fomento Industrial (IFI), Cartón de Colombia y la Container Corporation of América, una subsidiaria de la Mobil– que luego vendió sus acciones a Cartón de Colombia y pasó a denominarse Smurfit Cartón de Colombia. Esta es parte de la multinacional Jefferson Smurfit Group plc, con sede en Irlanda. Dicha empresa es uno de los mayores productores de empaques a base de papel en el mundo, operando en veinte países. La empresa obtiene el mayor margen de ganancias en América Latina. Es así que en 1993, por ejemplo, el 70% de las ganancias de Smurfit provenían de Colombia, México y Venezuela.

¿Por qué Smurfit eligió estos países y específicamente Colombia? Además de los buenos crecimientos de las plantaciones de pino, de la debilidad de los controles ambientales y de los bajos costos de mano de obra –debido al empleo de trabajadores informales y a la subcontratación de tareas– una razón fundamental ha sido la legislación que, gracias a su poderosa influencia, Smurfit ha logrado que el Estado apruebe en su beneficio.

Para comenzar, la Ley 99 de 1993 asignó a un representante de los gremios de la actividad forestal un lugar en el Consejo Nacional Ambiental. La Asociación Colombiana de Reforestadores (ACOFOR), creada a instancias de la propia Smurfit, lógicamente ofrece ese lugar a Smurfit.

Por otra parte, están vigentes una serie de beneficios que la ley le otorga, algunos rayanos en el disparate. Por ejemplo, a través de los Certificados de Incentivo Forestal (CIF), establecidos en 1993 como «un reconocimiento del Estado Colombiano a las externalidades positivas de la reforestación en tanto los beneficios ambientales y sociales generados», se permite que los proyectos de plantación con especies introducidas reciban los mismos beneficios que aquellas donde se usen árboles autóctonos, siempre que «se demuestre como resultado de estudios científicos o de investigación aplicada que la especie presenta calidades excepcionales para poblar y conservar y regular aguas». Teniendo en cuenta los probados impactos negativos que los monocultivos forestales con especies de rápido crecimiento tienen sobre la dinámica del agua en las cuencas, lo anterior es difícil de imaginar. Sin embargo, la empresa logra que los estudios lo «demuestren» y se beneficia de los CIF.

Smurfit es también beneficiaria de diferentes tipos de exoneraciones impositivas para promover lo que erróneamente la legislación denomina «reforestación». A modo de ejemplo: un descuento del 20% en el impuesto a la renta generada por las nuevas plantaciones, una deducción del 80% del valor imputable sobre la venta de los productos de la cosecha de madera a efectos del pago de impuestos, y la exoneración de impuestos sobre prestación de servicios técnicos relacionado con las plantaciones forestales, establecida por la Ley de Presupuesto de 1995.

El rumbo que ha tomado la política forestal en Colombia es alarmante por diversos motivos. En tanto por un lado no existe una protección efectiva de la enorme diversidad forestal existente en su vasto territorio, afectada además por las actividades de plantación de cultivos ilícitos y su represión, por otro lado se fomentan los monocultivos, que son una causa directa de la deforestación y degradación de los bosques, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Además, se aprueban medidas legislativas hechas a medida para Smurfit y los grandes «reforestadores», en tanto los agricultores —en especial los minifundistas— son dejados librados a los azares del mercado y las condiciones atmosféricas. Todo ello en el marco de un sangriento conflicto a nivel nacional cuya causa primera se encuentra precisamente en el injusto sistema de tenencia de la tierra.

En la vecina Venezuela, Smurfit ya ha debido enfrentar severos conflictos con comunidades locales a causa de los monocultivos forestales. Asimismo, en Colombia sus actividades vienen generando una oposición creciente, como la que están oponiendo los Grupos Ecológicos de Risaralda, provincia donde la empresa ya es dueña del 10% de la tierra. En realidad, difícil sería esperar otra cosa frente a una actividad que, para beneficiar a unos pocos, tantos perjuicios ocasiona a tantos desde el punto de vista ambiental y social. (Boletín del WRM N° 43, febrero de 2001).

Colombia: Incentivo económico perverso para la plantación de palma aceitera

La palma africana fue introducida en Colombia en 1932 pero el desarrollo comercial del cultivo se inició a finales de los años cincuenta. A mediados de la década del sesenta ya existían 18.000 hectáreas en producción en los departamentos del César, Magdalena, Santander y Norte de Santander. Los cultivos se expandieron a otros departamentos y según datos publicados en 1995 por Fedepalma, en ese año ya sumaban alrededor de 130.000 hectáreas, siendo el principal cultivo de oleaginosas del país, fundamentalmente en las zonas norte, central y oriental.

Hoy en día, en el marco del llamado Plan Colombia se pretende sustituir plantaciones de cultivos ilícitos por palma africana y en todo el país se está planificando sembrar hasta 300.000 nuevas hectáreas. Estas nuevas plantaciones se realizarían dentro del proyecto agrario de la actual administración, sin tener en cuenta ni la gente ni el ambiente.

Como afirma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. (ACVC), estas plantaciones son «un triste ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino que al contrario, se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra». Y la ACVC agrega: «Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por hectárea sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores feudales plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores agrarios desposeídos. Al volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las alianzas deben conservarlas ellos 'dada su experiencia'. En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de monocultivo, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la 'economía campesina de la palma'. En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos».

Ni siquiera los objetivos declarados, como el de encontrar mayor rendimiento monetario por hectárea se cumplirán en este caso, ya que como bien lo ha afirmado la ACVC, de lo que se trata es de contar con una mayor oferta de materia prima.

Pero el daño más irremediable quizás será sobre el ambiente y por ende sobre la gente que vive en él y fundamentalmente la de menores recursos. En un

estudio publicado recientemente por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt se afirma que «es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona». Algunos ejemplos ya se han documentado, como es el caso de «la zona palmera occidental (Municipio de Tumaco), en donde la destrucción del bosque primario ha estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del cultivo de la palma. Y como es sabido, una de las principales causas para que especies de fauna ingresen a alguna de las categorías superiores de amenaza, es la destrucción de los hábitats que las soportan».

El objetivo fundamental de ese estudio científico fue demostrar la «perversidad» de determinados incentivos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), enunciados como «para la paz» y promovidos dentro del marco del Plan Colombia. «Se escogió el ICR para cultivos de tardío rendimiento como incentivo potencialmente perverso, debido a que éste se orienta directamente a la expansión de áreas sembradas en palma en cualquier región del país sin tener en cuenta consideraciones con respecto a la conservación de la biodiversidad. El ICR, es una condonación del crédito otorgado por FINAGRO a los productores agropecuarios y puede ser hasta del 40% del mismo, dependiendo del tipo de productor involucrado».

El modelo construido dentro de este estudio permitió «simular el posible efecto que tendría sobre la biodiversidad el otorgamiento del ICR en dos zonas palmeras del país: la zona norte y la zona occidental» y «estimar las áreas óptimas que serían demandadas por los productores» y permitió también calcular «un Indicador de Biodiversidad (IBD) que permite comparar el nivel de biodiversidad actual con el nivel que habría si las áreas potencialmente demandadas se transformaran en cultivos de palma». Los resultados indicaron que las pérdidas en biodiversidad irían desde 21,8% hasta 39,15 % en las diferentes áreas estudiadas.

Pero más allá de los impactos ambientales y sociales de todo tipo que la expansión de los monocultivos de palma africana pueden acarrear, resulta increíble que la «solución» que el tan cuestionable Plan Colombia ofrece a los actuales cultivadores de cultivos ilícitos sea la plantación de palma africana. La única solución viable sería aquella que permitiera a esos agricultores sustituir su actual producción por otra que les brinde ingresos más o menos equivalentes a los que ahora obtienen. Y eso es algo que seguramente la palma no

les dará. El actual nivel de precios ya no resulta rentable y el incremento de las áreas dedicadas al cultivo de la palma no hará más que reducirlo aún más. Este es por lo tanto un nuevo engaño, que sólo servirá para que el empresariado colombiano del aceite de palma obtenga mayores ganancias. Los impactos los sufrirán la gente y el ambiente. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Colombia: Política antisindical en plantaciones de palma aceitera

Cuanto más se planta más derechos se pierden. En Colombia hay aproximadamente 170.000 hectáreas sembradas de palma aceitera. Testimonios de un delegado de la organización de trabajadores del sector palmero, relacionado con las empresas Oleaginosas Bucarelia y Oleaginosas Las Brisas, denuncia las malas condiciones de trabajo en las plantaciones de palma aceitera en el departamento de Santander, además de las presiones e incentivos para debilitar a los sindicatos del sector. Oleaginosas Bucarelia cuenta con 4.700 hectáreas y la otra empresa con unas 2.800, todas ubicadas en Puerto Wilches, Santander.

Según palabras de este trabajador: «La estrategia de las empresas para debilitar y eliminar los sindicatos se basa en planes de retiro voluntario con indemnizaciones superiores a lo otorgado por ley. Muchos compañeros se han ido de las empresas y por lo tanto de la organización sindical, pero vuelven a laborar en el sector con el régimen de condiciones impuesto por las empresas a través de cooperativas. La política de los empresarios tiende a reducir las conquistas convencionales alcanzadas durante 20 o 30 años de lucha. Se comenta por parte de algunos empresarios que las empresas en las cuales los trabajadores están organizados sindicalmente son menos competitivas, y además esos trabajadores son renuentes a aceptar las condiciones de trabajo que esas empresas quieren imponer, condiciones que atentan contra la salud y la dignidad de los trabajadores.

En definitiva, lo que plantean es que las organizaciones sindicales deben desaparecer. Otra modalidad que fomentan las empresas es que los campesinos se vuelvan parceleros de palma ahorrándose así costos laborales. Luego, estos campesinos deben vender la materia prima a las empresas al precio que ellas imponen. La gente gana menos y no tiene ninguna garantía de seguridad social».

Evitando la organización de los trabajadores, las empresas evitan también los reclamos por el bajo salario y por uno de los mayores problemas que enfrentan los trabajadores que es el de las pésimas condiciones de trabajo. «Por ejemplo: a medida que la palma es más vieja es también más alta, y por lo tanto las condiciones de cosecha del racimo y poda de la mata propician accidentes. Los trabajadores que se desempeñan en la cosecha se quejan de dolores en sus cervicales y son comunes los accidentes cuando son alcanzados por las

hojas que tienen muchas espinas. Por otro lado, en las plantaciones también se fumiga para el control de plagas y no se sabe qué impactos en el ambiente y en la salud ocasionan esos productos».

Todo lo anterior y en particular la política empresarial de intentar debilitar a los sindicatos a través del aumento de trabajadores empleados por medio de cooperativas y de contratistas individuales, llevó a SINTRAINAGRO, la mayor organización de trabajadores agrarios del país, a plantear la necesidad de unificar los sindicatos de esa rama con la idea de conservar las conquistas logradas hasta el momento y de buscar la sindicalización en las empresas que aun no tienen sindicato. Gracias a la organización de los trabajadores, en Bucarelia y Las Brisas se logró la firma de algunos convenios colectivos y ahora los trabajadores de algunas cooperativas están también exigiendo mejores condiciones laborales.

Es de señalar que en este artículo sólo hemos hecho referencia a los impactos sociales del cultivo de palma aceitera, pero que a ellos se suman además los graves impactos ambientales de este modelo de monocultivo a gran escala, que se repiten en todas las regiones y países donde se instalan, entre los que se destacan los impactos sobre la biodiversidad, los suelos y el agua. (Boletín del WRM N° 65, diciembre de 2002).

Colombia: Proyecto de plantaciones de palma aceitera pone en peligro biodiversidad del Chocó

La región del Chocó (75.000 km² de superficie sobre la costa del Pacífico Colombiano) es un ecosistema estratégico por su diversidad natural y cultural y presenta la mayor concentración de biodiversidad del mundo en cuanto a número de especies por hectárea. De la superficie original de bosques heterogéneos, queda tan solo un 40% en pie, resultado principalmente de la colonización, la expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la explotación maderera.

El Bajo Atrato, en la cuenca del río Atrato, que forma parte de esa región biogeográfica, está en estado de alerta. La Defensoría del Pueblo, a través del documento Explotación Maderera y Derechos Humanos Bajo Atrato-Chocó, expresa la profunda preocupación de los miembros de los consejos comunitarios del Bajo Atrato (Cacarica, Jiguamiandó y de Curvaradó, entre otros), por un proyecto de palmicultura (plantaciones de palma aceitera) a realizarse en el municipio de Riosucio.

Se trata de un proyecto de la empresa Urapalma S.A, compañía que no integra el convenio de concertación para una producción más limpia que había sido suscrito por la federación Fedepalma, los Ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, y varias empresas ambientales.

El objetivo del proyecto es la siembra de 20 mil hectáreas de palma (variedades Ekona y Ekona X lame) en los departamentos de Chocó y Antioquía. El primer bloque es de 9 mil hectáreas, 6.500 de la citada compañía y 2.500 de Asopalma (empresa promovida por la anterior, en la que están asociados campesinos de la región a quienes se les asignó un lote de 5 hectáreas a cada uno).

Para una etapa posterior está prevista la instalación de una planta extractora en la zona para la producción de 35.000 toneladas de aceite crudo en cinco años. En la actualidad se está en proceso de conformar las asociaciones de habitantes de la zona en Paravandocito y Munguidó para sembrar 380 hectáreas. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de diferentes entidades, entre ellas los Ministerios de Agricultura y Desarrollo, el Banco Agrario (que concedió un crédito de hasta un 80 % de los costos directos de operación en la etapa improductiva), FINAGRO, el Fondo de Inversiones para la Paz (fuente de los recursos del ICR –Incentivo de Capitalización Rural– para el cultivo de palma aceitera) y de la Gobernación de Antioquía.

No se ha realizado un proceso de consulta con las comunidades étnicas, no se ha tramitado el concepto de viabilidad ambiental, ni se han solicitado los permisos para concesión de aguas y aprovechamiento forestal ante las autoridades ambientales con jurisdicción en los mencionados departamentos de Codechocó y Corpourabá, desconociendo así la normativa ambiental y étnica que rige para esta zona.

Los grupos paramilitares que actúan en la región han servido a los propósitos de este proyecto, para el cual la tenencia colectiva de los territorios de la zona por parte de las comunidades constituye un obstáculo. En ese sentido, la arremetida contra la guerrilla obedece a una estrategia militar pero también económica del sector privado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha denunciado que es evidente que no existe una intervención estatal para enfrentar estructuralmente la acción armada encubierta a través del paramilitarismo, en tanto que se continúa desconociendo los derechos de las comunidades afrodescendientes y se amplía la siembra ilegal e ilícita de la palma aceitera amparada por la guardia armada.

Como en tantos otros lugares de la región tropical, la diversidad natural y cultural corre el riesgo de desaparecer para ser sustituida por extensos monocultivos que sólo sirven a intereses empresariales dedicados a la producción y comercialización de aceite de palma. Y al igual que en casi todos los demás casos, la resistencia a la apropiación de territorios por parte de las empresas comienza a surgir cada vez con mayor fuerza. (Boletín del WRM N° 70, mayo de 2003).

Costa Rica: Los peligros de los monocultivos forestales

Como muchos otros países del Sur, Costa Rica está enfrentando el problema de la expansión de los monocultivos forestales. Especialmente en la Región de Huetar Norte, el establecimiento de plantaciones industriales ha sido un completo fracaso durante los últimos veinte años. Tras haberse gastado US\$ 10 millones en estos programas, hoy en día más del 70% de las plantaciones se encuentran en mal estado y su nivel de producción ha sido mucho más bajo del esperado. Al mismo tiempo, se ha ignorado el potencial de los bosques secundarios y su rica biodiversidad, que en lo que respecta solamente a los árboles supera las 150 especies.

A pesar de los esfuerzos semánticos de los promotores de las plantaciones por llamarlas «bosques plantados» y de referirse a esta actividad como «reforestación», el hecho es que las plantaciones no son bosques y que generan una serie de impactos sociales y ambientales. Los monocultivos forestales industriales implican la ocupación de vastos territorios, la concentración de la propiedad de la tierra y el desplazamiento de pequeños y medianos campesinos. En el caso de Ston Forestal –subsidiaria del gigante Ston Container– unas 300 familias tuvieron que dejar sus tierras en el sur de Costa Rica, las que fueron ocupadas por monocultivos de gmelina. Por otra parte estas plantaciones conspiran contra el desarrollo del conocimiento tradicional en el manejo forestal y la agricultura. El pueblo indígena Melku, en el norte del país, vio cómo 40.000 hectáreas en su región fueron ocupadas por monocultivos forestales apoyados por subsidios estatales, mientras que ellos no recibieron compensación alguna para la recuperación del mastate (*Poulsenia armata*), una especie casi en extinción debido a la presión de maderero, y que constituye el recurso básico de la artesanía local.

Los impactos sociales han ido de la mano de los negativos efectos a nivel ambiental. Ston Foresal está enfrentando un juicio por haber provocado la desecación de humedales, al tiempo que los monocultivos de gmelina en la Península de Osa son considerados responsables de un potencial impacto negativo sobre la población de loros y guacamayos en el vecino Parque Nacional Corcovado. Las plantaciones de palma a cargo de la firma Palma Tica se están expandiendo sobre los humedales de la región sur, a pesar de los esfuerzos en contrario por parte de los ambientalistas, quienes han llegado incluso a presentar una demanda contra la empresa. Los monocultivos de teca provocan erosión del suelo debido a la concentración y rápida liberación de grandes gotas de lluvia a partir de sus hojas. En la región norte se ha comprobado que los monocultivos de eucalipto reducen el flujo de agua hacia los acuíferos.

A pesar de todo esto el gobierno de Costa Rica está apoyando decididamente la inclusión de las plantaciones forestales en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. ¿Cuántos impactos más deberán sufrir la gente y el

ambiente para que finalmente se llegue a la obvia conclusión de que las plantaciones no son bosques? (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Costa Rica: Dólares japoneses para promover monocultivos forestales

El nuevo Presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, parece tener buenas intenciones en materia ambiental, pero al mismo tiempo muestra algún vacío de conocimiento en materia de las especies de árboles nativos de su país.

En efecto, tales contradicciones se hicieron evidentes el 2 de junio de 2002, en ocasión de un acto en la Casa Presidencial, realizado con motivo de una donación del gobierno de Japón (hecha a través del Banco Mundial), de US\$300.000, destinada a promover las plantaciones forestales comerciales.

En dicho acto, el Presidente Abel Pacheco recalcó la necesidad de luchar por las especies autóctonas y detener el «nazismo» vegetal. Al parecer, el Presidente no estaba al tanto de que las especies a plantar –melina y teca– no son autóctonas, sino que ambas provienen de Asia. En efecto, el proyecto que se financiará con la donación del gobierno de Japón tiene como objetivo la plantación de 50.000 hectáreas anuales de teca y melina, durante un plazo de diez años. Es decir, que se planea cubrir a un pequeño país como Costa Rica nada menos que con 500.000 hectáreas de monocultivos forestales.

La donación viene acompañada –como siempre– del discurso ambiental, social y económico correspondiente para justificar este tipo de «desarrollo» forestal. El propio nombre del proyecto (Proyecto de Reactivación de la Reforestación Comercial en Costa Rica-REFORESTA), transmite el mensaje engañoso de que se está «reforestando», cuando en realidad se estaría «monocultivando».

Además, Constantino González, presidente del fondo que manejará los recursos donados, afirmó que esta actividad generaría entre 20 y 30 millones de dólares en los próximos diez años, y permitiría abastecer la demanda local de madera, así como eliminar la presión sobre los bosques y disminuir la tala ilegal. Todo ello suena muy lindo, pero no concuerda con la realidad, ni en Costa Rica ni en ningún otro lugar del mundo.

Resulta triste que un país como Costa Rica, poseedor de una riquísima diversidad forestal, entre en el juego de los japoneses de convertirse en proveedor de madera barata para ese y otros mercados insaciables del mundo industrializado, en vez de centrarse en la restauración de sus bosques destruidos por otros procesos de «desarrollo» (como el ganadero) que en el pasado resultaron en destrucción ambiental y social.

Mucho nos gustaría ver al nuevo Presidente de la República «luchar por las especies autóctonas» y enfrentarse al «nazismo vegetal» impulsado en este caso por el gobierno del Japón y su intermediario el Banco Mundial. Esperamos poder verlo. (Boletín del WRM N° 60, julio de 2002).

Costa Rica: «Muerte lenta» de monocultivos de eucaliptos a gran escala

A principios de los 90, se promovió en Costa Rica la introducción y el cultivo del eucalipto, especie originaria de Australia, como un gran negocio maderero. Sin embargo, a fines de esta década, este modelo de monocultivo forestal a gran escala terminó causando grandes pérdidas económicas al Estado y a un gran número de agricultores.

El informe de Tierramérica reafirma nuestra postura de que no se pueden introducir especies exóticas a gran escala sin un previo estudio de como van a reaccionar en un medio ajeno a su naturaleza y sobre todo de qué impactos ambientales y sociales puede causar, cuando todos estos esfuerzos e incentivos podrían dedicarse a investigar y promover el uso sustentable de las especies nativas.

«Según el Ministerio del Ambiente y Energía, se perdieron entre 3.800 y 4.000 hectáreas plantadas con eucalipto, un cultivo ajeno a la biodiversidad del trópico que dejó en la ruina a muchas familias». «La naturaleza es sabia y no se equivoca», dijo a Tierramérica el ingeniero Luis Quirós, especialista del Ministerio. «No podemos forzar a especies de otras latitudes a adaptarse a nuestras condiciones», agregó.

Quirós, jefe de la subregión de San José, comentó que América Latina ha sufrido en las últimas décadas una serie de modas, que son difundidas por especialistas internacionales. «Muchos organismos vienen y nos recomiendan qué sembrar, con base en lo que ha sido exitoso en países del Norte, pero no toman en cuenta las plagas y las condiciones locales del trópico», aseveró.

El eucalipto, un árbol de rápido crecimiento y gran capacidad de absorción de agua, fue promovido como nuevo cultivo forestal a fines de los años 80 y principios de los 90 para restar presión a la deforestación de los bosques nativos.

El Estado dispuso incentivos económicos para los propietarios de fincas que sembraran eucalipto. El propósito era destinar su madera a la fabricación de muebles y paneles laminados. Todo marchó bien durante los primeros tres años, pero al cuarto, los árboles dejaron de crecer y comenzaron a sufrir la enfermedad que los habitantes locales llaman «muerte lenta». «Le dedicamos muchísimo trabajo a ese proyecto, pero todo se perdió», relató a Tierramérica el agricultor Ronald Rodríguez, de 47 años, quien sembró 100 hectáreas de árboles en 1990.

Los científicos descubrieron que los suelos no eran aptos para el eucalipto, pues la raíz de esta especie no podía penetrar a determinadas profundidades debido a la naturaleza arcillosa de ciertos terrenos. Eso favoreció la aparición de hongos y luego de termitas que, poco a poco, arrasaron internamente la corteza de los árboles, los que en consecuencia se fueron secando.

«En total, con lo que me dio el Estado y con lo que yo invertí pienso que sólo en mi caso, perdí cerca de 500 mil dólares. Hubo familias que quedaron muy mal pues pensaron que el eucalipto sería su proyecto de vida», agregó Rodríguez.

Ahora, científicos, productores y ambientalistas coinciden en la moraleja que dejó el eucalipto: se requiere investigación y experiencias previas antes de promover masivamente una especie exótica. «Se requiere suficiente investigación antes de embarcar en estos proyectos a productores y campesinos, que al final son los que más sufren», afirmó a Tierramérica el geógrafo y ambientalista Alexander Bonilla.

Otros especialistas apuntan que es necesario aprovechar mejor las especies locales, pues se cae en una suerte de «malinchismo ecológico» (malinchismo: que tiene el complejo de apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio), al fomentar sin experimentación variedades de otras latitudes». (Boletín del WRM, N° 65, diciembre de 2002).

Ecuador: Palma africana en el devastado jardín del paraíso

En el Ecuador, frente a un nuevo relanzamiento de la actividad palmicultora, se han dado diversas reacciones. Por ejemplo, un extenso reportaje de un periódico de amplia difusión planteaba la interrogante de si el nuevo auge de plantaciones de palma africana en la provincia de Esmeraldas acercaría la realidad de esta pobre región del Ecuador al paraíso (*El Universo*, 11/3/2000), mientras otros titulares planteaban que los palmicultores están acabando con los bosques nativos, señalando las miles de hectáreas destruidas en San Lorenzo (*La Hora*, 18/5/2001).

Otros medios de prensa recogían en cambio parte de la masiva campaña para limpiar su imagen realizada por la Asociación de Palmicultores del Ecuador ANCUPA, luego de los cuestionamientos a la destrucción de bosques por las empresas palmicultoras y señalaban que los monocultivos de palma africana constituyen una propuesta para el desarrollo sujeta a «censuras ambientales» y se interrogaban sobre si la palmicultura era la gallina de los huevos de oro o una «arpía» para el medio ambiente.

Por otra parte Salomón Gutt, gerente de Palmeras de los Andes, una de las empresas responsables de la mayor tala de bosque primario en San Lorenzo, afirmaba que «esta zona estaba olvidada de Dios y del mundo» hasta que ellos llegaron. Al mismo tiempo, destacaba que la palma es amigable con el ambiente que y «en el fondo se tiene un nuevo bosque de palma, que emite mucho oxígeno. Tal vez no existe ningún otro proyecto empresarial que pueda igualar al cultivo de la palma donde el hombre y la naturaleza forman uno solo».

El sector gubernamental también intervino en la discusión. Hans Thiel anterior director forestal y actual subsecretario, afirmaba que el Ministerio del Ambien-

te ve con buenos ojos la creación de fuentes alternativas de empleo ofrecidas por las palmicultoras debido a que la principal presión que existe sobre el bosque natural es la de la pobreza, la de la colonización y el desplazamiento de la población» (sic) (*Diario Hoy*. Blanco y Negro, 6/5/2000).

Han pasado ya varios meses desde que se inició la acelerada implantación de estos monocultivos en Esmeraldas y es importante hacer varias puntualizaciones sobre la situación actual:

- en el proceso de compra venta de tierras se provocó el desplazamiento de población afroecuatoriana. Parte de esa gente, impulsada por los palmicultores, se encuentra ahora presionando el territorio de comunidades indígenas Awa y Chachis, las que han denunciado esto ante el Ministerio de Agricultura de la zona.

- ya se han deforestado cerca de 8000 hectáreas, la mayoría ilegalmente y además se han realizado adjudicaciones ilegales del Patrimonio Forestal del Estado, exactamente dentro del bloque 13.

- las empresas no han presentado los estudios de impacto ambiental necesarios para estas operaciones y las sanciones y acciones oportunas para detener esta deforestación no se han realizado, como se puede deducir de las declaraciones de los funcionarios del gobierno.

En comparecencia pública en el Congreso Nacional, ante denuncia de organizaciones ecologistas, el Ministro del Ambiente expuso que se iniciaron ocho procesos judiciales por tala de bosque nativo y que de esos juicios se han resuelto siete. Con respecto a los mismos, la situación sería la siguiente: con relación a Palmeras de los Andes, está el juicio anulado en apelación, debido a errores en la ubicación del predio. A Palesema se le ha impuesto una multa de 67.908 dólares por la tala de 250 hectáreas de bosque secundario. A Ecuafinca se la ha impuesto una sanción de 10 salarios mínimos vitales. Palmeras del Pacífico fue absuelta por el Distrito Forestal de Esmeraldas por falta de pruebas. Aiquisa recibió una sanción de 10 salarios mínimos vitales. El juicio a Agrícola San Lorenzo fue anulado en la apelación por errores administrativos. A Teobrama se la sancionó con 10 salarios mínimos vitales y a Ales Palma con 10 salarios mínimo vitales (¡el salario mínimo vital es de 4 dólares!).

La actividad de las empresas palmicultoras está además afectando al propio Patrimonio Forestal del Estado. La empresa Ales Palma tiene áreas que se «sobreponen» al Patrimonio Forestal del Estado, en el sector de Ricaurte; Alzamora en el sector denominado Corriente Larga; Palesema en el sector Campanita y parte dentro de la reserva de manglares Cayapas-Mataje, mientras que Palmeras de los Andes, en Corriente Larga. Dichas adjudicaciones ilegales fueron hechas por el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) y el Ministro de Agricultura ha acusado ante el Congreso Nacional al INDA de ser «una cueva de ladrones».

Ante tantas irregularidades, el 14 de marzo del 2001 el Tribunal Constitucional concedió el recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas para prohibir en forma perentoria las actividades tendientes a desarrollar monocultivos de palma africana, que se declare en emergencia ecológica la provincia de Esmeraldas, que se inicien las acciones legales para sancionar a quienes hayan talado los bosques y exigiendo al Ministro del Ambiente que adecúe sus actuaciones a los mandatos legales.

En vez de acatar como corresponde las disposiciones legales, los palmicultores de San Lorenzo amenazaron con paralizar sus actividades y salir de la zona ante lo que consideran la «falta de garantías» por parte del Ministerio del Ambiente. El ex Ministro del Ambiente Rendón insinuó que su renuncia, ocurrida días después de estas declaraciones, se había debido a la presión de empresarios palmicultores.

A pesar de las evidencias de ilegalidades en las actividades palmícolas en el país y del recurso de amparo obtenido por la sociedad civil, la situación continúa siendo grave. Prueba de ello son las multas irrisorias impuestas, el hecho de que no se hayan establecido responsabilidades penales, como establece la Constitución para los culpables de la destrucción de bosques, que no se haya sancionado a los funcionarios cómplices de estos ilícitos y corresponsables de la deforestación por su negligente actitud. Por otro lado, las empresas continúan sus actividades en zonas en las que el Estado no puede ni siquiera ingresar, haciendo uso de su poder e influencia en el Gobierno y evadiendo así todo tipo de sanción y control.

La devastación actual en la provincia de Esmeraldas es causada por una lógica desarrollista que ha privilegiado la destrucción de los bosques para favorecer los monocultivos; la exportación de camarones a cambio de la destrucción del manglar; la extracción de madera a costa de la biodiversidad. Para colmo, la provincia verde de Esmeraldas es afectada en estos meses por las fumigaciones realizadas en Colombia para la erradicación de cultivos de coca. Este jardín del paraíso debe ser urgentemente declarado en emergencia. (Por: Ricardo Buitrón, Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Ecuador: Plantaciones de eucaliptos en la Provincia de Esmeraldas

Desde 1995 hemos visto salir desde las provincias de la Sierra del Ecuador, cientos de camiones cargados de eucalipto con destino al puerto de Esmeraldas en donde son transformadas en astillas para luego ser exportadas a Japón en donde son convertidas en pulpa de papel. El eucalipto que sale, el tradicional *Eucalyptus globulus*, fue introducido en 1865 por decreto presidencial, principalmente para leña y como material de construcción. Ahora vemos como se ha montado el primer proyecto de plantaciones masivas de eucalipto, no en los Andes ecuatorianos, sino en la costa y con una especie nueva, el *Eucalyptus urograndis*.

Estamos en la fase inicial de este proyecto, que muestra el ingreso de la explotación de madera plantada a gran escala en el país, proyecto que puede afectar aún más la situación de los pobladores de la provincia costera de Esmeraldas, presionados por la extracción masiva de árboles para madera, realizada durante los últimos 50 años; por la implantación en la última década de piscinas dedicadas al cultivo de camarón para exportación y que han destruido los manglares; y por la implantación en los últimos dos años de plantaciones de palma africana que han devastado extensas áreas de bosque primario e invadido zonas de Patrimonio Forestal del Estado y áreas protegidas.

El modelo desarrollista impulsado por el Estado ecuatoriano fomenta la explotación de recursos no renovables y no tradicionales en una lógica de aplicación de las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que han provocado la reprimarización de la economía nacional y nuestra inserción subordinada al acuerdo de Libre Comercio para las Américas ALCA. Esto ha implicado modificaciones a los marcos legales existentes para favorecer este tipo de inversiones, como desregulaciones ambientales y flexibilización del sector laboral, incentivos tributarios y subsidios perversos.

Es en este escenario en el cual el presidente de la República del Ecuador, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en una entrevista de televisión explicaba cuán importantes son las inversiones transnacionales en el Ecuador, y entre ellas mencionaba las siguientes: «ahora tenemos al OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) 1200 millones de dólares y el petróleo que tenemos, eso hay que extraerlo, son 2400 millones en los próximos años, eso es otro adicional, la empresa International Water, en la ECAPAG en Guayaquil 800 millones en 30 años, pero es un flujo y así una empresa para hacer *microchips* en Esmeraldas con madera, es una empresa Chilena-Japonesa, 50 millones este año y 30 millones más el próximo...». No sabemos si la ingenuidad o el desconocimiento o qué, del presidente que le hace confundir esos «microchips» con el eucalipto convertido en astillas (*chips*) para pulpa de papel.

Seguramente se refería al proyecto para realizar plantaciones de eucalipto a gran escala en la provincia de Esmeraldas en la costa ecuatoriana. Proyecto que bajo un maquillaje verde pretende resolver el problema de emisiones de CO₂ de las empresas eléctricas japonesas y proveer de astillas para pulpa de papel a las empresas papeleras. El dinero de inversión total es de US\$ 50 millones, proviene de fondos del gobierno japonés (80%) y de las empresas Electric Power Development Co. Ltd, cuyo principal accionista es el Estado del Japón, de las megacorporaciones como Sumitomo Corporation, Mitsubishi Papers Mills y Waltz International que aportan el 20% restante. Estas empresas formaron EUCAPACIFIC, o Eucalyptus Pacífico S.A. y pretenden plantar más de 10.000 hectáreas en los próximos 6 años, aprovechando las «ventajas comparativas» que les ofrece el Ecuador, tanto climáticas como su

situación geográfica, pero principalmente los bajos costos de la mano de obra y de la tierra, las permisibles y laxas regulaciones ambientales, las exoneraciones tributarias de la provincia de Esmeraldas, principalmente para exportaciones. En su discurso ambientalista estas empresas, señalan que no quieren líos con los ecologistas, que tienen la voluntad de no cortar bosques, de sensibilizar a la gente a la «reforestación» y parece que su objetivo principal fuera la protección del medio ambiente, ocultando sus verdaderas motivaciones que son obtener una rentabilidad financiera y productiva que les permita aumentar la producción de celulosa de papel y evitar las multas futuras por las emisiones de CO₂.

Cuentan con el aval del gobierno ecuatoriano, principalmente del Ministerio del Ambiente, que cree que todo lo que suena a «reforestación», aun si son plantaciones masivas, es beneficioso y le ayuda a mejorar su pobre imagen institucional haciéndolos aparecer como que apoyan iniciativas para forestar en el país; y cuentan además con la poca información a la que pueden acceder los ciudadanos ecuatorianos sobre este modelo forestal en otros países del mundo y los impactos ambientales y sociales que produce.

La puesta en marcha de este proyecto y los objetivos que menciona perseguir nos deja con más dudas que certezas sobre el comportamiento futuro de este consorcio transnacional y el impacto de las plantaciones de eucalipto, lo que nos obliga a estar atentos a su implementación.

Como en tantas otras regiones del Sur, la historia vuelve a repetirse en Esmeraldas: el mismo modelo (monocultivos de eucaliptos), los mismos actores (empresas transnacionales y gobierno) y las mismas promesas (que en poco tiempo se demostrarán falsas). Muchos motivos para estar vigilantes frente a este nuevo emprendimiento. (Por: Ricardo Buitrón, Boletín del WRM N° 48, julio de 2001).

Ecuador: La gente dijo NO a las plantaciones en reunión convocada por el Ministerio de Medio Ambiente

En casi todos los países los monocultivos de árboles a gran escala se han impuesto y desarrollado una vez que se ha logrado modificar las leyes de cada país de tal forma que empresarios nacionales y extranjeros obtienen todo tipo de beneficios, subsidios directos e indirectos, exenciones impositivas y hasta créditos blandos y reintegros por plantaciones a gran escala. Es esta la forma mediante la cual las empresas han transferido sus costos a los ya muy empobrecidos pueblos en un negocio mediante el cual sólo obtienen ganancias, utilizan gratuitamente los recursos, buena tierra, agua, mano de obra barata y además están protegidos por la ley, para que nadie se queje. En casi todos los países esto se ha logrado mediante una campaña de mentiras, engañando a gobernantes y pueblos, y si es necesario también utilizando métodos no tan «democráticos», tales como amenazas, atentados y muerte para los que se opongan. En

este momento en Ecuador, las empresas están presionando al Gobierno para tomar medidas que las favorezcan. Sin embargo, la tarea no les resultará fácil y el proceso ya presenta algunas peculiaridades muy interesantes.

A diferencia de otros países, el Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador tomó la excelente iniciativa de convocar a un Seminario/Taller para formular un «Plan Nacional de Forestación y Reforestación», que se realizó entre los días 28 y 30 abril de 2003 en la ciudad de Quito. El objetivo de este taller, según lo explicitaba la invitación cursada por el Ministerio es que el plan se formule «con participación comunitaria, que sea integral» y que cuente «con el trabajo activo de todos los actores», «integrando los componentes socio ambiental y productivo-económico». En este sentido, parece –afortunadamente– diferenciarse de otros planes nacionales de forestación aprobados en muchos de nuestros países a espaldas de la gente.

En la mayoría de los países donde se han impuesto los supuestos planes de forestación, estos han sido producto de consultorías extranjeras. Sólo a modo de ejemplo cabe recordar que el plan nacional forestal mexicano fue elaborado por la consultora finlandesa INDUFOR, el «Plan Maestro para el Sector Forestal Tailandés» fue elaborado por la consultora Jaakko Pöyry (también finlandesa) y el Plan Maestro de Uruguay fue elaborado por la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA). La participación estuvo totalmente ausente en todos estos procesos.

A pesar de las buenísimas intenciones del Ministerio de que el plan fuera elaborado participativamente, por la vía de los hechos, los sectores empresariales se aseguraron de limitar dicha participación. Los conferencistas nacionales e internacionales invitados, en su gran mayoría «expertos» en monocultivos forestales a gran escala, tenían a cargo la tarea de demostrar el éxito del modelo en países como Brasil, Chile y Uruguay. Entre verdades a medias, gráficas y números, en resumidas cuentas sólo pudieron afirmar que en sus países las áreas de plantaciones se incrementaron y que algunos empresarios ganaron mucho dinero. La acentuación de las crisis económicas de dichos países, los conflictos con las comunidades locales y los impactos económicos, sociales y ambientales negativos, producto de la expansión de los monocultivos, sólo formaron parte de la exposición de la única representación internacional no convocada por los empresarios, una integrante del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, especialmente invitada por el Ministerio. Gracias a esta invitación, el público asistente tuvo acceso a información documentada sobre los innumerables impactos socioambientales de los monocultivos forestales (y las innumerables luchas locales contra los mismos en numerosos países del mundo), que estuvieron ausentes en las presentaciones de los demás panelistas. Ello fortaleció la participación de I@s representantes de comunidades indígenas y campesinas, que en Ecuador ya tienen suficientes ejemplos sobre los impactos de este tipo de plantaciones.

Paradójicamente los integrantes de las comunidades no fueron invitados a exponer sus puntos de vista. Peor aún, sus voces fueron silenciadas en la mayoría de las oportunidades en que se manifestaron en desacuerdo o pretendieron incluir modificaciones en los «Talleres» a los que se denominó «Fostería Social y Actividades Agroforestales» y «Bosques de Protección». Pero fue en el taller denominado «Bosques de producción industrial y comercial» (que debería haberse denominado «monocultivos a gran escala»), donde definitivamente toda oposición fue limitada, censurada y desvirtuada por un moderador volcado abiertamente en favor de los monocultivos forestales.

Las pocas representaciones de organizaciones civiles, campesinas e indígenas del Ecuador, que participaron del evento con el apoyo de la organización local Acción Ecológica, indignadas por la manipulación de la que eran objeto la gran mayoría de l@s participantes, decidieron elaborar una declaración que fue leída minutos antes del cierre del evento, a pesar de la oposición del empresario Montenegro, de la maderera ENDESA /BOTROSA, quien manifestaba a gritos que «aunque no sé de que van a hablar las organizaciones, no tienen derecho a que se les dé la oportunidad de manifestarse, ya que bastante tiempo tuvieron durante estos tres días» (sic).

En dicha declaración (disponible en: <http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/DeclaraciondeQuito.rtf>), l@s firmantes hicieron público el agradecimiento al Ministerio del Medio Ambiente por la iniciativa, pero lamentaron el hecho de que la metodología no facilitara la participación y que las empresas madereras hubieran monopolizado el evento, que se convirtió «en un foro para promocionar plantaciones industriales, desconociendo las denuncias, argumentos y propuestas de las comunidades, que reconocemos en las plantaciones forestales industriales una de las principales amenazas para nuestros bosques nativos, nuestro bienestar e incluso nuestra sobrevivencia».

Además, la declaración aportó ejemplos concretos en los que las plantaciones forestales comerciales a gran escala en Ecuador no fueron una alternativa de desarrollo sino que, por el contrario, provocaron problemas tales como deforestación, disminución de fuentes de agua, reducción de la fertilidad del suelo, pérdida de biodiversidad, apropiación de tierras de las comunidades, aumento de riesgo de incendios y reducción de las zonas de conservación.

Las organizaciones firmantes consideraron además «que debe iniciarse un proceso participativo en donde las comunidades intervengan con miras a la elaboración de un Plan Nacional sobre Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, en donde se incluyan las estrategias de conservación, regeneración y restauración de los bosques y otras áreas naturales, especialmente para la protección de las fuentes de agua, flora, fauna y suelo, porque las plantaciones no son bosques».

En resumen, el reciente evento llevado a cabo en Ecuador constituye una experiencia muy importante. Por un lado, porque el gobierno auspició un proceso participativo que abrió puertas a actores normalmente dejados de lado como las comunidades indígenas y campesinas. Por otro lado, porque mostró la capacidad de manipulación del sector maderero, que se adueñó del evento y quiso ponerlo al servicio de sus intereses empresariales. Pero también porque los sectores realmente interesados en la conservación ambiental y en la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso sustentable de los recursos naturales pudieron finalmente sortear los obstáculos y hacer oír su propia voz. Es de esperar que el gobierno —que seguramente va a ser objeto de enormes presiones por parte del sector empresarial maderero— tome en cuenta estas posiciones y las incorpore a sus políticas, para que éstas beneficien a las comunidades locales y al país en su conjunto, asegurando al mismo tiempo la conservación ambiental. (Por: Ana Filippini, Boletín del WRM N° 70, mayo de 2003).

EE.UU.: Monocultivos forestales en el Sur. . . de los EE.UU.

La destrucción de los bosques con el fin de liberar espacio para monocultivos forestales es un hecho documentado en muchos países del Sur. Un proceso similar pero menos conocido se está dando en la región sudeste de los EE.UU. Los Estados de Alabama, Louisiana, Tennessee y Carolina del Norte han sido y siguen siendo invadidos por enormes plantaciones de pino *taeda*. Esta especie es nativa de la región, pero específicamente del piedemonte húmedo localizado entre las tierras altas y el mar, de modo que es una especie exótica en las colinas donde se están instalando la mayor parte de las plantaciones. Además, estos no son pinos comunes, sino «súper árboles» clonados, seleccionados por su rapidez de crecimiento, rectitud del tronco y resistencia a sequías, enfermedades e insectos.

Ted Williams, autor de un excelente artículo publicado en la revista «Mother Jones», comienza su análisis con la siguiente pregunta: «¿Qué es algo verde, lleno de árboles y peor que una tala total?». La respuesta es: «Las vastas plantaciones de pino que están reemplazando aceleradamente los bosques a través de una nueva forma de plantación en el Sur».

Williams describe el proceso de la siguiente forma: «Antes de instalar sus super-plantines, las empresas realizan una tala rasa y pasan el *bulldozer* por el sitio para deshacerse de todos los árboles nativos, los arbustos, las trepadoras, los helechos, los musgos, los hongos, las hierbas y las flores silvestres. Los restos leñosos son quemados. Luego se plantan los pinos. Cuando éstos maduran son raleados y podados. Los retoños de los árboles nativos son cortados o muertos con herbicidas. Luego, 15 o 20 años después de haber sido plantados, se cortan los pinos y el proceso comienza nuevamente».

Algunas cifras muestran la alarmante dinámica de la conversión de bosques en plantaciones. Hoy en día hay 156 plantas procesadoras de madera en astillas («chipeadoras») en la región, de las cuales 110 se abrieron en los últimos diez años. Algunas de ellas pueden triturar hasta 1.200 hectáreas de bosque al año, abriendo así el camino a las plantaciones. Entre 1989 y 1995 las exportaciones de astillas de madera dura desde el sur de EE.UU. creció cinco veces. El Servicio Forestal estima que las plantaciones, que hoy conforman el 36% de las existencias de pino en el Sur, llegarán a ser el 70% en los próximos 20 años.

El sistema utilizado para promover los monocultivos de pino en el sur de los EE.UU. es muy similar al adoptado en los países del Sur. Las grandes empresas—como Champion y Weyerhaeuser—reciben exenciones impositivas y créditos blandos, además de una serie de externalidades positivas—como ser la construcción de hidrovías—que alientan el desarrollo de la industria de la celulosa. En Alabama, por ejemplo, el Estado otorgó exenciones impositivas y otros beneficios a las empresas plantadoras, lo que privó al sistema escolar de unos US\$ 50 millones anuales. La construcción y los trabajos de drenado de la Hidrovía Tennessee-Tombigbee le cuestan a los ciudadanos de ese Estado muchos millones de dólares al año. Como sucede en todas partes, un estudio realizado por la Universidad de Auburn ha demostrado que las comunidades rurales más dependientes de este tipo de industria forestal es la que muestra los mayores niveles de desempleo y pobreza.

Una de las razones por las cuales no existen controles significativos sobre la conversión de bosques a plantaciones de pino—explica Williams—es que las empresas forestales han convencido a los medios de prensa y al público de que «replantar» un bosque una vez que ha sido eliminado no sólo es algo posible sino algo admirable. Weyerhaeuser, que según *Business Week* hace las cosas «mejor que la Madre Naturaleza», alardea de que «replanta rápidamente» las zonas taladas con «plantines vigorosos y jóvenes». La compañía informó que en 1998 plantó más de 51 millones de árboles en sus «bosques» de EE.UU. Georgia-Pacific, que maneja 1.800.000 hectáreas en el sur del país, planta a razón de 125 millones de árboles por año y se enorgullece de que sus «bosques son una fábrica». Y en realidad son fábricas, pero por cierto no son bosques. Como señaló un profesor de biología de la Universidad del Sur en Sewanee, la industria necesita seguir alimentando la fantasía de que reemplazar los árboles del bosque por pinos *taeda* es reforestar: «El maíz es un tipo de gramínea. Sin embargo, los granjeros del medio oeste no andan por ahí diciendo que lo que ellos hacen es restaurar la pradera de pastos altos».

Lo que las compañías se cuidan de no mencionar, agrega Williams, «es que la plantación de pinos, así como otros tipos de agricultura en gran escala, daña el ambiente y la economía. Las plantaciones de pino requieren de enormes cantidades de fertilizante y herbicida, la mayor parte de los cuales termina en los cursos de agua y las fuentes de agua potable. Estos empobrecen el suelo y

destruyen los hábitats, incluyendo los humedales. A su vez le roban a las comunidades una valiosa madera para aserrado y los verdaderos bosques que producen agua limpia y suministran oportunidades de recreación. Pocos de los beneficios alcanzan a las comunidades locales y muchas de las empresas son multinacionales».

Pero los impactos por cierto que son locales. Como demuestran los estudios realizados por la Universidad de Clemson, el suelo utilizado para el cultivo de pino en varias rotaciones pierde los nutrientes del horizonte superficial, y cuanto más cortas son las rotaciones –como es la tendencia actual– más destructivo es el proceso. La talarrasa practicada previo a la plantación tiene todavía efectos más drásticos. Hace algún tiempo en Moore Hill una intensa lluvia provocó un aluvión de barro y desechos, proveniente de un lote de alrededor de 50 hectáreas de superficie recientemente cortado por Champion, que terminó en el río Mississippi. Con frecuencia las plantaciones son bombardeadas con *pelets* de fertilizantes. Esta práctica contamina los hábitats de los peces y la vida silvestre, afectando también a los asentamientos humanos. El año pasado los habitantes del Condado de Sequatchi en Tennessee y sus haciendas fueron dañados por *pelets* de urea destinados a plantaciones de pino pertenecientes a Bowater. Hay poca información sobre los efectos de largo plazo en peces, vida silvestre y humanos de los herbicidas utilizados en las plantaciones. Las empresas plantadoras generalmente usan Garlon, un producto riesgoso, que puede permanecer en el suelo durante dos años luego de aplicado y ser fácilmente lavado a los cursos de agua.

Por otra parte, los propios monocultivos están enfrentando un importante problema sanitario generado por la destrucción del ecosistema forestal y la red trófica a él asociada: las avispas del pino se están transformando en una amenaza para los árboles en las plantaciones y no pueden ser controladas por sus predadores naturales, que han desaparecido de este nuevo ambiente artificial.

En resumen, los monocultivos forestales en el sur de EE.UU. se basan en el mismo esquema de las plantaciones en los países del Sur: el proceso es promovido por el Estado, beneficia a las grandes corporaciones, genera pocos beneficios para las comunidades locales, quienes deben afrontar los impactos sociales y ambientales generados por este modelo forestal, y sigue siendo una de las principales causas de la deforestación. (Boletín del WRM N° 36, julio de 2000).

EE.UU.: Donde las plantaciones claramente no son bosques

Pocas personas saben que el sur de los Estados Unidos es actualmente la región con la mayor producción de madera y papel del mundo. Los esfuerzos exitosos para proteger los bosques primarios que todavía quedan en el noroeste del Pacífico, han determinado la expansión de la industria hacia los bosques secundarios en recuperación en el sur.

El sur de los Estados Unidos alberga actualmente la mitad de todas las plantaciones industriales de árboles del mundo (unos 12 millones de hectáreas) y los expertos prevén que las plantaciones se duplicarán en los próximos 20 años. El 40% de los bosques de pino nativos de toda la región ya fueron convertidos en plantaciones en monocultivo. Los expertos de la industria prevén que esa cifra aumentará hasta el 70% para el año 2020.

A pesar de todas las plantaciones de crecimiento rápido, los árboles de pino (la especie elegida para las plantaciones) se talan más rápido de lo que crecen, según el Servicio Forestal de EE.UU. Y si bien la industria argumenta que las plantaciones reducen la presión sobre los bosques naturales, los expertos prevén que la eliminación de bosques naturales de especies no coníferas excederá su crecimiento en el correr de la década.

Quedan muy pocos bosques primarios en la región, ya que prácticamente todos los bosques fueron talados a principios del siglo XX. Sin embargo, los bosques nativos secundarios en recuperación de la región poseen la mayor biodiversidad biológica de América del Norte, ya que escaparon a los glaciares durante la última era glacial. Estos bosques concentran la mayor diversidad de árboles y otras especies terrestres y acuáticas del continente.

No sólo se está convirtiendo a estos bosques naturales de gran diversidad en plantaciones de crecimiento rápido, sino que se están desecando los humedales para transformarlos también en plantaciones. Estas plantaciones son fumigadas con herbicidas y fertilizantes químicos por medio de avionetas. Además, las grandes compañías (International Paper, Georgia-Pacific, Weyerhaeuser, Westvaco etc.) están convirtiendo el sur de EE.UU. en punto central del desarrollo de la ingeniería genética de árboles.

Esta situación no solamente representa un impacto ecológico para la región, sino que también implica un impacto negativo para las comunidades locales, al ser tanto un problema social como uno ambiental. Las comunidades que rodean estas grandes plantaciones suelen estar económicamente deprimidas, y tienen índices promedio de pobreza más altos y menores niveles de gasto en educación pública.

No existen leyes vigentes que impidan la conversión de bosques en plantaciones en el sur de EE.UU., ya que las compañías madereras más grandes del mundo se concentran en esta región del planeta y ejercen una influencia indebida sobre el sistema político. De hecho, las políticas que se aplican en realidad promueven y subsidian la conversión de bosques en plantaciones.

La buena noticia es que ahora hay una coalición de grupos muy fuerte y diversa en toda la región (incluyendo líderes religiosos, empresas recreativas, propietarios de aserraderos locales y grupos de protección de los bosques) que trabajan conjuntamente para detener la expansión de las prácticas de silvicult-

tura industrial. La Dogwood Alliance, una coalición de 70 organizaciones del sur de EE.UU., trabaja actualmente en dos áreas:

1.- Políticas gubernamentales: para detener la expansión de la industria y asegurar protección legal para los bosques a nivel del Estado. Existe actualmente una moratoria de autorizaciones para instalar fábricas nuevas de astillas de madera en el Estado de Missouri, y es más difícil ahora para una compañía conseguir un permiso para una fábrica de astillas en el Estado de Carolina del Norte. En forma colectiva, la Alliance ha logrado detener la construcción de siete fábricas de astillas desde 1991.

2.- Mercados de las compañías: para reducir la presión sobre los bosques, fomentando el alejamiento de los mercados de productos obtenidos con prácticas no sostenibles y orientándolos hacia productos alternativos.

La Alliance, junto con otras organizaciones como Rainforest Action Network, ha logrado convencer a Lowe's (el segundo vendedor minorista de productos de madera de EE.UU.) para que fomente entre sus proveedores no seguir convirtiendo bosques en plantaciones.

La coalición también participa en una campaña nacional (en sociedad con Forest Ethics) cuyo objetivo es que Staples (la empresa de venta minorista de artículos de oficina más grande del mundo) se transforme en la empresa minorista líder de productos de papelería con alto contenido reciclado post-consumidor.

En este momento en que queda menos del 20% de bosques primarios, debemos reconocer que sólo protegerlos no será suficiente para mantener la biodiversidad de la Tierra. Existen todavía grupos e individuos bien intencionados que trabajan para proteger los bosques primarios, que creen que las plantaciones son parte de la solución para la crisis mundial de los bosques. Alcanza con comprender la situación del sur de EE.UU. para tomar conciencia de que las plantaciones no ofrecen protección a los bosques, sino que los destruyen. (Por: Danna Smith, Boletín del WRM N° 49, agosto de 2001).

EE.UU.: Kinkos dice NO a los árboles transgénicos

La ingeniería genética avanza a toda carrera en su afán de suministrar árboles genéticamente diseñados para las plantaciones comerciales, incorporando características como la resistencia a los herbicidas, producción de insecticidas, crecimiento rápido y bajo contenido de lignina en los árboles para adaptarlos a los requerimientos del comercio.

El sólido paradigma del manejo diverso de los bosques ha sido reemplazado en forma creciente por un modelo que no ofrece espacio para otros usos de los bosques que no sean la extracción de fibra de madera, del cual su máxima

expresión es la plantación de monocultivos de árboles en gran escala. En un paso más en esta dirección, las industrias se han asociado con algunas autoridades gubernamentales y universidades para hacer realidad las plantaciones de árboles modificados genéticamente. Si bien afirman que evalúan los posibles impactos ambientales, surgen ensayos de campo con árboles modificados genéticamente en todo el mundo. Estos ensayos no están aislados de su entorno y su impacto sobre el medio ambiente es impredecible. Las primeras especies transgénicas que se utilizarán comercialmente en plantaciones serán álamo, pino y eucalipto. Los árboles transgénicos involucran una serie de amenazas, entre ellas, la pérdida de millones de kilómetros cuadrados de bosques, la perturbación de poblaciones de insectos, pájaros y fauna silvestre, la contaminación del agua y el suelo, y el aumento del uso de herbicidas y plaguicidas. También conducirán a la contaminación inevitable e irreversible de los bosques con polen modificado genéticamente, dando lugar a un efecto dominó perpetuo.

En la comunidad académica y la sociedad civil han surgido muchas voces de fuerte oposición a esta tendencia. Desde marzo del 2002 se ha iniciado una campaña contra los árboles transgénicos organizada por Action for Social & Ecological Justice (ASEJ, anteriormente Eastern North American Resource Center de la Native Forest Network), miembro fundador de la Alianza Global contra los Árboles Genéticamente Manipulados (Global Alliance Against Genetically Engineered Trees - GAAGET). A principios del otoño de 2002, ASEJ realizó sesiones de estrategia regional en las cuatro regiones de Estados Unidos más profundamente involucradas en la investigación y desarrollo de árboles modificados genéticamente. A continuación se realizó una sesión de estrategia nacional en la que participaron grupos como Rainforest Action Network, la Dogwood Alliance y Forest Ethics. El propósito de esta campaña es lograr la prohibición internacional de la utilización de árboles transgénicos en el medio ambiente, incluyendo sitios de ensayo y aplicaciones comerciales.

También hay algunas buenas noticias. Kinkos, el gigante de las fotocopias, anunció que no trabajaría con proveedores que utilicen árboles modificados genéticamente. Esta es la primera medida de este tipo en relación con árboles transgénicos, y constituye un paso trascendente e innovador hacia la eliminación de las graves amenazas ecológicas que representan los árboles modificados genéticamente.

«Elogiamos esta decisión de Kinkos y felicitamos a Rainforest Action Network y a la Dogwood Alliance por esta importante victoria», declaró Brad Hash, responsable de la campaña contra los árboles genéticamente manipulados de ASEJ, quien confía en que esto sea el comienzo de una ola que se transmita a toda la industria. (Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

México: La palma africana y los distintos significados de Chiapas

Chiapas significa mucho para mucha gente de todo el mundo. Es sinónimo de Zapatistas y de sub comandante Marcos y estos a su vez son sinónimo de lucha contra la injusticia y por la liberación. Sin embargo, para el empresariado nacional y transnacional Chiapas continúa siendo simplemente sinónimo de tierra barata, mano de obra barata, recursos abundantes y oportunidades de ganancias.

No resulta extraño entonces que tanto el gobierno como los empresarios estén impulsando una serie de proyectos que atentan contra la enorme diversidad biológica y cultural de Chiapas. Entre los mismos se encuentra la promoción de monocultivos de palma africana por parte del gobierno, que abre las puertas al ingreso de inversionistas extranjeros, entre los que se destacan los provenientes de Malasia, que dominan el mercado internacional de aceite de palma.

La palma africana aún ocupa superficies relativamente reducidas (unas 3000 hectáreas), ubicadas en los municipios de Acapetahua, Acacoyagua, Mazatán, Mapastepec y Villa Comaltitlán, que alimentan a las plantas extractoras de aceite instaladas en Villa Comaltitlán y Acapetahua. Sin embargo, sus impactos ya se están comenzando a percibir.

Ya en el año 2000, los productores de palma africana de Acapetahua planteaban que se encontraban «a merced de la voracidad de los compradores, que son los dueños de las plantas extractoras, que pagan lo que quieren por tonelada». Los productores afirmaban que, siendo el gobierno quien inició el programa del cultivo de este «fruto», debería ser rector del precio de garantía del producto. Sin embargo, el Estado no asumió ese rol y los productores, enfrentados a precios fijados por el monopolio industrial, se encontraban al borde de la quiebra. Desde entonces, los precios han bajado aún más.

¿Por qué tanto interés por la producción de palma africana en Chiapas? La respuesta es sencilla: porque produce altas ganancias, emplea poca mano de obra, no requiere de muchos insumos, es capital de poco riesgo para el empresario. En general es el campesino quien pone su tierra y su mano de obra, pero no es dueño del proceso de producción, sino sólo de la extracción del fruto. Además, este cultivo aprovecha la mano de obra barata que ofrece la migración a la región fronteriza. En el caso de los jornaleros de la frontera con Guatemala, a los que tienen suerte se les paga 32 pesos diarios (3.5 dólares) sin alimentos, e incluso contratan a niños. Además, se han dado casos en que autoridades guatemaltecas han tenido que intervenir para solicitar que sean pagados jornales no pagados a sus connacionales. Es decir, que los trabajadores son literalmente explotados.

Desde el punto de vista ambiental, sus impactos también comienzan a ser percibidos. En efecto, al tratarse de monocultivos a gran escala, implican la

destrucción de grandes extensiones de los bosques de la región y de su rica biodiversidad. En caso de que los planes del gobierno de destinar miles de hectáreas a este cultivo se cumplieran, implicarían además la ocupación de enormes extensiones de tierras pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas del Estado. Se calcula que en Chiapas hay un potencial de producción de la palma africana estimado en 940 mil hectáreas entre las Zonas Norte, Selva y Costa. Pero estas tierras no están vacías, por lo que la promoción de éste y otros cultivos (como el del eucalipto), resultará en la apropiación de amplias áreas hoy utilizadas por poblaciones locales.

Resulta claro entonces que el objetivo de la promoción de este cultivo no es el de mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, ya que de todas las alternativas posibles, constituye una de las peores en materia de generación de empleos e ingresos. Por otro lado, atenta contra la sobrevivencia de los bosques y de los recursos de las poblaciones locales mediante la ocupación de grandes extensiones de tierras por monocultivos de palma. Las poblaciones locales ya lo están percibiendo, lo que explica la creciente oposición chiapaneca, que no está dispuesta a cambiar sus riquezas naturales por estos modernos espejitos y cuentas de colores. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

México: Plan forestal elaborado por finlandeses

Que el mundo está cada vez más loco ya nadie lo duda. El plan forestal de Uruguay fue elaborado por japoneses, el tailandés por finlandeses y ahora el «Plan estratégico forestal para México 2025» también por finlandeses.

No importa lo poco que estos supuestos expertos puedan saber sobre las condiciones ambientales locales y menos aún sobre las culturas e idiosincrasia de quienes allí habitan. La receta es siempre la misma, trátase de México, el Congo o Indonesia: hay que «plantar bosques» (que en el lenguaje de dichos expertos normalmente significa monocultivos de eucaliptos). La receta incluye la necesidad de «promover» las plantaciones (que traducido al idioma normal significa que el pueblo debe subsidiar a las grandes empresas para que éstas puedan obtener grandes ganancias). Incluye asimismo que sectores del gobierno asuman la responsabilidad para viabilizar la aceptación y puesta en práctica de la receta.

El ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, director de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), parece haber asumido seriamente ese rol. En entrevista publicada el 12 de julio de 2001 en *La Jornada*, planteó la necesidad de “fabricar bosques”. Anunció que el eje de trabajo del sector está plasmado en el Plan Estratégico Forestal 2025, «elaborado con apoyo de especialistas de Finlandia». En realidad la consultora finlandesa Indufor hizo mucho más que simplemente «apoyar»: elaboró el informe final que se maneja ahora como borrador para discusión.

En la misma entrevista, el director de CONAFOR señala la necesidad de introducir cambios legislativos para la puesta en marcha del plan y anuncia que «se dará especial impulso a las plantaciones forestales comerciales». Los cambios anunciados seguramente tendrán algo que ver con el tema de la tierra y con el tema de los subsidios a las plantaciones.

Como resulta claro que las opiniones del Sr. Alberto Cárdenas se basan fundamentalmente en el plan elaborado por Indufor, es bueno saber lo que esta consultora dice al respecto. En su capítulo sobre plantaciones forestales afirma que «para fomentar el establecimiento de las plantaciones forestales comerciales y de tipo industrial, se han diseñado y puesto en práctica incentivos económicos directos, que están en su fase de ajuste». Es decir, que de alguna manera se piensa subsidiar a las grandes empresas forestales.

El informe continúa diciendo que «Persisten problemas de acceso a la tierra, de seguridad de los derechos de propiedad, de mercado y de normatividad ...» que generan «un clima de inversión desfavorable». No se refiere por supuesto al acceso a la tierra por parte de los campesinos o los indígenas, sino que el «problema» radica en cómo hacer para que las grandes empresas forestales puedan asegurar legalmente el uso de cientos de miles de hectáreas de tierra para sus plantaciones.

Pero quizá lo más novedoso del informe (en comparación con otros muy parecidos existentes en otros países de la región), es que se plantea una duda cuando dice: «La incertidumbre de las consecuencias sociales asociadas con las plantaciones a gran escala, ha producido una actitud cautelosa en las comunidades rurales». También esto requiere de traducción: significa que las comunidades se oponen a las plantaciones a gran escala, ya que sospechan con fundamento que las mismas se harán a expensas de las tierras de las que dependen para vivir. Con similar fundamento sospechan que van a generar muy pocos empleos y que van a aparejar impactos sobre los suelos, el agua y la biodiversidad, elementos de los que también dependen para su supervivencia.

Volviendo al Sr. Alberto Cárdenas, éste nos dice donde van a pretender implantar esos monocultivos: «Sur y sureste del país. Pero también hay interés en los Estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Michoacán». En realidad, se van a implantar en aquellos sitios donde se reúnan todos los requisitos de la industria papelera internacional. Es decir, en regiones donde los eucaliptos crezcan muy rápido, donde la tierra y la mano de obra sean baratas, donde haya agua abundante para la instalación de plantas de celulosa, donde los controles ambientales no sean estrictos. Quienes conozcan las características de las distintas regiones de México sabrán así dónde se está pensando en plantar. (Boletín del WRM N° 48, julio de 2001).

México: Oposición a plan forestal elaborado por consultora finlandesa

La oposición al plan forestal elaborado para México por la empresa consultora finlandesa Indufor, no se ha hecho esperar. Los líderes de las cinco organizaciones sociales forestales más importantes del país hicieron público un severo cuestionamiento al llamado Plan Estratégico Forestal para México. Los dirigentes de dichas organizaciones señalan que se parte de un diagnóstico «sesgado» que identifica al tipo de tenencia de la tierra como la principal causa de deforestación, «lo que parecería sugerir que la solución a la deforestación sería la privatización de bosques y selvas».

Y por supuesto que los dirigentes tienen razón, ya que a pesar de la acumulación de pruebas en contrario, los consultores extranjeros continúan insistiendo en la receta de la privatización como la solución a todos los males. En este caso, implicaría la apropiación de las tierras actualmente ocupadas por pequeños productores, campesinos y pueblos indígenas por parte de las grandes empresas transnacionales.

Contrariamente a lo que plantea la consultora finlandesa, para las organizaciones sociales forestales, «la principal causa de la deforestación es una política subordinada a la política agropecuaria, donde tradicionalmente los bosques y selvas han sido una especie de reserva territorial para la expansión de la agricultura y la ganadería». Lo cual no es ningún secreto para nadie en América Latina, aunque sí parece serlo para los «expertos» extranjeros responsables de ese análisis que es correctamente tildado de «sesgado» por los productores.

Vinculado a lo anterior, los dirigentes también criticaron que el plan privilegia a la iniciativa privada como motor del desarrollo forestal y no toma en cuenta a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios (dueños de 80 por ciento de los bosques y selvas del país) para la planeación y ejecución del mismo y ni siquiera contiene un mecanismo de concertación con los productores.

Paradójicamente, resulta claro que el Plan Estratégico Forestal para México no es un plan para los mexicanos que habitan los bosques de México. Por el contrario, se trata de un plan elaborado a espaldas de los dueños de los bosques, que apunta a beneficiar a agentes externos conformados por grandes grupos económicos transnacionales. Bajo tales condiciones, sólo es dable esperar que la oposición a dicho plan continúe creciendo y ampliándose a todos los sectores sociales que serían afectados en el caso de que se implementara. (Boletín del WRM N° 49, agosto de 2001).

México: Puerta abierta a plantaciones de árboles «neoliberales»

México está integrado a un modelo que prioriza las necesidades de la demanda del capital industrial transnacional orientado a la exportación. A esa demanda se subordina la política ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

Dentro de ese esquema entra la plantación de miles de hectáreas de árboles celulósicos como el eucalipto, de especies de rápido crecimiento como la teca, melina, pawlonia, cedro rosado. Según palabras del director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Alberto Cárdenas Jiménez, «el asunto de las plantaciones quedó desregulado a su máxima expresión». Eso quiere decir que se abrirán aún más las puertas para el ingreso masivo del «perfecto árbol neoliberal», el eucalipto, al decir de Jaime Avilés, columnista del diario mexicano *La Jornada*, porque crece rápido, mata todo lo que está a su alrededor y genera grandes ganancias para muy poca gente.

El Plan Puebla-Panamá (PPP), que busca convertir a México y Centroamérica en una gran zona de libre comercio, con incontables maquiladoras y «canales de tierra» para incrementar el comercio interoceánico, tiene como uno de sus componentes la plantación a gran escala de monocultivos de ese tipo de árbol. Algunas de esas plantaciones serán proveedoras de madera y celulosa. Otras tal vez sirvan de «sumideros de carbono», un truco más de las transnacionales para evitar reducir las emisiones de gases contaminantes de los automóviles y grandes industrias en los llamados países desarrollados, que han provocado el calentamiento de la atmósfera.

Como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, los sumideros de carbono dan carta blanca a países e industrias para seguir contaminando, siempre y cuando financien proyectos «ecológicos» en el Tercer Mundo que supuestamente compensen la contaminación creada. Entre esos proyectos se incluye la plantación de árboles. Alguno podría pensar: ¿Qué problema puede haber con eso? ¿Acaso los ecologistas no se la pasan despotricando para que se siembren árboles? El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por su sigla en inglés) ha explicitado largamente la gran diferencia que existe entre los bosques y las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles, que presentan los mismos problemas ecológicos que los monocultivos agrícolas.

El profesor Andrés Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostiene que las plantaciones forestales industriales «en realidad no son los complejos ecosistemas que nombramos genéricamente como bosques sino monocultivos estrictos emplazados sobre gigantescas áreas productivas (de varias decenas de miles de hectáreas) que vienen asociadas a la necesaria expulsión de la población rural, al desempleo que se refuerza con la mecanización de la producción forestal, al empleo intensivo de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc., al desarrollo de plagas, al agotamiento y contaminación de los mantos freáticos, a la destrucción de la biodiversidad». Con los sumideros de carbono, «se introducen directamente empresas transnacionales en los procesos comunitarios de gestión de los bosques. Se involucra a las comunidades dentro de una gran manipulación de escala mundial según la cual son las

mismas empresas transnacionales que contaminan y que más amenazan con seguirlo haciendo, sin resolver ninguna de las causas reales del calentamiento atmosférico, las que justamente se visten de hadas madrinas para el apoyo de las depauperadas comunidades campesinas».

En el actual proceso de privatización de las riquezas biológicas, las transnacionales se instalan peligrosamente en zonas clave de los corredores biológicos. Es así que otro componente ambiental del Plan Puebla Panamá lo constituye el Corredor Biológico Mesoamericano, que vinculará cientos de áreas naturales protegidas en la región para formar una sola zona de conservación. Grupos de la sociedad civil, ecologistas e indígenas denuncian el Corredor como una maniobra de relaciones públicas para legitimar el Plan Puebla Panamá ante el sector ambientalista. (Boletín del WRM N° 67, febrero de 2003).

Nicaragua: Se prepara ley para las plantaciones

Nicaragua es todavía considerado el país de la región centroamericana con la mayor extensión de bosques y con mayores áreas de bosque virgen. Durante los años 80 la destrucción del bosque se detuvo en parte por las condiciones de la guerra que se libraba en las montañas, por lo que muchas comunidades indígenas y campesinas se vieron obligadas a abandonar esas zonas.

En 1994 con la firma del Primer Programa de Ajuste Estructural, el país afianzó su apertura comercial, la que incluyó la entrega de sus recursos naturales en concesiones a empresas extranjeras y nacionales. Con el pretexto de inversión y fuentes de empleo, se entregaron concesiones forestales, por las que hoy el Gobierno enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las Comunidades Indígenas.

A finales de 1996, se introdujo a la Asamblea Nacional, un Anteproyecto de Ley Forestal consensuado entre diferentes sectores, el que fue dictaminado al año siguiente. Sin embargo, han pasado todos estos años y nunca hubo voluntad política de parte del Gobierno ni de la Asamblea de aprobar la Ley. En vista de ello se aprobó un Reglamento Forestal que carecía de un marco legal general y conceptual.

El bosque nicaragüense ha enfrentado en estos últimos años, la peor voracidad del mercado regional e internacional. Debido a la presión nacional e internacional, el Presidente de la República de Nicaragua emitió en junio de 1998 una Moratoria Forestal durante 5 años que prohibía la extracción y exportación de madera preciosa.

De una u otra manera esto está reflejando la ausencia de un marco legal y una política en materia forestal. Sin embargo, en el 2000, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal (MAGFOR), por presión de las Instituciones Financieras Internacionales, completó la discusión de la Política Forestal y junto con la

Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, contrataron a consultores para elaborar una nueva Propuesta de Ley para el Desarrollo y Fomento Forestal.

Dicho Anteproyecto confirma las declaraciones que en su momento hicieron los Ministros y el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que sería una ley al estilo chileno por tener Chile la mejor experiencia forestal. Esta propuesta, fue entregada en julio pasado para la «consulta» a diferentes sectores quienes han trabajado meses para dar sus aportes.

No obstante, a casi nadie parece importarle que la ley contemple a las plantaciones como bosques, ni los exclusivos incentivos para la industria maderera, ni las trampas de los mecanismos de desarrollo limpio. Sólo hubo una consulta de las comunidades indígenas cuyo aporte fue: «esta ley no sirve, necesitamos otra que proteja el bosque y que no lo venda todo».

Hasta ahora Nicaragua no conoce experiencias de plantaciones, sólo en ensayos y en cortinas rompevientos. El mundial eucalipto es rechazado por los campesinos por secar el agua, y han demandado en los proyectos de reforestación las plantas nativas de la zona.

Aunque el Gobierno y la Asamblea estaban urgidos para aprobarla este año, por razones desconocidas, la ley solamente se aprobará el próximo marzo del 2001. Seguramente será cuando que se convenzan las autoridades y los parlamentarios nicas de las «bondades» de la ley chilena. (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Nicaragua: United Fruit, palma africana y destrucción de bosques

La historia de la palma aceitera en América Central está íntimamente ligada a la historia misma del grupo económico de la empresa United Fruit. Preston y Keith, dos empresarios norteamericanos que a partir de 1870 y durante 20 años se dedicaron a la plantación y exportación de bananas hacia los Estados Unidos, en 1899 se fusionaron en la United Fruit Company (UFCO) en busca de diversificar sus plantaciones y aumentar sus ganancias.

En 1901, el entonces dictador guatemalteco, Manuel Estrada Cabrera otorgó a UFCO la exclusividad en el derecho a transportar correo entre Guatemala y EEUU. Se creó la Compañía Guatemalteca de Ferrocarril, como una filial de UFCO. A la compañía se le permitió comprar tierras a bajo precio, recibió subsidios y con algunas variaciones obtuvo en muchos países de América Central el control del transporte y las comunicaciones, lo que le permitió además cobrar por cada artículo que se movía. Esta fue la puerta de entrada para la gran inversión de la UFCO en América Latina. El poderoso manto de la UFCO, llamada «yunai» o «La Frutera» se extendía sobre varios países.

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, la consolidación del negocio bananero en Honduras se dificultó por problemas políticos serios, y en Costa

Rica ocurrió una fuerte oposición al negocio bananero por parte de la oligarquía cafetalera. En 1923, la United Fruit formó un departamento de investigación y una estación experimental (ambos en Honduras), con el objetivo de introducir y evaluar nuevos cultivos tropicales en Centro América.

La aparición y diseminación de la marchitez por *Fusarium* en las plantaciones de banano obligó a la UFCO a abandonar extensas áreas de cultivo. Parte de ella fue utilizada para sembrar palma aceitera.

En los años 40 se sembraron en Nicaragua las primeras plantaciones de palma aceitera en un área de alrededor 1,800 hectáreas, en el municipio del Rama, en la zona Atlántica. La ubicación de la plantación dio como resultados buena adaptabilidad y rentabilidad. No obstante, debido a los conflictos bélicos en la zona, se discontinuó la explotación, y así se perdió el interés para desarrollarlo y convertirlo en un cultivo comercial.

Otro proyecto piloto considerado experimental, fue instalado en la zona Sur, fronteriza con Costa Rica, en Río San Juan. Todo este departamento es considerado de gran potencial para ese cultivo.

A partir de 1942, la UFCO acumuló experiencia e información considerable sobre la extracción y el procesamiento del aceite de la palma aceitera y se hicieron estudios estimativos de la producción de aceite por área, para lo cual se enviaron numerosas muestras a EEUU. Los resultados fueron tan halagadores que la UFCO inició sus plantaciones comerciales.

A partir de 1962, se entró en un período de fuerte incentivación al cultivo por parte de UFCO y la década de los sesenta se caracterizó por la adopción de una serie de medidas para expandir las plantaciones. De la misma forma que en Costa Rica adquirió al grupo NUMAR en 1965 para procesar y comercializar aceites vegetales –y así integrar verticalmente su negocio– y estableció unidades de procesamiento en Honduras en 1967, la United Fruit compró en Nicaragua la Compañía Aceitera Corona en 1969.

En 1970 la United Fruit cambió su nombre por United Brands como resultado de una fusión con otra empresa, dejando atrás un nombre atado a un largo historial de manipulación política y social. Sin embargo para los trabajadores temporales en los campos la vida sigue siendo muy dura. Las condiciones son físicamente peligrosas, el trabajo es zafra y los tóxicos químicos usados son un peligro constante.

La industria de la palma africana de aceite ha estado en continua expansión en las principales regiones tropicales de Centro América y hoy en día es uno de los principales cultivos en las zonas donde está establecido. Sin embargo, esta expansión no ha sido realizada exclusivamente por las empresas. En Nicaragua, en la década de los 80 a través del Fondo Simón Bolívar –un fondo

multilateral de carácter voluntario— se establecieron dos estaciones experimentales en la zona tropical húmeda en la misma zona de Río San Juan.

En la actualidad una de esas estaciones está abandonada y sin ninguna relación con las comunidades locales y la otra ha sido reactivada para explotación comercial y en ella se ha instalado una planta aceitera que procesa la materia prima. En 1999, organizaciones locales y comunidades asentadas en el Sur de Nicaragua, denunciaron en un Seminario Nacional sobre Plaguicidas, Ecología e Investigación Científica en los Lagos Xolotlán, Cocibolca y Río San Juan, la contaminación directa a los cuerpos de agua, producto de las actividades de la planta procesadora de aceite de palma, resultando en la muerte de especies de la fauna local.

Para que la palma africana alcance altos niveles de productividad se necesitan también altos niveles de radiación solar, lo cual generalmente ha resultado en la deforestación de amplias zonas de bosques primarios. Hasta ahora no ha sido posible lograr que la empresa se responsabilice por los daños que las comunidades han denunciado.

Frente a las denuncias, las amenazas no se hicieron esperar. «Genoveva Gaitán Matamoros, de 25 años de edad, originaria de San Miguelito, dice que el señor Juan Reyes le hizo la cariñosa oferta de pegarle 4 balazos para que no ande de 'chischil' con esos ambientalistas que no lo dejan ganarse los reales. El se los gana terminando con nuestros bosques y con nuestras vidas, porque el bosque es la vida de todos: gente y animales». (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Uruguay: ¿Qué es lo que está certificando el FSC?

En Uruguay, todos los bosques están protegidos por ley y su explotación está prohibida, salvo que medie autorización expresa de los organismos encargados de velar por su conservación. Por lo tanto, la certificación es en este país una herramienta totalmente innecesaria para asegurar la conservación de los bosques. Sin embargo, basta entrar a la «lista de bosques certificados» de la página web del FSC para descubrir que existen 75.000 hectáreas de «bosques» certificados en el país. Claro que al ver los detalles uno se entera de que en todos los casos se trata de plantaciones y no de bosques.

Más allá de nuestra discrepancia total con la pretensión de que las plantaciones sean consideradas «bosques», interesa mostrar algunas de las contradicciones entre la certificación de estas plantaciones y los propios lineamientos del FSC. Esa contradicción surge de la lectura de las dos primeras líneas de la introducción a los principios y criterios del FSC, donde se dice que «Es ampliamente aceptado que los recursos forestales, y las tierras relacionadas con ellos deberían ser manejados para atender a las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras».

Dado que el FSC equipara a las plantaciones con bosques y que en el principio 10 (plantaciones) establece claramente que «Las plantaciones deberán ser planeadas y manejadas de acuerdo con los Principios y Criterios del 1 al 9 y con los Criterios del Principio 10», resulta obvio que lo que se dice en la introducción es aplicable a las plantaciones.

La pregunta es entonces: ¿es que las plantaciones en Uruguay (y en particular las certificadas) atienden «las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras».

Si bien en este artículo nos vamos a centrar en el tema de las necesidades sociales y económicas, cabe señalar que los monocultivos forestales a gran escala implantados en Uruguay atentan claramente contra su ecología. En efecto, en este país las plantaciones se instalan principalmente en ecosistemas de pradera, resultando en la destrucción de los mismos y de su fauna asociada. Por ende, es absurdo pensar que puedan «atender las necesidades ecológicas» del país, sino que se trata de un proceso equiparable al que todos denunciamos en los trópicos (la sustitución de bosques por pastizales), pero de signo inverso: la sustitución de praderas nativas por «bosques».

Establecido lo anterior, nos enfocaremos ahora sobre las necesidades sociales y económicas. El plan de promoción de la forestación lanzado en 1988 por el gobierno prometió la generación de empleos y el ingreso de divisas por un aumento de las exportaciones de productos forestales. Para lograr esos objetivos, el Estado uruguayo realizó una fuerte inversión, incluyendo subsidios directos, exoneraciones impositivas, créditos blandos e inversiones en infraestructura. Al año 2000, el Estado había destinado al sector US\$ 69 millones bajo la forma de subsidios directos. El total de exoneraciones impositivas (al área plantada y a los bienes importados), ascendía a US\$ 56 millones, en tanto que los préstamos blandos se estimaban en US\$ 55 millones. Finalmente, la inversión en infraestructura totalizaba US\$ 234 millones. En resumen, la sociedad uruguaya en su conjunto aportó 414 millones al desarrollo forestal. ¿Qué beneficio recibió esa sociedad?

En materia de generación de empleo, el resultado es desastroso. De todas las actividades agropecuarias, la ganadería extensiva de vacunos y de ovinos ha sido siempre considerada en Uruguay como la peor en cuanto a cantidad de empleos generados por hectárea. Ya no más: la forestación ha demostrado ser aún más negativa.

De acuerdo con los datos del Censo agropecuario del 2000, el número de trabajadores permanentes por cada mil hectáreas forestadas es de 4,49. La ganadería de vacunos de carne genera 5,84 empleos permanentes en la misma extensión de tierra, en tanto que la ganadería de ovinos provee 9,18 empleos. Y éstas, junto a la producción mecanizada de arroz (7,75) son las peores cifras. En el extremo opuesto se encuentran la producción para autoconsu-

mo (262 empleos/mil hás), de aves (211), la viticultura (165), la horticultura (133) y la producción de cerdos (128), en tanto que en el medio se ubican la producción de vacunos de leche (22), los servicios de maquinaria (20) y los cultivos cerealeros e industriales (10).

En resumen, en un total de 660.000 hectáreas, la forestación ha generado apenas 2962 empleos permanentes. Si tomamos en cuenta que las plantaciones forestales han desplazado a otras actividades agropecuarias y que todas las demás actividades generan más empleos permanentes que la forestación, se llega a la conclusión de que esta actividad ha significado una pérdida neta de empleos permanentes en el sector agropecuario. En efecto, suponiendo que la superficie forestada hubiera continuado ocupada por la explotación vacuna u ovina, en el primer caso los empleos hubieran ascendido a 3854, en tanto que en el segundo habrían sido 6058. Queda claro entonces que el remedio ha sido peor que la enfermedad y que la forestación ha contribuido a expulsar trabajadores del medio rural. Si a esto le agregamos las malas condiciones de trabajo (bajos salarios, escasa seguridad, mala alimentación y alojamiento, dificultades de sindicalización), la informalidad (que implica la inexistencia de beneficios sociales) y la zafralidad, resulta claro que la forestación no atiende en absoluto las necesidades sociales de la población rural.

En materia económica, la situación no es mucho mejor. En efecto, la forestación prometió incrementar el ingreso de divisas, pero el 80% de las exportaciones vinculadas al sector forestal consiste en madera rolliza (o sea, troncos), en tanto que el 20% restante está compuesto por madera aserrada. Es decir, que el 80% de lo exportado no genera ningún puesto de trabajo industrial, en tanto que el otro 20% consiste en una transformación mínima de la materia prima que por ende tampoco resulta un generador de empleos de importancia.

A su vez, los ingresos provenientes de estas exportaciones tampoco significan ingresos de divisas importantes si se los compara con la superficie de tierra ocupada por el sector. En efecto, el sector forestal está exportando anualmente por valores que rondan entre los 35 y los 45 millones de dólares, cifras que lo ubican en los lugares más bajos de la canasta de exportaciones (que totaliza anualmente entre 2.000 y 2.500 millones de dólares). Si se lo compara con el arroz (sector que también genera pocos empleos por hectárea), vemos que éste, con una superficie sembrada promedio de unas 150.000 hectáreas (es decir, más de 4 veces menos que la ocupada por el sector forestal), llega a generar anualmente unos 200 millones de dólares por exportaciones (o sea, unas 5 veces más que lo obtenido por el sector forestal). Es decir, que la forestación tampoco cumple con el objetivo señalado en la introducción de los principios del FSC de «atender a las necesidades económicas» del país.

Las preguntas que se hace el movimiento ambientalista uruguayo son: ¿cómo es posible que el FSC esté certificando estas plantaciones, que no cumplen

con ninguno de los requisitos planteados por el propio FSC? ¿Cómo es posible que las ONGs ambientales y sociales que participan en el FSC permitan que esto ocurra? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que cada plantación certificada debilita las campañas que hacemos para evitar que se siga destruyendo nuestro ambiente?

Es evidente que algo está funcionando mal y esperamos que los miembros del FSC se aboquen a buscarle soluciones, tanto para bien de la gente y el ambiente de países como Uruguay, como para asegurar la propia credibilidad de un sistema de certificación que fue creado para asegurar la protección de los bosques y no para darle un barniz «verde» a monocultivos forestales social y ambientalmente insustentables. (Boletín del WRM N° 64, noviembre de 2002).

Uruguay: Condiciones de trabajo inhumanas en empresa forestal chilena

El plan forestal promovido por el Gobierno –basado en la plantación de grandes monocultivos forestales de eucaliptos y pinos– prometía grandes beneficios para el país. Entre ellos, la generación de empleo. No sólo no cumplió con este objetivo, sino que además se ha constatado que el escaso empleo generado es mayormente temporario y con condiciones laborales que en general dejan mucho que desear. Los hechos ocurridos a principios de abril de 2003, son una clara muestra de lo que hace mucho tiempo organizaciones ambientalistas vienen denunciando. La gran diferencia, es que esta vez la denuncia la realizó un funcionario del gobierno.

A raíz de una denuncia, la Dirección Nacional de Aduanas realizó una inspección en una empresa forestal en el departamento de Rivera (en el noreste del Uruguay, departamento fronterizo con Brasil). La empresa forestal en cuestión resultó ser Forestal Cono Sur S.A., propietaria de unas 26.000 hectáreas de plantaciones de pinos en Uruguay. Sin embargo, el 99% de sus acciones pertenece a Forestal Cholguán, la cual es a su vez una subsidiaria de la gigantesca empresa chilena Arauco, que en su país de origen posee 906.033 hectáreas de plantaciones, contra las que el Pueblo Mapuche desarrolla una lucha encarnizada por haberse adueñado de gran parte de su territorio.

La denuncia tenía relación con la existencia de presunta maquinaria forestal en infracción aduanera, es decir, maquinaria que había ingresado al país sin pagar los correspondientes impuestos. Menuda fue la sorpresa del Director Nacional de Aduanas, Víctor Lissidini, cuando arribó al establecimiento. Además de incautar la maquinaria por un valor de aproximadamente US\$ 300.000, se encontró con unos 40 colchones tirados en el suelo y tras un breve recorrido pudo constatar que allí trabajaban medio centenar de brasileños indocumentados que además vivían en condiciones infrahumanas.

Los trabajadores habían sido contratados por una empresa brasileña, que a su vez había sido contratada por la empresa chilena para realizar tareas de plan-

tación. El Director de Aduanas, explicó que el informe de la receptoría riverense detalla que los trabajadores dormían en el suelo, comían sobras, vestían en harapos y en varios casos presentaban heridas que no habían recibido la atención médica adecuada. «Prácticamente vivían en un régimen de esclavitud», afirmó.

De acuerdo con los informes de prensa, personas de la zona afirmaron que es normal que grandes empresas, fundamentalmente dedicadas a la forestación, contraten brasileños para trabajar «en negro» (sin cumplir con las reglamentaciones laborales vigentes) y que los tengan en condiciones lamentables.

Estas condiciones de trabajo se dan en el marco de empresas propietarias de plantaciones que realizan la mayor parte de sus actividades (desde la plantación hasta la cosecha) casi exclusivamente a través de la contratación de empresas de servicios forestales. Estas empresas son con frecuencia de carácter informal, muy difíciles de fiscalizar, donde una de las formas de competencia más extendida es la evasión fiscal y el no cumplimiento de las leyes laborales. Las empresas de servicios forestales ganan creciente protagonismo, y son la clave para la «eficiencia» en materia de costos.

Dado que, a pesar de estar fuertemente subsidiada, la actividad forestal no deja márgenes de ganancia considerables (el precio de mercado de la madera rolliza que el país exporta es muy bajo), para obtener rentabilidad las empresas forestales establecen precios muy bajos a la hora de la tercerización. Las empresas tercerizadas –que obviamente también quieren tener su ganancia– trasladan estos bajos precios del mercado al último eslabón de la cadena... el trabajador.

Si bien es cierto que hay algunas empresas forestales que controlan la calidad de las empresas contratadas, se trata más de la excepción que de la regla y en general se trata de empresas que tienen una imagen que cuidar y cultivar, o que tienen ventajas comparativas en el mercado internacional.

¿Quién es responsable por todo esto? No hay duda de la gran cuota de responsabilidad que recae sobre las empresas, que en aras de obtener ganancias no dudan en someter a los trabajadores a condiciones de trabajo inhumanas. Pero en definitiva, es el Estado el que debe establecer y hacer cumplir las reglas de juego. Sin embargo, la realidad muestra que el Estado ha sido hasta ahora cómplice en la violación de la legislación laboral.

El ex presidente del Uruguay Luis Alberto Lacalle (quien fue un gran promotor de la forestación) ya promovía esta actividad resaltando lo barata que era la mano de obra en este país. El actual presidente Jorge Batlle cuando asumió el gobierno, viajó a Santiago de Chile y mantuvo un encuentro con empresarios forestales trasandinos. En ese encuentro exhortó a los inversores chilenos a invertir en plantaciones en Uruguay. Fue evidentemente una de las pocas oca-

siones en las que el presidente (de un país que durante su gobierno ha caído en la mayor crisis de su historia) tuvo éxito. Los chilenos efectivamente invirtieron y el resultado está ahora a la vista.

Es importante que el pueblo uruguayo haga conciencia acerca de lo que está implicando este tipo de «desarrollo». Sin embargo, es igualmente importante que el mundo perciba que lo que se denuncia ahora en Uruguay está ocurriendo en prácticamente todos los países del Sur en los que se instalan estas grandes plantaciones. El trabajo tercerizado es ya la norma en todos ellos, trátese de Brasil o de Sudáfrica, de Chile o de Argentina. La competencia internacional se hace a través de la baja de costos y en todos los casos el principal mecanismo para que la materia prima madera siga siendo barata no radica ni en tecnologías ni en rapidez de crecimiento (que son similares en todos los casos) y ni siquiera en subsidios (que son también similares), sino fundamentalmente en la reducción de los costos de la mano de obra. En definitiva, a costa de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores forestales.

Los monocultivos forestales ya han demostrado a las claras su insustentabilidad ambiental. También han mostrado que no sólo no solucionan, sino que agravan los problemas sociales. ¿Por qué entonces se los sigue promoviendo? (Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

Venezuela: Smurfit enfrenta crecientes dificultades

Smurfit Cartón, subsidiaria de Jefferson Smurfit, es dueña de 34.000 hectáreas de monocultivos de gmelina, eucaliptos y pinos en los Estados venezolanos de Portuguesa, Lara y Cojedes. De éstas, 27.000 hectáreas se encuentran localizadas en Portuguesa, donde la empresa se ha visto enfrentada a las comunidades de Morador y Tierra Buena, que resistieron la invasión de plantaciones forestales en sus tierras de cultivo.

De acuerdo con información recibida recientemente, Smurfit está enfrentando severos problemas sanitarios en sus plantaciones de Portuguesa. La uniformidad de los monocultivos forestales los hace muy vulnerables al ataque de insectos y plagas. La ventaja que tiene inicialmente la plantación de un árbol exótico –la ausencia de predadores locales- se convierte en una catástrofe, tanto cuando una especie local se adapta a alimentarse de esos árboles o cuando un predator natural eventualmente llega de su ecosistema original. Cualquiera sea el caso, el hecho es que muchos árboles están ahora muriendo en sus plantaciones.

Por otra parte, durante la estación seca las plantaciones de Portuguesa y Cojedes se han visto afectadas por incendios. Voceros de la compañía han acusado a los campesinos de acciones de sabotaje contra las plantaciones. La ocurrencia de incendios puede darse con mucha facilidad en condiciones se-

cas en un ambiente uniforme como el conformado por las plantaciones forestales, especialmente en el caso de eucaliptos y pinos. Los campesinos locales y los ambientalistas temen que Smurfit trate de compensar las pérdidas de madera proveniente de las plantaciones, mediante la corta de los bosques aledaños, como solía hacer antes de las protestas que ocurrieron en 1999.

Desde el punto de vista político las cosas tampoco parecen ir bien para Smurfit. La nueva Constitución de Venezuela, aprobada por el referendun de diciembre de 1999, incluye explícitamente los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, y condena la concentración en la tenencia de la tierra. De acuerdo con principios de justicia social en el campo y de planificación territorial sustentable, las plantaciones comerciales no están permitidas en suelos aptos para la agricultura, dado que ello significaría una competencia con la producción de alimentos. (Boletín del WRM N° 33, abril de 2000).

ASIA

Birmania: Trabajo forzado en plantaciones de palma aceitera

El 13 de junio de 2001, Amnistía Internacional emitió un informe titulado «Myanmar. Minorías étnicas: blanco de la represión». El informe afirma que durante los últimos 13 años, esa organización ha documentado «el uso generalizado del trabajo forzado de minorías étnicas por parte del ejército de Myanmar» y añade que «quizás la violación más común de los derechos humanos de las minorías étnicas es el trabajo forzado de civiles, que tienen muchas más posibilidades de ser capturados por el ejército que el grupo mayoritario birmano».

Según Amnistía Internacional, «existen dos grandes tipos de trabajo forzado: el primero es el acarreo de cargas pesadas para el ejército por terrenos difíciles durante días o semanas seguidas. El segundo tipo es el trabajo en proyectos de construcción como carreteras, vías férreas y represas. Hombres, mujeres y niños son tomados como mano de obra y casi nunca se les paga por su trabajo».

Organizaciones como la Unión Nacional Karen y la Coalición Birmania Libre han identificado a las plantaciones de palma entre las muchas actividades llevadas a cabo en forma forzosa por las poblaciones locales. En febrero de 1999, el Vicepresidente del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC por su sigla en inglés, el régimen militar de Birmania), el General Maung Aye realizó un viaje de campo, acompañado por empresarios nacionales, para ganar «tierras disponibles, vírgenes y en barbecho» para cultivos en la región de Taninthayi. El General Maung Aye afirmó que «la tierra entre Kauthaung y Myeik es adecuada para el cultivo de palma aceitera comestible a escala comercial, y si los empresarios locales establecen plantaciones de palma aceite-

ra en miles de acres, seguramente la región de Taninthayi se convertirá en el 'centro de aceite comestible' del país, al igual que en la región de Magway». Aseguró que el gobierno brindaría apoyo para lograr el éxito de los empresarios locales instrumentando los proyectos de acuerdo con los objetivos económicos del Estado. Los empresarios locales también explicaron el plan tentativo para cultivar palma aceitera en 400.000 acres en la región y los sitios elegidos.

El Vicepresidente ciertamente ha mantenido su promesa de «brindar apoyo». El 27 de julio de 2000, las tropas del SPDC ordenaron a los pobladores de Thagyet y Kyeinchaung que trabajaran en una plantación militar de palma aceitera en la zona de Kyeinchaung. 70 personas de Thagyet, 50 de Nyaungbingwin, 30 de Thebotleik, 50 de Kamukru, y 30 de Kyauktalone fueron obligadas a ir y trabajar en turnos. La plantación de palma aceitera tiene una extensión de 55.500 acres.

Desde enero de 2001, el SPDC ha iniciado otra plantación de palma aceitera en el municipio de Tanawthiri (Taninthayi), distrito de Mergui, en la región de Tenasserim. El área que se piensa desmontar está en las cercanías de los poblados de Thaboleik, Leikpu, Htiho-awmay, Kabawplaw al este de la ciudad de Taninthayi y se ordenó a los habitantes de poblados cercanos que desmontaran el lugar de la plantación. Todavía no se conocía la superficie de la plantación. Las autoridades del SPDC están trabajando para la empresa Yan Naing Myint Co. y han ordenado a su milicia local que se responsabilice por la operación. El SPDC ordenó que se plantaran árboles jóvenes de palma aceitera en todas las parcelas de los poblados locales de las cercanías cuando el sitio estuviera preparado. Cada familia debía ir y plantar árboles jóvenes desde el principio al final.

Éste es claramente el caso más extremo de explotación y violación de los derechos humanos relacionado con plantaciones de palma aceitera, y la comunidad internacional debe tomar conciencia de la situación. Las organizaciones que luchan contra los monocultivos de palma aceitera en gran escala deben tomar el caso de Birmania para prestar apoyo a estas comunidades que sufren tales abusos. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Birmania, Tailandia y Laos: El manejo forestal colonial - ayer y hoy

El propósito del manejo forestal colonial británico del siglo XIX era asegurar que el Estado colonial mantuviera el control sobre los bosques a fin de asegurar la provisión regular de madera. En la región del Mekong, aún se notan las huellas del enfoque forestal colonial, donde los Estados siguen disputando a las comunidades locales el control sobre los bosques.

A fines del siglo XVIII, los bosques de roble de Gran Bretaña fueron progresivamente agotados por la demanda de la Marina Real para la construcción de

naves. En 1805, los británicos botaron el primer barco de guerra construido completamente de madera de teca (*Tectona grandis*) de Bombay. Hacia la mitad del siglo XIX ya había más de cien naves británicas de teca y la voracidad británica por esta madera parecía insaciable.

En 1856 los británicos designaron a Dietrich Brandis como superintendente de los bosques de teca de la división Pegu, al este de Birmania. En aquel momento, muchos de los bosques de teca de Birmania se encontraban en áreas controladas por grupos indígenas militantes como los Karen. Brandis, un botánico alemán que luego fue inspector general de los bosques de la India, se propuso reclamar el control del Estado sobre los bosques de teca birmanos. Bajo el sistema «taungya» —que Brandis ayudó a establecer— los pobladores Karen constituían la mano de obra para el desmonte, la plantación y el desmalezamiento de las plantaciones de teca. A cambio, se les permitía cultivar entre los árboles durante los primeros años. Cuando los árboles crecían, los pobladores eran trasladados a nuevas tierras y el proceso se repetía. Como resultado de este proceso, muchos se volvieron dependientes del servicio forestal del Estado, por lo que la resistencia local al dominio estatal sobre los bosques se volvió cada vez más difícil.

Raymond Bryant, del King's College de Londres, describe cómo los Karen —anteriormente rebeldes— fueron cooptados para la reforestación con árboles de teca: «El sistema de forestación taungya era atractivo precisamente porque era un medio para regular y eliminar gradualmente el cultivo rotativo de los bosques de Birmania. En efecto, cada acre plantado era un acre menos del que los montañeses Karen disponían para su uso».

La vecina Tailandia nunca fue colonizada por los británicos, pero el sistema de forestación taungya todavía sobrevive al servicio del Estado tailandés. Desde la década del sesenta, la Organización de la Industria Forestal (Forest Industry Organisation -FIO) en Tailandia ha establecido una serie de «poblados forestales» donde los pobladores locales llevan a cabo una forma de forestación taungya. La FIO creó el primer poblado forestal en Mae Moh al norte de Tailandia en 1968, con el objetivo de reducir el cultivo rotativo e incrementar la reforestación. Sin embargo, los pobladores no tienen ninguna participación en el manejo de las plantaciones ni reciben ingreso alguno por los árboles en las plantaciones. Tampoco reciben los títulos de las tierras bajo este sistema. Como lo señalara el ahora fallecido Ted Chapman de la Universidad Nacional de Australia en 1980, la reforestación de la FIO no es mucho más que la confiscación de la tierra que los pobladores locales ya estaban utilizando.

En julio de 2001, dos de las plantaciones de los poblados forestales fueron certificadas bajo el sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC). Sin embargo, los poblados forestales de la FIO hacia más de veinte años que habían sido considerados anacrónicos. En 1978, Ted Chapman señaló en una confe-

rencia en Tailandia que: «La reforestación taungya tal como se practica en Tailandia se contradice claramente con a las recomendaciones recientes de la FAO, la UICN y otras organizaciones preocupadas por el bienestar de los habitantes de las márgenes de los bosques». Sorprendentemente los evaluadores de SmartWood (empresa certificadora del FSC) no reconocieron la versión de manejo forestal colonial de la FIO como el sistema anacrónico de explotación que es.

Por su parte, el gobierno de Laos desarrolla su propia forma de colonización interna a través del sistema taungya. El año pasado, luego que una familia de una minoría étnica del sur de Laos despejara diez hectáreas de tierra y las plantara con arroz, funcionarios del Departamento Forestal les informaron que esa tierra iba a ser plantada con 4.000 plantines de árboles. Se permitirá a las familias cosechar el arroz este año; pero están preocupados porque temen que no se les permita usar la tierra el año próximo. Mientras que las familias no ganarán nada, el gobierno obtuvo el área despejada gratuitamente para establecer la plantación de teca.

El Departamento Forestal organizó a los pobladores locales en grupos de trabajo y los adiestró en la plantación de los árboles. Una vez que éstos fueron plantados, el Departamento exigió a los pobladores locales que mantuvieran la plantación, lo que implicará varios años de desmalezamiento y control permanente de incendios.

La plantación de los árboles coincidió con la siembra de las cosechas propias de los pobladores, por lo que el tiempo de trabajo en sus propios campos se vio recortado. Uno de ellos explicó a los investigadores: «Estamos confundidos sobre por qué plantamos estos árboles si no obtenemos nada a cambio».

Irónicamente, la plantación se llevó a cabo en el Día del Árbol. Este día, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Forestal de Laos, las autoridades deben «demostrar iniciativa para planear y movilizar ampliamente toda la mano de obra y el capital de todos los sectores, incluidas las fuerzas armadas, los empleados públicos, los estudiantes de primaria y secundaria y el público en general para la plantación de árboles. Luego de la plantación, se debe atender al mantenimiento y la protección de los árboles para que puedan crecer y desarrollarse».

El Departamento Forestal ciertamente está demostrando iniciativa en el uso gratuito de la mano de obra de los pobladores locales y ha obedecido la letra (aunque no el espíritu) de la Ley Forestal. No obstante, sus acciones han agriado las relaciones con los pobladores locales, quienes resienten el ser explotados para una plantación de teca que no les reportará ningún beneficio. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

Camboya: Plantaciones de palma aceitera

A principios de 1999 la Autoridad Municipal de Phnom Penh trasladó a 99 familias de un asentamiento informal, ubicado detrás de la embajada rusa en esa ciudad, hacia Monorom 1, una nueva aldea construida a 150 kilómetros de allí. Dado que se les prometió trabajo en una plantación de palma, nueva casa y dos hectáreas de plantación de palma a cada uno, muchos de los ocupantes se mostraron deseosos de mudarse. La publicidad oficial colocada por las autoridades de Phnom Penh, anunciando que parte del área ocupada sería transformada en un parque, alentó aún más a la gente a aceptar el traslado.

Monorom 1 está constituida por 99 casas de madera, construidas en fila, la mitad de ellas con techo azul y la otra con techo rojo, cada una con un pequeño predio adyacente. Las autoridades construyeron también un mercado y una escuela en la aldea.

La compañía que instaló la plantación —Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co. Ltd— es una *joint-venture* entre Mong Reththy y tres socios extranjeros. Mong Reththy, uno de los hombres más ricos de Camboya, es dueño del 60% de la compañía, en tanto el resto se reparte entre Borim Universal Co. Ltd. (Corea del Sur, 20%), Kim Tat Send Group Pte. Ltd. (Singapur, 10%) y Lavanaland Sdn. Bhd. (Malasia, 10%).

La inversión —de US\$ 12 millones— consiste de una plantación de palma aceitera de 3.800 hectáreas y de una fábrica para el procesamiento, que será terminada en el 2002. El 70% de su producción será destinado a la exportación, mayormente a China y Corea del Sur, en tanto el resto irá para los fabricantes locales de jabón.

En febrero de este año, Mong Reththy manifestó a Reuters que las plantaciones habrían de emplear a 3.000 personas. Sin embargo la gente traída de Phnom Penh a trabajar en la plantación tiene otra historia que contar.

Long Saran, una de las personas que se mudaron a la nueva aldea, fue despedido en abril pasado. «Cuando las 99 familias se mudaron de Phnom Penh, unas 50 personas consiguieron trabajo en la compañía, en tanto el gobierno nos había prometido que todos tendríamos trabajo allí» manifiesta. Otro de los aldeanos informa que actualmente menos de diez personas de Monorom 1 tiene efectivamente trabajo en la plantación.

Ninguno de ellos recibió las dos hectáreas de palma prometidas. En todo caso la empresa no se las otorgará gratuitamente, sino que ha ideado un mecanismo para mantenerlos cautivos. En efecto, los aldeanos comenzaron su nueva vida en Monorom 1 con una deuda inicial de US\$ 4.430 con la compañía, por lo cual ésta retendrá el 30% del ingreso generado por las dos hectáreas de plantación de cada uno de los campesinos hasta que la deuda sea saldada.

Si bien en octubre de 1998, antes de que los aldeanos fueran trasladados, Pho Vuthy –gerente de la plantación– manifestó al *Phnom Penh Post* que se permitiría el cultivo de arroz, frijol y maíz entre las filas de los árboles, a efectos de complementar el ingreso de los trabajadores durante los tres primeros años, lo cierto es que luego de un año la empresa lo prohibió, aduciendo que ello significaba un riesgo de incendio para las plantaciones.

Los campesinos aspiran a que Chea Sopahara –Gobernador de Phnom Penh– y el Primer Ministro Hun Sen visiten Monorom 1 y se enteren de su problemática. «El gobierno debería cumplir sus promesas y dar trabajo. Conversando con la gente de aquí podrán encontrarse soluciones. En caso de que no se tome ninguna medida, los campesinos elevaremos una protesta al gobierno a efectos de que encuentre una solución al problema» dijo Long Saran.

Mong Reththy estableció sus plantaciones en tierras ocupadas por bosques o utilizadas por los habitantes de una de las cuatro aldeas de la zona. Por ejemplo, casi todas las 300 familias de la aldea de Tanei perdieron sus tierras a manos de la compañía. La aldea tuvo que trasladarse a un área próxima a la Carretera nro. 4, que une Phnom Penh con Sihanoukville, donde mucha gente trata de ganarse la vida vendiendo refrescos y frutas en pequeños comercios ubicados a los bordes de la carretera.

Muchos de los campesinos sienten que han sido engañados por la empresa para renunciar a sus tierras. Uno de ellos, cuya tierra quedó en manos de la compañía, sin haber nunca recibido compensación alguna, manifiesta: «El jefe de la comuna nos hizo colocar la impresión digital en una declaración, pero hasta ahora no hemos recibido nada. El gobierno dio dinero a la empresa, pero todos los meses ésta nos dice que nos pagará al mes siguiente. Esta situación ya lleva un año». Otros campesinos recibieron el pago por sus tierras pero no por los árboles que habían plantado allí.

En julio de 2000, Mong Reththy manifestó al *Phnom Penh Post* que su compañía todavía tenía la intención de dar tierra a los aldeanos. «Les daremos la tierra cuando ellos tengan dinero suficiente para comprar la semilla para sembrar. Daremos tierra a todos los que quieran cultivarla y tengan dinero para plantar» dijo.

Mientras tanto, la mayoría de las familias de Monorom 1 está sin trabajo, sin más alternativa que recoger leña de los bosques vecinos para venderla en Phnom Penh o mudarse nuevamente a la ciudad con la esperanza de encontrar allí trabajo. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Camboya: Selvas y ríos en peligro por plantaciones de eucalipto y producción de celulosa

La conservación de los bosques y de la biodiversidad significan cosas distintas según quién sea que esté refiriéndose a ella. En el caso de Camboya, la vida

de los campesinos depende de las tierras agrícolas, las pesquerías y los bosques. Para ellos conservar los bosques y su biodiversidad implica asegurarse los medios de vida para el presente y el futuro. En los últimos años, si bien se ha recuperado la paz en las áreas rurales, las concesiones para la corta en gran escala han reducido el acceso de los campesinos a los bosques y puesto en peligro sus derechos en ese sentido, a la vez que provocado un daño masivo a la propia selva. Los campesinos camboyanos y sus bosques se ven ahora enfrentados a una nueva amenaza: la de las plantaciones forestales con fines industriales.

En enero de 2000 el Real Gobierno de Camboya firmó un acuerdo con el Grupo Pheapimex otorgando a la compañía el derecho por 70 años para «desarrollar» 300.000 hectáreas de tierras de «bosque degradado» en las Provincias de Kampong Chhnang y Pursat en el centro del país. Pheapimex tienen la intención de instalar una plantación de eucalipto para satisfacer la demanda de una planta de pulpa y papel planeada en la Provincia de Kandal.

Además de madera como materia prima, la producción de papel requiere de grandes cantidades de productos químicos, agua y energía. Es una producción altamente contaminante. Las plantas de producción liberan gran cantidad de sustancias contaminantes hacia los cursos de agua vecinos, incluyendo madera disuelta y diversos productos químicos que reducen los niveles de oxígeno de dichos cursos y matan a los peces. El cuerpo de agua más importante de la región central de Camboya es el Tonle Sap, un vasto lago cuyas aguas fluyen hacia el Mekong en Phnom Penh y de allí al delta del Mekong. El lago provee a Camboya de una gran cantidad de peces y su agua se utiliza para irrigar una vasta área de arrozales. Si el Tonle Sap se contamina por las descargas de la prevista planta de pulpa y papel, el efecto sobre los medios de vida de miles de personas habrá de ser desastroso.

En diciembre de 2000 Pheapimex firmó un acuerdo para la generación de una *joint-venture* con el grupo chino Farm Cooperation a fin de construir una fábrica de pulpa y papel. El emprendimiento de US\$ 70 millones es financiado por el Banco de Exportaciones de China y forma parte de un acuerdo celebrado entre los gobiernos de los respectivos países para incentivar el comercio y las inversiones entre ambos. En el contrato figura que las empresas intervinientes pagarán 5% de intereses al gobierno de Camboya, en tanto el banco chino cobrará sólo un 3%.

El Ministro de Agricultura, Forestación y Pesquería, Chan Tong IV, manifestó al periódico Phnom Penh Daily, que celebraba dicho acuerdo y agregó que los esfuerzos del gobierno para atraer inversiones al sector agrícola estaban dando frutos. Pheapimex está bien posicionada para beneficiarse de este tipo de acuerdos: Lao Meng Ken, director de la compañía, es a la vez consejero especial del Primer Ministro camboyano Hun Sen en materia de inversiones extranjeras.

Pheamix-Fuchan, una *joint-venture* taiwanesa con el Grupo Pheapemix, es la mayor concesionaria de corta de madera de Camboya, con 700.000 hectáreas a su disposición. Según Global Witness, Pheamix-Fuchan es «el peor concesionario en Camboya y el que tiene mejores conexiones». Global Witness – que ahora está trabajando en la Unidad de Monitoreo de Delitos en Camboya, iniciativa financiada por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido– ha acusado a Pheapemix de realizar operaciones ilegales de maderero fuera de sus concesiones, corta en las áreas de otros concesionarios, amenaza y ataques a funcionarios forestales y corta sin previa aprobación del Departamento Forestal.

Lao Meng Ken explicó al *Phnom Penh Post* que él creía que el proyecto de plantación de Pheapimex no violaba los derechos de propiedad de la población local. «He oído que la gente se está quejando de la corta de sus árboles. Pero nosotros estamos plantando en una zona donde no se violan sus derechos» manifestó. Pero los aldeanos de la comuna de Ansa Chiombok en la Provincia de Pursak discrepan. Temen que la plantación destruya 6.800 hectáreas de bosque próximas al poblado. Los mismos incluyen una fracción de *Pinus merkusii*, que es una especie rara en Camboya y protegida por ley.

En febrero de 2001 los campesinos se trasladaron a Phom Penh para tratar de persuadir al gobierno de frenar este proyecto de plantación. En marzo se realizó en esa comuna un encuentro entre funcionarios y pobladores locales. Al mismo concurren cien campesinos provenientes de siete poblados pero los funcionarios permitieron que asistiera sólo un representante por aldea.

Durante el encuentro los representantes campesinos realizaron una serie de preguntas a los funcionarios, entre ellas si el gobierno había aprobado una evaluación de impacto ambiental antes de firmar el acuerdo con Pheapemix, cuál sería el impacto esperado de una planta de pulpa y papel sobre el Tonle Sap y su fauna, y porqué el gobierno está permitiendo que Pheapemix destruya los bosques en un país que ya está sufriendo un severo proceso de deforestación. No obtuvieron respuesta alguna.

Oum Huot, un campesino de Ansa Chombok manifestó al *Phnom Penh Post*: «Nosotros rechazamos completamente la idea de que lo que hay aquí son 'bosques degradados'. Por el contrario este es un bosque en buen estado, cuyos árboles más grandes fueron cortados por los madereros en los últimos años. Si éstos dejan tranquilas estas tierras durante 15 a 20 años los árboles volverán a crecer. «Estamos preocupados por este plan» dijo al mismo medio de prensa Luek Thuon, otro de los campesinos de Ansa Chombok. «Si destruyen este bosque también pueden venir y matarnos. El bosque es nuestra fuente de vida». (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 44, marzo de 2001).

Camboya: Plantaciones de caucho y de palma africana provocan impactos en las comunidades locales

Las plantaciones de caucho y de palma aceitera, aun cuando no están relacionadas con la industria de la celulosa y el papel, afectan a las comunidades locales de manera similar a las plantaciones de árboles de rápido crecimiento. Las plantaciones de caucho y de palma aceitera también utilizan grandes superficies de tierra, a menudo tierra que es crucial para el sustento de los pueblos del lugar.

Durante la década del 60, y especialmente en el noreste de Camboya, numerosos habitantes de las montañas fueron erradicados de sus tierras tradicionales con la finalidad de hacer lugar para las plantaciones de caucho. Las plantaciones, las políticas de asimilación del Príncipe Norodom Sihanouk en el noreste, y el bombardeo de la aviación estadounidense hicieron de esa zona un lugar primordial de reclutamiento en los primeros años del Khmer Rouge de Pol Pot.

Desde entonces muchas de esas plantaciones de caucho fueron descuidadas, y recién en los últimos años algunas de ellas fueron rehabilitadas. Actualmente, el gobierno de Camboya está promoviendo la rehabilitación de las plantaciones de caucho y la realización de nuevas plantaciones.

En agosto de 2001, el Primer Ministro Hun Sen pronunció un discurso en la provincia Kompong Thom en ocasión de la plantación de 6.200 hectáreas de la compañía Chhub Rubber Plantation Company, en el cual elogió a la compañía por «rehabilitar el equilibrio ecológico de la región, que hasta cierto punto fue degradado por el madereo». Los pobladores locales deberán plantar cultivos comerciales entre los árboles de caucho y recibirán tres hectáreas de tierra «para realizar plantaciones de caucho o sembrar otros cultivos comerciales». Hun Sen agregó: «De arroceros de roza y quema, nuestro pueblo se ha convertido en trabajadores y propietarios de la familia de las plantaciones de caucho».

No obstante, las experiencias de los pobladores locales con las plantaciones y los cultivos comerciales en toda Camboya indican que existen problemas graves cuando las plantaciones agrícolas ocupan grandes superficies de tierra. Una plantación de palma aceitera en Ratanakiri, en el noreste de Camboya, ilustra estos problemas.

En 1995, una compañía de empresa mixta ganó una concesión de 20.000 hectáreas para plantar palma aceitera en el distrito O Yadao, en la provincia de Ratanakiri. La compañía es una empresa mixta, o *joint-venture*, de Globaltech Sdn. Bhd. (Malasia), Mittapheap-Men Sarun y Rama Khmer International (las últimas dos de Camboya). El proyecto desplazaría a 4.500 personas de su tierra, y a cambio ofrecería un máximo de 400 puestos de trabajo.

La compañía reclutó pobladores locales para limpiar la tierra con destino a la plantación, arrasando incluso los bosques y tierras de barbecho de los aldeanos. «La compañía hizo mensura de la tierra que la gente estaba cultivando y dijo que esa tierra ya pertenecía a la compañía, aún cuando no la vendimos», contó uno de los pobladores locales a Sara Colm, investigadora de la ONG Natural Resources Management Project (Proyecto de Manejo de los Recursos Naturales). Sin embargo, en 1996 se realizó una plantación de prueba que resultó un fracaso total, y la tierra que la compañía ya había arrasado simplemente quedó sin utilizar. Luego la compañía comenzó a plantar café, pero en la estación siguiente la sequía liquidó a gran parte de la plantación. La compañía construyó entonces una represa para tener agua con la que irrigar el café. Para los pobladores locales que viven río abajo de la represa eso significó que sus arroyos y fuentes de agua se secaran. La compañía compró la tierra de los pobladores locales que quedó sumergida por el embalse a un precio de US\$ 52 por hectárea. Ellos la vendieron de mala gana, pero razonaron que si se negaban la compañía se la quedaría de todos modos.

Un estudio realizado por el proyecto Non-Timber Forest Products (NTFP), una ONG con sede en Ratanakiri, compara el ingreso potencial que hubieran recibido los pobladores locales por la plantación de árboles frutales entre 1995 y 1998, con el ingreso devengado del monocultivo a gran escala. El estudio concluye que el ingreso percibido por los árboles frutales es significativamente superior para los pobladores locales, y «debido a que se basa en una variedad de cultivos, presenta menos riesgos y es más sustentable que los monocultivos a gran escala que se ofrecen como alternativa».

El informe también resume los problemas de los pobladores con la agricultura por contrato en las plantaciones de monocultivos a gran escala:

«Si bien la compañía puede ofrecer oportunidades de trabajo para los pobladores locales, su sistema de aparcería o arrendamiento de terrenos agrícolas aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones locales porque para dedicarse a cuidar el café tendrán que dejar de plantar arroz para sus familias. Su ingreso dependerá mucho de las condiciones de crecimiento estacional y la compañía dictará el precio al que los pobladores deberán vender su grano a la compañía. En realidad, se pide a los agricultores que asuman riesgos que no pueden enfrentar. Su pregunta a la compañía era... cómo cuidarán de sus hijos y ancianos si tienen que abandonar todo para cuidar el café». (Boletín del WRM N° 59, junio de 2002).

China: UPM-Kymmene y APRIL, la conexión chino-indonesia

La corporación UPM-Kymmene —una de las empresas de fabricación de productos forestales y papel más grande del mundo, con plantas en 15 países—, el grupo APRIL (Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.) y la mayoría

de los accionistas de APRIL firmaron recientemente un acuerdo para vender el 51% de la parte de APRIL en la fábrica de papel de Changshu (China) a UPM-Kymmene. El valor de la transacción es de US\$ 150 millones. Como consecuencia del acuerdo, UPM-Kymmene –con sede en Finlandia– será de ahora en adelante el único dueño de la planta de Changshu. Al mismo tiempo se suscribió un contrato por seis años y medio con APRIL para que durante ese período ésta provea de celulosa kraft blanqueda a dicha fábrica.

La fábrica de papel de Changshu, que comenzó a operar en marzo de 1999, está localizada en el río Yangtze en la Provincia de Jiangsu, a unos 100 kilómetros de Shanghai. La maquinaria de la planta –suministrada por la firma también finlandesa Valmet– tiene una capacidad de producción de 350.000 toneladas de papel fino. Desde sus inicios, UPM-Kymmene ha tenido la responsabilidad del manejo de la misma. Para el año 2000 la producción estimada de la fábrica es de unas 290.000 toneladas de papel fino y sus exportaciones habrán de representar la mitad de las ventas de papel producido en China a los países vecinos.

Es interesante señalar que durante los próximos seis años y medio los dos socios ahora formalmente separados seguirán realizando actividades en conjunto pero en un escenario diferente. UPM-Kymmene producirá papel en su propia planta en China, pero con celulosa suministrada por APRIL. Las fuertes críticas que suscitó la alianza entre ambas empresas se fundamentó básicamente en la mala reputación de APRIL en Indonesia, donde destruyó extensas superficies de selva húmeda y las sustituyó por plantaciones de monocultivo para celulosa. Por otra parte, APRIL generó conflictos de tenencia de la tierra con comunidades locales y entre pobladores y trabajadores de la compañía. La nueva situación habrá de permitir a UPM-Kymmene procurar alejarse de esta imagen negativa, y a la vez beneficiarse de comprar celulosa barata a ser utilizada en un proceso más limpio y menos problemático, como lo es la producción de papel.

Al mismo tiempo –y de acuerdo con fuentes de la propia empresa– «la fábrica de papel de Changshu se transformará en una importante plataforma para la estrategia de UPM-Kymmene en Asia. El fuerte incremento del consumo de papel en China y en otros países de Asia genera condiciones favorables para un ulterior desarrollo de la fábrica de Changshu». ¿Será la próxima estrategia la plantación de eucaliptos –con asesoramiento de Jaakko Poyry de Finlandia– y la producción de celulosa en China? ¿Será esa la razón para el contrato de «seis años y medio» con APRIL? (Boletín del WRM N° 38, setiembre de 2000).

China: Exportando deforestación y promoviendo monocultivos forestales

El crecimiento de la economía china, medido en términos de la economía convencional, resulta sorprendente: el PBI nacional alcanzó una cifra 22 veces

superior a la registrada en 1978. Que este fenómeno pueda ser considerado como un éxito para China y la región resulta dudoso dado que, por un lado, ha estado acompañado de importantes problemas ambientales en el propio país —entre ellos la pérdida de los bosques existentes y la expansión de los monocultivos forestales— y, por otro, ha llevado a la deforestación en otros países de la región a fin de satisfacer la creciente demanda de madera de su mercado interno.

A efectos de enfrentar el proceso de deforestación aludido y la consiguiente erosión del suelo, el gobierno chino estableció en 1998 una moratoria de corta de madera en 12 provincias, que fue extendida a 18 en el 2000. Como resultado de la medida, la producción nacional de madera disminuyó un 97% entre 1997 y 2000. Pero el consumo de madera aumentó, lo que está actualmente llevando a la deforestación en países vecinos.

Uno de esos casos es el de Birmania. El poblado de Pianma, localizado a algo más de 2000 kilómetros al sudoeste de Beijing, en el extremo de la Provincia de Yunnan es actualmente una de las puertas de entrada de China a los bosques del norte de Birmania. Un comercio de madera masivo, no regulado y largamente desapercibido ha estado destruyendo los antiguos bosques tropicales de la zona. El mismo se intensificó en 1998 tras la referida moratoria. Durante el año se movilizan sólo a través de Pianma más de 350.000 metros cúbicos de madera. También ingresan a China desde Birmania abultados volúmenes a través de centros poblados localizados sobre la frontera, hacia el sur, como Tengchong, Yingjiang, Zhangfeng, Ruili y Wanding. Una empresa maderera malaya está construyendo un puente sobre el río Salween, unos 100 kilómetros al norte de Pianma, cerca de Fugong, para hacer posible el ingreso de aún más rollizos. De acuerdo con estadísticas oficiales, Birmania suministra casi el 10% de las importaciones chinas de madera (740.000 metros cúbicos), pero de acuerdo con estimaciones confiables el volumen sería en realidad el doble. En Birmania la cobertura forestal se redujo de un 21% del total de la superficie del país en 1949 a menos del 7% hoy en día. La dictadura militar que gobierna el país desde 1962 ha allanado el camino a las empresas madereras transnacionales, que están devastando la selva y acabando con los medios de vida de las poblaciones locales.

Desgraciadamente, Birmania constituye sólo uno de los tantos ejemplos de deforestación relacionada con el crecimiento económico de China. Las importaciones de rollizos de madera de coníferas desde Rusia también han crecido considerablemente en los últimos dos años y actualmente representan el 42% del volumen de madera rolliza que ingresa a China.

Por otra parte, los preparativos para el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) han provocado un ulterior crecimiento de las importaciones de madera. En una movida hacia un sistema comercial más

abierto, se disminuyeron las tarifas de los productos forestales y en muchos lugares de la frontera china incluso no se cobra ningún impuesto a la madera rolliza. De ese modo, las importaciones chinas de rollizos pasaron de menos de 5 millones de metros cúbicos en 1998 a más de 10 millones en 1999 y alrededor de 15 millones en 2000. China se ha convertido en el segundo mayor importador de madera del mundo.

En este contexto, la moratoria de corta parece haberse convertido en una forma de lograr que otros países carguen con los costos del crecimiento de la economía china. Al mismo tiempo, la medida está conduciendo a un drástico aumento de los monocultivos forestales en el país.

«A medida que China se hace más rica, es natural que consuma más madera» manifestó recientemente un funcionario del Banco Mundial. ¿Es esa la única respuesta? ¿No será que la raíz del problema está en la adopción por parte de China de un modelo de desarrollo basado en un estilo de consumo que determina un uso insustentable de los recursos internos y también externos?

En los años 40, uno de sus partidarios preguntó a Mahatma Gandhi cuánto debían esperar para que la India fuese tan rica como Inglaterra. Gandhi le respondió: «si Inglaterra necesitó de la mitad del mundo para llegar a ser tan rica como es, ¿cuántos mundos necesitaría la India para llegar a ser así de rica?» ¿No es lo mismo aplicable a China? (Boletín del WRM N° 45, abril de 2001).

China: Siguiendo el trillado camino de los monocultivos de árboles

El Gran Salto hacia Adelante de 1958 y la Revolución Cultural frustraron el establecimiento de plantaciones de árboles de alto rendimiento en China, propuesto a fines de la década de los 1950 por el Ministerio de Bosques. Pero a partir de los años 1980, junto con la instrumentación de la reforma y la política de puertas abiertas (a saber, la entrada de China en el escenario del mercado mundial), se alteró el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de madera. Esto no parece muy diferente de los procesos transitados por otros países que acabaron devorados por el comercio mundial y su demanda de madera, papel y cartón para empaque. Aparentemente, la respuesta a la brecha también ha sido muy similar a la instrumentada en la mayoría de las economías de libre mercado: plantaciones de monocultivo de árboles en gran escala de especies de alto rendimiento (generalmente exóticas) que incluso son en su mayoría las mismas. De esta forma se espera que el árbol nacional de Australia se convierta en la nueva opción que permita a China satisfacer las necesidades cada vez más voraces de su industria de cartón y papel.

El gobierno chino decidió en 1988 que en los 30 años siguientes se establecerían 20 millones de hectáreas de plantaciones de árboles de crecimiento rápido y alto rendimiento. Los científicos de manejo forestal de China han desarrollado variedades de eucalipto y creado un área de plantaciones que es consi-

derada «el banco de genes de eucaliptos» más grande de Asia, en la región autónoma Zhuang en el sudoeste de China, una región subtropical donde se plantan extensas áreas de árboles para proporcionar material para celulosa más eficiente en materia de costos. Las nuevas variedades plantadas son en general «eucaliptos de crecimiento ultrarrápido» que se pueden talar seis años después de plantados con un rendimiento de más de 60 metros cúbicos por hectárea por año.

Sin embargo, la vorágine de la producción de madera para celulosa se realiza a costa de la pérdida de alimentos. El año pasado, las plantaciones de árboles de China aumentaron en 1,53 millones de hectáreas desde 2001, mientras que la superficie dedicada a la agricultura disminuyó en un total de 1,68 millones de hectáreas, en tanto que 1,42 millones de hectáreas de tierras de cultivo fueron transformadas en plantaciones de árboles, según la información del Ministerio de Tierras y Recursos en su «Comunicado 2002 sobre Tierras y Recursos de China».

Como siempre, el Banco Mundial está metido en el asunto. Para promover la inversión estatal, se introdujo en 1985 el Proyecto de Desarrollo de Explotación Forestal del Banco Mundial (Crédito 605-CHA) con el fin de establecer y transformar plantaciones comerciales de madera, construir carreteras en bosques y adquirir equipos accesorios. En 2002, el área total de plantaciones de árboles alcanzó los 230,72 millones de hectáreas, de los cuales 3,4 millones eran plantaciones de árboles de crecimiento rápido y alto rendimiento, incluyendo 980,000 hectáreas establecidas en virtud del Proyecto Nacional de Forestación de 1991, financiado mediante un préstamo de US\$ 300 millones del Banco Mundial y financiación nacional por un monto de US\$ 200 millones.

También las compañías extranjeras han buscado ingresar en el enorme y codiciado mercado chino. Desde fines de los años 1980, son varias las grandes compañías extranjeras que han invertido en el desarrollo de plantaciones en China, especialmente en las provincias costeras sudorientales que se caracterizan por tener condiciones naturales y un clima favorable para la inversión. Asia Pulp & Paper Co. Ltd., una compañía con sede en Singapur, el Grupo Soon Hua Seng con base en Tailandia, la compañía Sino-Wood Partner Co. Ltd. con base en Hong-Kong, y la compañía japonesa Princes Co. Ltd., todas tienen proyectos en curso en China. Asia Pulp & Paper tiene planificado establecer 1,3 millones de hectáreas de plantaciones de eucaliptos y acacias de crecimiento rápido en todo el territorio chino. A fines de mayo de 2000 ya contaba con 65.300 hectáreas de plantaciones de árboles.

También Stora Enso, el gigante de productos forestales integrados sueco-finlandés, ha sido un agente importante en la investigación y desarrollo en este campo. Junto con el gobierno de la Región Autónoma de Guangxi Zhuang, esta empresa ha realizado un estudio de prefactibilidad para plantaciones a

escala industrial y operaciones integradas de celulosa y papel. Stora Enso también firmó en 2002 un contrato de cooperación con la Academia China de Manejo Forestal en Beijing.

Sin duda, China ha ingresado a la economía mundial a su propio ritmo. Las restricciones a la inversión extranjera y a la propiedad privada de la tierra implican que las compañías extranjeras han logrado acceso a tierras de bosques mediante acuerdos con comunidades locales, que a su vez son aprobados por el gobierno. Pero el proceso en última instancia ha permitido el surgimiento de los mismos elementos que caracterizan al modelo occidental no sustentable de producción, consumo y comercialización. En este caso, las plantaciones de monocultivo de árboles en gran escala, con todos sus conocidos impactos negativos para la población y el medio ambiente. (Boletín del WRM N° 70, mayo de 2003).

India: Cuestionamientos a la «Estrategia Revisada sobre Bosques» del Banco Mundial

La «Estrategia Revisada sobre Bosques del Grupo Banco Mundial» aprobada el 31 de octubre de 2002 contiene afirmaciones tan significativas como: «Existe un vínculo muy estrecho entre las formas de sustento de los pobres y los bosques», y «(es) una noción básicamente falsa que los pobres son la causa de la deforestación de los países en desarrollo».

«La realidad es que el flujo de fondos orientado a los bosques... seguirá siendo opacado por la inversión en actividades que pueden tener impactos perjudiciales sobre los bosques». Y: «El Banco debe evaluar qué impactos tendrán sus acciones e inversiones en otros sectores, o a nivel macroeconómico sobre los bosques y los pueblos que los habitan».

Hace tiempo que se argumenta, en gran medida en vano, que la responsabilidad por la destrucción de los bosques y la degradación ambiental no se puede adjudicar principalmente a los pobres y que la nueva economía de la última década no sólo contribuyó a marginar más a aquellos que estaban en la marginalidad, sino que socavó gravemente los recursos naturales y la base de supervivencia comprendidos en los bosques, ríos, humedales y costas.

Sin embargo, la estrategia se sustenta en una contradicción básica: la agenda de la liberalización del mercado suena fuerte y clara, aunque en este caso intentando utilizar una puerta lateral. Surge claro un mensaje central: el dinero es la clave para salvar los bosques del mundo. La participación del sector privado aparece en forma trascendente. Se vincula también con los Planes Nacionales de Acción Forestal (PNAF) respectivos. El PNAF de India, preparado en 1999 por el Ministerio Unificado de Medio Ambiente y Bosques, determinó que se necesitan aproximadamente US\$ 28 mil millones para proteger

nuestros bosques. Pero, ¿es realmente correcto este «enfoque centrado en el dinero»?

Sólo en la década de los 90, India pidió préstamos al Banco por casi US\$350 millones para la Fase I de los Proyectos Forestales en Maharashtra, Bengala occidental, Andhra Pradesh (A.P.), Madhya Pradesh (M.P.), Uttar Pradesh (U.P.) y Kerala. ¿Sirvió esto realmente para proteger y regenerar los bosques? ¿Se garantizó la seguridad de sustento de los pueblos dependientes de los bosques? ¿Recibieron los pobres algún beneficio? Son varias las preguntas que hay que contestar para lograr una idea de los impactos producidos por los proyectos. Ha habido inquietudes y denuncias generalizadas que sostienen que las actividades de la Fase I no fueron transparentes, que los grupos tribales fueron expulsadas de los bosques, que se generaron conflictos internos en los poblados y entre poblados y que en definitiva ayudaron a reforzar las desigualdades existentes y las estructuras de poder que están en la raíz misma de los problemas del manejo y la conservación de los bosques.

Mientras tanto, se aprobó la Fase II de los Proyectos Forestales en A.P. y M.P., con asignaciones de US\$108 millones para cada uno, y ya se liberó la primera partida para A.P. Esto nos trae al tema de la mitigación de la pobreza, que según el banco, es la médula de su estrategia revisada sobre bosques. Aquí también se pueden ver enormes contradicciones. En una parte del texto, el documento parece aceptar las definiciones más recientes de pobreza, que la definen como una situación generada por la falta de los recursos (físicos, económicos, humanos y sociales) necesarios para lograr un sustento adecuado y sustentable. Pero al mismo tiempo se recurre repetidamente al uso de la definición de pobreza más simplista: «la pobreza sigue siendo un problema mundial de proporciones gigantescas. De los seis mil millones de personas que viven en el mundo, 2,8 mil millones o casi la mitad, vive con menos de US\$ 2 por día. De ellos, 1,2 mil millones vive con menos de US\$ 1 por día». No se analiza en profundidad qué es la pobreza, cuáles pueden ser sus causas reales y cuáles deben ser las soluciones a largo plazo.

Lo que salta a la vista en este contexto es la sección del resumen ejecutivo titulada «Aprovechamiento del potencial de los bosques para reducir la pobreza». Avizora la mejora de la calidad de vida rural. El concepto subyacente de esta estrategia es un mundo en desarrollo en el cual los residentes disfrutan una calidad de vida que no está significativamente por debajo de la que disponen los residentes urbanos; las comunidades rurales ofrecen oportunidades económicas equitativas a todos sus residentes (independientemente de su ingreso, situación o género); se convierten en lugares vibrantes, sustentables y atractivos donde vivir y trabajar; contribuyen al desarrollo nacional y a la economía general y están vinculadas dinámicamente a las zonas urbanas. Se trata de una elaboración sorprendentemente ajena a la realidad del mundo en que vivimos.

Nada podría estar más alejado de la verdad, especialmente en un país como India, que es rural en más de un 70% y mayormente agrícola. No hay discusión sobre la enorme pobreza y privaciones en partes de la India rural, ni se discute la existencia de desigualdad y explotación y que hay muchísimas necesidades que solucionar. Pero ¿y la India urbana hoy? Está colapsando por su propio peso. La contaminación del aire y el agua no tiene límites, los barrios pobres crecen sin orden alguno, los servicios básicos como el agua potable y el saneamiento son totalmente inadecuados, el desempleo altísimo al igual que la tasa de criminalidad. Resulta claro que no hay justificación para el carácter general de las afirmaciones e inferencias de la estrategia del Banco, porque partes importantes del mundo rural aún hoy están bien dotadas de recursos y son ricas y poderosas. Hay áreas plenas de vigor y vitalidad, en las que las comunidades han vivido y continúan viviendo en paz, felicidad y en armonía razonable con su medio ambiente. Aquí sobreviven economías prósperas que, en un país como India, son las que de hecho lideran el desarrollo nacional.

Entonces, ¿qué conclusión podemos extraer de esta estrategia revisada del Banco? Primeramente, que pone bajo un enorme signo de interrogación las credenciales del propio Banco. Las confusiones son obvias, las contradicciones graves y el concepto subyacente tan erróneo que es difícil creer que el mismo haya sido siquiera articulado. Si los propios cimientos son tan débiles, mejor ni pensar en el edificio que se deberá sustentar sobre ellos.

¿Puede entonces esta estrategia contribuir realmente a salvar los bosques y ayudar a los pobres? Seguramente se podría intentar dar algunas respuestas, pero la pregunta de fondo es si habrá alguien dispuesto a escucharlas. (Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

Indonesia: La amarga cosecha de la palma aceitera

Indonesia es un buen (mal) ejemplo de cómo un país puede aumentar las exportaciones y el PBI a través del agotamiento de sus recursos naturales –los bosques en particular– y a través de la violación de derechos humanos y territoriales de vastos sectores de su población. No sólo las organizaciones sociales y ambientales involucradas han denunciado esta situación. El informe sobre Indonesia publicado en enero de 2000 por el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial dice que «los logros en crecimiento económico se han logrado, sin embargo, a expensas de un significativo costo ambiental: la rápida y sostenida destrucción de los bosques naturales».

La expansión de los monocultivos de palma aceitera –conjuntamente y asociado con la tala ilegal y los incendios intencionales– ha sido una de las principales causas de la degradación y la destrucción de los bosques del país. Sin tomar en consideración los impactos sociales y ambientales negativos, tanto el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, han es-

tado impulsando la plantación e industrialización de la palma aceitera de manera de convertir a Indonesia en el primer exportador mundial de aceite de palma. El objetivo es tomar el lugar de Malasia como el mayor productor mundial de aceite de palma para el año 2012. El derecho consuetudinario a la tierra y los recursos de los pueblos indígenas están siendo totalmente ignorados por el Estado y por las empresas privadas que se apresuran a invertir en el cultivo. Es práctica común que las compañías desmonten tierras forestales supuestamente degradadas, y que a cambio ofrezcan a la gente local (si es que lo hacen) una compensación mínima y trabajo mal remunerado en las plantaciones. El programa de transmigración patrocinado por el gobierno también ha sido usado para proveer mano de obra barata para el cultivo de la palma, generando a la vez graves conflictos étnicos con los habitantes del bosque.

El modelo de plantación de palma aceitera ha probado estar lejos de ser la «panacea» para la recuperación de la economía nacional, como ha sido pregonado por sus promotores nacionales y extranjeros. Casos de abusos a los derechos humanos y territoriales han sido denunciados en el Sur de Sumatra, Kalimantan Occidental y Central. Son temas de todos los días la violencia contra los pobladores locales, la explotación de los trabajadores y las acciones de resistencia por parte de la gente que valientemente se opone a la pérdida de sus tierras y de sus medios de vida.

Un reciente revés sufrido por esta actividad ha venido a agravar el problema. En octubre de 1999 el primer cargamento de 85,000 toneladas de aceite de palma fue rechazado por los compradores de los Países Bajos, ya que estaba contaminado con aceite *diesel*, lo cual llevó a una brusca caída en los pedidos de exportación del producto. Los importadores también han prohibido futuros cargamentos y han exigido que la fuente de contaminación sea identificada, que los responsables sean castigados y que se instalen mejores mecanismos para el análisis del producto.

La conjunción de los problemas generados a nivel interno y externo llevan a la misma conclusión: la expansión de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia —que se estima llegarán a 330,000 hectáreas al año— sólo causarán más destrucción ambiental y desolación para los pueblos que habitan los bosques o que de ellos dependen y no constituirá una fuente confiable de ingresos para Indonesia. (Boletín del WRM N° 32, marzo de 2000).

Indonesia: Explorando el pasado y el futuro de la palma aceitera

En una investigación sobre las plantaciones de palma aceitera en Indonesia se estudian las pasadas y futuras tendencias del sector, se muestran sus efectos sobre la economía del país, las comunidades locales y los bosques, a la vez que se proponen recomendaciones al respecto.

El rápido crecimiento experimentado por el sector entre 1967 y 1997 (las áreas plantadas se incrementaron 20 veces y la producción de aceite crudo de palma aumentó a un promedio anual del 12%) puede ser considerado un éxito desde el punto de vista de la economía convencional. Sin embargo, la autora enfatiza que «el rápido crecimiento del sub-sector de la palma oleaginosa ha desplazado a las comunidades locales, ha generado conflictos desde el punto de vista social, ha contribuido a la devastación provocada por los incendios forestales registrados en 1997 y 1998 y constituye una amenaza significativa para la cobertura forestal existente en Indonesia».

Debido a la crisis económica que se inició en 1997 se dio un enlentecimiento en el ritmo de plantaciones y en la producción de aceite de palma. La investigación menciona una serie de causas internas y externas que explican esta caída, tales como el descontento social imperante y la consecuente retirada y estancamiento de la inversión extranjera, dificultades en el acceso al crédito, un aumento en los costos de producción, la disminución del precio del aceite crudo de palma a nivel mundial, y la sequía e incendios promovidos por el fenómeno de El Niño entre los años 1997 y 1998. No obstante, dado que algunos de dichos factores dejaron de actuar y otros aparecieron –por ejemplo: disponibilidad de suelos totalmente deforestados debido a los incendios que siguieron a los vinculados con El Niño, un pronóstico de alza en la demanda global de aceite de palma, y la cooperación establecida entre los productores de Indonesia y Malasia para hacer subir el precio del aceite de palma y acceder nuevamente a su nicho en el mercado mundial– hay signos de que a partir de 1999 la producción de aceite de palma en Indonesia retomará el ritmo de crecimiento anterior. Muchas compañías incrementaron sus metas de área plantada para 1999 y se esperaba que la producción de aceite crudo aumentara en alrededor de un 12%.

No es seguro que el nuevo gobierno Wahid-Soekarnoputri mantenga la misma política de promoción de estas plantaciones que implementaron los regímenes de Suharto y Habibie. Sin embargo, teniendo en cuenta que la obtención de ingresos externos para la economía nacional constituye una prioridad para el gobierno y que la mayor parte del aceite de palma es exportado, existe una alta probabilidad de que esto suceda. En ese caso, «al menos que se den cambios fundamentales en la forma en que se otorgan las concesiones sobre terrenos forestales en Indonesia, una ulterior expansión del subsector de la palma aceitera seguirá constituyendo una significativa amenaza para la cubierta forestal de Indonesia» enfatiza la autora. Además, ésta realiza varias recomendaciones para mitigar los impactos sociales y ambientales negativos de un desarrollo de ese tipo. Una regionalización en el otorgamiento de concesiones que tenga en cuenta la presente situación de los bosques en el país, la consideración de los impactos ambientales provocados por las actividades de las empresas estatales, y la necesidad de consultar a las comunidades locales previo

a la implementación de todo proyecto son algunos de los puntos que merecen ser destacados. (Boletín del WRM N° 34, mayo de 2000).

Indonesia: Una nueva víctima en relación con Indorayon

La fábrica de celulosa y rayón de Indorayon (PT IJU) en Porsea, norte de Sumatra, ha provocado un prolongado conflicto ambiental en la región, donde los campesinos y las ONGs locales han venido exigiendo su clausura debido a la contaminación que afectó al Lago Toba por causa de los efluentes emitidos por la industria, la destrucción de los bosques de la zona y la plantación de monocultivos forestales para obtener materia prima, al tiempo que los trabajadores de la planta quieren que ésta permanezca abierta, puesto que carecen de otras oportunidades de empleo en la región. En marzo de 1999 el gobierno —que ha demostrado ser incapaz de encontrar una solución justa al problema— decidió cerrar temporalmente la fábrica esgrimiendo razones ambientales. Pero posteriormente decidió otorgar un permiso para su reapertura.

Por desgracia, persiste en el lugar una situación de enfrentamiento y violencia. La misma ha cobrado recientemente una nueva víctima: Herman Sitorus, un estudiante de la escuela de ingeniería, quien resultó muerto por disparos de un policía de North Tapanuli el 21 de junio de 2000. El incidente tuvo lugar cuando la policía reprimía una manifestación que iba desde Porsea a Parparean City para reclamar la liberación de 13 campesinos del *Joint Community Post* en Sirait Uruk, los cuales habían sido secuestrados la noche anterior por hombres armados no identificados. A su vez se ignora el paradero de otras 27 personas.

WALHI (Foro Indonesio para el Medio Ambiente) ha condenado esta muerte sin sentido y urgido al gobierno para que se establezca un equipo independiente a fin de investigar el caso. WALHI también ha demandado al Jefe de Policía que se clarifique inmediatamente el por qué del uso de la fuerza contra los campesinos y ha manifestado que la policía es legal, moral y materialmente responsable del incidente. En relación con el conflicto no resuelto de Indorayon se exigió al gobierno que posponga la reapertura de la fábrica hasta tanto se realice un estudio integral de impacto ambiental. (Boletín del WRM N° 36, julio de 2000).

Indonesia: El insustentable crecimiento del sector de la celulosa y el papel

Un estudio realizado en 2000, patrocinado por CIFOR y la Oficina del Programa de Macroeconomía de WWF Internacional, aporta un análisis en profundidad acerca de las características y consecuencias de la expansión del sector de la celulosa y el papel en Indonesia durante la última década.

Durante años, las ONGs indonesias han venido denunciando el severo proceso de deforestación y degradación de los bosques que afecta al país y el rol

que ha jugado la industria de la celulosa y el papel en ese sentido. El estudio patrocinado por CIFOR y WWF revela algunos hechos y cifras interesantes, que demuestran que tal preocupación estaba bien fundada. En efecto, desde fines de la década de 1980 la industria de la celulosa y el papel en Indonesia ha crecido alrededor de un 700%. Las inversiones para el procesamiento de celulosa y papel han superado largamente el ritmo de desarrollo de las plantaciones para celulosa y, como consecuencia, la mayor parte de la materia prima ha provenido de la corta de bosques —en su mayor parte llevada a cabo ilegalmente— lo que provocó la deforestación anual de 800.000 hectáreas de selva. Para comprender la importancia del sector de la celulosa y el papel en relación con la deforestación generalizada en el país, es importante destacar que de acuerdo con el Banco Mundial, la tasa de deforestación es de 1.000.000 hectáreas anuales, lo que significaría que este sector es el mayor responsable de la destrucción de los bosques de Indonesia. Si consideramos las cifras manejadas por las ONGs —que estiman que la deforestación alcanza los 2.400.000 hectáreas al año— resulta claro que el sector igual se ubicaría al tope de la lista en lo que a responsabilidad por la destrucción del bosque se refiere. El estudio afirma que el sector habrá de sufrir un déficit creciente en el suministro de fibra durante los próximos 5 a 7 años, lo que traerá consigo ulteriores consecuencias para la situación de los bosques en el país.

La investigación revela que muchos de los proyectos de producción de celulosa y papel suponen un alto riesgo desde el punto de vista financiero, dado que varias empresas han invertido en infraestructura sin asegurarse previamente un suministro legítimo y sustentable de materia prima. El comportamiento aparentemente irracional de los inversores se explica por el hecho de que los propietarios han podido evitar la mayor parte del riesgo financiero de la operación aprovechando los subsidios del gobierno, que incluyen el aprovisionamiento de fibra para pulpa a un costo bien por debajo de su valor, las débiles regulaciones imperantes en el sector financiero y la falla por parte de las instituciones financieras internacionales para evaluar en forma adecuada los riesgos implicados en las inversiones de la industria de la celulosa y el papel. Como otro factor de la actual crisis se menciona también la pobre administración realizada en grandes empresas del sector, promovida por la Agencia Indonesia para la Reestructura Bancaria (IBRA), que permitió a empresas en bancarrota continuar sus operaciones con los mismos equipos de gerencia que las llevaron a la crisis actual.

En resumen, la investigación ilustra cuán insustentable ha sido el «milagro económico indonesio» en el sector de la celulosa y el papel. Tras una década de crecimiento desenfrenado, basado en la destrucción del patrimonio forestal del país, la expansión de los monocultivos forestales, la violación de los derechos de los pueblos indígenas, la generación de conflictos sociales entre pobladores locales y trabajadores industriales, el saldo ha sido negativo incluso adoptando el limitado enfoque de la economía convencional.

El caso de Indonesia muestra a las claras que el tan publicitado mito de que las plantaciones alivian la presión sobre los bosques nativos –y por lo tanto ayudan a preservarlo– resulta completamente falso. Por el contrario, las mismas constituyen un factor de su destrucción, dado que en realidad se vienen cortando e incendiando vastas superficies de bosques para dar lugar a plantaciones para celulosa. (Boletín del WRM N° 41, diciembre de 2000).

Indonesia: La amenaza de la industria de celulosa y papel en Kalimantan

A pesar de que la actividad de celulosa y papel es probadamente insustentable desde el punto de vista ecológico, social e incluso económico, el sector sigue expandiéndose. La construcción de una planta de celulosa en Kalimantan del Sur, prevista para junio de 2001, está generando preocupación a nivel de las organizaciones ambientalistas. La proyectada planta, con una producción esperada de 600.000 toneladas al año, se localizará en Sungai Danau en el Distrito Kotabaru y habrá de ser la primera que se instala en la región. La misma es parte de un plan a nivel oficial para atraer industrias e inversores extranjeros. El gobierno de Kalimantan del Sur, que está promoviendo entusiastamente un programa de industrialización –que incluye también minería y una nueva planta de cemento– está respaldando esta iniciativa. Por su parte capitales transnacionales están prontos para invertir. Se ha formado una *joint-venture* millonaria entre la empresa maderera indonesia PT Marga Buana Bumi Mulia y un consorcio de inversores extranjeros de ocho países, que todavía no han sido identificados completamente. Según el diario de circulación nacional *Kompas*, la empresa Akzo-Nobel, con sede en Holanda, está participando del proyecto. También estarían formando parte del mismo un grupo de empresas alemanas, que las autoridades de Kalimantan del Sur contactaron el año pasado durante la Expo 2000 en Hannover. PT Marga Buana Bumi Mulia es propiedad de Prodosutedjo, hermanastro del ex-dictador Suharto, quien viene siendo investigado por el colapso de un banco del que formaba parte y quien también ha sido severamente cuestionado por el uso presuntamente doloso de US\$ 15,5 millones que recibió del Fondo de Reforestación con la finalidad de instalar 70.000 hectáreas de plantaciones forestales en Menara Hutan Buana. Parece ser que, en lo que tiene que ver con la corrupción, la época de Suharto todavía no ha terminado en Indonesia.

La materia prima para la proyectada fábrica de celulosa provendrá de 240.000 hectáreas de plantaciones de acacia, pino y albizia, 80.000 de las cuales son propiedad de Probosutedjo. Sin embargo se teme que, como sucede habitualmente, se use también madera de bosques de Kalimantan Oriental y Central, dado que los bosques de Kalimantan del Sur ya han sido talados. La promesa de puestos de trabajo y prosperidad para las comunidades locales no podía estar ausente. Se informa que un funcionario local aseguró que la planta empleará a 20.000 personas durante su construcción y 200.000 trabajadores cuando esté

en la fase operativa. Eso suena completamente absurdo y en verdad nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá con la nueva planta en materia de empleo. No se ha revelado qué agentes están financiando la iniciativa y quién es responsable por el trabajo de consultoría, aunque se sabe que la Agencia de Crédito a las Exportaciones de Alemania está comprometida en el proyecto.

Si bien un portavoz del Departamento Forestal local desestimó los temores expresados por las ONGs en el sentido de que la nueva planta en Kalimantan del Sur habría de generar los mismos problemas que la planta de Indorayon en Sumatra del Norte, según lo que ha sido la historia del sector en Indonesia es razonable esperar que se producirán impactos ambientales y sociales negativos. ONGs preocupadas están preparando un taller nacional sobre «Agencia de Crédito a las Exportaciones y la industria de celulosa y papel en Indonesia», a realizarse en abril próximo. Del mismo participarán individuos y ONGs de las regiones donde hay este tipo de fábricas. El evento es considerado un encuentro estratégico en la lucha contra la industria de celulosa y papel y especialmente importante para frenar este nuevo proyecto. (Boletín del WRM N° 43, febrero de 2001).

Indonesia: Programa de un millón de hectáreas de plantación de palma aceitera en Jambi

La provincia de Jambi, en Sumatra, es una de varias zonas donde el recientemente investido gobierno regional está impulsando una importante expansión de las plantaciones de palma aceitera. El gobernador provincial anunció planes para desarrollar un millón de hectáreas de palma aceitera en la provincia hasta el año 2005. El año pasado, las autoridades provinciales amenazaron con cancelar las licencias de 49 compañías plantadoras a las que se había asignado más de 700.000 hectáreas en Jambi y todavía no las han plantado con palma aceitera. En diciembre de 2000, el embajador de Malasia en Indonesia anunció que las compañías malayas estaban preparadas para hacerse cargo de aproximadamente 356.300 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en la provincia, ante el incumplimiento de los actuales arrendatarios. Jambi tiene actualmente unas 265.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera, de las cuales 200.000 hectáreas estaban en producción el año pasado. Se produjeron cerca de 320.000 toneladas de aceite de palma crudo en 13 plantas procesadoras con una capacidad total de 640 toneladas por hora.

En enero de 2001, el gobernador Zulkifli firmó un Protocolo de intención con un consorcio de capitales estadounidenses, británicos y suizos, Asian Jade Venture Ltd, con sede en Johor Baru, Malasia. El contrato cubría inversiones de US\$ 500 millones en plantaciones de palma aceitera, industrias de procesamiento de materia prima, un puerto, una ciudad nueva, y también en los sectores de turismo y pesquería.

WALHI Jambi, una ONG ambientalista local, emitió una declaración de rechazo al programa que prevé la plantación de un millón de hectáreas con palma aceitera, argumentando que destruiría los bosques y acabaría con las formas de sustento sostenibles de las comunidades que habitan cerca de los bosques. WALHI también acusó a las autoridades de no indicar dónde se desarrollarán las nuevas plantaciones y afirma que no existe tierra disponible para desarrollar un área de cultivo tan grande. Para WALHI el objetivo central debe ser mejorar las condiciones en las plantaciones de palma aceitera ya existentes y resolver los conflictos entre los campesinos y los propietarios de las plantaciones.

Las declaraciones de prensa de WALHI (y las aparentes vacilaciones de Asian Jade Ventures Ltd.) han provocado una respuesta furiosa del gobernador Zulkifli. Éste acusó a la ONG de estar en contra de las inversiones, del progreso y de la autonomía regional. Se cree que el gobernador y sus partidarios están detrás de una campaña de intimidación, iniciada por sospechosas «ONGs» que exigen la clausura de WALHI. Este operativo incluyó el transporte en camión de 300 manifestantes hasta la sede de WALHI, y la emisión de declaraciones de apoyo al programa del gobernador. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Indonesia: Informe del WWF vincula plantaciones de palma aceitera con deforestación a gran escala

Indonesia se encuentra entre los países con la tasa de deforestación más alta del mundo. La deforestación anual promedio registrada fue de hasta un millón de hectáreas durante los años 80, 1,7 millones de hectáreas durante la primera parte de la década de los 90, y actualmente se ubica entre 2,0 y 2,4 millones de hectáreas, según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente.

Como ya hemos denunciado, las políticas mundiales impulsadas desde el Norte e impuestas por los organismos multilaterales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) en los años 80, y la presión de una importante deuda externa, produjeron un aumento drástico de la exportación de recursos naturales, entre los que se incluye el aceite de palma, que se obtiene cultivada bajo un sistema de monocultivos a gran escala. La palma aceitera se convirtió en un cultivo lucrativo para los inversores en Indonesia, dado que la mano de obra y los costos de la tierra con frecuencia son bajos, los créditos se obtienen con facilidad y las condiciones climáticas y del suelo son favorables.

La demanda mundial de aceite de palma es voraz. Se pronostica que aumentará de la cifra actual de 22,5 millones de toneladas métricas anuales a 40 millones de toneladas en 2020. India, China, Holanda y Alemania son los principales importadores de aceite de palma crudo, el producto primario derivado del fruto de la palma, que se utiliza para una amplia gama de productos ali-

menticios y no alimenticios. La cadena comercial mundial cuenta con fondos proporcionados por instituciones financieras extranjeras de Europa, EE.UU. y Asia oriental. Sumatra, Kalimantan y Papúa Occidental son las áreas principales de Indonesia donde operan los grandes conglomerados como el Grupo Salim, el Grupo Raja Garuda Mas y el Grupo Sinar Mas. Son los mismos conglomerados que controlan las actividades de maderero y procesamiento de madera, y las industrias de producción de celulosa y papel.

Todo este negocio se ha realizado a costa de tierras que antiguamente eran bosques en las tierras bajas de Indonesia y del sustento de sus habitantes rurales. Según un informe reciente del WWF sobre «Plantaciones de palma aceitera y deforestación en Indonesia» publicado en diciembre de 2002, «en Indonesia se había aprobado la conversión de casi siete millones de hectáreas de tierras de bosques en plantaciones de cultivo de finca hasta fines de 1997, y esos territorios casi con seguridad fueron talados. Pero el área realmente convertida en plantaciones de palma aceitera desde 1985 es de aproximadamente 2,6 millones de hectáreas», con orientación exportadora, para abastecer a las industrias de aceite de palma. «Uno de los cambios de reglamentación en el sector de palma aceitera introducido en 1998 establece que se permite a las compañías estatales dedicadas al manejo de bosques utilizar el 30 por ciento de sus áreas de concesión para cultivos de finca tales como palma aceitera». Lo que resulta preocupante es que en general tienen concesiones en tierras de bosques permanentes.

Las grandes compañías de palma aceitera se han apropiado de tierras comunales sin consultar ni compensar en forma adecuada a los muchos millones de personas que viven en los bosques y que dependen de ellos para su sustento. El tema de los derechos sobre la tierra ha estado siempre en el centro del conflicto: «el desarrollo de plantaciones de palma aceitera sigue siendo una causa importante de conflicto en relación a la tierra y sus recursos. Uno de los impactos sociales de la expansión es la apropiación de grandes áreas de tierras usadas por las comunidades indígenas y campesinas que, en la mayoría de los países tropicales, no tienen la propiedad de las tierras que ocupan en forma tradicional. En los sectores en expansión, donde las apuestas económicas son altas, como el sector de la palma aceitera, las compañías de plantaciones pueden recibir concesiones de tierras o títulos de propiedad sobre esas tierras y recibir el apoyo del gobierno para reprimir a la oposición que pueda surgir de las comunidades locales», afirma el informe del WWF.

Para completar el círculo, las plantaciones de palma aceitera a gran escala han sido la causa principal de los incendios de bosques que han asolado Indonesia desde 1997. Según el informe, «en setiembre de 2002, la información satelital reveló que más del 75% de los puntos calientes registrados en Kalimantan occidental y central durante el mes de agosto de 2002 se produjeron en plantaciones de palma aceitera, plantaciones de árboles y concesiones de

bosques. Esto indica que el mismo proceso que se tornó evidente en años anteriores se está repitiendo en 2002: las compañías madereras y las fincas desmontan y limpian las tierras de sus concesiones incendiando los bosques naturales, después de extraer la madera valiosa y dejar residuos de la tala que se incendian con facilidad».

Un proyecto bilateral entre Indonesia y la Unión Europea (el Proyecto de Prevención y Control de Incendios de Bosques), «concluyó que la solución permanente más importante para el problema de los incendios en Indonesia radica en mejorar en gran medida la planificación del uso de la tierra a nivel local y en fortalecer el manejo local; este último punto incluye la prevención de incendios. El proyecto estableció que los puntos de vista locales sobre el manejo de los recursos naturales varían de un lugar a otro, pero que en general coinciden con el 'uso racional'.

La conclusión anterior no es nueva, y hace muchos años que las organizaciones indonesias están insistiendo en la necesidad de asegurar el control de las comunidades sobre los bosques, como forma de garantizar tanto la conservación de los bosques como el sustento de los pobladores locales. El elemento nuevo es el reconocimiento oficial de que «los puntos de vista locales sobre el manejo de los recursos naturales varían de un lugar a otro, pero que en general coinciden con el uso racional». Al menos es un pequeño avance en la dirección correcta. Pero todavía quedan varias preguntas por plantear. ¿Tiene el gobierno la voluntad de cambiar su curso de acción y fortalecer el manejo local de los recursos a costa de las corporaciones nacionales y transnacionales que operan en el sector de la palma aceitera? ¿Apoyarán el FMI y el Banco Mundial este enfoque, que de hecho significaría detener la expansión de la palma aceitera (y de las exportaciones de aceite de palma)? ¿Prevalecerán finalmente los intereses de los bosques y de los pueblos sobre las ganancias empresariales y las políticas macroeconómicas orientadas a la exportación? (Boletín del WRM N° 66, enero de 2003).

Indonesia: Informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la industria papelera

«La policía y fuerzas de seguridad empresariales indonesias son responsables por violaciones reiteradas de los derechos humanos de las comunidades indígenas involucradas en la industria de celulosa y papel en Sumatra», afirmó Human Rights Watch en un nuevo informe publicado el 7 de enero de 2003. Las violaciones incluyen apropiación de tierras sin compensación y ataques brutales a manifestantes locales.

«Sin solución: Violaciones de los derechos humanos y la industria de celulosa y papel de Indonesia», es el título de un informe (en inglés) de 90 páginas, que documenta en forma extensa los vínculos subyacentes entre el menosprecio

por los derechos humanos y las prácticas destructivas en materia de manejo de bosques.

La industria de celulosa y papel de Indonesia se expandió con rapidez desde fines de la década de 1980 hasta convertirse en uno de los diez productores más importantes del mundo. Pero la industria acumuló deudas por más de US\$ 20 mil millones, y la demanda en expansión consume grandes extensiones de bosques tropicales de las tierras bajas de Sumatra. Esos territorios son reclamados por las comunidades indígenas que dependen de ellos para cultivar arroz y extraer caucho. La pérdida de acceso al bosque, junto con el hecho de que las compañías contratan trabajadores fuera de la provincia, ha resultado devastador para el sustento local, produciendo conflictos violentos.

Asia Pulp & Paper (APP) es la principal productora de papel de Indonesia, y propietaria de una de las plantas de producción de celulosa más grandes del mundo, la planta Indah Kiat en Riau, Sumatra. El proveedor principal de fibra de la planta, Arara Abadi, estableció su plantación para pulpa de papel en los años 1980-90, durante la presidencia de Suharto. Arara Abadi, respaldada por las fuerzas de seguridad estatales, se apropió en forma rutinaria de tierras pertenecientes a comunidades indígenas para instalar sus plantaciones, sin cumplir los procesos requeridos y con nula o escasa compensación.

Desde la caída de Suharto en mayo de 1998, los residentes locales han intentado presionar para obtener sus reclamos, pero se han visto enfrentados a la falta de voluntad de hacer cumplir la ley. Al no obtener soluciones contra la injusticia, las comunidades se han volcado en forma creciente a la creación de organizaciones de vigilancia propias. Arara Abadi respondió con violencia y arrestos.

En su nuevo informe, Human Rights Watch detalla tres casos en 2001 en los cuales los pobladores locales de Mandiangin, Betung y Angkasa/Belam Merah, frustrados por las disputas no resueltas con Arara Abadi, establecieron bloqueos o comenzaron a talar árboles de la plantación. Cientos de guardias de la compañía armados con garrotes atacaron a los residentes, hiriendo gravemente a nueve de ellos y deteniendo a sesenta y tres. La policía indonesia, que entrenó a las milicias civiles y que también estuvo presente durante los ataques, fue cómplice en los tres casos. En 2002 volvieron a informarse en Riau de casos de violencia contra pobladores que se rehusan a entregar sus tierras a los proveedores de la APP.

De cientos de asaltantes involucrados, Human Rights Watch sólo tiene conocimiento de que dos personas fueron juzgadas, y ambas, condenadas por agresión y lesiones, fueron liberadas después de treinta días de prisión. Human Rights Watch no apoya las acciones ilegales realizadas por los manifestantes locales, y reconoce la necesidad de la compañía de proteger su personal y su propiedad. Pero no se puede justificar el uso de fuerza excesiva por parte de

las milicias creadas por la compañía, y la impunidad de los responsables de las golpizas alimenta en forma directa el ciclo de la justicia por mano propia por parte de la población local. Es probable que sigan produciéndose abusos si se mantienen las condiciones actuales de impunidad, presión financiera y falta de pautas empresariales internas de seguridad, advirtió Human Rights Watch.

La mayoría del gasto destinado a la policía y al ejército (70 por ciento) no proviene del presupuesto estatal sino de aportes de empresas, muchas de las cuales del sector forestal. Estos vínculos comerciales crean un conflicto de interés económico en la aplicación de la ley. Además, el personal de seguridad de Arara Abadi no tiene pautas para el uso de la fuerza y no se lo hace responsable por las violaciones de los derechos humanos de los pobladores locales. (Boletín del WRM N° 66, enero de 2003).

Indonesia: Reapertura de fábrica de celulosa de Indorayon enfrenta fuerte oposición local

La reapertura de la fábrica de papel y rayón PT Inti Indorayon Utama en Porsea, Sumatra del Norte, ha desatado nuevamente una fuerte oposición local. La fábrica, ubicada en el centro de un distrito densamente poblado cercano al lago Toba —una de las más grandes reservas de agua dulce del Sudeste Asiático— libera contaminantes al medio ambiente, generalmente sin filtrar, contamina el agua y el aire de la región y destruye las bases de la vida de la población Batak local. Durante los años noventa, evidencia científica demostró que esta fábrica era responsable de distintos perjuicios a la salud de la población local: afecciones de la piel, enfermedades respiratorias y problemas del sistema nervioso son consecuencia de la producción de celulosa y rayón. Por otra parte, la tala —esencial para la producción— ha tenido efectos devastadores sobre la agricultura local: deslizamientos de tierra, fluctuaciones incontrolables en el suministro de agua, daños a plantas y peces. La población local tiene una larga historia de oposición a la fábrica y a las plantaciones que la alimentan.

Las ONGs y las iglesias indonesias que se han sumado a la protesta contra la reapertura de la fábrica cuentan con el apoyo de la Misión Evangélica Unida (UEM por su sigla en inglés). En una carta a la presidenta indonesia Megawati Sukarnoputri, la UEM, junto a Misereor, el Trabajo Diaconal de la Iglesia Evangélica Alemana, Watch Indonesia! e INFID, piden al gobierno la no reapertura de la fábrica, para evitar los riesgos a los que se verán sometidos la población y el medio ambiente.

A pesar de que los ambientalistas y el entonces Ministro de Medio Ambiente habían advertido desde un principio sobre las consecuencias previsibles del proyecto, éste fue implementado con el respaldo de Suharto, el anterior mandatario del país. Luego de la caída de Suharto y como resultado de las protestas masivas de la población, se detuvo temporalmente la producción, pero

desde ese entonces la compañía ha luchando incesantemente para reiniciarla, al parecer con éxito. Aunque el Ministro de Medio Ambiente indonesio recomendó la clausura definitiva de la planta a principios del año 2000, el gobierno autorizó a la gerencia de la empresa a reiniciar las operaciones en noviembre de 2002. Desde entonces, se han repetido enfrentamientos violentos entre la población local y la policía, con un saldo de dieciocho manifestantes encarcelados, entre ellos dos pastores de la Iglesia Cristiana Protestante de Batak (HKBP por su sigla en inglés), una de las iglesias miembro de la UEM.

La ONG local KSPPM y la rama de Sumatra del Norte del grupo ambientalista WALHI también apoyan a los manifestantes. Grupos locales han instalado un centro de crisis y una cocina en el barrio vecino de Tarutung para ayudar a las víctimas del conflicto. Un hombre de Porsea que participó en un enfrentamiento en Jakarta declaró: «Al gobierno no le importa el medio ambiente, no le importa el daño que ha causado Indorayon ni tampoco lo que quiere la población local. El gobierno toma partido por la compañía, pero el noventa por ciento de la comunidad no quiere a Indorayon aquí». (Boletín del WRM N° 67, febrero de 2003).

Japón: Industria papelera involucrada en ingeniería genética de eucaliptos

A pesar de los impactos potencialmente devastadores que puede implicar, los fabricantes de papel japoneses están realizando investigaciones de ingeniería genética destinadas a la «creación» de árboles que produzcan más celulosa.

El eucalipto es el árbol más utilizado por la industria papelera como materia prima para la producción de celulosa. La madera de este árbol está compuesta por cantidades más o menos iguales de celulosa y lignina, por lo que es necesario extraer esta última para obtener la celulosa. En su búsqueda de mayores utilidades, las compañías papeleras están trabajando para modificar genéticamente árboles de eucalipto para que su madera contenga menos lignina y más celulosa.

Varias estrategias se están desarrollando para ese fin. La investigación de Nippon Paper Industries apunta a bloquear los genes que ajustan las distintas etapas de la síntesis de lignina, y su resultado es un eucalipto transgénico que contiene menos lignina y más celulosa, del cual se obtiene entonces 5% más de pulpa. Mitsubishi Paper Mills ha creado un eucalipto recombinante que contiene entre 14 y 16% menos de lignina, que se prevé produzca 10% más de pulpa, mientras que la empresa Oji Paper se centra en facilitar la extracción de la lignina durante el proceso de obtención de la pulpa para reducir los costos de fabricación y reducir también la cantidad de agentes blanqueadores necesarios para la producción de celulosa.

Es importante destacar que Oji Paper (el mayor productor de papel de Japón) posee un total de 200.000 hectáreas de plantaciones de crecimiento rápido en

el extranjero, distribuidas entre Papúa-Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Australia y Vietnam y planea aumentar 20 veces su producción de papel en el extranjero (a un millón de toneladas), contando con la expansión a otros países de Asia a través de fusiones y adquisiciones, con una inversión de US\$ 124 millones. China es uno de los objetivos principales, al igual que Tailandia, Vietnam e Indonesia.

A fines del año 2000, la industria papelera de Japón contaba con aproximadamente 140.000 hectáreas de plantaciones en el propio Japón, y aproximadamente 280.000 hectáreas en el extranjero. Se espera que para fines de 2010 el área en el extranjero alcance las 430.000 hectáreas, gran parte de las cuáles podrían eventualmente estar compuestas por plantaciones de eucaliptos transgénicos. (Boletín del WRM N° 49, agosto de 2001).

Laos: Suecia se beneficia de subsidios en el sector forestal

El 7 de noviembre de 2000 se inauguró oficialmente una fábrica de madera laminada en Nabong Farm, a 30 kilómetros de Vientiane, la capital de Laos. Sus instalaciones están valuadas en US\$ 2,9 millones. Inicialmente la fábrica venderá pallets a IKEA, la gigantesca empresa minorista sueca, y en un futuro producirá muebles de la marca Vicwood. El financiamiento fue obtenido por diversos préstamos –US\$ 550.000 de IKEA, US\$ 800.000 de la Corporación Financiera Internacional (CFI), rama del sector privado del Banco Mundial y US\$ 300.000 de Wsedfund, contraparte sueca de la CFI. La materia prima provendrá de 1.200 hectáreas de plantaciones de eucalipto en Burapha, y de las proyectadas 10.000 hectáreas de plantaciones del Proyecto de Plantaciones Industriales del Banco de Desarrollo Asiático (BDA).

La publicidad de Burapha anuncia que la fábrica habrá de ofrecer «hermosas maderas duras» a «exigentes mercados del mundo, sin destruir los bosques tropicales». Sin embargo, mientras IKEA ha encontrado una nueva fuente barata de materia prima, con o sin la fábrica de Burapha, la corta de la selva en Laos continúa.

El Grupo Burapha está conformado como para aprovechar al máximo los subsidios disponibles para el desarrollo de plantaciones forestales en Laos. La empresa es subsidiaria de la compañía sueca Silvi Nova AB, y en Laos comprende tres firmas: BAFCO (Burapha Agroforestry Co. Ltd.), NAFCO (Nabong Farm Co. Ltd.) y BDC (Burapha Development Consultants Co. Ltd.). Las dos primeras son *joint-ventures* de carácter comercial: BAFCO produce y exporta productos de madera de sus plantaciones, en tanto NAFCO es una empresa en el rubro granja, que abastece a Vientiane de leche, pollo y huevos. BDC juega un papel completamente distinto, al ser la mayor empresa consultora del país, que trabaja en el área de análisis financiero, ingeniería, medio ambiente, agricultura, ganadería y desarrollo rural.

A principios de los años 1990, Burapha Development Consultants (junto a Jaakko Poyry de Finlandia) ganó un contrato para servicios de consultoría para el Proyecto de Plantaciones Industriales del BDA, evaluado en US\$ 16 millones. Hoy en día, la fábrica del Grupo Burapha en Nabong compra madera de las plantaciones de eucalipto establecidas por dicho Proyecto.

En 1995 Jaakko Poyry y Burapha produjeron un informe para el BDA realizando comentarios sobre la Directiva 186 de la ley sobre plantaciones del gobierno de Laos. Entre las recomendaciones de la consultoría estaba la de la reducción de las tasas de exportación. En otras palabras, los consultores recomendaron aumentar las ganancias de su propia compañía a expensas de la tierra y los medios de vida de los pobladores locales.

Cuando el gobierno de Laos requiere la asesoría de unos consultores forestales mediante un proyecto financiado por el BDA, debe creer que está consiguiendo el mejor consejo que el dinero pueda comprar. Empero, en el caso de Burapha hay un claro conflicto de intereses. La compañía recomienda otorgar más subsidios a través del BDA para producir madera barata que Burapha compra y exporta. No llama la atención entonces lo que un representante de Burapha en Vientiane manifestó acerca del proyecto del BDA: «Para Burapha el proyecto ha sido un éxito, pero no estoy seguro acerca del éxito del proyecto como un todo». (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 40, noviembre de 2000).

Laos: Banco Asiático de Desarrollo subsidia deforestación

Funcionarios del gobierno de Laos, agencias de ayuda internacional y consultores forestales coinciden en forma casi unánime en que en Laos debe encararse una reforestación a gran escala a efectos de abordar los problemas asociados con la deforestación. Sin embargo el Proyecto «Plantaciones Forestales Industriales», promovido por el Banco Asiático de Desarrollo y evaluado en US\$ 11.200.000, supone una ulterior destrucción de los bosques para ser sustituidos por monocultivos forestales. Las beneficiarias son empresas privadas, como BGA Lao Plantation Forestry Ltd, que actualmente está plantando 50.000 hectáreas de eucalipto en las Provincias de Khammouane y Bholikhamsay. La madera a cosecharse será exportada como chips (astillas) al Japón a través del puerto de aguas profundas de Cua Lo, cerca de Vinh en Vietnam.

BGA ha recibido subsidios directos e indirectos por parte de los gobiernos de Laos y Japón, así como del Banco Asiático de Desarrollo. Sin estos subsidios el proyecto probablemente no hubiera resultado viable desde el punto de vista comercial y en la práctica tales subsidios están acelerando la deforestación.

El gobierno laosiano entregó gratuitamente la tierra para el proyecto de plantación evaluado en US\$ 30 millones y programado para 50 años a cambio de participar en un 5% de las acciones. Luego el gobierno compró otro 10% de las

mismas. Según la Ley Forestal vigente en el país, las plantaciones están exentas del pago de tributos a la tierra, a la vez que BGA paga sólo un 5% como impuesto a la renta en todas sus operaciones.

El gobierno permitió a BGA llevar adelante el programa de asignación de tierras en las áreas donde la compañía planea establecer las plantaciones. Un representante de la empresa explicó que «BGA realiza la asignación, y hasta ahora han sido mapeadas diez aldeas». Al ser preguntado si los campesinos se habían manifestado reacios al establecimiento de plantaciones en sus tierras, respondió: «No. Nosotros hicimos la presentación y nadie dijo que no».

Las tres compañías que originalmente conformaron BGA fueron: General Finance (empresa financiera tailandesa); GF-Brierley, una *joint-venture* de General Finance y Brierley Investments Limited (fundada en Nueva Zelandia pero actualmente registrada en Bermuda, con oficinas centrales en Singapur) y Asia Tech (compañía forestal tailandesa). GF-Brierley también posee un 22% de las acciones de Asia Tech.

Con la crisis financiera que afectó a Tailandia a mediados de 1997 Asia Tech se retiró del proyecto. General Finance fue una de las 56 empresas que el gobierno tailandés clausuró en 1997 por problemas relacionados con los préstamos que otorgaba. En agosto de 1998 el Banco Central de Tailandia inició un juicio penal contra seis ejecutivos de dicha compañía, acusándolos de otorgar préstamos por un total de US\$ 8 millones sin la adecuada evaluación de garantías. De modo que Brierley y el gobierno de Laos terminaron siendo los únicos socios en BGA.

El presidente de General Finance, Narongchai Akrasanee, aparentemente jugó un papel fundamental en la inversión de BGA. Además de ser director de otras empresas en Tailandia y a nivel regional, había sido consejero de varios ministros en ese país y en 1997 él mismo fue Ministro de Comercio.

En marzo de 1997 Narongchai formó parte de la delegación que realizó una visita oficial de tres días a Vietnam, junto al Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Prachuab Chiyasarn. Según información publicada en el Bangkok Post, la delegación «manifestó un gran interés en las Rutas nros. 8 y 9». La Ruta 8 conecta la provincia tailandesa de Nakhon Phanom con Lhammouane en Laos, y con el puerto de Vinh, en Vietnam, y su rehabilitación es fundamental para la exportación de los chips producidos por el emprendimiento de BGA. La reconstrucción de la Ruta 8 fue financiada por el gobierno japonés.

Durante su viaje a Vietnam, Narongchai también se ocupó del problema de las demoras en las exportaciones provocadas por los trámites burocráticos que había que enfrentar en las fronteras con Laos y con Vietnam. Entonces el Banco Asiático de Desarrollo apoyó estudios y organizó una serie de talleres a efectos de encontrar una solución al problema de las demoras en los trámites

aduaneros. En Noviembre de 1999 los Ministros de transporte de Tailandia, Laos y Vietnam firmaron un acuerdo para eliminar las restricciones al transporte de bienes entre los tres países.

Cuando BGA haya terminado la construcción de su fábrica de chips, la misma recibirá energía eléctrica de la cercana represa de Theun Hinboun. La misma fue culminada en 1998 a través de un préstamo de US\$ 60 millones concedido por el mismo Banco. Desde entonces la obra ha provocado enormes problemas a las poblaciones que viven en sus proximidades, quienes han sufrido la pérdida de sus medios de vida por la destrucción de las pesquerías del río.

En 1999 BGA recibió financiamiento del Banco Asiático de Desarrollo para el Proyecto «Plantaciones Forestales Industriales». Asimismo el 70% de los gastos de BGA en el año 2000 fueron solventados con préstamos blandos de dicho proyecto.

Hasta ahora BGA ha plantado sólo 650 hectáreas, pero los campesinos locales ya están viendo sus tierras y bosques convertidos en monocultivos de eucalipto. En Ban Lao Kha la empresa cortó superficies de densa selva para dar lugar a las plantaciones. Campesinos de Ban lao Luang informan que ahora se ven obligados a caminar largas distancias para recolectar hongos y otros productos del bosque, a la vez que los animales que ellos cazaban, como ser pájaros y ratones, han migrado a zonas remotas del bosque, lejos de las plantaciones. Además, para asegurarse de que el monocultivo permanezca como tal, la empresa hace aspersiones con el herbicida glifosato entre filas tres veces al año. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 43, febrero de 2001).

Laos: Libertad de información, plantaciones industriales y el Banco Asiático de Desarrollo

Hasta ahora han sido pocas las plantaciones forestales industriales a gran escala en Laos que han tenido un resultado satisfactorio. Sin embargo, las compañías y organismos de asistencia tienen interés en promoverlas y para ello recurren a la introducción de cambios en la política forestal y a subsidios. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) lleva la batuta en el tema plantaciones en Laos, en especial a través de su «Proyecto de Plantaciones Industriales Forestales».

En 1999, el BAD financió un estudio realizado por Fortech, una firma consultora forestal australiana. El estudio tiene como título «Limitaciones actuales que afectan a las inversiones estatales y privadas en plantaciones forestales industriales en la República Democrática Popular de Laos».

El Resumen Ejecutivo del informe aduce que el desarrollo de las plantaciones en Laos «ofrece oportunidades para generar el crecimiento y el desarrollo económicos» y argumenta que para fines de enero de 1999 debía aprobarse «por

lo menos un proyecto de plantación en gran escala». De lo contrario, según los consultores, la posibilidad era que «los inversionistas internacionales decidirán no actuar en la República Democrática Popular de Laos».

El informe recomienda al gobierno de Laos aplicar una serie de medidas para apoyar la industria forestal en Laos. Entre ellas cita: reformular las Reglamentaciones sobre Plantaciones en el marco de la Ley Forestal; nombrar un «coordinador de inversiones en plantaciones»; elaborar directrices para propuestas de evaluación de plantaciones y una guía de los procedimientos a seguir por los inversionistas; recabar y publicar información comercial sobre los mercados nacionales e internacionales de productos forestales; y construir nuevas carreteras en «regiones clave para el desarrollo de plantaciones».

De ser aplicadas, las recomendaciones de Fortech implicarían cambios importantes en Laos –cambios en las disposiciones legales forestales y cambios en los diversos entornos naturales utilizados por las poblaciones locales. Las tierras comunales, los predios bajo cultivo, las tierras comunitarias para pastoreo y los bosques comunales serían convertidos en plantaciones de monocultivos. Sin embargo, el informe Fortech no está disponible para el público. Cuando escribí al BAD solicitando el informe, recibí la siguiente respuesta de Snimer Sahni, funcionaria de proyecto de dicha institución:

«El documento que Ud. ha solicitado es un documento oficial, a pesar de lo cual, le habíamos enviado una copia del resumen ejecutivo. Como Ud. siguió manifestando interés en recibir el documento completo, pensamos que debíamos consultar al gobierno de Laos para saber si contábamos con su aprobación para entregárselo. Hasta ahora no hemos recibido respuesta».

En respuesta a ulteriores preguntas sobre por qué el Banco se niega a dar a conocer el informe, la señora Sahni respondió: «No me queda claro el motivo de su interés tan específico en el informe de Fortech, que fue realizado hace casi tres años». Recomendó que me comunicara con «otras partes involucradas» y con el Ministerio de Agricultura y Bosques de Laos para obtener «un panorama más completo».

La política del BAD en materia de Confidencialidad y Divulgación de la Información comenzó a aplicarse en enero de 1995. Según el sitio web del Banco, dicha política fue «impulsada porque el Banco se dio cuenta que debía ofrecer el mayor grado posible de transparencia y responsabilidad pública». El Banco aduce que la política «pone énfasis en una presunción a favor de la divulgación en los casos en que la divulgación no perjudique materialmente los intereses del Banco, sus miembros, prestatarios y clientes del sector privado».

Los objetivos del Banco en cuanto a dicha política incluyen: promover el debate; asegurar la participación local en la toma de decisiones; ampliar la comprensión del papel que cumple el Banco; facilitar la coordinación «con otros

interesados en el objetivo común de desarrollo de la región»; y aumentar la responsabilidad pública del Banco.

Por supuesto que ha habido otros proyectos desde 1999 en el ámbito de las plantaciones forestales industriales en Laos. No obstante, en la medida que no hace público este informe, el BAD impide una discusión abierta e informada en Laos sobre ese tipo de plantaciones.

Es obvio que en lo que atañe a plantaciones a escala industrial, el BAD no está interesado en lograr ninguno de sus objetivos enunciados con relación a la participación local en la toma de decisiones o a promover el debate. El BAD parece haber llegado a la conclusión de que hay que promover las plantaciones industriales a gran escala en Laos y sencillamente no le preocupa discutir sobre los impactos de esa decisión. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 52, noviembre de 2001).

Laos: Secretos, mentiras y plantaciones de árboles

En el correr de este año, el Directorio del BAD-Banco Asiático de Desarrollo (ADB por su sigla en inglés) decidirá si financia un proyecto titulado «Plantación de árboles para mejorar la subsistencia» en Laos, que está siendo preparado por un consorcio de consultores. Sin embargo, los preparativos están llevándose a cabo sin el aporte de una discusión pública y abierta. Según Akmal Siddiq, economista jefe de proyectos del BAD, «los borradores producidos hasta ahora no están listos para su distribución al público y van a estar disponibles sólo luego de la aprobación del Directorio».

Si el Directorio acuerda financiar el proyecto, será el segundo proyecto de plantaciones que financie el BAD en Laos. El Proyecto de Plantaciones Industriales de Árboles del BAD –por un monto de 11,2 millones de dólares– empezó en julio de 1994, con el objetivo de establecer más de 9.000 hectáreas de plantaciones de árboles de crecimiento rápido. Según la descripción del proyecto que hace el BAD, el nuevo proyecto «se apoyará en los éxitos conseguidos y las lecciones aprendidas del Proyecto de Plantaciones Industriales de Árboles en curso».

El año pasado Bartlet W. Édes, funcionario de relaciones exteriores del BAD, escribió un artículo para la publicación interna del BAD –ADB Review– sobre la vinculación del Banco con las plantaciones de Laos. En el artículo titulado «Regreso a los árboles», Édes escribe que el proyecto del BAD «protege el bosque natural, involucra a los pobladores locales en la toma de decisiones y desarrolla un nuevo y promisorio sector en la economía de Laos».

De hecho, el proyecto no hace ninguna de estas cosas. Las plantaciones financiadas por el BAD están reemplazando los bosques con monocultivos. Los pobladores locales no tienen una ingerencia significativa en las decisiones,

que resultan en la pérdida de sus tierras y bosques en favor de las plantaciones de eucalipto. Económicamente, las plantaciones solamente son viables gracias a los subsidios que otorgan el BAD y el gobierno de Laos, bajo la Ley Forestal de Laos. De hecho la compañía BGA Lao Plantation Forestry sólo paga un 5% de impuesto a la renta, y recibe del gobierno el arrendamiento por 50 años de la tierra a utilizar en sus plantaciones, a cambio de una participación en el proyecto.

En este artículo Édés declara: «Dado que las plantaciones se establecen en tierras degradadas y no en áreas de bosques naturales, el desarrollo de las mismas en la República Popular Democrática de Laos difícilmente tenga las consecuencias ambientales adversas asociadas al establecimiento de plantaciones que sí se han registrado en otros países asiáticos».

Los documentos de proyecto del BAD contradicen la afirmación de Édés. De acuerdo con un informe de 1995 de la firma consultora Jaakko Poyry, las plantaciones se establecerán sobre «áreas boscosas sin o con escasos árboles» (en inglés: *unstocked forest land*). Los consultores del BAD las definen como «áreas previamente cubiertas por bosque en las que la densidad de copa se ha reducido a menos del 20%» y como «áreas abandonadas de agricultura migratoria» (en barbecho). Esta definición permite que las empresas definan a los bosques de las comunidades locales, a sus tierras de barbecho, a sus pasturas y a sus tierras de uso comunitario como «áreas boscosas sin o con escasos árboles».

Bartlet W. Édés señala que el proyecto del BAD ha establecido «un marco de políticas para desarrollar plantaciones forestales industriales sustentables». Sin embargo, ni el marco ni los estudios de políticas producidos para el ADB están públicamente disponibles.

En 1999, el BAD financió un estudio titulado «Actuales limitaciones que afectan las inversiones privadas y estatales en plantaciones forestales industriales en la RDP de Laos». Snimer Sahni, ejecutivo de proyectos del BAD, afirmó que el documento no se encuentra disponible para el público. Desde entonces los consultores del BAD han redactado una «Estrategia Nacional para Plantaciones Forestales Sustentables». Akmal Siddiq del BAD rehusó contestar las solicitudes para acceder a este documento.

Según Bartlet W. Édés «las compañías forestales negocian con los pobladores locales el uso de las tierras boscosas. Las tierras comunitarias, las tierras en barbecho, las tierras de pastoreo y los bosques comunitarios están protegidos por los mismos pobladores, quienes deben dar por escrito su consentimiento para cualquier uso comercial de las mismas».

Otra vez, la aseveración de Édés es engañosa. Los pobladores locales no tienen el poder ni cuentan con suficiente información sobre los impactos de las

plantaciones de eucalipto como para poder negociar con las empresas forestales. Por ejemplo, en sus documentos, BGA clasifica hasta 48.000 hectáreas de la tierra arrendada a la compañía como cultivos rotativos, pasturas o bosque degradado. En otras palabras, ésta es tierra que actualmente está siendo utilizada por los pobladores locales.

Una vez que los pobladores locales perciben los problemas asociados a la plantación de árboles de crecimiento rápido se vuelven reacios a entregar sus tierras a las compañías. A comienzos de 2001, el líder del sub-distrito Xiang dentro del distrito Xaibouli declaró a investigadores independientes: «las plantaciones de eucalipto están causando la degradación del bosque, el suelo y el agua. No quiero que nadie más plante eucaliptos en mi sub-distrito».

La pieza más flagrante de desinformación de Bartlet W. Édes es su afirmación de que «No se utilizan herbicidas; se emplea en cambio un producto biodegradable llamado glifosato para controlar las malezas».

El glifosato es, por supuesto, un herbicida. Es el componente activo de una variedad de productos fabricados por Monsanto. Esta empresa comenzó a vender Roundup, su primer herbicida a base de glifosato en 1974. Desde entonces las ventas anuales de herbicidas de glifosato han trepado hasta los 1.200 millones de dólares. Según la compañía «los herbicidas basados en glifosato producidos por Monsanto están entre los herbicidas más ampliamente usados del mundo».

Monsanto define los productos de glifosato como «herbicidas no selectivos de amplio espectro». Para decirlo en forma simple: los herbicidas de glifosato matan cualquier cosa verde con la que toman contacto.

Estos herbicidas son rociados tres veces al año entre las filas de árboles de eucalipto de las plantaciones financiadas por el BAD. El herbicida se asegura que nada que no sean árboles crezca entre las plantaciones. El conocimiento de los pobladores sobre el uso de una amplia variedad de plantas que crecen en el bosque está siendo destruido a medida que los bosques se convierten en monocultivos.

Tal vez no sorprenda que el BAD se muestre reacio a impulsar un debate abierto sobre los impactos de las plantaciones que financia. El banco ha organizado dos talleres en los que participaron el World Wildlife Fund (WWF), la World Conservation Society y la World Conservation Union (IUCN). Esto, según Akmal Siddiq del BAD, indica que el proyecto está siendo preparado con la «consulta y la activa cooperación de todos los actores involucrados».

Siddiq declinó contestar preguntas referentes a las anteriores participaciones del banco en la promoción de plantaciones de monocultivos forestales en Laos y se rehusó a entregar ninguno de los documentos del proyecto. En vez de

eso, afirmó que «El estudio de viabilidad del proyecto estará completo para mayo y se espera la aprobación del Directorio del BAD para octubre». (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

Malasia: Resistencia contra maderero y plantaciones de palma aceitera en Sarawak

Durante años el pueblo indígena Dayak ha estado defendiendo sus bosques y medios de vida contra las actividades depredatorias del maderero, las plantaciones de palma aceitera y de eucalipto promovidas por el gobierno de Malasia y el del Estado de Sarawak. En una lucha desigual, las comunidades locales – apoyadas por ONGs sociales y ambientales de Malasia y de todo el mundo– han resistido la destrucción de la selva y la instalación de plantaciones. El tema de la tenencia de la tierra y del reconocimiento de los derechos tradicionales constituye el telón de fondo de esta disputa. En defensa de sus derechos, los pobladores locales han sido frecuentemente víctimas de presiones y brutalidad por parte de las fuerzas del gobierno.

En el mes de abril de 2000, miembros de las «longhouses» (literalmente, «casas largas», donde moran los miembros de la aldea) de Rumah Ketip, Rh Lanyau, Rh. Mulok, Rh. Anchi, Rh. Lipo y Rh. Madak realizaron una acción directa de protesta contra las operaciones de maderero en sus territorios tradicionales en la zona del alto Balingian del distrito Mukah en la división Sibuh, Sarawak. La misma consistió en conformar una muralla humana con la finalidad de impedir que la empresa «Always Yield» siguiera con sus actividades de corta en esas tierras. La acción fue precedida por reiterados e inútiles reclamos ante autoridades gubernamentales y la policía a efectos de frenar la actividad de los intrusos.

Por otra parte, las comunidades de la zona están resistiendo el establecimiento de plantaciones de palma en sus territorios ancestrales por parte de la compañía Novelpac. Malasia es el principal productor mundial de aceite de palma y la invasión de estas plantaciones tiene una historia larga de impactos sociales y ambientales, que comienza con la expropiación de la tierra de las comunidades locales. Si bien las plantaciones pueden parecer a primera vista una actividad positiva en comparación con el maderero, en realidad son peores, dado que la ocupación de la tierra adquiere un carácter permanente. Como dijo un lugareño: «Las madereras destruyen nuestra selva y se van. Las compañías plantadoras destruyen nuestra selva ¡y se quedan!»

En los conflictos entre compañías plantadoras de palma y comunidades locales, el gobierno siempre está de parte de las primeras, forzando así a las comunidades a recurrir a diferentes formas de resistencia. Muchas de esas acciones derivan luego en procedimientos judiciales. Uno de esos casos es el de

un grupo de 30 Iban procedentes de diversas aldeas del área del Bakong en Baram, quienes deberán comparecer ante los tribunales el día 22 de mayo. En 1997 impidieron que la empresa plantadora Empresa y su contratista Segarakam se introdujeran en sus territorios tradicionales, donde éstas tenían intención de destruir sus cultivos para instalar una plantación de palma. Tras haber esperado infructuosamente alguna respuesta o asistencia por parte de las autoridades, a los Iban no les quedó otra opción que ejercer su derecho a la defensa propia para proteger sus tierras y cultivos, por lo que detuvieron tres *bulldozers* de la compañía.

Tras una denuncia presentada por la empresa a la policía, argumentando que los Iban habían robado los vehículos, el 19 de diciembre de 1997 personal policial intentó ingresar a la aldea de los Iban para detener a su jefe por ese supuesto delito y recuperar los *bulldozers*. Los Iban resistieron la detención sosteniendo que fue la empresa la que invadió su territorio tradicional y destruyó sus cultivos. En la escaramuza la policía disparó varias veces sobre los indígenas, tres de los cuales fueron alcanzados por los disparos. Uno que recibió un tiro en la cabeza murió en el acto.

No contentas con tener la policía de su lado, las empresas contratan matones para atemorizar a los pobladores. Esta política no ha hecho más que traer consigo más violencia y más juicios. Ahora 19 Iban de Ulu Niah deberán comparecer ante la corte el 19 de mayo, por haber sido acusados de la muerte de cuatro gánsters de nacionalidad china pagados por una empresa plantadora para intimidar y hostigar a los Iban por oponerse a las plantaciones en sus tierras. (Boletín del WRM N° 34, mayo de 2000).

Malasia: Campaña contra proyecto de plantaciones y fábrica de celulosa en Sabah

Un proyecto de plantaciones forestales que ocuparía casi el 3% del territorio de Sabah, al norte de Borneo, y significaría la desaparición del 6% de sus bosques primarios —de por sí ya cada vez más escasos— está siendo promovido en Kalabakan por parte de una *joint-venture* conformada por Innoprise Corporation Sdn Bhd, Lions Group de Malasia y China Fuxing Pulp and Paper Industries de China. El megaproyecto de plantaciones y fábrica de pulpa, cuyo costo ha sido evaluado en US\$ 1.100 millones, determinará la sustitución de 240.000 hectáreas de bosque por el monocultivo de una especie de acacia (*Acacia mangium*) de rápido crecimiento, originaria de Australia.

El proyecto ha generado críticas debido a los consabidos impactos que provocará y por no haber siquiera cumplido los débiles requerimientos ambientales de Sabah. Según la legislación para la conservación del ambiente allí vigentes, la corta de un bosque de 500 hectáreas o más, al igual que todo emprendi-

miento de plantación de árboles de 500 hectáreas o más, requiere de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, ya se han cortado 12.000 hectáreas en el área del proyecto propuesto, sin que se haya llevado a cabo ni una sola EIA. Innoprise Corporation aduce que no se requiere EIA, puesto que la operación de maderero fue aprobada antes de que dicho procedimiento se hiciera obligatorio por ley, y anunció la próxima corta de otras 33.000 hectáreas. La empresa ignora olímpicamente la Ley de Calidad Ambiental del Gobierno Federal, del año 1974, y la Orden de Calidad Ambiental, del año 1987, que obligan a realizar una EIA previa en estos casos. Sahabat Alam Malasia (SAM) –Amigos de la Tierra-Malasia– ha denunciado que al permitir que la corta continúe sin la EIA obligatoria, el gobierno de Sabah está ignorando por completo los impactos ambientales de las actividades de maderero y manipulando la ley en favor de los intereses de las grandes empresas y en detrimento de la conservación del bosque.

Con toda razón se teme que esta enorme plantación provoque impactos devastadores sobre el ambiente. La plantación cortará el mayor tramo continuo de selva remanente en la región, que se extiende entre el Valle de Danum y la cuenca del Maliau, ambos clasificados como Areas de Protección Clase Uno. La zona posee un alto grado de biodiversidad, incluyendo 120 especies de mamíferos, 280 de aves y más de 2.500 de diferentes árboles. Este ecosistema rico en biodiversidad corre el riesgo de ser sustituido por un agrosistema uniforme y pobre en biodiversidad. Ya hay información de que el avistamiento de animales salvajes es más frecuente, probablemente porque estén huyendo de la zona ya cortada. Considerando que la mayor parte del área del proyecto presenta una importante pendiente, la corta de la plantación expondrá al suelo directamente a la erosión provocada por la lluvia. De ese modo los sedimentos podrían alcanzar la vegetación de manglar de la Bahía Cowie, destruyendo los recursos marinos. Las consecuencias ya son evidentes: cuando se llevan cortadas tan sólo 12.000 hectáreas, ya hubo inundaciones en el Valle de Danum. El microclima también se verá afectado una vez que la selva sea reemplazada por una plantación, tornándose más seco y cálido. Además, esto podría crear condiciones negativas para la propia plantación, tornándola más proclive al riesgo de incendios.

Los efectos de la fabricación y el blanqueo de celulosa son también amenazantes. El uso del cloro para el blanqueo ha hecho que esta industria sea la tercera mayor fuente de dioxina y derivados en el mundo. Este problema se agrava por el hecho que Malasia carece de una política de prevención del daño causado por dioxinas. Dicha industria emite además –entre otros gases contaminantes– dióxido de carbono, óxidos sulfurosos y cloroformo. Lo que es más, en los efluentes de la industria de la celulosa y el papel han sido identificados alrededor de 300 productos químicos, entre los cuales contaminantes orgánicos, clorofenoles y compuestos ácidos y organoclorados.

A fin de evitar una ulterior destrucción, SAM ha hecho un llamamiento al gobierno del Estado de Sabah y al gobierno Federal a disponer el cese de toda actividad de corta, iniciar acciones legales contra los responsables de la corta de las 12.000 hectáreas sin EIA, llevar a cabo una completa EIA del proyecto, procurar obtener genuinos insumos por parte del público en relación con la revisión de la EIA en su conjunto, dada la magnitud y escala de los impactos ambientales previstos. (Boletín del WRM N° 40, noviembre de 2000).

Malasia: La difícil situación de las trabajadoras en las plantaciones de palma aceitera

Las mujeres constituyen más de la mitad de la mano de obra de las plantaciones malayas (aproximadamente 30.000 operarias). Históricamente han sido contratadas como trabajadoras temporarias para realizar las tareas menos calificadas y peor remuneradas. La urbanización y la industrialización han empujado a hombres y jóvenes a trabajar en las nuevas zonas industriales, mientras que las mujeres se quedan y siguen tomando cualquier trabajo que les permita acceder a una vivienda y a los servicios básicos que proporciona la empresa de la plantación, que de otra forma estarían fuera de sus posibilidades. De esta forma las mujeres han desempeñado el doble papel de suministrar mano de obra barata y de aportar estabilidad social.

A principios de la década de los sesenta, cuando el consumo de caucho sintético controlado por los países industrializados aumentó más de 60 por ciento a nivel mundial, los precios del caucho cayeron drásticamente. Las plantaciones de caucho malayas no pudieron competir y por lo tanto el sector fue forzado a diversificarse e introdujo la palma aceitera como cultivo alternativo. Posteriormente el país se convirtió en el primer productor y exportador de aceite de palma, en un impulso que provocó (y sigue provocando) la fuerte oposición de los pueblos indígenas, como los de Sarawak, que defienden sus tierras y bosques tradicionales de los programas de monocultivo devastadores que le permiten al país insertarse en la economía mundial, pero al costo de privar al pueblo de sus medios de sustento.

El cultivo de palma aceitera requiere un «cuidado» más intensivo para evitar plagas, por lo que el uso de plaguicidas se convirtió en un requisito esencial. Las mujeres fueron contratadas como rociadoras de plaguicidas y fertilizantes; se estima que unas 30.000 mujeres realizan esta tarea en el país, la mayoría de ellas indígenas. La organización Tenaganita (Fuerza de las Mujeres) trabaja con las trabajadoras de las plantaciones desde 1991. La información recopilada sobre el trabajo y la vida de las trabajadoras de las plantaciones y los estudios de caso de su explotación como mujeres y como trabajadoras han permitido a la organización dar a conocer el calvario de estas mujeres «envenenadas y silenciadas», en un informe elaborado en conjunto con la Red de Acción en Plaguicidas (Pesticide Action Network) de Asia y el Pacífico.

El estudio revela que los equipos rociadores tienen pérdidas y que su mantenimiento es malo, la atención médica y la infraestructura de primeros auxilios en las plantaciones son escasas y en algunos casos no existen equipos de protección. Especialmente para las mujeres, la falta de control médico y la falta total de comprensión sobre la forma en que son afectadas por estos productos químicos, hace difícil evaluar la medida de su impacto sobre ellas, su salud reproductiva y sus embarazos. Pero los impactos son muy reales.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo; el 90 por ciento de la exposición a los plaguicidas se produce a través de la piel y la piel de las mujeres es delgada, lo que favorece un nivel alto de absorción corporal de los productos químicos. Muy pocas mujeres saben que el punto de absorción más importante es la zona genital. Experimentan sensaciones severas de quemadura genital después de rociar, pero sufren en silencio porque les avergüenza hablar de este problema con los asistentes del hospital que en general son hombres, y el problema no es detectado. Los síntomas comunes de fatiga, dolor de espalda, dolores de cabeza muy fuertes, náuseas, mareos, opresión y dolor en el pecho, inflamación de los senos, son indicadores de exposición a plaguicidas del tipo de los organofosforados y carbamatos.

Señalando a los actores responsables, el informe destaca que los propietarios y los administradores de las plantaciones toman las decisiones sobre las tareas, el método de rociado, el tipo de plaguicidas que se utilizan, los servicios de atención de salud y las medidas a instrumentar cuando se presenta una queja. La industria de las plantaciones no ha formado comisiones de seguridad ni cumple con las disposiciones de la Ley de Seguridad Laboral. Y lo que es peor, no proporciona a las trabajadoras la información adecuada sobre los venenos que manipulan y utilizan en su trabajo. Aunque saben los peligros que involucran, siguen utilizando los plaguicidas más tóxicos. Sin embargo, la industria ha desarrollado estrategias para no tener que rendir cuentas; la tarea de rociado ha sido incluida en la categoría de «trabajo subcontratado». En consecuencia, las trabajadoras están bajo la supervisión directa del subcontratista. Muchas permanecen en calidad de trabajadoras temporales, y de esa forma la industria abdica de su responsabilidad. Su única preocupación consiste en sus ganancias y no incluye las vidas de las trabajadoras que son quienes generan la riqueza de la industria.

En cuanto a la industria de plaguicidas, si bien trabaja en estrecha relación con la industria de las plantaciones sin entrar en contacto directo con las trabajadoras, es responsable de garantizar que los plaguicidas que fabrica y distribuye no envenenen a las trabajadoras, a la población en general ni al medio ambiente. No obstante, no ha tomado medidas, o en todo caso ha sido muy lenta al hacerlo, para abordar estos problemas, y con frecuencia ha sido mucho más enérgica en negar que algún envenenamiento haya tenido lugar.

La Oficina de Plaguicidas y el Departamento de Salud y Seguridad Laboral tienen la responsabilidad de garantizar la protección y la seguridad de las trabajadoras contra la acción de estos productos tóxicos. Existe, en general, falta de controles en cuanto a la venta, utilización e impacto de los venenos en las plantaciones. La escasa instrumentación de las reglamentaciones en el sector ha llevado al envenenamiento diario de las trabajadoras. Además, el personal médico o de atención de salud no está debidamente capacitado para tratar envenenamiento por plaguicidas. De esta forma, también el gobierno es responsable de la actual crisis de salud de las trabajadoras rociadoras de las plantaciones.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Plantaciones (National Union of Plantation Workers - NUPW) si bien está integrado en un 60% por mujeres, no ha logrado abordar la aterradora realidad de las trabajadoras y su exposición cotidiana a los venenos. La dirección ha negociado salarios ligeramente más altos para las rociadoras, en tanto se trata de un trabajo «de alto riesgo». La falta de perspectiva de género se refleja en la falta de programas para la mujer y en la falta de dirigentes mujeres en el propio Sindicato.

La contratación de trabajadores migrantes, la mayoría empleados bajo la modalidad de mano de obra contratada, es un tema emergente. A menudo las actividades se subcontratan a través de compañías o agentes que son quienes proporcionan la mano de obra contratada que realiza distintos trabajos en las plantaciones pero no se convierten en empleados de las mismas. No cuentan con la protección de las leyes laborales, son altamente móviles y se enfrentan al riesgo de ser arrestados, detenidos y deportados. De esta forma también estos trabajadores son altamente vulnerables y se enfrentan a riesgos de salud graves sin contar con acceso a tratamiento ni atención médica.

En definitiva, la reducción o la prevención de la toxicidad relacionada con el uso de plaguicidas en el país implicaría, entre otras acciones, la prohibición y/o restricción estricta del uso de compuestos peligrosos como los plaguicidas, la promoción de alternativas al control químico de plagas en el país, y la integración de la perspectiva de género al análisis de los peligros laborales de los plaguicidas.

Una organización de mujeres se ha expresado con fuerza. Ha dado voz a las «silenciadas» en un esfuerzo por compensar los efectos nocivos de un modelo de producción equivocado de plantaciones de monocultivos en gran escala que es artificial, inseguro y que refuerza la exclusión de la mujer sin beneficio para el pueblo en general. (Boletín del WRM N° 69, abril de 2003).

Tailandia: Oposición a proyecto chino-tailandés de plantación de eucalipto

Los campesinos tailandeses están luchando para evitar que se implemente un proyecto de plantación de 120.000 hectáreas de eucalipto, que traería aparejada la desaparición de vastas superficies de bosque y la amenaza sobre los recursos agrícolas de cientos de comunidades rurales en ocho provincias del este y el norte del país.

En febrero de 2000 el Gabinete tailandés aprobó en primera instancia una *joint-venture* por US\$ 1.000 millones entre el gobierno chino y Advance Agro Company. El Real Departamento Forestal de Tailandia proveerá 40.000 hectáreas de reservas forestales «degradadas» y la Oficina para la Reforma Agraria otras 80.000 hectáreas para completar el proyecto. La compañía pagará a los aldeanos establecidos en las reservas forestales para que evacuen sus tierras por un período de 30 años. Aquellos con títulos legales otorgados por la oficina de la Reforma Agraria serán contratados por la empresa para plantar eucaliptos. El Real Departamento Forestal establecerá una comisión de trabajo, que incluye a representantes de este organismo y de la empresa, que controlará las áreas comprendidas en el proyecto, confeccionará un mapa de uso del suelo y solicitará la aprobación final del Gabinete.

Funcionarios forestales del Santuario de Vida Silvestre Kao Ang Ruenai en la Provincia de Chachoengsao señalaron que el proyecto determinará la desaparición de vastas superficies de selva, puesto que no quedan tierras disponibles para el reasentamiento de los campesinos desalojados por el proyecto. Muchos de los aldeanos sostienen que han vivido durante generaciones en esas tierras. La mayor parte de ellos ha luchado infructuosamente durante décadas por la obtención de algún documento que compruebe que son propietarios de la tierra.

Pocos campesinos están dispuestos a aceptar compensaciones por abandonar sus tierras para dar lugar a los eucaliptos, dado que no hay tierra disponible para adquirir y reasentarse. Para la mayoría de estas comunidades no vale la pena vender sus tierras, dado que el proyecto está previsto que dure solamente 30 años.

Wiboon Khemchalerm, un conocido agricultor orgánico de la Provincia de Chachoengsao, señala que muchos campesinos se verán forzados por la compañía a aceptar el dinero y enajenar sus derechos sobre la tierra. «Sin embargo, una vez que el dinero se haya ido y no haya más tierra para trabajar, ¿dónde irá a parar esta gente?» se pregunta Wibbon.

Advance Agro Company, que fue establecida por el grupo Soon Hua Seng (SHS) en 1993, es el primer y mayor fabricante de pulpa y papel en Tailandia. SHS posee la mayoría de las acciones de Advance Agro, en tanto el resto es

propiedad de Stora Enso de Finlandia (19,9 %) y Oji (5%), que es el principal productor japonés de papel. La empresa actualmente opera dos fábricas de pulpa y produce 450.000 toneladas de papel al año. La *joint-venture* incluye una tercera fábrica que requerirá 3.500.000 toneladas de eucalipto para producir 700.000 toneladas de papel, cuyo principal destino será la exportación a China.

El grupo SHS ya posee alrededor de 32.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto en la Provincia de Chachoengsao, la cual podría ser considerada la mayor superficie continua de este tipo de plantaciones en todo el país.

Este grupo ha acumulado la mayor parte de estas tierras utilizando una serie de tácticas agresivas durante los últimos años. Careciendo de títulos oficiales de propiedad y de recursos para proveerse asistencia legal, los aldeanos se han visto forzados a vender sus predios y bosques comunitarios a la empresa, por precios que oscilan entre US\$ 5 y US\$ 6 la hectárea. A medida que las plantaciones de eucalipto van rodeando sus predios a los campesinos no les queda prácticamente otra salida: muchos de hechos son contratados para plantar eucaliptos, mientras que otros venden sus tierras y se ponen a trabajar en las plantaciones y en la fábrica de pulpa.

Sombun Khamkaew, de Ban Khao Kluay Mai, en la Provincia de Chachoengsao comenzó a plantar eucalipto en un predio de 4,8 hectáreas hace seis años. Desde entonces los pozos y cursos de agua ubicados en las cercanías de su comunidad empezaron a secarse. El dice que el dinero que ganó por vender la primera cosecha luego de cuatro años no compensó la inversión ni el esfuerzo realizados. «Obtuve tan sólo 40.000 baht (alrededor de US\$ 1.052) tras cuatro años de espera, sin contar todo lo que tuve que poner. Y ahora me resulta demasiado caro eliminar los árboles de raíz» afirma.

La señora Lum Junchai, de 60 años de edad y madre de diez hijos, sostuvo un juicio que duró seis años contra la compañía, a la que reclamaba 4,5 hectáreas en la aldea Laemkowchan en la Provincia de Chachoengsao. Cuando la Sra. Lum se rehusó a desprenderse de su predio el grupo SHS le planteó una demanda por intrusa y la policía provincial la amenazó reiteradamente con que destruiría su casa. Con el asesoramiento de los abogados de la Unión para la Libertad Civil (Union for Civil Liberty) –un grupo en defensa de los derechos humanos, con sede en Bangkok– finalmente la Sra. Lum logró que la corte reconociera su derecho a la tierra.

«Ahora planto mandioca. Luego de la resolución de la corte la compañía ya no me hostiga más» dice ella. Sin embargo, ahora está en problemas para plantar su mandioca, ya que las plantaciones de eucalipto que rodean su predio están secando las fuentes subterráneas de agua y endureciendo el suelo». (Por: Noel Rajesh, Boletín del WRM N° 34, mayo de 2000).

Tailandia: Se planea masiva forestación con eucalipto

Durante la última década, Tailandia ha presenciado repetidas protestas contra las plantaciones de eucalipto. Campesinos han participado de marchas, arrancado árboles de raíz, incendiado plantaciones, declarado sus tierras como «libres de eucaliptos» y mejorado el suelo donde hubo plantaciones de eucalipto, a través de prácticas de forestación comunitaria. A pesar de estas protestas y de los problemas asociados con la plantación de eucaliptos, las dos principales firmas productoras de celulosa y papel de Tailandia –Phoenix Pulp and Paper y Advance Agro– actualmente planean una expansión en gran escala.

Phoenix planea duplicar su capacidad de producción adicionando una fábrica de 270.000 toneladas de capacidad a sus operaciones en Khon Kaen, a un costo de US\$ 450 millones. Por su parte Advance Agro tiene planes de construcción de una nueva planta de 750.000 toneladas de capacidad mediante una *joint-venture* con el gobierno de China. Se estima que el costo de esta nueva fábrica y de las plantaciones de eucalipto asociadas a ella será de US\$ 1.000 millones. El 80% de la producción de la nueva fábrica de Phoenix será destinado a la exportación, en tanto las nuevas instalaciones de Advance Agro producirán exclusivamente para el mercado chino.

La gerencia de Phoenix está negociando con los gobiernos de Suecia y de Finlandia la concesión de préstamos a bajo interés para financiar dicha expansión. Una operación similar de Phoenix –la Phoenix II– realizada entre 1990 y 1994 fue financiada con préstamos blandos otorgados por dichos gobiernos. Las compañías finlandesas Jaakko Poyry, Sunds Defibrator, Ahlstrom, Suomen Puhallintehdas, Sahko Lahteenmaki y Valmet Automation en consecuencia se beneficiaron de los correspondientes contratos para el suministro de asesoramiento técnico, diseños y maquinaria para Phoenix II.

Parte de la justificación del gobierno finlandés para financiar Phoenix II con un crédito por la suma de US\$ 91 millones fue que ello ayudaría a mejorar la performance de la fábrica de Phoenix. Parte de tal «mejora» incluía el mal llamado «Proyecto Verde», a través del cual desde 1994 Phoenix descarga sus efluentes en terrenos de los campesinos. Se suponía que esta agua serviría para irrigar los eucaliptos, pero los campesinos que viven en los alrededores han denunciado la salinización de sus fuentes de agua subterránea, la muerte de los peces de sus estanques y la pérdida de los cultivos de arroz en los terrenos adyacentes a los del Proyecto Verde. Cientos de pobladores locales se quejaron de las prácticas de Phoenix entre 1995 y 1996, lo que derivó en compensaciones extrajudiciales por alrededor de US\$ 80.000. Además de los problemas con el «Proyecto Verde», el Ministerio de Industria en reiteradas ocasiones dispuso el cierre de la fábrica de Phoenix debido a la contaminación que provocaba en el río Phong.

En agosto de 1998 el Ministro finlandés de Cooperación para el Desarrollo Pekka Haavisto se refirió a los préstamos a Phoenix como «un error cometido por FINNIDA».

En 1999 se asistió al final de una lucha de seis años por el control de Phoenix. Lalit Mohan Thapar reemplazó a George Davison como presidente de la compañía. Según Davison, la mayor parte del apoyo financiero para dicha sustitución vino del Banco de Comercio de Bangkon (BBC). El BBC ganó publicidad por el notorio papel que jugó en uno de los mayores escándalos financieros que ha habido en Tailandia, por el cual alrededor de 200.000 millones de Baht (unos US\$ 8.000 millones en esa época) desaparecieron del banco. Un grupo de políticos tailandeses –conocido como «el Grupo de los 16»– utilizó dinero de BBC para financiar el reemplazo de directivos en varias empresas del país, entre ellas Phoenix. Davison describió la maniobra como «un robo condonado por el gobierno».

El valor de las acciones de Phoenix descendió de 140 Baht (US\$ 5,6) en 1995 a 34 Baht (menos de US\$ 1) en junio del 2000 y la compañía tiene actualmente deudas por unos US\$ 80 millones.

Localizada en Tha Toom en la Provincia de Prachinburi, a aproximadamente 120 kms de Bangkok, Advance Agro es dueña de una de las más nuevas fábricas de celulosa y papel de Tailandia. La empresa comenzó a operar en 1996 y en 1998 se agregó una segunda planta que aumentó la capacidad de producción a alrededor de 310.000 toneladas. La fábrica fue construida por el grupo Soon Hua Seng (SHS), una de las principales empresas tailandesas.

Hace diez años unos empleados de Suan Kittti, subsidiaria de SHS, fueron arrestados por cortar bosques para liberar espacio para plantaciones de eucalipto. Debido al clamor público que ello generó, el Primer Ministro Chatichai Choonhaven se vio obligado a prohibir la «reforestación» comercial en las Reservas Nacionales de Bosques.

Originalmente estaba previsto que el nombre de la fábrica sería «Planta de Celulosa Suan Kittti», pero para tomar distancia de las críticas asociadas con el nombre Suan Kittti, SHS rápidamente le cambió el nombre por Advance Agro y contrató a la empresa finlandesa de relaciones públicas Presko como consejera para minimizar futuras críticas ambientales. CIDA, la agencia de cooperación canadiense, financió a la consultora canadiense H.A. Simmons para trabajar con SHS y la Corporación para el Desarrollo del Commonwealth (CDC) ofreció préstamos y financiamiento de la deuda para la nueva fábrica.

Los principales accionistas de la empresa son el grupo Soon Hua Seng (56%); Stora Enso, el mayor productor de pulpa y papel de Europa (19%); Oji Paper, la principal productora de papel del Japón (5,5%) y la CDC (1%). Las acciones de Advance Agro cayeron de 73,48 Baht en 1997 a 17,25 Baht en julio de 2000.

Además la empresa tiene enormes deudas que suman alrededor de US\$ 640 millones.

Actualmente la fábrica obtiene su materia prima a partir de 31.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto manejadas por Agro Lines, una subsidiaria del grupo SHS, y de 57.000 hectáreas de eucalipto cultivadas por 6.000 campesinos bajo contrato con Agro Lines.

La expansión que se propone Advance Agro habrá de requerir 40.000 hectáreas adicionales para plantaciones y otras 80.000 hectáreas en régimen de contrato con los campesinos. Plodprasop Surasawadi, Director General del Departamento Real Forestal (RFD) señaló en marzo de este año que su apoyo al proyecto estaba condicionado a que la empresa «negociara» con los campesinos que habitan las áreas boscosas y a que «hiciera efectivos pagos compensatorios a quienes accedieran a entregar sus tierras». En resumidas cuentas, esto significa que los campesinos serían echados de sus tierras, que recibirían algún dinero como compensación y que sus tierras irían a parar a manos del RFD que a su vez se las arrendaría a Advance Agro para la plantación de eucaliptos.

Los denominados «bosques degradados» a ser convertidos en monocultivos de eucalipto son en realidad valiosos para los campesinos y constituyen la base física de la fauna local. Según la Sociedad de Conservación de las Aves de Tailandia, los bosques secos de dipterocarpus de zona baja amenazados por esta expansión de las plantaciones son el hábitat de especies de pájaros amenazadas, en especial aves rapaces. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 36, julio de 2000).

Tailandia: El FSC debe revocar el certificado de la Organización de la Industria Forestal

En junio de 2001, dos plantaciones de teca manejadas por la Organización de la Industria Forestal (Forest Industry Organisation – FIO) de Tailandia obtuvieron un certificado de «buen manejo» en el marco del sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC). Las plantaciones, ubicadas en Thong Pha Phum y Khao Krayang, fueron evaluadas por SmartWood, una organización sin fines de lucro dirigida por Rainforest Alliance, una ONG con sede en los Estados Unidos.

A pesar de que la zona certificada cubre menos de un 3,5 % del total del área de plantaciones de la FIO, el certificado habilita a esta organización a sostener que realiza un «manejo sustentable de bosques». Antes de que se realizara la evaluación, Chittiwat Silapat, miembro de la FIO, declaró al Bangkok Post: «Es un paso muy importante hacia el fin de la deforestación y el comienzo del desarrollo sustentable».

La FIO es una empresa forestal de propiedad estatal creada en 1947 con el fin de manejar las concesiones madereras en Tailandia. En los hechos, ha sido responsable de organizar la destrucción de los bosques de Tailandia hasta que en 1989 se implantó la prohibición de madereo. También ha establecido plantaciones en 140.000 hectáreas de territorio tailandés, a menudo sin el consentimiento de las comunidades locales que hacían uso de esas tierras. La certificación otorgada por el FSC permite a la FIO encubrir su historia y sus problemas financieros, que se han agravado desde que la prohibición de madereo privó a la organización de su principal fuente de ingresos.

SmartWood no incluyó la historia de la FIO al realizar su evaluación. Jeffrey Hayward, que encabeza el equipo de SmartWood en Tailandia, explicó que «la certificación es un camino para que cualquier actividad forestal pueda demostrar que ha cambiado y que está cambiando para mejor. Nuestro objetivo es encontrar soluciones. El pasado es una parte vital de la historia y del desarrollo, pero ¿qué impacto tiene sobre el presente y el futuro?».

Esto ignora que SmartWood en parte está determinando el «derecho a existir» de la FIO al ignorar la realidad de la oposición social a su existencia misma. Al describir a SmartWood como una organización que procura «encontrar soluciones» en este contexto, Hayward está trabajando para encontrar soluciones para la FIO. Y al parecer SmartWood está dispuesta a llegar lejos para encontrar esas soluciones.

En Tailandia no existen normas nacionales del FSC ni ninguna iniciativa para desarrollarlas. En estos casos, los organismos de certificación del FSC deben desarrollar una norma provisoria que debe hacerse circular entre los «interesados» un mes antes de la decisión de certificación. SmartWood no lo hizo; tan solo utilizó sus propias «Pautas Genéricas de Evaluación de Manejo de Bosques».

Al enfrentarse a la crítica de que el grado de consulta nacional con las ONGs y la sociedad civil de Tailandia fue deficiente, Richard Donovan, de Rainforest Alliance, y Jeffrey Hayward, de SmartWood, respondieron: «Consideramos que necesitábamos realizar un proceso agresivo de consulta con los interesados, y así lo hicimos, no solamente durante la evaluación sino en las visitas posteriores previas a la certificación que realizara el personal de SmartWood a Tailandia».

Sin embargo, los pobladores que viven cerca de las dos plantaciones nunca oyeron hablar del FSC ni de SmartWood. Somsak Ratanawaraha, jefe del poblado de Ban Nam Tok Poi, cercano a la plantación de Khao Krayang, figura en el Resumen Público de la evaluación de SmartWood como una de las personas consultadas. Cuando se le preguntó por el proceso de consulta de agosto de 2002, declaró: «No hablamos de nada, solamente me hicieron preguntas. Ellos no hablaron del FSC. No dijeron una sola palabra sobre la certificación. Hablaron sobre la plantación y sobre lo beneficiosa que iba a ser».

Virawat Dheeraprasert, presidente de la ONG tailandesa Foundation for Ecological Recovery (FER), comentó: «Los pobladores locales hasta el momento no conocen en absoluto el proceso de SmartWood ni de la certificación. No ha habido ningún tipo de participación local. Y esto significa en realidad que el FSC está apoyando un proceso que viola los principios básicos de la Constitución de Tailandia».

De conformidad con las normas del FSC, SmartWood ha presentado un resumen público de su evaluación de las plantaciones de la FIO. Según una moción aprobada en la Asamblea General del FSC en 1999, los resúmenes públicos deben proporcionar información suficiente «para aclarar la correlación entre los resultados específicos de la evaluación de certificación y los Principios y Criterios del FSC».

El resumen público de SmartWood no lo hace. Por ejemplo, establece 26 condiciones que debe cumplir la FIO para mantener la validez del certificado, pero el resumen público no explica a qué principios y criterios del FSC se refieren esas condiciones.

Quince de estas condiciones debían ser cumplidas en forma inmediata o en el plazo de un año a partir de la emisión del certificado. En agosto de 2001, Donovan y Hayward escribieron: «Deben cumplir nuestras condiciones o se les revocará el certificado».

Para verificar si la FIO había cumplido efectivamente las condiciones, SmartWood volvió a Tailandia en mayo de 2002 y realizó una auditoría del primer año. Encontraron que la FIO no había cumplido cinco de las condiciones y había cumplido sólo parcialmente otras siete. Sin embargo, en vez de revocar el certificado como habían prometido, emitieron una serie de «requisitos de medidas correctivas» con nuevos plazos.

La FIO esperaba que la auditoría del primer año de SmartWood también incluyera la evaluación de cinco plantaciones más para su posible inclusión en el certificado del FSC. Sin embargo, SmartWood recomendó que una de esas plantaciones, Ta Pla, debía «no ser considerada como posible candidata al grupo certificado» con el argumento de que «existen problemas de tenencia de la tierra» que «presentan un alto riesgo de incumplimiento del Principio 2 (del FSC)». La FIO retiró entonces esta plantación de la evaluación y SmartWood evaluó las cuatro plantaciones restantes. Después de una gira ultrarrápida de seis días en territorio tailandés, que incluyó visitas a cinco plantaciones, SmartWood concluyó que: «Lamentablemente, durante las visitas de auditoría en sitio, se constataron que hay zonas importantes en las que se debe mejorar para que las mismas cumplan con los Principios 2, 3 y 5 del FSC». Pero sólo hay más información al respecto en la «sección confidencial» del informe de auditoría de SmartWood.

Dos de las plantaciones de la FIO siguen estando certificadas. Según Virawat Dheeraprasert: «El fracaso en la puesta en práctica de las condiciones durante este primer año nos lleva a exigir al FSC que revoque la certificación». Y agregó: «No es necesario hablar de ampliar las áreas certificadas, en este momento alcanza con que el FSC revoque las dos áreas que hoy están certificadas». (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 64, noviembre de 2002).

Tailandia: Eucaliptos, usurpación, deforestación y contaminación vinculadas con compañía de celulosa y papel

Advance Agro, una de las compañías de celulosa y papel más grandes de Tailandia, comercializa su tipo de papel «Doble A» como «amigable» con el medio ambiente. La publicidad de la compañía explica que la materia prima proviene de plantaciones y por lo tanto alivia la presión ejercida sobre las zonas de bosque que todavía existen.

La realidad es que las plantaciones de Advance Agro han desplazado comunidades y son la etapa final de la deforestación en el este de Tailandia. Kasem Petchanee, Presidente del Comité Coordinador de ONGs, de la región subnorte y central de Tailandia, explicó cómo comenzó la deforestación cuando compañías como la Forest Industry Organisation, de propiedad del Estado, comenzaron sus actividades de maderero. «Hace cincuenta años esta región estaba cubierta de bosque fértil», afirmó.

Durante la guerra que libró en Indochina, la cantidad de tropas de Estados Unidos estacionadas en Tailandia llegó en 1969 al máximo de casi 50.000. Para comunicar sus bases en el noreste de Tailandia con el puerto de Chon Buri, Estados Unidos construyó una red vial. La deforestación siguió a la construcción de las carreteras. En las décadas de 1970 y 1980, el gobierno tailandés construyó más carreteras para lograr acceso a los bosques de Camboya.

El Banco Mundial ha desempeñado un papel clave en la promoción de los cultivos comerciales en Tailandia. Entre las organizaciones creadas por recomendación del Banco está el Consejo Nacional para el Desarrollo Económico y Social de Tailandia (NESDB por su sigla en inglés), que supervisa toda la planificación de las inversiones públicas. Desde su creación en 1959, el NESDB ha sido el principal promotor de los cultivos comerciales para la exportación.

Alentadas por las políticas del NESDB, las compañías comenzaron a plantar cultivos comerciales como mandioca y caña de azúcar en el este de Tailandia. Surgieron conflictos por la tierra en la medida en que las compañías usurparon bosques y tierras a los pobladores locales. Los pobladores fueron obligados a plantar cultivos comerciales y a vender sus cultivos a una compañía privada.

Se formaron y expandieron redes de influencia, donde participaron parlamentarios, compañías, oficiales del ejército y una mafia local. Los asesinatos estilo

«mafia», la especulación con la tierra y la falta de tierras se volvieron comunes en el este de Tailandia.

En 1982, el Grupo Soon Hua Seng (SHS), uno de los líderes de la exportación de arroz y mandioca de Tailandia, comenzó a plantar eucaliptos en el este de Tailandia como alternativa a la mandioca. Hacia fines de 1987, SHS ya estaba plantando eucaliptos a escala comercial y fundó la compañía Advance Agro para producir celulosa y papel.

Actualmente el Grupo SGS posee 32.000 hectáreas de plantaciones propias y también cerca de 50.000 hectáreas de eucaliptos plantados por contrato en tierras de agricultores. En 1996, Advance Agro abrió su primera fábrica de celulosa y papel en la provincia de Prachinburi y ahora tiene una capacidad total de producción de 500.000 toneladas métricas de papel por año. El setenta por ciento del papel de Advance Agro se exporta, principalmente a China, Estados Unidos, Hong Kong y Japón.

El poblado de Laemkowchan tiene más de 100 años y está cerca de una de las fábricas de Advance Agro. En el pasado, sus pobladores cultivaban arroz, mandioca y calabaza. Cuando SHS comenzó a buscar tierras para plantar eucaliptos, muchos pobladores vendieron a la compañías las tierras que habían usado para plantar mandioca.

Pero descubrieron que las plantaciones de eucaliptos comenzaron a afectar también a sus arrozales. Suwan Kaewchan, miembro del Consejo de Administración del poblado de Laemkowchan explicó al investigador Noel Rajesh: «Cuando la compañía llegó y comenzó a plantar eucaliptos cerca de los campos de arroz, el agua comenzó a secarse y los pobladores descubrieron que no podían cultivar arroz. Uno tras otro comenzaron a vender sus tierras y a irse. Se fueron a trabajar como asalariados a otras regiones o con la compañía».

Los pobladores que conservaron sus tierras pero plantaron eucaliptos bajo contrato debieron enfrentarse a otro problema, según destacó Kasem Petchanee: «Después de la primera cosecha, el suelo queda tan degradado que deben invertir dinero para mejorar el suelo. Extraer los árboles es difícil. Los pobladores tienen que alquilar maquinaria cara para sacar los tocones y las raíces de los árboles. Las comunidades agrícolas se están endeudando con los bancos y los prestamistas. Cuando no pueden pagar, el banco se queda con sus tierras».

El agua residual de la fábrica de Advance Agro se vierte en las plantaciones de eucaliptos. Esta agua sucia queda depositada en canales entre las filas de eucaliptos. Los pobladores destacan que aunque el agua es tratada en la planta de celulosa, eso no significa que esté limpia. Recientemente el agua proveniente de la fábrica mató los cultivos de arroz de los pobladores. Los pobladores informan que la ceniza de las chimeneas de la fábrica se deposita en sus

casas y huertos, y han comenzado a sufrir problemas en la piel, como picazón. En ocasiones el aire tiene mal olor y los pobladores temen que la fábrica también esté emitiendo azufre.

La compañía ha creado una unidad ambiental, y los funcionarios de la compañía dicen a los pobladores que saben los problemas que están experimentando. Sin embargo, los pobladores no han recibido ningún tipo de compensación por ninguno de los problemas causados por la compañía.

Varias compañías internacionales se han visto beneficiadas por los contratos relacionados con las plantas de Advance Agro. Jaakko Poyry, la consultora en materia forestal y de ingeniería más grande del mundo, ganó contratos otorgados por Advance Agro para el diseño de ingeniería y para la gestión del proyecto y la construcción de la planta de Prachinburi. La compañía Mitsubishi Heavy Industries de Japón suministró la maquinaria para la planta papelera de Advance Agro.

La financiación de las plantas de Advance Agro fue organizada por Barclays de Zoete Wedd. Las principales fuentes de financiamiento fueron el Banco de Bangkok, el Banco de Agricultores Tailandeses (Thai Farmers' Bank), el Krung Thai Bank y Commonwealth Development Corporation del Reino Unido. La Corporación Financiera Internacional, el brazo prestamista privado del Banco Mundial, otorgó un préstamo de US\$ 10 millones y la financiación posterior provino de créditos a la exportación.

Cuando en 1998 la compañía Stora Enso compró un 19,9 por ciento de acciones de Advance Agro, obtuvo los derechos exclusivos para la comercialización internacional de los productos de Advance Agro y un mercado seguro para las 12.000 toneladas métricas anuales de celulosa de fibra larga de sus fábricas europeas. Dos miembros de Stora Enso integran el directorio de Advance Agro.

Advance Agro es un buen ejemplo de como las compañías del Norte y tailandesas se benefician de la industria de celulosa y papel, mientras las comunidades rurales son las que pagan los costos. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 70, mayo de 2003).

Vietnam: ¿Los árboles de quién? Programa de «reforestación» de 5 millones de hectáreas

La historia de los programas de plantación de árboles en Vietnam se remonta a 1956. Según un informe de Nguyen Ngoc Lung, Director del Departamento de Desarrollo Forestal de Vietnam, entre 1956 y 1992 fue plantada una superficie superior al millón de hectáreas. Sin embargo, los índices de sobrevivencia fueron pobres y la mayor parte de la madera producida fue exportada bajo forma de astillas a Japón o Taiwan.

Aún así, el gobierno vietnamita se propone incrementar el área de plantaciones en el país. En 1992 las autoridades introdujeron el Programa 327, con el objetivo de «reverdecer las colinas desnudas». La agencia noticiosa estatal Vietnam News Agency informa que entre 1988 y 1994 se plantaron 115.000 hectáreas al año, cifra que aumentó a 193.000 hectáreas anuales entre 1995 y 1998. Los costos para el Estado fueron elevados. Hacia 1998 el Programa 327 le había costado al gobierno alrededor de US\$ 273 millones. Tres años antes, el gobierno vietnamita había intentado sin éxito obtener financiamiento del Banco Mundial para dicho programa.

En 1998 el Banco Mundial contrata a la consultora forestal Fortech para «describir, analizar y evaluar» el programa. La consultoría de Fortech señaló que durante la implementación del programa la superficie de bosques naturales en Vietnam había seguido descendiendo, y que los programas de plantación de especies de rápido crecimiento habían fallado completamente. Entre los problemas mencionados por el trabajo se encuentran: un enfoque burocrático verticalista, la asignación de tierras sin el involucramiento de la población local, prácticas silviculturales pobres, imposición del proyecto a los hogares pobres sin tener en cuenta sus aportes y el hecho que Vietnam tiene poca superficie disponible para plantaciones forestales a gran escala.

Tal vez fue a causa de su fracaso en lograr fondos del Banco Mundial que el gobierno propuso un nuevo programa, aún más ambicioso, para reemplazar el referido 327: el Programa de Reforestación de 5 millones de hectáreas.

El objetivo de este nuevo programa es aumentar el área «boscosa» del país a 14 millones de hectáreas para el año 2010. El área meta —5 millones de hectáreas— se originó a partir de una cartografía francesa de 1943, la que indica que en ese entonces el 43% de Vietnam se encontraba cubierto de bosque. Ello equivale a 5 millones de hectáreas más que las cifras oficiales de mediados de 1990, cuando por primera vez se empezó a hablar del programa. El costo estimado del programa es de unos US\$ 2.500 millones, de los que US\$ 1.500 millones provendrán de agencias internacionales de ayuda. Del total de cinco millones de hectáreas el gobierno planea destinar un millón a plantaciones para celulosa.

Seis meses después de que el gobierno aprobara el proyecto en la Décima Asamblea Nacional, agencias bilaterales de ayuda decidieron brindar su apoyo al programa durante el encuentro del Grupo Consultivo (presidido por el Banco Mundial) realizado en diciembre de 1998 en París. Un año más tarde, el 10 de diciembre de 1999, se firmó un memorandum de acuerdo entre Le Huy Ngo, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y 15 representantes de agencias internacionales de ayuda.

Posteriormente se estableció un «Comité Ejecutivo de Coparticipación» formado por representantes del gobierno de Vietnam y de dichas agencias. Al

mismo tiempo se crearon tres Grupos de Trabajo, con la finalidad de investigar algunos aspectos como política forestal, instituciones, inversiones en el sector forestal, necesidad de ayuda y estrategia de financiamiento. Aparentemente los impactos de las plantaciones a gran escala sobre la gente y el ambiente no formarán parte de la agenda de los Grupos de Trabajo.

La Agencia Sueca Internacional para el Desarrollo (SIDA) es una de las agencias implicadas en las negociaciones con el gobierno acerca de este Programa. Rolf Samuelsson, Primer Secretario de la Embajada sueca en Hanoi describió de este modo la actitud de SIDA respecto del proyecto: «Pensamos que tal vez sea un tipo de plan típicamente verticalista en materia de programa, agenda política y demás. Pero como Suecia está decididamente promoviendo enfoques basados en la coparticipación y en programas sectoriales amplios, pensamos que este programa, pese a todas sus limitantes, constituye un buen punto de partida para el diálogo con el gobierno en la temática forestal».

SIDA ha solicitado que el Centro para la Investigación Internacional Forestal (CIFOR), con sede en Indonesia, sea involucrado en el proceso de negociación, aduciendo que Hanoi carece de «la masa crítica de expertos que puedan ayudar al Ministerio en la elaboración de esos documentos» según palabras de Samuelsson.

Otras agencias involucradas en el «Comité Ejecutivo de Coparticipación» incluyen a Holanda, Alemania, el PNUD y el Banco Mundial. Algunos de ellos ya están financiando o planificando otros proyectos de reforestación en Vietnam. Por ejemplo, el Banco Mundial publicita en su «Monthly Operational Summary» (Resumen Mensual de Operaciones) de mayo del 2000 un proyecto de US\$ 75 millones denominado «Forestación de las Colinas Desnudas». Hay pocos detalles disponibles sobre el mismo, pese a que el Banco ha tenido este proyecto en su listado durante varios meses. En marzo de 1997, el Banco de Desarrollo Asiático aprobó un préstamo sin intereses por US\$ 33 millones para un Proyecto para el Sector Forestal de cinco años de duración, que incluye la reforestación de áreas montañosas en cuatro provincias. Parte de este proyecto consiste en la plantación de 12.000 hectáreas con especies de rápido crecimiento. La consultora que actúa en el mismo es GFA (Gesellschaft für Agrarprojekte mbH), una firma alemana con sede en Hamburgo.

Mientras las agencias de ayuda y el gobierno vietnamita discuten acerca del futuro financiamiento de proyectos, éste ya ha empezado a plantar. En 1999 se instalaron 206.000 hectáreas de «bosques» sobre un total de 310.000 planeadas. Más de 5.000 hectáreas fueron instaladas mediante siembra aérea de semillas en la provincia de Lai Chau, en el noroeste del país. La meta para este año es de 403.000 hectáreas, para lo que se ha destinado un presupuesto de aproximadamente US\$ 25 millones.

La lógica subyacente parece ser simplemente que los árboles son buenos. Parece haber poco análisis sobre para quiénes y para qué son los árboles. Una posibilidad es la industria de la celulosa y el papel. Sin embargo, en agosto de 1999 Vietnam News informó que la Corporación Nacional del Papel de Vietnam tenía 18.000 toneladas de papel almacenadas, como consecuencia del bajo consumo. El año pasado, la Corporación fue la que registró los mayores índices de pérdida del país, con nueve de sus compañías en déficit. Un año antes, los proveedores de madera de Vietnam se vieron forzados a almacenar su producto porque el volumen excedía la demanda a nivel nacional. En diciembre de 1999 el diario Nhan Dan, con sede en Hanoi, informó que los campesinos estaban vendiendo su producción como leña en los mercados locales en lugar de hacerlo a la industria de la celulosa y el papel, debido a la falta de transporte y al «bajo valor económico de estos árboles».

Si bien estos ejemplos no brindan un panorama acabado de la situación, indican claramente que la instalación de un millón de hectáreas de plantaciones adicionales para el suministro de la industria de la celulosa no necesariamente habrá de beneficiar ni a la propia industria de la celulosa y el papel ni a los campesinos en cuyas tierras se plantarán los árboles. Las ambiciosas metas de plantación y el negocio de atraer fondos pueden poner en peligro el potencial de crecimiento del área de bosque nativo y del aumento del bienestar de la población rural, por ejemplo mediante el manejo comunitario de bosques.

Vietnam News Agency informó que a principios de 2000 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural había señalado que la superficie a ser plantada podría ser reducida a tres millones de hectáreas «para estar de acuerdo con el área disponible para la forestación y con el plan de desarrollo nacional». Tal vez esto sirva para generar el espacio –tanto político como geográfico– necesario para lograr el involucramiento de las comunidades en el manejo de sus bosques, pasturas, tierras agrícolas y campos de barbecho. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 38, setiembre de 2000).

Vietnam: Plantaciones como sumideros para evitar reducción de emisiones en Australia

Durante las negociaciones internacionales sobre el cambio climático (COP 6) en La Haya en noviembre de 2001, el gobierno de Australia se alineó con EE.UU., Japón y Canadá, negándose a reducir las emisiones de carbono de su propio país. Cinco meses después, el mismo gobierno ha anunciado cinco proyectos cuyo propósito es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como era previsible, los proyectos, financiados a través del Programa Internacional de Cooperación sobre el Efecto Invernadero (International Greenhouse Partnerships, IGP Programme), no tienen por finalidad la reducción de las emisiones en Australia, sino que habrán de ser implementados en Perú, Fiji, Malasia y Vietnam.

El aludido programa IGP, que fuera lanzado en mayo de 1998 y se implementa desde el Ministerio de Industria, Ciencia y Recursos, se propone «reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos en el exterior», que serán considerados en el futuro como proyectos de compensación de carbono bajo el Protocolo de Kioto.

Al anunciar los proyectos, Nick Minchin, Ministro australiano de Industria, Ciencia y Recursos dijo que «no sólo los proyectos estarán abordando el cambio climático global mediante la reducción de gases de efecto invernadero, sino que además estarán ayudando a Australia a desarrollar su experiencia en materia de tecnologías limpias y verdes a través de proyectos serios y comercialmente viables».

Uno de los proyectos del Programa IGP consiste en el establecimiento de plantaciones de árboles de rápido crecimiento en Vietnam. Este proyecto, evaluado en US\$ 242.000, será llevado adelante por CSIRO (Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth), conjuntamente con el Centro de Investigación para el Mejoramiento de Árboles Forestales de Vietnam. Según Minchin, CSIRO «aumentará la captura de carbono por parte de los bosques plantados [sic] en Vietnam a través del uso de material de plantación genéticamente mejorado».

CSIRO suministrará las semillas de acacia y eucalipto –los árboles favoritos de la industria de la celulosa y el papel– y establecerá cuatro viveros, cada uno de los cuales de cinco hectáreas de extensión, dos en la Provincia de Quang Tri en la zona central de Vietnam, y dos en la Provincia de Binh Thuan, al sur. Los plantines producidos en estos viveros serán instalados sobre una superficie de 8.250 hectáreas en varios sitios del país.

De acuerdo con estimaciones de la propia CSIRO, estas plantaciones absorberán «21.500 toneladas extra de CO₂» de la atmósfera por año, comparadas con otras plantaciones forestales. Dicho cálculo se basa en un crecimiento volumétrico del 15%, que se espera obtener a partir de la semilla genéticamente mejorada. Sin embargo, investigaciones recientemente publicadas en las revistas «Nature» y «Science» indican que los bosques son mejores que las plantaciones en lo que respecta a la absorción de carbono. Aún así, la información que IGP ofrece al público no hace mención alguna de comparaciones entre la cantidad de carbono almacenado por un bosque y por una plantación.

CSIRO también participa en el desarrollo de modelos predictivos para «otras importantes especies para plantación» y considera que «tal conocimiento habrá de colaborar con el exitoso crecimiento de las plantaciones, permitiendo mayores rendimientos de los bosques [sic] plantados y una mayor absorción de carbono en el largo plazo». Incluso asumiendo que las plantaciones puedan ser útiles en la absorción de dióxido de carbono, la lógica falla por su base,

dado que un mayor crecimiento en las plantaciones no hará ninguna diferencia si los árboles son cortados a los cinco años para producir productos de corta vida tales como astillas de madera, celulosa y papel.

Entretanto, en otros lugares de Vietnam los inversores se están topando con dificultades para encontrar tierra suficiente para sus plantaciones. Por ejemplo, el proyecto de Quy Nhom, evaluado en US\$ 14 millones y financiado con fondos japoneses, se propone instalar 13.000 hectáreas de acacia y eucalipto en la Provincia de Binh Dinh, con la finalidad de producir astillas de madera a ser exportadas a Japón. Hasta ahora, luego de siete años de aprobación del proyecto, la empresa solamente recibió alrededor de 8.000 hectáreas de tierras. «El problema de disponibilidad de tierras está aumentando los riesgos de los proyectos de plantaciones» manifestó a la publicación Vietnam Investment Review Hironobu Ohara, director del mencionado proyecto.

Según un artículo aparecido recientemente en el diario tailandés *The Nation*, el gobierno vietnamita exige que todo proyecto de secuestro de carbono a ser implementado en el país debe incluir un apoyo a las comunidades que resultarían afectadas por las plantaciones. La información puesta a disposición del público por el IGP en relación con el aludido proyecto no hace alusión alguna a este tema.

Cabe señalar que el 75% de los fondos de CSIRO provienen del gobierno de Australia, por lo que resulta explícito a quién debe su lealtad. Tal como lo expresa la propia organización: «las funciones primarias de CSIRO consisten en asistir a la industria australiana, contribuir con los objetivos nacionales del país y facilitar la aplicación de los resultados de la investigación».

El mensaje resulta pues claro: el gobierno de Australia no negociará reducciones de las emisiones de carbono en su país, pero CSIRO ha de «asistir a la industria australiana» mediante la instalación de plantaciones de eucalipto y acacia en Vietnam... supuestamente para absorber dichas emisiones. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 45, abril de 2001).

Vietnam: Un futuro de plantaciones masivas

En 2001, la Vietnam Paper Corporation (Vinapimex) anunció un plan ambicioso para ampliar la industria de la celulosa y el papel en Vietnam. Con un costo total de más de US\$ 1.000 millones, el plan involucra 15 nuevos proyectos de producción de pulpa y papel. Si se construyeran todos estos proyectos, la capacidad de producción anual de papel de Vinapimex se elevaría de las 171.000 toneladas actuales a 419.000 toneladas.

La industria de la celulosa y el papel en Vietnam actualmente produce un total de aproximadamente 360.000 toneladas de papel por año. Vinapimex espera aumentar esa cifra a más de un millón de toneladas hacia fines del año 2010.

Uno de los proyectos propuestos de Vinapimex es una nueva planta de celulosa *kraft* blanqueada de 130.000 toneladas al año en la provincia de Kontum, en las tierras altas centrales de Vietnam. En octubre de 2001, el gobierno aprobó el estudio de factibilidad de Vinapimex.

La mayor parte de la financiación para el proyecto de US\$ 240 millones todavía no se ha logrado, pero Vinapimex espera que los gobiernos extranjeros vendrán en su ayuda con préstamos de «asistencia» con tasas de interés por debajo de las ofrecidas por los bancos comerciales. El gobierno vietnamita ha acordado cubrir el siete por ciento de los costos mediante la financiación de carreteras, infraestructura de investigación, clínicas de atención de salud y escuelas. El gobierno también comprará los derechos al uso de la tierra para el proyecto y renunciará al impuesto a la tierra durante el primer ciclo de la plantación.

Para suministrar materia prima a la planta de celulosa, Vinapimex ha comenzado a plantar árboles y aspira a establecer un área de 125.000 hectáreas de plantaciones de árboles de crecimiento rápido. Además, según el estudio de factibilidad, Vinapimex piensa usar 38.000 hectáreas de bosques para alimentar la planta.

Mientras tanto, las obras para ampliar la planta de celulosa y papel más grande de Vietnam, Bai Bang, deben comenzar en pocas semanas. La planta ampliará su capacidad de 55.000 toneladas de papel por año a 100.000 toneladas. Al mismo tiempo, la capacidad anual de producción de celulosa aumentará de 48.000 a 61.000 toneladas. Esto representa la primera etapa de un plan para aumentar la capacidad anual de producción de papel de la planta a 200.000 toneladas y la capacidad de producción de celulosa a 150.000 toneladas.

El 30 de noviembre de 2001, el gobierno sueco acordó proporcionar un crédito preferencial de US\$ 12,5 millones para financiar la primera fase de la expansión. En 2000, Vinapimex obtuvo US\$ 42 millones en préstamos de tres bancos nórdicos para financiar la reconstrucción de su planta industrial. Vinapimex firmó contratos con Voith Paper y Sinochem de China para reconstruir la planta. Elof Hansson y Marubeni ganaron los contratos para suministrar equipos. Hansson conduce un grupo de compañías proveedoras entre las que se incluyen Kvaerner Chemetics, Kvaerner Pulping, Purac, Metso Paper y AF-IPK.

Además de los planes de ampliación de Vinapimex, la compañía japonesa Nissho Iwai está planificando aumentar su producción de astillas de madera (*chips*) en Vietnam. La compañía está construyendo una planta de US\$ 1,5 millones en una *joint-venture* con una agencia de exportación de productos forestales propiedad del Estado. Las astillas de madera serán exportadas y vendidas a la empresa japonesa Oji Paper Company. Nissho Iwai también planifica aumentar 15 por ciento la capacidad de un productor existente de astillas de madera llevándola a 150.000 toneladas por año. El objetivo de la compañía para el año 2002 es 400.000 toneladas, las que en su totalidad se exportarán a Japón.

En un intento por cumplir con la creciente demanda de materia prima para alimentar la industria de celulosa y papel en expansión, el gobierno tiene planes ambiciosos de plantar un millón de hectáreas con plantaciones industriales destinadas específicamente a alimentar la industria como parte de su programa de «5 millones de hectáreas».

En un informe de febrero de 2001, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural argumenta que el programa de 5 millones de hectáreas debe conducir al «uso sustentable de la tierra» y debe ser «financiera, ambiental y socialmente viable». Pero el programa de plantación industrial de árboles que se está aplicando actualmente en Vietnam no cumple con ninguno de esos objetivos. Sólo es viable financieramente con los subsidios del gobierno y los préstamos con baja tasa de interés otorgados en forma de «asistencia» extranjera. Los monocultivos de árboles de crecimiento rápido que reemplazan a los bosques, campos y praderas tampoco se pueden describir como ambientalmente viables o sustentables. Y en lo que respecta al pueblo vietnamita, que depende de la tierra y los bosques que se perderán para dar paso a las plantaciones, las consecuencias sociales son potencialmente devastadoras. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 54, enero de 2002).

Vietnam: Se suspende construcción de planta de celulosa y papel en Kontum

El 24 de octubre de 2002 las autoridades provinciales anunciaron la suspensión de la construcción de la nueva planta de celulosa y papel con una capacidad de 130.000 toneladas por año en Dac To, provincia de Kontum, en las tierras altas centrales de Vietnam. La agencia estatal de noticias Vietnam News Agency (VNA) informó que se detuvo la construcción debido «al incumplimiento de la formulación de un plan maestro creíble».

Seis meses antes, durante un viaje de dos días a Kontum, el Viceprimer Ministro Nguyen Cong Tan había exigido a la Compañía Papelera de Vietnam, Vinapimex, la publicación de un plan que estableciera de donde provendría la materia prima para alimentar la planta.

Vinapimex había planificado la planta de Kontum partiendo de la suposición de que habría más de 20.000 hectáreas de plantaciones disponibles para alimentar la planta, y que se podrían plantar todavía más tierras. Sin embargo, tres años más tarde, existen menos de 15.000 hectáreas de plantaciones y parte de esa área se obtuvo desplazando de sus tierras y hogares a pobladores locales. Después de la detención de la construcción, las autoridades provinciales de Kontum declararon a la VNA que la expansión del área de plantaciones de árboles para generar más materia prima simplemente no era viable.

Jaakko Poyry, la empresa consultora forestal y de ingeniería más grande del mundo, fue la asesora en la proyectada planta industrial. En 1998 Poyry elabo-

ró para Vinapimex un estudio de factibilidad sobre la planta y preparó los documentos para un llamado a licitación en mayo de 2002. El costo total de la planta se estimó en US\$ 240 millones, cifra que incluye US\$ 163 millones en equipos provenientes de Europa occidental.

La suspensión de la construcción de la planta de Kontum es sólo uno de los problemas a los que se enfrenta Vinapimex, empresa administrada por el Estado y principal productora de papel de Vietnam. Vietnam tiene la capacidad de producir 360.000 toneladas de papel por año, aproximadamente 70 por ciento del papel consumido por año en el país. Pero en agosto de 2002, la VNA informó que los depósitos de Vinapimex estaban al máximo de su capacidad, con 28.500 toneladas de papel almacenado, incluyendo 16.000 toneladas del año anterior. La compañía acusó a los exportadores extranjeros de practicar competencia desleal con papel barato dentro de Vietnam, pero la realidad es que el papel importado es más barato y de mejor calidad. En 2002, Vietnam importó 52.000 toneladas de celulosa y 290.000 toneladas de papel.

En un intento por competir con los importadores, Vinapimex redujo dos veces los precios del papel durante 2002. Mientras tanto, los costos de producción del papel aumentaron en octubre cuando el gobierno incrementó el precio de la electricidad. Vinapimex solicitó al gobierno una reducción de los cargos de electricidad a los niveles anteriores a octubre de 2002, y está intentando obtener otros subsidios del gobierno, mediante préstamos de crédito preferenciales y una reducción del impuesto al valor agregado.

Las perspectivas no son buenas para Vinapimex. Este año, según las reglas de la Zona de Libre Comercio de la ASEAN, Vietnam debe reducir los aranceles sobre las importaciones de papel de 50 por ciento a 20 por ciento.

En 2000, Dang Van Chu, Ministro de Industria de Vietnam declaró a la revista comercial *Pulp and Paper International* que Vietnam tenía una estrategia clara para la industria de la celulosa y el papel para la próxima década. «En un plazo de 10 años queremos que nuestra industria abastezca el 80-90 por ciento de la demanda interna, con una tasa de crecimiento promedio de 10,4 por ciento por año», afirmó. Añadió que el país también espera aumentar el comercio con el mercado internacional.

Apenas dos años después, los planes están hechos trizas. En julio de 2002, el Viceprimer Ministro Nguyen Tan Dung indicó al Ministerio de Industria que ajustara su plan de desarrollo para la industria papelera hasta 2010. Dung estableció que todas las plantas de papel nuevas debían tener en cuenta planes de suministro de materia prima.

Mientras tanto, Vinapimex continúa con sus planes de expansión. Está planificando una planta de celulosa con una capacidad de 250.000 toneladas por año en Phu Tho, con el objetivo de alimentar a la planta de celulosa y papel más grande de Vietnam, ubicada en Bai Bang.

En octubre de 2002, el gobierno aprobó los planes de Vinapimex para una planta de celulosa y papel por valor de US\$ 104 millones en la provincia de Thanh Hoa. La planta tendrá una capacidad de 50.000 toneladas de celulosa y 60.000 toneladas de papel por año.

En la provincia de Lam Dong, Vinapimex tiene planes de establecer una planta de celulosa de US\$ 250 millones, con una capacidad entre 200.000 y 400.000 toneladas por año. El Vicepresidente del Comité Popular de Lam Dong, Hoang Si Son, declaró al *Vietnam Economic Times* que «Vinapimex ha plantado un área de 10.000 hectáreas para añadir a las 30.000 hectáreas existentes; pensamos aumentar la cubierta boscosa a 135.000 hectáreas».

Aparentemente, Vinapimex considera que la construcción de nuevas plantas de celulosa y papel es la única forma que le queda para sobrevivir como empresa. Por supuesto, la compañía podría simplemente construir más depósitos con mayor capacidad para las reservas masivas del papel poco rentable que produce. Después podría acudir al gobierno y a las agencias de cooperación internacional para obtener los subsidios que necesita para asegurar su supervivencia burocrática. Los impactos sobre las comunidades rurales de Vietnam, sus bosques y sus formas de sustento no tendrán una solución tan fácil. (Por: Chris Lang, Boletín del WRM N° 66, enero de 2003).

OCEANIA

Aotearoa/Nueva Zelanda: Oposición a los árboles genéticamente manipulados

Al tiempo que la ingeniería genética aplicada a la producción de alimentos está provocando preocupación entre los consumidores y los ciudadanos, y muchos científicos expresan sus dudas y críticas en relación con la misma, transnacionales de la alimentación, la forestación y la energía se han reunido para desarrollar árboles genéticamente modificados, que se espera puedan crecer más rápido o contener componentes deseados por la industria.

En agosto de 1999 la Oficina de Manejo de Riesgos Ambientales (Environmental Risk Management Authority – ERMA) de Nueva Zelanda recibió –a través de una página web especialmente abierta con ese propósito (www.context.co.nz)– 700 mensajes sobre pinos genéticamente manipulados. Esa iniciativa de democracia participativa, aplicada a una importante cuestión ambiental, es parte del proceso de evaluación de la solicitud realizada por el Instituto de Investigaciones Forestales (Forest Research Institute – FRI) al ERMA para realizar un ensayo de campo con pinos alterados genéticamente. Es importante subrayar que hasta ahora éste nuevo sistema nunca había recibido más de 50 opiniones respecto de un tema, lo que revela claramente la preocupación del público en relación con éste.

La enorme mayoría de los 700 mensajes fue crítica respecto del experimento propuesto para ser realizado a nivel de ensayo de campo. Mario Rautner, activista de Greenpeace en el área de biotecnología forestal, expresó que los resultados muestran claramente que la gente no está de acuerdo con la liberación de árboles genéticamente modificados al ambiente. «Estamos convocando al FRI para que acepte que existe oposición a nivel de la opinión pública a este experimento. Nos gustaría que ahora el FRI declarara una moratoria voluntaria y se abstuviera voluntariamente de realizar el ensayo. Los árboles genéticamente modificados constituyen un serio riesgo para el ambiente y nos oponemos a experimentos de consecuencias impredecibles para la naturaleza» agregó. La cuestión es saber si las autoridades actuarán respetando la voluntad del público y renunciarán definitivamente al ensayo o si responderán a los intereses de la industria.

Debe destacarse que la inclusión de las plantaciones forestales como supuestos sumideros de carbono bajo el MDL del Protocolo de Kioto significaría un estímulo para el desarrollo de la biotecnología en el sector forestal, con el argumento de que los árboles genéticamente modificados serían capaces de crecer más rápido y absorber más CO₂ en menos tiempo. Un riesgo adicional a tener en cuenta por los negociadores sobre el clima para el próximo encuentro de La Haya. (Boletín del WRM N° 39, octubre de 2000).

Aotearoa/Nueva Zelanda: Una certificación discutible

En octubre de 2000, todas las plantaciones en Nueva Zelanda de Fletcher Challenge Forests recibieron la certificación del Consejo de Manejo Forestal (FSC), luego de una evaluación llevada a cabo por parte de la empresa Scientific Certification Systems (SCS). La mayor plantación continua de pino radiata del mundo está incluida en la certificación.

Ian Boyd, el entonces principal ejecutivo de Fletcher Challenge Forests dijo que «la certificación del FSC brindará a Fletcher Challenge Forests una importante oportunidad de ventas en aquellos mercados que exigen responsabilidad ambiental».

Sin embargo la certificación de las operaciones de Fletcher Challenge Forests plantea serias interrogantes sobre el proceso de evaluación de SCS, así como sobre el propio manejo de sus plantaciones por parte de Fletcher Challenge Forests.

De acuerdo con el Principio 6 del FSC, «se prohibirán» todos los pesticidas clasificados como tipo 1A y 1B por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fletcher Challenge Forests utiliza fluoracetato de sodio, comúnmente conocido como 1080, que es un veneno usado para matar animales silvestres tales como la zarigüeya, que pueden dañar las plantaciones de árboles. En el resu-

men público de evaluación de las operaciones de Fletcher Challenge Forests realizado por SCS, los evaluadores admiten que 1080 es un «compuesto que aparece en la tabla 1 del OMS». Sin embargo, en vez de rechazar el otorgamiento del certificado, SCS incluyó una condición tan vaga que resulta casi sin sentido: «dentro de 12 meses de recibir la certificación, Fletcher Challenge Forests deberá demostrar que está activamente buscando alternativas a 1080, por ejemplo, apoyando la investigación en materia de alternativas».

En otras palabras, Fletcher Challenge Forests podrá continuar utilizando 1080 sin arriesgar su certificado FSC, en tanto apoye la investigación sobre alternativas. SCS no menciona como se debería manifestar dicho apoyo, o incluso si importa en algo que de la investigación surja algún resultado o no.

El principio 2 del FSC establece que las disputas sobre los derechos de tierras «de magnitudes sustanciales..., normalmente descalificarán la certificación de una operación». Para los Maori, la tierra es sagrada y ellos tienen varias demandas pendientes bajo el tratado de Waitangi de 1840 sobre la tierra plantada por Fletcher Challenge Forests. En su evaluación, el personal de SCS describe «la incertidumbre sobre la propiedad de una parte significativa de las tierras forestales de Fletcher Challenge Forests» como un tema «significativo». Sin embargo, una vez más, esto no impide que SCS otorgue el certificado.

De acuerdo al Principio 6 del FSC, «se prohibirá el uso de los organismos genéticamente modificados. «Desde 1995, Fletcher Challenge Forests ha trabajado con Genesis Research and Development Corporation, la mayor empresa neozelandesa de biotecnología, en el desarrollo de árboles genéticamente modificados. Los evaluadores de SCS reconocen que Fletcher Challenge Forests está involucrada en la investigación de tejidos de plantas genéticamente modificadas. Aunque Fletcher Challenge Forests actualmente no utiliza árboles genéticamente modificados en sus plantaciones, en vez de discutir si las investigaciones de Fletcher Challenge Forests están en contradicción con el espíritu de los principios del FSC, el resumen público de la evaluación simplemente dice: «todos los materiales son clasificados como de bajo riesgo y el laboratorio cumple totalmente con los requerimientos regulatorios».

En 1999, Fletcher Challenge Forests, Genesis, Monsanto, International Paper y Westvaco anunciaron una *joint-venture* de US\$60 millones. La empresa del *joint-venture*, llamada ArborGen, producirá y comercializará semillas genéticamente modificadas, centrándose en el pino radiata y eucalipto en Nueva Zelanda. Monsanto dejó más tarde de ser socio activo de la empresa.

Tanto si Fletcher Challenge Forests emplea semillas genéticamente modificadas en sus propias plantaciones como si, siendo parte del *joint-venture* ArborGen, las vende a otras empresas forestales, Fletcher Challenge Forests está efectivamente utilizando organismos genéticamente modificados y promoviendo

su uso en operaciones forestales. El determinar si Fletcher Challenge Forests está por ende en incumplimiento de los principios del FSC seguramente debería ser un tema que los evaluadores tendrían que analizar en el resumen público de la evaluación. Sin embargo, al describir las actividades de desarrollo e investigación de Fletcher Challenge, los asesores concluyen que «la compañía tiene un claro compromiso con los principios del FSC».

Tres de los cuatro evaluadores contratados por SCS para llevar a cabo la evaluación de las operaciones de Fletcher Challenge Forests trabajan para la compañía neozelandesa Forest Research. En 1982, Forest Research auspició una reunión sobre investigación genética con pino radiata. En setiembre de 1995, los invernáculos del instituto en Rotorua estaban repletos de pino radiata genéticamente modificado. Forest Research también lleva a cabo proyectos financiados por Fletcher Challenge Forests. ¿Podrá esto tal vez explicar la aceptación sin preguntas de los evaluadores de las investigaciones de Fletcher Challenge Forests en árboles genéticamente modificados? (Por: Chris Lang, Boletín Especial del WRM sobre el FSC, febrero de 2001).

Aotearoa/Nueva Zelanda: Cambio en la propiedad y gestión de las plantaciones de propiedad estatal

El año pasado asistí a una conferencia en Ciudad del Cabo sobre el tema que da título a este artículo, en la que el acento aparentemente estaba puesto en la participación del sector privado en la propiedad y gestión de plantaciones. Como indígena de un país con grandes áreas de plantaciones de monocultivos de especies exóticas, nunca había pensado demasiado sobre la propiedad de estas áreas. En mi país las plantaciones han sido históricamente de propiedad estatal, aunque últimamente se han vendido algunas. Por razones éticas, me opongo a la privatización de los bienes del Estado por parte de cualquier gobierno y la considero una medida económica equivocada. Sin embargo, también me opongo a la proliferación de monocultivos de árboles a gran escala, y me había entusiasmado con un cambio reciente en la actitud del gobierno de este país, que ponía aparentemente un mayor énfasis (en términos de plantaciones nuevas) en las especies indígenas y en el control de la erosión. La verdad es que no pensé que esa iniciativa fuese a llegar muy lejos, y ciertamente me resultó frustrante observar la relativamente pequeña área de plantaciones con especies indígenas, pero creí que de todas formas era un cambio significativo de actitud que apostaba en mayor medida a la conservación. Cabe entonces preguntarse ¿sería tan malo que el sector privado se hiciera cargo de la propiedad y gestión de esas grandes plantaciones?

Le daría al gobierno una inyección de fondos para dedicar a reformas sociales y le libraría de la necesidad de llevar adelante programas forestales impopulares. Al menos ése parecía ser uno de los principales hilos de la argumentación

realizada en la conferencia de Ciudad del Cabo, y hay mucho de verdad en esa filosofía, pero años de experiencia en la arena política me han enseñado que debe existir una razón subyacente al argumento. Recordé las palabras del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD por su sigla en inglés) en el foro realizado sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio durante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable: «Si no hay una razón comercial que impulsar, se trata de caridad». El mensaje de esta declaración es claro (y éstos eran empresarios responsables y concientes, considerados como buenos muchachos): no es un hábito de los empresarios dedicarse a la caridad. Entonces ¿cómo se vincula eso con la venta de plantaciones por parte de los gobiernos? Bien, si solamente se van a cortar y no van a ser usadas como una fuente de suministro permanente, quizás me importe un bledo. Se trata, después de todo, de especies invasivas y una reliquia de la colonización. Sin embargo, desde el punto de vista comercial y de la inversión, no parecería ser una solución rentable cortarlas y retirarse. Al menos no si se las compra a un precio razonable; y si no es así, dice mucho sobre la capacidad comercial del gobierno que vende.

Por lo tanto, es necesario considerar las implicancias a largo plazo de la propiedad de estas plantaciones en manos de gente con antecedentes demostrados de reducción de puestos de trabajo, uso de químicos tóxicos, tala rasa con maquinaria pesada e inversión en la investigación de ingeniería genética. ¿Por qué debemos hacer estas consideraciones? Porque «Si no hay una razón comercial que impulsar, se trata de caridad». Las medidas mencionadas aumentan los márgenes de ganancia, y ésa es la razón comercial: los márgenes de ganancia. Cuando los gobiernos administran las áreas de plantaciones, están obligados a considerar el costo social de las medidas que aplican, porque si resultan demasiado impopulares, los gobernantes pueden encontrarse ellos mismos en las filas de los desocupados a la siguiente elección. En la mayor parte de nuestros países, tenemos la opción de librarnos nosotros mismos de los gobiernos que toman demasiadas decisiones impopulares. Sin embargo, no podemos elegir a los Directorios de las compañías que dirigirían las plantaciones en régimen de privatización y ése es el problema. Las empresas no tienen las mismas restricciones para sus márgenes de ganancias que pueden tener los gobiernos. Mientras tanto, por supuesto, si se vendieran, el gobierno podría retorcerse las manos y declarar lo terrible que era, según ellos, la empresa en cuestión, pero que se debe dejar florecer la libre empresa, a pesar de unas pocas fallas. Ese es el problema que veo en la venta de esos monocultivos de árboles. Otros se llevarán las ganancias, y nosotros seguiremos pagando el precio, con la diferencia de que será un precio un poco más alto y que no habrá nadie a quien responsabilizar por los impactos sociales.

Si en su país está planteada la privatización de las plantaciones, entonces piense en los por qué y en qué pasaría si... antes de dejar correr el problema

como algo que no le concierne porque se trata solamente de plantaciones, y a usted de todas formas no le gustan. (Por: Sandy Gauntlett, Boletín del WRM N° 68, marzo de 2003).

Australia: Plantaciones como «sumideros de carbono» invaden Tasmania

La expansión de monocultivos forestales en Tasmania –que es paradójicamente el centro de origen del *Eucalyptus globulus*, una de las especies más usadas en los monocultivos forestales en todo el mundo– bajo los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto está provocando gran preocupación en Australia.

El programa del gobierno federal «Plantation 2020 Vision» se propone establecer 650.000 hectáreas de plantaciones durante los próximos veinte años en Tasmania. Los gobiernos federal y estatales en Australia han adoptado una visión de mercado, según la cual el carbono puede ser secuestrado en plantaciones forestales, que luego habrán de ser cortadas en beneficio de las empresas. La Política Forestal Nacional no sólo promueve la instalación de vastos monocultivos, sino que también incentiva la deforestación para dar lugar a las plantaciones, con todos los impactos negativos que ello implica, tanto a nivel local como global. El potencial de los bosques primarios como reservorios de grandes cantidades de carbono es completamente ignorado. En cambio se ha intensificado su corta en varias zonas de la sureña isla de Tasmania, donde los bosques nativos de eucalipto están siendo destruidos.

Al mismo tiempo la oposición a las plantaciones va en aumento, incluso bajo la forma de acciones radicales, como la quema y la extracción de árboles de las plantaciones. La oposición a estos monocultivos ha trascendido el sector de los ambientalistas y ahora incluye a una parte significativa de la sociedad a nivel rural, en especial los productores lecheros y los consejos locales. Por ejemplo, el grupo «Communities over Plantations», creado recientemente en el norte del Estado, es un grupo de presión compuesto básicamente por miembros de la sociedad rural tradicional. Los productores lecheros se oponen a las plantaciones por la baja del valor de las propiedades próximas a las plantaciones y el aislamiento social causado por la muralla formada por las plantaciones ubicadas en el medio de lo que antes eran prósperas comunidades rurales. Por otro lado, las administraciones de los condados tienen que vérselas con un descenso en sus ingresos por concepto de impuestos debido a la sustitución de actividades agrícolas por las plantaciones.

Ni siquiera son empresas australianas los principales actores en este proceso de los sumideros de carbono. Por ejemplo Tokyo Electric Power Corporation (TEPCO) –parte del imperio corporativo Mitsubishi– estableció una *joint-venture* con North Ltd. para establecer más de 23.000 hectáreas sobre tierras agrícolas. En la misma situación está Victoria, donde una compañía de seguros estadounidense –John Hancock– es dueña de 150.000 hectáreas de plantaciones.

La ONG australiana Native Forest Network está abogando por la adopción de prácticas más efectivas, realistas y no destructivas para enfrentar el aumento de la concentración del carbono atmosférico. Una de ellas consiste en frenar la práctica destructiva de cortar y quemar bosques para obtener productos de escaso valor como son las astillas. Además de las enormes cantidades de carbón liberadas mediante la corta inicial de los bosques y de la subsiguiente quema autodenominada de regeneración, las propias astillas son convertidas en bienes desechables –como papel– que son rápidamente destruidos, colaborando así al aumento de las emisiones en un plazo muy corto. En esa línea, el Partido Verde Australiano ha denunciado que todo esto es una maniobra del gobierno para evitar abordar el candente tema de la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que Greenpeace Australia considera que el gobierno federal debería centrar su atención en las energías renovables y emprender acciones para cortar las emisiones, en lugar de tratar de reducir sus efectos. (Boletín del WRM N° 35, junio de 2000).

Australia: Establecimientos agrícolas de Tasmania que alimentaban a la gente ahora alimentan fábricas de astillas

Vastas zonas de la sureña isla de Tasmania en Australia están siendo ocupadas por monocultivos forestales como «sumideros de carbono», los cuales están generando preocupación en diferentes ámbitos. Por otra parte, la industria maderera también está promoviendo activamente las plantaciones para producción de madera.

Preolenna, un pequeño poblado en el noroeste de Tasmania, ha cambiado radicalmente con relación a lo que solía ser hace apenas cinco años. Según el plan del Gobierno Federal denominado Plantations 2020 Vision, esta comunidad que supo ser agrícola ha visto cómo sus predios rurales que solían proveer alimento a la gente han sido convertidos para proveer madera a las fábricas de astillas. El modelo de plantaciones a gran escala de monocultivo de árboles ha arrasado más de 35 pueblos agrícolas en el noroeste interior, desde Circular Head a Wilmot.

Dos antiguas residentes (Colleen Dibley y Evelyn De Vito) han denunciado ante una comisión nacional de revisión que desde 1997 a 2001, trece casas y once granjas lecheras fueron arrasadas con excavadoras para dar paso al cultivo de árboles, después de la venta de las granjas y la mudanza de las familias. La Sra. Dibley declaró ante la comisión que en los últimos cinco años se perdieron 187 puestos de trabajo en el noroeste desde que las granjas fueron convertidas en plantaciones de monocultivos destinados a la producción de astillas.

En 1995, la industria láctea empleaba en forma directa 26 personas en 16 importantes establecimientos de cultivo y producción láctea en Preolenna y

Meunna. Este año no hay ningún empleado en esas granjas. También había cinco trabajadores rurales empleados, hoy ya no existen esos puestos de trabajo. Durante el mismo período, el número de personas empleadas en la industria de las plantaciones, que se ha expandido en forma importante, se ha estancado. En Preolenna, lo que antes era una comunidad rural productiva activa se ha convertido en un paisaje silencioso, infestado de malezas, propiedad de dos compañías madereras y «ahora es una comunidad dormitorio, donde los pobladores trabajan fuera del distrito o dependen de la asistencia social».

En consonancia con los cambios en las condiciones económicas, Telstra eliminó su torre de telefonía móvil y se retiró la red de electricidad. La Sra. Dibley afirmó que las compañías madereras no eligieron tierras no aptas para la agricultura, sino tierras agrícolas clase tres y cuatro o de primera categoría. La Sra. Dibley declaró ante la comisión que si bien las compañías madereras Gunns y Forest Enterprises habían afirmado en forma reiterada que no utilizarían suelos de primera categoría, la publicidad de su esquema de inversión mostró una imagen diferente. «Gunns realiza un proceso riguroso de selección y evaluación de sitios. Nuestros sitios están ubicados en suelos de gran fertilidad con lluvias abundantes y confiables». Afirmó que salvo por dos casas, Meunna ya no existe, y que en su lugar se levanta una enorme plantación de monocultivo industrial de *Eucalyptus nitens* que solamente brinda empleo ocasional a cuadrillas de trabajadores forestales.

En 1999, las zonas de Waratah-Wynyard y Burnie tenían más plantaciones que cualquier otra área gubernamental local de Tasmania, y la plantación se intensificó a partir de principios del año 2000. Pero el desempleo en estas zonas está entre los más altos del Estado, y la población sigue disminuyendo. La Sra. Dibley afirmó ante la comisión que, sólo por la destrucción de las granjas lecheras, el Consejo de Waratah-Wynyard había perdido cerca de 4 millones de dólares australianos por año.

Pero los cambios no se produjeron en silencio. A pesar de la división creada entre los vecinos, en 1999 y 2000, Preolenna fue tema de numerosos artículos periodísticos, cuando el grupo cada vez más escaso de residentes, incluidos los granjeros que vendieron sus tierras contra su voluntad, vieron las consecuencias de la destrucción de la base económica de la comunidad.

A su vez, la Comisión de Referencia de Asuntos Rurales y Regionales y del Transporte, del senado australiano, está examinando los impedimentos para la industria de las plantaciones. El plazo para las presentaciones finalizó a fines de agosto de 2002 y la comisión está examinando, entre otras cosas, qué impedimentos existen para alcanzar los objetivos del plan Visión 2020 y si se debe modificar la estrategia. «Si Preolenna es un ejemplo de lo que sucede cuando existen ciertos impedimentos para la instalación de la industria maderera, no quiero ni imaginar lo que ocurriría si se eliminaran esos impedimentos», dijo la Sra. Dibley. (Boletín del WRM N° 64, noviembre de 2002).

Fiji: Plantación de caoba es detonante de golpe de Estado

Es un hecho conocido que los monocultivos forestales a gran escala provocan un gran número de impactos sociales y ambientales. Sin embargo, nunca habíamos oído hablar de una situación como la de Fiji, donde las plantaciones generaron tensiones sociales y económicas de tal magnitud que condujeron eventualmente a un golpe de Estado.

Las raíces del conflicto pueden rastrearse en los años 1950 y 1960, cuando la anterior administración colonial británica decidió implementar dos proyectos de plantación a gran escala, uno basado en pinos y el otro en caoba hondureña. La tierra a ser ocupada por las mismas fue arrendada a sus dueños fijianos a un precio nominal anual de unos 10 centavos de dólar por hectárea. Muchos de estos contratos permitían a los propietarios de tierras compartir los beneficios resultantes de la cosecha.

La plantación de pinos fue cortada en los años 80 —la década posterior a la salida de los británicos— por la empresa estatal Fiji Pine creada con ese objetivo. La mayoría de las trozas fue convertida en astillas y exportada a bajo precio. Los dueños de la tierra no ganaron nada.

En el año 2000, cuando la plantación de caoba estaba lista para ser cosechada, aparecieron en el escenario una serie de distintos actores. Un grupo de terratenientes fijianos, descontentos con los resultados de la plantación de pinos, había contactado en 1966 a Marshal Pettit, hombre de negocios estadounidense, y lo convenció de involucrarse en la cosecha de las plantaciones de caoba. No obstante, Pettit desconocía completamente el hecho de que la cuestión no era un típico trato de negocios, sino que comprendía derechos territoriales, política local, conflictos étnicos, a una empresa británica y a la política internacional de Fiji.

El hombre de negocios estadounidense, en asociación con el nuevo presidente de Fiji Pine —George Speight— parecía estar a punto de tener éxito en la puja por la cosecha de la plantación, cuando el partido que respaldaba a Speight perdió una elección parlamentaria. Como consecuencia, éste perdió su cargo de presidente y el nuevo gobierno otorgó el contrato a la empresa británica Commonwealth Corporation, a pesar de que la cifra de US\$ 65 millones ofrecida por ésta era por lejos inferior a la de US\$ 210 millones que estaba dispuesta a pagar la compañía de Pettit, Timber Resources Management. La razón para esta aparentemente absurda decisión fue que el nuevo Primer Ministro —el primero de origen étnico indio en ocupar el cargo después de 13 años— necesitaba el respaldo del Reino Unido en la Unión Europea para lograr apoyo a la exportación de azúcar, que es la principal industria de Fiji y está dominada por representantes de la etnia india.

La decisión ocasionó masivas manifestaciones organizadas por los propietarios de tierras, que fueron alentadas por Pettit y Speight. En mayo de 2000,

una manifestación en que participaron unas 20.000 personas derivó en disturbios callejeros y en la destrucción de negocios pertenecientes a personas de origen étnico indio. Al mismo tiempo, Speight ocupaba el Parlamento con el apoyo de grupos paramilitares, tras lo cual mantuvo cautivo al Primer Ministro y a su gabinete durante dos meses. En julio el ejército lo detuvo y lo sometió a juicio.

¿Cuál fue entonces el saldo de toda esta cuestión generada por una plantación? Una empresa británica recibirá la mayor parte de los beneficios. Por otra parte, la división étnica en el pueblo fijiano será mayor que antes, los dueños de la tierra poco recibirán por los árboles plantados en sus propiedades, el sistema democrático del país habrá salido debilitado y la economía nacional no ganará prácticamente nada. (Boletín del WRM N° 38, setiembre de 2000).

Hawaii: ¿Son los eucaliptos el único cultivo posible en Hamakua?

La ONG ambientalista Amigos de Hamakua –conocida por su exitosa campaña de 1997 contra las plantaciones planeadas por Prudential Insurance y Oji Paper/Marubeni en Big Island en Hawaii– está muy preocupada por un proyecto de construcción de una planta de fabricación de madera compensada, así como por el Plan de Manejo Forestal Estatal de Hamakua, que implicaría la corta de 2.160 hectáreas de viejas plantaciones de especies exóticas. Existen varias razones para tal preocupación. En primer lugar, deberán abrirse caminos de acceso a todas las áreas forestadas. Una vez que la cosecha comience, se prohibirá el acceso del público a las rutas por razones de seguridad. A su vez, cuando se haya instalado la caminería se facilitará el acceso a las escasas superficies remanentes de bosque nativo, que, según el Plan, podrían ser cortadas en caso de ser necesario.

Durante una reunión de carácter público que tuvo lugar en Laupahoehoe, a la que concurrieron casi un centenar de residentes que se oponen radicalmente a dicho plan, los representantes del gobierno dijeron que las viejas plantaciones de eucalipto tienen un valor de US\$ 6 millones. No obstante, en varios Estados ya se ha comprobado que el costo de planificar, construir infraestructuras, cosechar y el ocasionado por pérdida de bosques primarios excede ampliamente el monto de los posibles ingresos. La mayor parte de los costos de la nueva industria –tales como la prevención de incendios, la disminución de los impuestos a la propiedad, la infraestructura y posibles futuros subsidios– será absorbida por los contribuyentes. ¿Por qué piensa el Estado de Hawaii que puede hacer ganancias si esta industria sobrevive en otros lugares exclusivamente en base a subsidios?

Los planes en curso incluyen la plantación de 57.000 hectáreas adicionales, en su mayor parte con eucalipto (46.000 hectáreas) y sólo 11.000 hectáreas con especies nativas. Frente a esto, Amigos de Hamakua responde: «¡Ya es-

tamos hartos con las 8.000 hectáreas de plantaciones existentes! ¿Realmente queremos dedicar más tierra a este cultivo? No puede ser cierto que la única solución para las tierras no irrigadas donde antes se plantó caña de azúcar sean los eucaliptos. Dado que aquí llueve, debe haber muchos otros cultivos y árboles de más valor capaces de beneficiar al suelo y a la gente. Muchos de nosotros recordamos a Capitol Wood Chips y todo lo que sucedió con ella. Imaginemos un madereo y una fabricación de astillas todavía diez veces mayor a lo largo de todo Hamakua».

Amigos de Hamakua manifiesta que habrá de apoyar una industria forestal que promueva metas a largo plazo para el procesamiento de madera dura de mayor valor, a ser manejada en forma selectiva, incorporando prácticas sustentables, para que sus hijos puedan prosperar. Pero no las rotaciones cortas de 4 a 7 años que proponen los planes de Prutimber. Habrán de apoyar una industria forestal que no esparza cantidad de herbicidas sobre sus vecinos, que trate con justicia a los contratistas locales, cuya palabra sea confiable, y que invierta de inmediato en infraestructura adecuada para el combate de incendios. Manifiesta asimismo estar abierta a considerar un Plan Forestal Estatal que considere individualmente cada parcela, sin la amenaza de una sola gran planta procesadora que quiera cosechar la totalidad de los árboles.

Teniendo en cuenta que el objetivo del Plan de Manejo Forestal Estatal de Hamakua es suministrar materia prima a la planta de compensado, Amigos de Hamakua reclama que se realice un estudio del impacto ambiental del monocultivo de eucalipto y de la propia planta, antes de que se destine más tierra a la plantación o a la cosecha. Solicitaron que fuera el Consejo del Condado quien realice dicho estudio, pero su Presidente les respondió con los mismos argumentos de la industria forestal y sus aliados. En vista de ello, la organización está haciendo circular una petición para que se realice ese estudio antes de dar un paso más. «¿Cómo podemos apoyar –se preguntan– a una industria que habrá de ocupar tanto de nuestra tierra, que cambiará nuestra forma de vida y que afectará el valor de nuestras propiedades y de nuestros negocios?» (Boletín del WRM N° 38, setiembre de 2000).

Papúa-Nueva Guinea: Incentivos para las plantaciones de palma aceitera

En Papúa-Nueva Guinea se encuentra uno de los bosques tropicales más grandes que quedan en el planeta. Al menos el setenta y cinco por ciento de su cobertura boscosa original sigue en pie, ocupando vastas regiones de gran riqueza biológica con un área total de 100.000 millas cuadradas. Sus bosques son el hábitat de más de 200 especies de mamíferos, 20.000 especies de plantas, 1.500 especies de árboles y 750 especies de pájaros, la mitad de las cuales son endémicas de la isla. Se ha estimado que entre el 5 y el 7% de las especies conocidas del mundo vive en Papúa-Nueva Guinea. Animales y plan-

tas poco comunes como la orquídea más grande, la mariposa más grande, el lagarto más largo, la paloma más grande y el papagayo más pequeño que hayan sido registrados viven en estos bosques. El bosque también es el hogar de los pueblos indígenas. Pero estos bosques y los pueblos que habitan en ellos están amenazados por las plantaciones de palma aceitera y las actividades de maderero a gran escala.

Papúa-Nueva Guinea es el séptimo productor mundial y el tercer exportador de palma aceitera. Coloca casi la totalidad de su producción en Europa. El país ha desarrollado la industria de la palma aceitera en los últimos años, principalmente en la provincia de West New Britain, que es la que lidera la producción de aceite de palma en el país, y es conocida como «la provincia de la palma aceitera».

Al principio, las plantaciones de palma aceitera fueron instrumentadas por compañías en las que el gobierno poseía acciones. Pero actualmente la situación ha cambiado con las crecientes inversiones de compañías chinas, malayas e indonesias en plantaciones de palma aceitera que destruyen los bosques para dar lugar a este monocultivo. Como consecuencia, se está produciendo la apropiación de las tierras de las comunidades locales y también la resistencia de los pobladores a esta actividad. Uno de esos casos es el del pueblo indígena Maisin, que habita el bosque tropical de Papúa-Nueva Guinea. Los Maisin iniciaron una acción legal contra una compañía malaya que lograron hacer llegar hasta la Suprema Corte de Papúa-Nueva Guinea. La compañía argumentó que poseía derechos de arrendamiento, tanto para desmontar los bosques de los Maisin como para establecer una plantación de palma aceitera. Según la constitución de Papúa-Nueva Guinea, los Maisin son los propietarios legales de sus tierras tradicionales. Los Maisin afirman que jamás firmaron la entrega de sus bosques y que la compañía malaya tiene en su poder un contrato de arrendamiento que no es válido con firmas falsificadas. La compañía niega los cargos, pero la Suprema Corte de Papúa-Nueva Guinea prohibió la ejecución del proyecto hasta la resolución final del caso.

En vez de promover actividades ambientalmente adecuadas y de beneficio social (como el manejo comunitario de bosques), el gobierno de Papúa-Nueva Guinea apoya activamente ese tipo de iniciativas. En abril de 2001, el Ministro de Ganadería Muki Taranupi anunció planes de incentivos impositivos para el sector de la palma aceitera, destinados a promover el crecimiento y aumentar la producción. El Ministro afirmó que se ofrecerán facilidades fiscales a las plantaciones de palma aceitera y se reducirán los aranceles a las importaciones agrícolas. Añadió que también había dado instrucciones a su ministerio de examinar la posibilidad de reducir los aranceles de importación para equipos e implementos agrícola, incluyendo fertilizantes.

Es importante destacar que este tipo de actividad, que produce el empobrecimiento de las poblaciones locales (que pierden sus tierras y bosques) y el agotamiento de los recursos biológicos e hídricos, recibe fuerte apoyo gubernamental, mientras que otras actividades social y ambientalmente beneficiosas no lo reciben. En el caso de Papúa-Nueva Guinea, las plantaciones de palma aceitera ni siquiera están dirigidas a la producción de aceite comestible para la población local, y casi la totalidad de la producción está orientada a la exportación. Una vez más, las ganancias empresariales y los beneficios macroeconómicos parecen ser más importantes que el sustento de las poblaciones locales y la conservación del medio ambiente. (Boletín del WRM N° 47, junio de 2001).

Papúa-Nueva Guinea: Impactos de monocultivos de palma aceitera promovidos desde Inglaterra

CDC Capital Partners es un actor principal en las plantaciones de palma aceitera de Papúa-Nueva Guinea. Lo que fuera antes un programa de ayuda al exterior del Reino Unido, se convirtió en una compañía mixta e invierte en PNG a través de la compañía Pacific Rim Plantations Ltd., en la que posee el 76% del paquete accionario.

Pacific Rim Plantations Ltd. tiene la propiedad y administración de aproximadamente 23.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en tres zonas: la Provincia del Norte (Popondetta), la provincia de Milne Bay (Alotau) en la costa norte de Papúa-Nueva Guinea y en Kavieng en la isla Nueva Irlanda. Opera en una *joint-venture* con el gobierno de Papúa-Nueva Guinea, que tiene una participación del 20%.

CDC tiene planes a largo plazo de duplicar su capacidad de producción de aceite de palma, y ha estado comprando tierras tradicionales. Aunque según su Plan Ambiental, las áreas a talar eran «matorrales» y «arbustos secundarios», fotografías recientes muestran que las operaciones de la CDC impulsan la deforestación de bosques tropicales húmedos en tierras bajas de Papúa-Nueva Guinea. Una de las áreas más afectadas es el hábitat de la mariposa más grande del mundo, la mariposa Ala de Pájaro Reina Alexandra (*Ornithoptera alexandrae*), orgullo de los pueblos locales, que ha sido clasificada como una especie rara y en peligro de extinción por la UICN y figura en el Apéndice 1 de CITES.

Un grupo ambientalista local, Conservation Melanesia (CM) puso en evidencia que los problemas de la preparación de tierras por parte de CDC, van desde la tala de vegetación hasta los propios márgenes de arroyos y ríos, hasta la plantación en medio de los cursos de agua. Todas las empresas plantadoras de palma aceitera plantan a través de cursos de agua menores, que tienden a secarse durante la estación seca. Estas corrientes de agua, sin embargo, jue-

gan un papel importante en el ecosistema... hasta que la vegetación natural circundante es talada y plantada con palma aceitera. Además, la planta procesadora de aceite de palma de la CDC en Oro descargaba en forma abierta y directa sus en un río local y sus afluentes. Gran cantidad de personas que viven a lo largo de ese río, que se extiende por todo el interior de la provincia hasta los poblados de la costa, se han quejado de la contaminación del agua, los peces muertos y la destrucción causada por inundaciones, que nunca antes habían ocurrido hasta que se construyó la planta de procesamiento. Pero la CDC ha hecho muy poco para solucionar estos problemas.

Además estos problemas no son nuevos. Ya en 1994, FoE-EWNI y WWF-UK criticaron a la CDC por destruir los bosques tropicales en los establecimientos de Milne Bay y también por llevar a las comunidades locales a depender de un único cultivo comercial orientado a la exportación, vulnerable a fluctuaciones de precio descontroladas. Advirtieron que al colocar la fábrica en el lugar se alentaría a los habitantes locales a talar sus propias tierras para cultivar palma aceitera, y al parecer eso es exactamente lo que pasó.

La CDC argumenta que tiene una actitud socialmente responsable y que ha lanzado programas de construcción y de inversión en las comunidades para mejorar las condiciones de vida. Pero existen informes que afirman que la CDC está promoviendo el desarrollo de plantaciones de palma en pequeños establecimientos de propietarios locales, porque al basarse en el ahorro de costos salariales de mano de obra, este sistema resulta más rentable para la compañía que seguir ampliando sus propias plantaciones. La compañía proporciona semillas y créditos a pagar en 4 o 5 años a los propietarios de tierras si cultivan palma aceitera en sus propiedades.

Las objeciones de las ONGs se relacionan con procesos de consentimiento informado y con los acuerdos de arriendo de las tierras, la falta de sindicatos de trabajadores de palma aceitera, los bajos salarios y la falta de información objetiva a disposición de los propietarios. Además, las transacciones con los pobladores locales no se realizan en pie de igualdad. Los habitantes de Papúa-Nueva Guinea tradicionalmente han tenido un enfoque común hacia la propiedad de la tierra y no son conscientes de los compromisos que implican los contratos comerciales sofisticados que firman. (Boletín del WRM N° 49, agosto de 2001).

Papúa-Nueva Guinea: Devolución de tierras tradicionales impide destrucción de bosques por maderero y plantaciones de palma aceitera

Los propietarios de las tierras tradicionales de Maisin y Wanigela, en el área de Collingwood Bay en la provincia Oro, tienen mucho para celebrar.

En mayo de 2002, el Tribunal Nacional de Waigani devolvió las tierras tradicionales que habían sido arrendadas al Estado a comienzos de 1999, según un

contrato de arriendo-retroarriendo con la Keoro Development Corporation, una compañía terrateniente local. El plan era despejar el área para dar lugar a plantaciones de palma aceitera. Las tierras en cuestión abarcaban 38.000 hectáreas de rico suelo volcánico con una extensa zona de bosque.

Los pobladores de Collingwood Bay consideraron ilegal el «arriendo» de sus tierras, por lo que decidieron hacer la prueba de iniciar un juicio para determinar si el imperio de la ley y la justicia puede ser ignorado por las empresas mineras, sus agentes e individuos corruptos a nivel de gobierno.

Según la mayoría de los propietarios de tierras, solamente unos pocos habían firmado el arriendo, sin consultar en forma adecuada a varios propietarios tradicionales de Collingwood Bay. La victoria judicial eliminó la amenaza del maderero y la conversión a monocultivos de árboles en tierras cuyos propietarios pueden desarrollar empresas comunitarias autogestionadas en pequeña escala sin destruir los bosques.

Este logro también representa un motivo de aliento para otros propietarios de tierras que enfrentan problemas similares para reclamar tierras que les fueron expropiadas sin su consentimiento, y para afirmar su derecho a participar en las discusiones sobre el uso de sus tierras. Por ejemplo, los propietarios de tierras de Kuinga-Aimbak en la provincia Occidental también están luchando para detener las operaciones madereras en su zona.

Hubo cuatro días de celebración, a la que concurrieron amigos de dentro y fuera de Papúa-Nueva Guinea que colaboraron con los propietarios de tierras en su larga batalla, como Greenpeace, Environmental Law Center y Conservation Melanesia. Los invitados recibieron una lluvia de obsequios de todos los poblados y fueron agasajados con una ceremonia tradicional con grasa de cerdo, como muestra de respeto y agradecimiento por su apoyo. «A diferencia de nuestros antecesores y ancestros que pelearon batallas con lanzas y palos, nosotros dimos esta batalla con papeles y lapiceras, porque nuestra tierra nos fue robada con papeles y lapiceras», afirmó un propietario de Collingwood Bay.

Aunque el resultado les fue favorable, esta prueba ha sido muy dura para los pobladores y ha significado cambios permanentes en sus vidas. Tuvieron que hacerse cargo de los onerosos costos del juicio y se vieron obligados a tomar decisiones que afectaron la seguridad y el bienestar de sus familias y que en mayor medida implicaron un riesgo para sus propias vidas. (Boletín del WRM N° 64, noviembre de 2002).

Impreso en Imp. Rosgal S.A.
Dep. Legal N° 330347/03

